

FOREIGN AFFAIRS

LATINOAMÉRICA

25 AÑOS

El desafío de Latinoamérica en la era de la geoeconomía

Julietta Zelicovich

Francisco Urdínez

Pamela Aróstica Fernández

Girisanker S.B.

Alan Bersin

Diego Marroquín Bitar

Athanasios Hristoulas

Nicolás Pose-Ferraro

José Victor Ferro

Luis Huacuja

Simone Lucatello

Derechización latinoamericana

Ernesto Samper Pizano

La guerra comercial de Trump

Adam S. Posen

Mariana Mazzucato

Stephen G. Brooks

Ben A. Vagle



15 de Julio - 15 de Octubre de 2025

Vol. 25 Núm. 3 \$ 135.00



FOREIGN AFFAIRS LAT.

ITam



WWW.FAL.ITAM.MX

UC San Diego

SCHOOL OF GLOBAL POLICY AND STRATEGY



El entrenamiento que necesitas para el impacto que deseas tener

La School of Global Policy and Strategy de UC San Diego ofrece programas de capacitación analítica para la próxima generación de expertos en políticas públicas, usando ciencia y tecnología de última generación para hacer frente a los mayores desafíos del mundo.

"Como Director del Centro de Estudios de México-Estados Unidos en la Universidad de California en San Diego, los invito a que, como estudiantes de México y América Latina, conozcan los planes de estudio de las maestrías que ofrece GPS. Estoy convencido que GPS es la mejor escuela para preparar a los futuros líderes de nuestra región, quienes resolverán los problemas más apremiantes desde una perspectiva global e interdisciplinaria." – Rafael Fernández de Castro

gps.ucsd.edu

La red en donde el talento joven
impulsa la agenda global



CONECTANDO IDEAS, TRANSFORMANDO EL MUNDO

CONSEJO MEXICANO DE ASUNTOS INTERNACIONALES

COMEXI



HAZTE MIEMBRO



www.consejomexicano.org
membresias@consejomexicano.org

@COMEXIAC   

@COMEXI 


COMEXI
Consejo Mexicano
de Asuntos Internacionales



El desafío de Latinoamérica en la era de la geoeconomía

Latinoamérica en la era de la geoeconomía

2

Julieta Zelicovich

Latinoamérica está inmersa en una era geoeconómica. La región no solo ha sido objeto de estas dinámicas por parte de potencias externas, sino que también ha desarrollado estrategias propias. El nuevo mandato de Donald Trump intensifica la instrumentalización de los flujos económicos, lo que plantea un desafío ante el cual las respuestas latinoamericanas han sido, hasta ahora, limitadas.

China y el fin de la primacía estadounidense en Latinoamérica

11

Francisco Urdinez

El cambio tectónico en las relaciones económicas entre China, Estados Unidos y Latinoamérica en el siglo XXI constituye, quizá, la transformación geopolítica más significativa en el hemisferio occidental desde la Guerra Fría. Tras años de recopilación de datos sobre inversiones, comercio, ayuda y créditos de ambas potencias hacia la región, el patrón es inequívoco: China ha desplazado económicamente a Estados Unidos en países que representan 60% de la población latinoamericana. Esta nueva realidad exige repensar paradigmas establecidos sobre la geopolítica hemisférica.

Megapuerto de Chancay

19

Pamela Aróstica Fernández

Inaugurado en noviembre de 2024, el megapuerto de Chancay consolida la presencia de China en Latinoamérica y posiciona a Perú como un actor estratégico en el Pacífico Sur. De ahí la importancia de examinar el hito de la apertura de una ruta marítima directa entre China y la región latinoamericana, así como sus impactos geopolítico, económico y ambiental, en el contexto de la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

El poder blando de la India en Latinoamérica 26

Girisanker S.B.

La estabilidad política de la India, su rápido crecimiento económico y su creciente influencia mundial la han convertido en un socio atractivo para Latinoamérica. La relación entre economías, en constante evolución, resulta prometedora no solo en términos económicos, sino también estratégicos, pues, unidas, pueden mejorar su poder colectivo de negociación en las instituciones internacionales.

Asimetrías e interdependencia 37

Alan Bersin y Diego Marroquín Bitar

De ser adversarios en el siglo XIX a vecinos distantes durante gran parte del siglo XX, la relación entre Estados Unidos y México ha evolucionado en las últimas 3 décadas hasta convertirse en una sociedad estratégica. A lo largo de su historia, dicha relación ha estado marcada por una profunda interdependencia, pero también por fuertes asimetrías. Hoy, 2 siglos después, estos mismos factores pueden impulsar un cambio estructural en la relación bilateral.

Carney y los nuevos desafíos de Canadá 43

Athanasios Hristoulas

Las provocaciones de Donald Trump —convertir a Canadá en el estado 51, llamar “gobernador” a Justin Trudeau y dañar los lazos de más de 200 años— fueron un golpe doloroso para los canadienses. Esta deslealtad desencadenó un nacionalismo nunca antes visto. Al explotar este clima político, Mark Carney logró el triunfo electoral. Ahora se espera que, con su perfil de economista, guíe la economía y las negociaciones con Estados Unidos en los próximos años, y abra al país hacia otros mercados, sobre todo al europeo.

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea 49

Nicolás Pose-Ferraro y José Víctor Ferro

A raíz del anuncio de la exitosa renegociación del Acuerdo de Asociación Estratégica entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea en el ámbito técnico, el tema ha regresado a la palestra pública. ¿Qué factores impulsan el interés por concretarlo? ¿Cuáles son las trabas? ¿Cuáles son los posibles escenarios? Al impulso de la geopolítica, los equipos negociadores de ambos bloques han alcanzado un nuevo entendimiento; sin embargo, su aprobación no está asegurada.

México y la Unión Europea 56

Luis Huacuja y Simone Lucatello

En un entorno de incertidumbre mundial, la relación entre México y la Unión Europea se encuentra en un momento clave. A 25 años de su puesta en marcha, el Acuerdo Global ha brindado notables beneficios mutuos y se ha consolidado al incorporar un amplio espectro temático. Su modernización ha planteado grandes desafíos, pero también oportunidades. Es una relación estratégica que merece un impulso acorde con su importancia.

Diálogo

Latinoamérica ante los nuevos desafíos para lograr la paz

66

Sabina Puig Cartes

La construcción de la paz es un esfuerzo de largo aliento que requiere un compromiso sostenido en el tiempo, y en Latinoamérica este esfuerzo tiene una extensa trayectoria. En un momento de grandes desafíos mundiales y de desconcierto, los métodos tradicionales para construir la paz no están dando frutos. El mundo se encuentra ante la necesidad de generar otras visiones, estrategias, formas y diálogos y, en este sentido, Latinoamérica y su resiliencia son inspiradoras.

La construcción de la paz en México

74

Dolores González Saravia

México vive un proceso de reconfiguración política y social a partir de la llegada al poder, en 2018, de un proyecto con amplio respaldo popular denominado “cuarta transformación”, con cambios e impactos que plantean nuevas posibilidades y retos para el establecimiento de condiciones democráticas, el pleno ejercicio de los derechos humanos y la construcción de la paz.

Mundo

Derechización en Latinoamérica

82

Ernesto Samper Pizano

Ante el nuevo escenario internacional, Latinoamérica debe presentarse integrada y dejar de lado el racismo, el sexismo y la xenofobia, así como la prohibición del libre pensamiento, la obstrucción de la investigación científica y las tesis eugenésicas hacia las cuales apunta hoy el proceso de derechos que vive la región. No necesita que haya campos de concentración de migrantes para entender que ese camino lleva directo al abismo fascista, y que el único antídoto para no caer en él es, y será siempre, el progresismo.

Las guerras comerciales son fáciles de perder

89

Adam S. Posen

El gobierno de Donald Trump cree que tiene lo que los expertos en la teoría de juegos llaman “dominio de la escalada” sobre China y sobre cualquier otra economía con la que tenga un déficit comercial bilateral. Si su lógica es correcta, entonces China y cualquier otro país que tome represalias contra los aranceles estadounidenses está jugando, en efecto, una mano perdedora. Sin embargo, esta lógica es errónea: es Beijing quien tiene el dominio de la escalada en esta guerra comercial.

El orden económico roto

93

Mariana Mazzucato

No hay garantías de que el próximo equilibrio del orden internacional conduzca a un futuro más equitativo y sostenible. Para avanzar hacia un sistema económico con un acceso asequible al financiamiento, una gobernanza justa del comercio mundial y el apoyo a todos los países para que inviertan y se beneficien del crecimiento de las industrias ecológicas, los gobiernos deben estar dispuestos a tomar medidas audaces. Un cambio transformador requiere una visión diferente, que le dé prioridad al bienestar de las personas y a la salud del planeta.

La verdadera jugada ganadora contra China

103

Stephen G. Brooks y Ben A. Vagle

Los analistas que se oponen a la desvinculación de China suelen argumentar disrupciones económicas enormes de largo plazo para Estados Unidos. Se equivocan. No obstante, esto no significa que una desvinculación ahora sería positiva: una desvinculación en tiempo de paz le costaría a Washington renunciar a una de las herramientas más fuertes con las que cuenta para disuadir a Beijing de una agresión.

¿Llegó la nueva revolución nuclear a Latinoamérica?

113

Arturo C. Sotomayor

El sector energético ha revaluado las oportunidades que ofrece la energía nuclear y, aunque su explotación en Latinoamérica ha sido históricamente limitada, las innovaciones tecnológicas recientes prometen hacer esta fuente de energía más accesible para los países en desarrollo. Con alrededor de 5% de los recursos mundiales de uranio y mano de obra barata, la región se vuelve atractiva para el sector nuclear. Esto plantea interrogantes sobre cómo la nueva revolución nuclear puede afectar a Latinoamérica, qué oportunidades y desafíos representa, y cuáles son sus mayores riesgos.

El camino hacia el autoritarismo estadounidense

122

Steven Levitsky y Lucan A. Way

El autoritarismo competitivo transformará la vida política en Estados Unidos. Como dejó en claro el aluvión de órdenes ejecutivas dudosamente constitucionales de Donald Trump, el costo de formar parte de la oposición ciudadana aumentará de forma considerable. Los estadounidenses podrán seguir oponiéndose al gobierno, pero les resultará más difícil y arriesgado, lo que llevará a muchas élites y ciudadanos a decidir que la lucha no merece la pena. Sin embargo, la falta de resistencia podría allanar el camino para un atrincheramiento autoritario, con consecuencias graves y perdurables para la democracia mundial.

El mundo que Trump quiere

134

Michael Kimmage

El gobierno de Donald Trump tiene el potencial de triunfar en un orden internacional que lleva años formándose. Sin embargo, Estados Unidos solo prosperará si Washington

reconoce el peligro que representa la gran cantidad de fracturas nacionales que se entrecruzan y si neutraliza estos riesgos mediante una diplomacia abierta y paciente. Trump y su equipo deberían considerar la gestión de conflictos como un requisito de la grandeza de Estados Unidos, no como un impedimento.

La supremacía del dólar 143

Eswar Prasad

El dólar no es totalmente inmune a los cambios en los poderes económicos y geopolíticos mundiales. Sin embargo, pese a que ha perdido terreno, la brecha entre el dólar y cualquier otra moneda rival no ha dejado de crecer ni muestra signos de detenerse. Las conmociones en la economía mundial o en los asuntos internacionales solo aumentan la fortaleza del dólar frente a las monedas alternativas. Prácticamente nada podría cambiar esta circunstancia en el corto plazo.

Reseñas 152

Abstracts 156

Foreign Affairs will tolerate wide differences of opinion. Its articles will not represent any consensus of beliefs. What is demanded of them is that they shall be competent and well informed, representing honest opinions seriously held and convincingly expressed. It does not accept responsibility for the views expressed in any article, signed or unsigned, which appear in its pages. What it does accept is the responsibility for giving them a chance to appear there.

Archibald Cary Coolidge, Founding Editor

Volume 1, Number 1 • September 1922

Los artículos publicados en *Foreign Affairs Latinoamérica* no reflejan una corriente ideológica. No esperamos que el lector esté de acuerdo con todo el contenido de la revista. De hecho, los puntos de vista de los autores difieren. Estamos seguros de que una forma de mantener mejor informada a la opinión pública es proporcionándole diferentes planteamientos, alejados de meros caprichos e identificaciones con alguna escuela de pensamiento. El contenido de los ensayos es responsabilidad de sus autores. El compromiso de *Foreign Affairs Latinoamérica* es darles la oportunidad de que expresen sus ideas.

Código ético

Todas las personas que forman parte de *Foreign Affairs Latinoamérica* (FAL) —dirección, subdirección, colaboradores, empleados y miembros de los Consejos— se comprometen a vigilar y a observar los siguientes criterios éticos, tanto en la producción editorial como en el desempeño de sus funciones:

LEGALIDAD

El personal de FAL se sujetará al orden jurídico vigente y a los estatutos, reglamentos y normas establecidos por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

TRANSPARENCIA

FAL aplicará la normativa de transparencia del ITAM, cumpliendo con las normas de acceso a la información pública y de buen gobierno.

INDEPENDENCIA

Los artículos publicados en FAL tendrán la objetividad y el rigor propios de la excelencia académica y la honestidad intelectual, de manera que se valoren todos los elementos existentes y sean ponderados adecuadamente a fin de alcanzar conclusiones independientes, no sujetas a intereses particulares ni de propaganda partidista.

NO DISCRIMINACIÓN

FAL tratará de manera igual a todos sus integrantes y no tolerará ninguna forma de discriminación o abuso en el lugar de trabajo, fomentando el respeto a la diversidad cultural, ideológica, socioeconómica, sindical, religiosa, de género, de identidad, de orientación sexual y de capacidades diferentes o cualquier otra condición personal.

IGUALDAD DE GÉNERO

FAL impulsará la igualdad de género, tanto al interior de la revista como en sus relaciones con terceros. Propiciará la igualdad de género en términos del número de autores y autoras publicados a lo largo de un año editorial, es decir, distribuidos entre las cuatro ediciones de cada año, y tomando en cuenta los artículos publicados en todas sus secciones: temas centrales, Mundo, Diálogo Ñ, traducciones de *Foreign Affairs* y Reseñas. Los temas centrales de cada número deberán contar, como mínimo, con una o un representante del género que se encuentre en minoría.

FAL y/o sus editores invitados diseñarán los índices tentativos de cada número, buscando desde el principio la representación más igualitaria posible entre géneros. En caso de que el resultado no sea el deseado —por ejemplo, que autoras o autores invitados declinen o no entreguen a tiempo su contribución—, se hará un esfuerzo de compensación en la siguiente edición.

RESPONSABILIDAD CON LA SOCIEDAD EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

FAL asume su responsabilidad con la sociedad en la defensa de los derechos humanos a lo largo del proceso de producción editorial, que incluye artículos, caricaturas, fotos, portada y publicidad, de acuerdo con la Declaración Universal.

SOSTENIBILIDAD SOCIOECONÓMICA Y MEDIOAMBIENTAL

FAL desarrollará su actividad de acuerdo con parámetros de buena práctica de sostenibilidad socioeconómica y medioambiental, con especial seguimiento y cumplimiento de los acuerdos internacionales (salud, migraciones, cambio climático). No publicará artículos que avalen narrativas *negacionistas* o contrarias al bien común y al bienestar de las generaciones futuras.

FOREIGN AFFAIRS

LATINOAMÉRICA

JORDI BACARIA COLOM *Director*

RAFAEL FERNÁNDEZ DE CASTRO Y ROSSANA FUENTES-BERAIN *Fundadores*

GERARDO R. VALENZUELA *Subdirector Editorial*

Junta Directiva

ALEJANDRO BAILLÈRES GUAL, ARTURO FERNÁNDEZ Y ALEJANDRO HERNÁNDEZ *Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)*, LEONEL FERNÁNDEZ *Fundación Global Democracia y Desarrollo*, PETER HAKIM *Inter-American Dialogue*, FRANCISCO ROJAS ARAVENA *University for Peace*, ANDRÉS ROZENTAL Y HÉCTOR CÁRDENAS SUÁREZ *Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi)*

Consejo Editorial

CYNTHIA ARNSON (*Wilson Center*) • PAMELA ARÓSTICA (*Universidad Nacional de Tres de Febrero*) • DAVID R. AYÓN (*Loyola Marymount University*) • RAÚL BENÍTEZ (*Universidad Nacional Autónoma de México*) • ALLERT BROWNGORT (*University of California*) • LOURDES CASANOVA (*Cornell University*) • CRISTINA EGUIZÁBAL (*Universidad de Costa Rica*) • GUADALUPE GONZÁLEZ (*El Colegio de México*) • RAFAEL HERNÁNDEZ (*Revista Temas*) • JENNIFER JEFFS (*OpenCanada*) • GEMA KLOPPE-SANTAMARÍA (*George Washington University*) • CLEMENCIA MUÑOZ (*Unifem*) • OLGA PELLICER (*Instituto Tecnológico Autónomo de México*) • ANDRÉS RUGELES (*University of Oxford*) • ROBERTO RUSSELL (*Universidad Torcuato di Tella*) • JOSÉ ANTONIO SANAHUJA (*Fundación Carolina*) • RICARDO SENNES (*Universidad Católica de São Paulo*) • ARLENE B. TICKNER (*Misión Especial para Cuestiones de Género y Políticas Feministas Globales de Colombia*) • DUNCAN WOOD (*Hurst International Consulting*) • DANIEL ZOVATTO (*Consejo Asesor del Programa Latinoamericano del Wilson Center*)

Consejo de Redacción

JOSÉ RAMÓN BENITO, RODRIGO CHACÓN, RAFAEL FERNÁNDEZ DE CASTRO, ISABEL FLORES, ROSA MARGARITA GALÁN, GABRIEL GOODLIFFE, ATHANASIOS HRISTOULAS, PABLO KALMANOVITZ, MARÍA ISABEL LÓPEZ SANTIBÁÑEZ, VALERIA MOY, NATALIA SALTALAMACCHIA, STÉPHAN SBERRO, JORGE A. SCHIAVON, IVÁN R. SIERRA MEDEL, SERGIO SILVA CASTAÑEDA, MARÍA JOSÉ URZÚA Y VALERIA ZEPEDA

Equipo Editorial

MARÍA ISABEL LÓPEZ SANTIBÁÑEZ *Cuidado Editorial*
NATALIA RAMOS GARAY Y CARMEN VÉLEZ *Corrección de Estilo*
SUSANA GUARDADO, ANA TAMARIT Y CYNTHIA HAWES *Traducción*
MARISOL CRUZ MARTÍNEZ *Editora de Arte*
ÁNGEL BOLIGÁN CORBO Y DARÍO CASTILLEJOS *Caricaturistas*

THELMA CASTAÑEDA *Coordinadora Administrativa*
ANDREA MARTÍNEZ GONZÁLEZ *Asistente Editorial*
LESLIE P. BRENES VALENCIA *Administradora Web*

LOS TEXTOS DEBERÁN ENVIARSE A *Foreign Affairs Latinoamérica*/ITAM: fal@itam.mx.

VENTAS: Si desea adquirir ejemplares individuales, puede comunicarse al (52) 55 5628 4098, o a la dirección electrónica: ventasfal@itam.mx. Los ejemplares atrasados tendrán un costo de MX\$150.00 cada uno.

PUBLICIDAD: Para información de tarifas y calendario de publicación, favor de comunicarse al (52) 55 5628 4098, o a la dirección electrónica publicidadfal@itam.mx. El contenido de las pautas publicitarias es responsabilidad exclusiva de los anunciantes.

REPRODUCCIONES Y PERMISOS: Si tiene interés en reproducir algún texto de esta publicación en algún medio de comunicación, favor de comunicarse al (52) 55 5628 4000 ext. 3947 o a la dirección electrónica fal@itam.mx.

PREGUNTAS Y COMENTARIOS: Si tiene alguna duda o comentario sobre los contenidos de esta publicación, favor de comunicarse al (52) 55 5628 4000 ext. 3947 o a la dirección electrónica fal@itam.mx.

IMPRESO EN MÉXICO

NOTA: Los autores que aparecen en *Foreign Affairs Latinoamérica* se rigen por la Ley Federal del Derecho de Autor. Para proteger a la revista y a los autores, se procederá conforme a las leyes mexicanas contra los individuos o compañías que reproduzcan y distribuyan su contenido sin permiso previo por escrito. Para información a este respecto, comunicarse al teléfono (52) 55 5628 4000 ext. 3947 o a la dirección electrónica fal@itam.mx.

Foreign Affairs Latinoamérica ® se publica cuatro veces al año por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Domicilio de la publicación: Río Hondo núm. 1, col. Progreso Tizapán, c.p. 01080, Ciudad de México. Tel.: (52) 55 5628 4000 ext. 3947. Responsable de la publicación: Natalia Saltalamacchia Ziccardi. ISSN 1665-1707. Número de reserva de derecho al uso exclusivo del título 04-2023-050309424200-102. Certificado de licitud de título y contenido número 17703. Edición: ITAM, Río Hondo núm. 1, col. Progreso Tizapán, c.p. 01080, Ciudad de México. Impresión y encuadernación: El Economista Grupo Editorial, s.a. de c.v., av. San Jerónimo 458, col. Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, c.p. 01900, Ciudad de México.

Foreign Affairs Latinoamérica y ® son marcas registradas.

www.fal.itam.mx

Normas de publicación

Al someter un texto a consideración de *Foreign Affairs Latinoamérica* con el fin de lograr su publicación en la revista, se deben cumplir las siguientes especificaciones:

EXTENSIÓN

El texto debe tener una extensión mínima de 3000 y máxima de 4000 palabras. Además, debe incluir un resumen de no más de 60 palabras, así como una nota curricular sobre el autor cuya extensión máxima será de 60 palabras.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El texto no debe incluir notas al pie de página o al final, ni listas de referencias bibliográficas.

USO DE CUADROS, GRÁFICAS Y MAPAS

Pueden insertarse cuadros, gráficas y mapas, pero el equipo editorial de *Foreign Affairs Latinoamérica* se reserva el derecho de su publicación, ya que no siempre es posible utilizarlos. Cuando proceda, este tipo de gráficos deberán elaborarse en formato Excel.

FORMATO

Los textos deberán redactarse correctamente en español, en el formato estándar del programa Microsoft Word (.doc).

ENVÍO

Los textos deberán enviarse como archivo adjunto a la dirección electrónica fal@itam.mx. El asunto del correo deberá ser "Texto para consideración de *Foreign Affairs Latinoamérica*".

VERACIDAD DE ARGUMENTOS

Foreign Affairs Latinoamérica no asume la responsabilidad de los hechos referidos en los artículos; confía en los autores y los responsabiliza de la veracidad de sus argumentos.

EVALUACIÓN DEL TEXTO

Todos los textos enviados a *Foreign Affairs Latinoamérica* serán revisados con la brevedad posible y sometidos a la aprobación del Consejo, que evaluará su calidad y contenido para decidir si deben publicarse en la revista. El tema de los artículos deberá ser de particular interés para los países de Latinoamérica o de sus relaciones exteriores. Si el texto es aprobado, el equipo editorial hará la corrección de estilo pertinente y lo devolverá al autor para su revisión. *Foreign Affairs Latinoamérica* se reserva el derecho de hacer las correcciones necesarias a la redacción de los textos, de conformidad con sus estándares editoriales. Solo se publicarán aquellos textos que cumplan con los estándares que exige nuestro Consejo.

EXCLUSIVIDAD

Los textos deberán ser inéditos y, a menos que se acuerde lo contrario, queda entendido que *Foreign Affairs Latinoamérica* tendrá la exclusividad de todos los artículos recibidos, por lo que ninguno de ellos podrá utilizarse para otra publicación en ninguna circunstancia sin el previo conocimiento y la autorización expresa de *Foreign Affairs Latinoamérica*.

NOTA: *Foreign Affairs Latinoamérica* se encuentra en los siguientes índices internacionales y bases de datos: Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades (CLASE), Latindex-Catálogo v1.0 (2011-2017), Carhus Plus+ 2010, PAIS International Journal List, Portal de difusión de la producción científica hispana (Dialnet) y Matriz de Información para la Evaluación de Revistas (MIAR).

Carta del Director



Si en 1848 Karl Marx y Friedrich Engels comenzaban el *Manifiesto comunista* afirmando que un fantasma recorría Europa —“el fantasma del comunismo”—, ahora puede decirse que una carcoma recorre América: el populismo, que va desmantelando las instituciones democráticas desde dentro, con autocracias competitivas y simulaciones democráticas que apelan al pueblo sin tener en cuenta a la ciudadanía. Desde el derechismo de Nayib Bukele, Javier Milei y Donald Trump hasta el izquierdismo de Nicolás Maduro, Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum, el resultado es el mismo: la eliminación de los contrapesos que apuntalan una democracia, con sus valores y sus derechos. Los populistas, que proponen soluciones simples para problemas complejos, utilizan el viejo recurso del soberanismo y el nacionalismo para movilizar al pueblo frente al enemigo exterior, pero se enfrentan a un nuevo contexto geopolítico mundial que requiere el conocimiento y la precisión de un cirujano, más que la sierra de un zafio cortando en un rastro.

En este número de *Foreign Affairs Latinoamérica* abordamos el desafío latinoamericano ante la geoconomía —el uso de herramientas económicas para alcanzar objetivos geopolíticos—, término que las potencias utilizan cada vez con mayor frecuencia para proyectar su poder.

Situar a Latinoamérica entre las estrategias geoeconómicas empleadas por las potencias es el foco del análisis de Julieta Zelicovich. El arsenal de “zanahorias” y “garrotes” en la región presenta con una intensidad renovada los mecanismos que lo activan y las formas como se ponen en práctica. Entre estos

mecanismos, se destacan tres. El primero —y el más antiguo— son las sanciones económicas, y otras dinámicas coercitivas impulsadas por valores y principios, aplicadas por Estados Unidos a Cuba, Nicaragua y Venezuela. La Unión Europea también ha establecido sanciones unilaterales contra países de la región, aunque con menor intensidad. El segundo se refiere a las dinámicas de incentivos para la configuración de preferencias estratégicas, en las que los países latinoamericanos son “parte del menú” en un territorio donde las grandes potencias compiten por ganar influencia. Durante la última década, China, Estados Unidos, Taiwán y la Unión Europea han desplegado estrategias geoeconómicas para configurar un entorno favorable a sus intereses en Latinoamérica, en el contexto de la competencia mundial por el poder. En tercer lugar, la autora alude a las dinámicas coercitivas sobre activos y tecnologías estratégicas con el uso directo de medidas punitivas —como sanciones comerciales, bloqueos financieros o restricciones de inversión— para forzar un cambio de políticas en el país objetivo. En Latinoamérica, esta táctica ha sido más notoria cuando aparece la competencia entre Beijing y Washington, y se desafían intereses estratégicos fundamentalmente asociados con la tecnología. Sin embargo, los países latinoamericanos también se han posicionado de manera activa en sentido contrario con tres tipos de acciones: 1) dinámicas coercitivas impulsadas por tensiones geopolíticas regionales; 2) dinámicas coercitivas impulsadas por valores y principios, y 3) dinámicas defensivas precautorias e intentos de instrumentalización de los recursos naturales regionales.

Francisco Urdinez habla sobre la revolución silenciosa de las relaciones económicas de la región con China, que ha supuesto la sustitución de la influencia estadounidense. En 2020, el país asiático había desplazado a Estados

Unidos en doce países latinoamericanos, incluidos gigantes como Argentina y Brasil. La narrativa convencional suele atribuirle este cambio a una estrategia deliberada de Beijing para desafiar a Washington en su “patio trasero”. No obstante, la investigación de Urdinez revela una realidad más compleja: el papel crucial que desempeñaron la contracción estadounidense y la agencia activa de los países latinoamericanos. La explicación más convincente radica en la primera. Mientras Washington reorientaba su atención hacia el Medio Oriente tras el 11-s y, después, a Asia-Pacífico, su participación en los flujos económicos hacia Latinoamérica se reducía de manera dramática. Su inventario de inversión en la región pasó de 20% de sus inversiones mundiales a finales del siglo xx a apenas 5% en 2020. Es de destacar el papel activo que desempeñaron los países latinoamericanos al buscar alternativas ante la ausencia de opciones occidentales, mediante dinámicas de arriba hacia abajo —la solicitud de inversiones a China— y de abajo hacia arriba —iniciativas de subnacionales y privados, como el megapuerto de Chancay, en Perú—. Latinoamérica está emergiendo como dos regiones distintas: Sudamérica, donde China ha desplazado efectivamente a Estados Unidos, y México, Centroamérica y el Caribe, donde Washington mantiene mayor influencia. Esta bifurcación tendrá profundas implicaciones para la integración regional y las dinámicas geopolíticas. Es probable que la presión para alinearse aumente. Estados Unidos está poniendo en marcha diversas medidas, como reglas de origen más estrictas, cumplimiento de estándares ambientales y leyes de selección de inversiones, que dificultan la entrada de empresas chinas.

Pamela Aróstica Fernández expone la importancia del megapuerto de Chancay, en Perú, un hito de gran relevancia no solo desde la perspectiva logística y del comercio internacional, sino también por el posicionamiento del Pacífico Sur

en la nueva arquitectura geoeconómica y geopolítica. El megapuerto es una empresa de capital mixto en la que cosco Shipping Ports, empresa estatal china, tiene 60% de participación, mientras que 40% es de Volcan Compañía Minera SAA, una empresa privada peruana. Este megapuerto se perfila como un nodo logístico fundamental para Sudamérica al facilitar la optimización del comercio transpacífico. Establece una nueva ruta marítima directa entre China y Latinoamérica, por lo que se consolida como un componente estratégico de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Se estima que permitirá reducir los costos logísticos en más de 20% y acortar los tiempos de tránsito marítimo en hasta 12 días. Chancay adquiere, así, un papel central como infraestructura nodal en los corredores interoceánicos, tanto por su ubicación privilegiada en el Pacífico Sur como por su diseño adaptado a los estándares tecnológicos más avanzados.

Otro factor geopolítico que ha ido adquiriendo importancia es el poder blando de la India en Latinoamérica, analizado por Girisanter S.B. El autor parte de las relaciones políticas desde su independencia y cómo el poder blando se ha extendido con las relaciones culturales y la diáspora de comunidades indias a países de Latinoamérica. Los sólidos vínculos interpersonales y culturales, junto con un fuerte compromiso institucional, han allanado el camino para estrechar el comercio entre la India y Latinoamérica. Su estabilidad política, su rápido crecimiento económico y su creciente influencia mundial han convertido a la India en un socio atractivo para la región. Nueva Delhi participa activamente en agrupaciones regionales, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la Comunidad del Caribe y el Mercado Común del Sur (Mercosur). El comercio bilateral creció de 24 050 millones de dólares entre 2010 y 2011, a 48 000 millones entre 2022 y 2023, y las proyecciones sugieren que podría

alcanzar los 100 000 millones en 2028. Para la India, Latinoamérica constituye una importante fuente de recursos naturales y energía. Por su parte, la región latinoamericana considera a Nueva Delhi un mercado creciente para sus exportaciones y un socio valioso en áreas como productos farmacéuticos, defensa, tecnologías de la información y energías renovables. La India es el quinto mayor proveedor de productos farmacéuticos a Latinoamérica, con Brasil, Perú, Chile y México como los principales mercados. También está reforzando su compromiso en materia de defensa con equipos militares, como el avión de combate Tejas, en Argentina, mientras que empresas brasileñas, como Embraer, están entrando en el mercado indio. Otro ámbito crítico de colaboración es el de los minerales estratégicos, en particular el litio, que es esencial para la transición energética y las tecnologías limpias. De esta manera, la India y Latinoamérica constituyen dos piezas fundamentales del Sur global.

La relación e interdependencia entre Estados Unidos y México es analizada por Alan Bersin y Diego Marroquín Bitar. Para los autores, las industrias estratégicas estadounidenses no pueden competir contra China ni con la Unión Europea en sectores clave —como semiconductores, paneles solares y vehículos eléctricos— sin la base industrial, la mano de obra y los recursos naturales de México. De igual manera, la crisis del consumo de drogas y sus principales desafíos de seguridad no pueden resolverse sin la cooperación activa del gobierno y la sociedad civil mexicanos. En lugar de evitar los aranceles, México debería tomar la iniciativa y poner “grandes ideas” sobre la mesa de negociación en lo que respecta a seguridad, narcotráfico, migración y comercio, para hacerles frente a retos históricos que ambos países han discutido durante años.

Siguiendo con Norteamérica, Athanasios Hristoulas explica la relación con Canadá a partir de los resultados de las elecciones parlamentarias

celebradas a finales de abril de 2025. Ante las amenazas de aranceles y de anexión, Mark Carney, representante de los liberales, emergió como el héroe que Ottawa necesitaba y condujo a un partido en crisis hacia la victoria. Hristoulas considera poco probable la posibilidad de una cooperación bilateral más cercana entre Canadá y México para contrarrestar la influencia estadounidense en la inminente revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Ni Carney ni los demás candidatos mencionaron la relación con México durante la campaña electoral. En cambio, la solución propuesta ante la creciente amenaza de Trump fue la posibilidad de que Europa se convirtiera en un nuevo socio comercial. Esto no quiere decir que Ottawa se oponga a un nuevo tratado trilateral ante la revisión del T-MEC, pero tiene poco interés en el papel mexicano, y si el gobierno estadounidense propone un tratado bilateral, los canadienses no se opondrían a la ausencia de México.

La geoeconomía también afecta las relaciones de Latinoamérica y la Unión Europea que tienen dos grandes pendientes: el acuerdo con el Mercosur y la modernización del Acuerdo Global con México. Ambos mezclan competencias comunitarias con otras entre los Estados miembros, pero su pilar comercial puede facilitar su aprobación por ser competencia exclusiva de la Unión Europea.

Nicolás Pose-Ferraro y José Víctor Ferro analizan el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Las negociaciones se iniciaron en 1999 y, aunque gracias al impulso de la geopolítica ambos bloques alcanzaron un entendimiento en diciembre de 2024, su aprobación no está asegurada. El Acuerdo se encuentra en el mismo lugar que en junio de 2019: un texto acordado en el ámbito técnico que necesita revisión legal, traducción y posterior ratificación en la Unión Europea y en los países del Mercosur. En la Unión Europea, la aprobación puede ser bloqueada por Francia, Italia y Polonia en el Consejo Europeo,

dada la oposición de los agricultores de estos países.

Por su parte, Luis Huacuja y Simone Lucatello escriben sobre la modernización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea, en vigor desde el 1 de julio de 2000. En 2016 se iniciaron las negociaciones para renovarlo y modernizarlo y, en abril de 2020, se anunció su conclusión; sin embargo, diversos factores internos y externos han contribuido a que su ratificación aún no se haya concretado. En 2021, la Comisión Europea planteó su fragmentación dividiéndolo en un apartado comercial, otro de protección de inversiones, y uno más sobre cooperación y diálogo político, para facilitar el proceso de aprobación parlamentaria en la Unión Europea. Sin embargo, México se opuso a la propuesta e insistió en que debía firmarse en los términos en que se negoció. Al final, se optó por la misma fórmula del Acuerdo original de 1997, consistente en uno integral y otro interino sobre comercio, a fin de avanzar en la liberalización comercial mientras se completa el proceso de aprobación general. La reforma constitucional de México de 2013 en materia de energía obligó a reabrir la negociación para modificar el texto y excluir el capítulo de energía, aunque con garantías para la inversión europea. Los beneficios mutuos del renovado Acuerdo inciden en sectores importantes de la economía mexicana, como el agroalimentario, el automotor y el farmacéutico.

En Diálogo Ñ se aborda el tema de la construcción de la paz en Latinoamérica. Sabina Puig Cartes apunta que la ausencia de guerras y guerrillas importantes en la región no significa que el continente sea inmune a las dinámicas mundiales descritas ni que esté exento de otro tipo de violencias también letales y destructivas. Paradójicamente, es el continente más pacífico en términos de conflictos armados tradicionales y el más violento en otros parámetros. Hoy, el crimen organizado es la

principal amenaza para la paz y la seguridad. En un número creciente de países latinoamericanos, su actividad provoca grados de violencia equiparables a los que se viven en condiciones de guerra. En 2025, las desapariciones forzadas son una dolorosa y escandalosa realidad en países como Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, México y Venezuela. Las rutas migratorias, cada vez más peligrosas y dominadas por la criminalidad, son escenario crónico de desapariciones.

Desde la perspectiva del proyecto de la “cuarta transformación”, Dolores González Saravia expone los procesos de construcción de la paz en México. Abunda en la descripción del proyecto y sus logros distributivos, y la antepone a la dinámica económica que ha permitido continuar el proceso de hiperacumulación de la riqueza y la desigualdad. Para la autora, los procesos de construcción de la paz y la defensa de derechos humanos requieren una mirada fina, de largo plazo y amplio espectro, para abordar los desafíos expuestos. Indica que el futuro de la democracia dependerá de la capacidad social de establecer un nuevo modelo de organización y de regulación política que represente y ponga al centro el interés social, basado en los valores no solo de democracia participativa, sino de justicia, equidad, autonomía, diversidad, sustentabilidad y cuidado de la vida en todas sus expresiones, desde una noción del bien común y la comunalidad.

En la sección Mundo destacamos una variedad de temas de actualidad. Ernesto Samper Pizano, Expresidente de Colombia, alerta sobre la derechización de Latinoamérica, sus causas y sus efectos en la polarización, las redes sociales y la judicialización de la política. Apunta el cambio de la mirada de la región hacia el Norte por una mirada alternativa hacia el Sur global, a cuya familia pertenecemos.

Adam S. Posen, en un corto y contundente artículo, desarma la frase de Trump de

que “las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar”, así como la analogía sobre el póquer del Secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. El argumento de Posen, basado en lo que en la teoría de juegos se conoce como “dominio de la escalada”, es que Estados Unidos no lo posee, a diferencia de China. El póquer es un juego de suma cero, mientras que el comercio es de suma positiva. Por ello, Estados Unidos sufrirá en la guerra comercial, y lo hará aún más si la escala contra China.

Mariana Mazzucato explica los límites de la política económica del gobierno de Joseph R. Biden, cuya estrategia no impulsó la transformación de toda la economía ni destacó en materia de multilateralismo. También es poco probable que Trump, en su segundo mandato, resuelva los problemas que avivaron el descontento de los votantes por el gobierno de Biden y crearon un público receptivo a sus llamados populistas. En el plano internacional, conforme mengua la presencia de Estados Unidos y la Unión Europea, es probable que aumente la influencia de los BRICS (Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica) y, a pesar de la inestabilidad económica que podría acarrear el gobierno de Trump, conforme el centro de gravedad de la gobernanza global se desplaza, podrían surgir oportunidades para reconfigurar las normas internacionales y construir nuevas formas de colaboración. Este momento también ofrece la oportunidad de jubilar el modelo económico fallido que privilegia la creación del valor privado sobre el valor público y sustituirlo por un orden económico mundial más sostenible y equitativo.

Stephen G. Brooks y Ben A. Vagle apuntan como estrategia no ganadora para Estados Unidos la desvinculación de las cadenas de suministro con China. Esto es así porque el poder económico estadounidense tiene ventaja dominante y duradera sobre Beijing en sectores de tecnología de punta, como el aeroespacial y de defensa,

el farmacéutico y de biotecnología, así como el de semiconductores, en los cuales las empresas estadounidenses obtienen 55% de las ganancias. Las empresas chinas de alta tecnología, en cambio, apenas generan 6%, un poco más que las de Corea del Sur. Desvincularse en tiempos de paz es completamente diferente de hacerlo en caso de conflicto y, estratégicamente, poco sabio. China solo puede ser aislada una vez, y hacerlo en ausencia de conflicto sería malgastar una ventaja vital para detener una agresión militar de Beijing.

Arturo C. Sotomayor presenta la situación de la energía nuclear en Latinoamérica, a la que le falta un buen trecho por recorrer. Solo Argentina, Brasil y México han logrado generar energía mediante reactores nucleares, lo que ha contribuido apenas con 2% de la generación regional de electricidad. Las innovaciones, los recursos minerales críticos y la presencia de diez reactores de investigación nuclear en la región, que facilita la adquisición de experiencia operacional, prometen hacer esta fuente de energía más accesible para los países en desarrollo, aunque uno de los principales retos para Latinoamérica es modernizar sus instalaciones nucleares. Frente a los altos costos de los reactores de tercera generación, Sotomayor propone el uso de reactores modulares pequeños, para que algunos países latinoamericanos tengan mejores oportunidades de participación. Sin embargo, menciona dos limitaciones: las amenazas para la seguridad internacional debido a su uso dual y la eliminación de desechos radiactivos con el riesgo de su captura por parte de organizaciones criminales.

Tres artículos abordan el complejo tema del segundo mandato de Trump. Para Steven Levitsky y Lucan A. Way, la democracia en Estados Unidos hoy corre más peligro que en ninguna otra época de su historia moderna, y los controles constitucionales no están cumpliendo su función. Se prevé un autoritarismo competitivo en el que los partidos compitan

en las elecciones, pero en el que el abuso de poder del presidente en funciones cree condiciones desfavorables para la oposición. Se anticipa también un Estado armado, el cual crea un difícil problema de acción colectiva a las élites del poder establecido que, en teoría, preferirían la democracia al autoritarismo competitivo.

El artículo de Michael Kimmage se centra en el ámbito internacional, en el Presidente estadounidense y en otros exaltadores similares de la grandeza nacional que están marcando la agenda mundial y que no consideran el sistema basado en reglas, las alianzas o los foros multinacionales. Aunque para el autor el multilateralismo está vivo, a pesar de los terribles escenarios que describe, considera que el segundo mandato de Trump podría mejorar una situación internacional en deterioro. Aun cuando ninguna de las categorías usuales del orden internacional es aplicable, el gobierno del magnate estadounidense todavía puede usar el poder, las alianzas y la política económica para apaciguar la tensión.

La supremacía del dólar, a pesar de su volatilidad, es el tema que aborda Eswar Prasad. En su opinión, los mercados financieros de Estados Unidos son mucho más grandes que los de otros países, lo que vuelve a los activos en dólares mucho más fáciles y baratos de comprar y de vender. Pese a que ha perdido terreno, la brecha entre el dólar y cualquier otra moneda rival sigue en aumento y no muestra signos de detenerse. China y la India se han convertido en potencias económicas importantes, pero sus monedas no han cobrado fuerza más allá de sus países. Ciertamente, las instituciones de Estados Unidos se han deteriorado, pero aquellas de las otras grandes economías están en una situación aún peor.

Para finalizar, vale la pena comentar sobre el deceso de dos personajes relevantes en Latinoamérica y el mundo. El primero es el papa Francisco, calificado como el Papa del Sur global, cuyo fallecimiento sucedió el 21 de abril de 2025. El volumen 17, número 3, de *Foreign Affairs Latinoamérica* (2017) se dedicó a la diplomacia de su pontificado. En esa edición, Mariano Turzi se preguntaba por qué a los 4 años de su pontificado todavía no había visitado su país, Argentina, a pesar de haber viajado a otros países latinoamericanos. De los 66 países que visitó en 12 años, nunca viajó a Argentina. La pregunta sigue abierta.

De José Mujica, fallecido el 13 de mayo de 2025, se ha destacado su sentido ético de la política. Es una persona que despertó el interés mundial por su autenticidad, así como por su estilo de vida sobrio y austero. En 2015, publicamos una entrevista de Elías Camhaji (vol. 15, núm. 1), la cual tuvo su punto de tensión por la honestidad de las respuestas de Mujica, que requirió un posterior comunicado de prensa de la Presidencia de la República de Uruguay expresando su solidaridad “con el pueblo mexicano y con su sistema político, incluyendo a su gobierno”. A la pregunta de Camhaji sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Mujica respondió: “A uno le da una sensación, visto a la distancia, que se trata de una especie de Estado fallido, que los poderes públicos están perdidos totalmente de control, están carcomidos. Es muy doloroso lo de México. Yo apelo a que México reaccione en su ética y en su moral”. Mujica no calló lo que pensaba, pero, 16 años después de la desaparición de los 43 estudiantes, los familiares aún esperan una respuesta oficial de lo que ocurrió. Aún hay impunidad y preguntas sin resolver. Siguen las desapariciones de personas en México. Y la carcoma avanza.

JORDI BACARIA COLOM

El desafío de Latinoamérica en la era de la geoeconomía



Latinoamérica en la era de la geoeconomía

✉ *Julieta Zelicovich*

Durante la última década, las transformaciones políticas y económicas mundiales han provocado un giro geoeconómico en las relaciones internacionales. Las fronteras entre las esferas económica y de seguridad se han vuelto difusas, y es cada vez más frecuente que los gobiernos recurran al poder económico como arma estratégica para alcanzar objetivos políticos o de seguridad en su relación con otros Estados.

En las dinámicas geoeconómicas, el comercio y la inversión, antes considerados motores de cooperación internacional, han pasado a evaluarse como factores potenciales de vulnerabilidad en la inserción internacional de un país, lo que ha dado lugar a un cambio significativo en el funcionamiento de la globalización. La afinidad ideológica y estratégica se transformó en un criterio clave para las decisiones económicas, lo que desafió las estrategias tradicionales de inserción internacional.

Si bien este giro ha estado marcado por la competencia entre China y Estados Unidos, su alcance ha sido más amplio. En distintas regiones, los gobiernos han debatido su posicionamiento internacional y reformado sus instrumentos de política económica para fortalecer sus capacidades de intervención en nombre de la seguridad económica y estratégica. A pesar de no estar en el epicentro del proceso, Latinoamérica no fue ajena a estos efectos.

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca redobla las tensiones y obliga a afinar el análisis. ¿Cómo se posiciona la región en las nuevas dinámicas? ¿Puede Latinoamérica responder a los desafíos crecientes que provoca este entrecruzamiento de la agenda económica con la de seguridad estratégica?

Una revisión de los registros históricos, bases de datos y noticias relativas al uso de herramientas geopolíticas que involucran a países latinoamericanos desde 2017 muestra un dato que resulta sorprendente: en la era de la geoeconomía, los países de la región no se han limitado a ser objeto de la disputa de las potencias extrarregionales

JULIETA ZELICOVICH es doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y maestra en Relaciones Comerciales Internacionales por la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref). Es investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y profesora en la licenciatura en Relaciones Internacionales de la UNR y en la maestría en Política y Economía Internacional de la Universidad de San Andrés (UDESA), Argentina. Sígalas en X en @jujizel.

—una constante histórica desde la época colonial—, sino que también han desarrollado, de manera paulatina, estrategias geoeconómicas propias.

LA ERA DE LA GEOECONOMÍA Y SUS INSTRUMENTOS

El concepto de geoeconomía ha ido creciendo en popularidad, sin necesariamente ganar precisión. Se utiliza como un descriptor del estado de funcionamiento del sistema internacional, y también como una categoría para aludir a un conjunto determinado de acciones de los gobiernos. Desde esta última perspectiva, las dinámicas geoeconómicas refieren a las acciones en las que se ejerce poder mediante herramientas económicas para alcanzar metas de carácter geopolítico y estratégico, y ya no económico.

Con estas acciones geoeconómicas se busca dar forma al entorno estratégico donde se inserta un Estado, e influir en el comportamiento de otros países para disuadirlos o forzarlos a tomar ciertas decisiones. Además, puede utilizarse como mecanismo de castigo o de señalización, o incluso como herramienta de negociación. Para los investigadores Henrique Choer Moraes y Mikael Wigell, la geoeconomía, en última instancia, supone imponer dependencias a otros para cambiar su decisión o reducir las propias, a fin de no convertirse en un peón de ajedrez en la política de poder de otros países.

El instrumental que se utiliza incluye tanto “garrotes” como “zanahorias”. Los gobiernos pueden recurrir a medidas económicas coercitivas que restringen los flujos económicos, por ejemplo, al aplicar restricciones a las exportaciones o al incrementar los aranceles; también suele emplearse la retirada del trato de nación más favorecida, el congelamiento de activos, la implementación de controles de capital y la suspensión de ayuda internacional. Por otra parte, las autoridades pueden perseguir sus objetivos geoeconómicos ofreciendo “zanahorias” que fomenten los intercambios económicos con ciertos actores. Estas medidas pueden canalizarse por medio de asistencia internacional oficial, ayuda humanitaria, financiamiento para el desarrollo, acceso a divisas, preferencias comerciales, aranceles preferenciales y subsidios. Incluso, los acuerdos de libre comercio se han presentado como herramientas que pueden tener un juego geoeconómico.

La elección de la herramienta depende en gran medida de los objetivos, los plazos y la naturaleza del vínculo entre las partes. Un punto clave es si la acción busca un cambio inmediato en la política —para lo cual predominan medidas coercitivas— o si apunta a moldear preferencias a largo plazo, en cuyo caso son más habituales los incentivos. También influyen factores como el régimen político, la distancia ideológica y la interdependencia económica entre el emisor y el receptor, así como la efectividad esperada de estas herramientas.

De manera típica, los incentivos se usan con los países aliados bajo condiciones de interdependencia económica, mientras que la coerción se reserva para los adversarios. Con los países aliados, la sola amenaza de sanciones suele ser más eficaz, lo cual explica por qué se terminan implementando menos medidas coercitivas en estos casos que frente a los adversarios. La existencia de “opciones de salida”, como vínculos intensos con un tercer Estado, suele desincentivar el uso de sanciones y favorecer los incentivos.

No hay manera simplificada de explicarlo: las combinaciones de variables y de condiciones con las que actúan las dinámicas geoeconómicas son múltiples. La literatura no tiene consensos sobre los requerimientos particulares para implantar este tipo de medidas; incluso se discute si, en el caso de países menos desarrollados —como los latinoamericanos—, las condiciones de implementación son diferentes a las de los países desarrollados. De allí que valga la pena profundizar en el desempeño de la región.

DE CARA A LAS DINÁMICAS GEOECONÓMICAS

Desde tiempos coloniales, Latinoamérica ha sido objeto de disputa de las potencias extrarregionales, muchas de las cuales se canalizaron mediante herramientas geoeconómicas. Entre 1990 y 2017, la era de la globalización puso un velo de aparente neutralidad sobre las acciones y primó una mirada ascética sobre el mercado. Sin embargo, las dinámicas desatadas desde 2017 llevaron a que países como China y Estados Unidos o la Unión Europea desplegaran un arsenal renovado de “zanahorias” y “garrotes” en las economías locales. Este fenómeno no es nuevo en Latinoamérica, aunque en los mecanismos que lo activan y en la forma en que se implementa, sí se presenta renovado en su intensidad.

De 2017 a 2024 se presentaron distintas manifestaciones que contribuyeron a identificar una suerte de tipología de dinámicas geoeconómicas que involucran a países latinoamericanos. A continuación, se exponen tres en las que los países de Latinoamérica son objeto de las acciones geoeconómicas.

Sanciones económicas y otras dinámicas coercitivas impulsadas por valores y principios

En general, las medidas económicas se han utilizado para castigar la violación de los valores del orden liberal internacional y señalar pautas de conductas consideradas ilegítimas. Así, ha sido habitual el uso de sanciones unilaterales como mecanismos de instrumentalización del comercio, la inversión y la ayuda extranjera por parte de grandes potencias, con el objetivo de inducir un cambio de política en los gobiernos de la región sobre temas relacionados con los valores liberales.

De 2017 a la fecha, estas dinámicas han seguido presentes en el territorio latinoamericano. Estados Unidos ha mantenido una actitud de vigilancia frente a las violaciones de derechos humanos y de los valores democráticos en la región durante la última década, siendo un emisor frecuente en este tipo de dinámica. Se aplicaron sanciones económicas a Cuba, Nicaragua, Venezuela, entre otros. La Unión Europea también ha generado sanciones unilaterales contra países de la región, aunque con menor intensidad.

Estos casos, si bien usan dinámicas geoeconómicas, no reflejan los cambios de poder de la “era de la geoeconomía”. Tales sanciones replicaron las prácticas de décadas anteriores al señalar continuidades en la instrumentalización del comercio y la inversión, antes que la introducción de un nuevo tipo de ejercicio específico de la época. Las dinámicas propias de la competencia estratégica del siglo XXI aparecen vinculadas, más bien, al uso de incentivos económicos o a mecanismos de coerción más acotados.

Dinámicas de incentivos para la configuración de preferencias estratégicas

Bajo esta lógica, los países latinoamericanos son principalmente “parte del menú” en un territorio donde las grandes potencias compiten por influencia. Durante la última década, China, Estados Unidos, Taiwán y la Unión Europea han desplegado estrategias geoeconómicas para configurar un entorno estratégico favorable a sus intereses en Latinoamérica, en el contexto de la competencia mundial por el poder.

Hay tratados de libre comercio que incluyen obligaciones sobre temas no comerciales, préstamos condicionados, al igual que ayuda económica utilizada como herramienta estratégica para ganar influencia y preferencia en la región. Resulta notorio cómo, en algunas ocasiones, las herramientas desplegadas aluden de forma directa a la competencia entre China y Estados Unidos; es el caso del otorgamiento de beneficios a Costa Rica y a Panamá en el marco de la Ley de CHIPS y Ciencia de Estados Unidos, o bien de la inclusión de la cláusula que plantea la terminación del acuerdo si un país se asocia a una economía que no es de libre mercado (Tratado México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC, artículo 32-10) o de “antieconomía no de mercado”. Estos son ejemplos típicos de la manera en que un país puede aprovechar su poder económico para condicionar la relación de actores locales con otros Estados.

La ayuda financiera e inversión de Taiwán siguen una dinámica muy similar: se otorgan bajo la condición de que el país receptor mantenga relaciones diplomáticas con la República de China (Taiwán) y no con Beijing. Otras situaciones, como la Iniciativa de la Franja y la Ruta, son más sutiles en cuanto a las condiciones implícitas. Por su parte, los préstamos chinos a Argentina muestran cómo los créditos condicionados pueden implementarse para fortalecer la posición estratégica de China en la competencia mundial al promover la adopción de sus estándares y tecnologías.

En el caso de la Unión Europea, los acuerdos comerciales —como la modernización del Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea— y los créditos bajo la iniciativa Global Gateway —como el otorgado a Ecuador— reconocen de manera explícita ser acciones geoeconómicas destinadas a promover “los valores europeos de buena gobernanza, transparencia y sostenibilidad”, en palabras de la propia Comisión Europea. Se trata de acciones destinadas a moldear el entorno estratégico a partir del poder económico.

Los países latinoamericanos son “parte del menú” en un territorio donde las grandes potencias compiten por influencia.

Dinámicas coercitivas sobre activos y tecnologías estratégicas

El tercer tipo de dinámica geoeconómica en la que Latinoamérica se presenta como objeto es la coerción económica sobre activos y tecnologías estratégicas. A diferencia de las estrategias anteriores, esta implica el uso directo de medidas punitivas —como sanciones comerciales, bloqueos financieros o restricciones de inversión— para forzar un cambio de políticas en el país objetivo. En Latinoamérica, esta táctica ha sido

más notoria en casos donde se involucra la competencia entre China y Estados Unidos, y se desafían intereses estratégicos fundamentalmente asociados con la tecnología.

Uno de los ejemplos es la licitación de la red 5G en Brasil. En 2020, el país sudamericano recibió una misión oficial y el despliegue de amenazas, junto con “zanahorias” —como la invitación a la iniciativa Red Limpia y la promesa de créditos—, para excluir a Huawei como proveedor. La coerción fue sutil y estuvo acompañada de incentivos. Aunque al final Brasil no prohibió a Huawei, la presión estadounidense evidenció la forma en que las grandes potencias manipulan los vínculos económicos para influir en la política interna de los países latinoamericanos.

En el caso de Chile, el gobierno se vio obligado a cancelar la licitación del consorcio chino-alemán Aisino-Mühlbauer para la emisión de pasaportes y de tarjetas de identidad por presión de Washington, que amenazó con retirar a Chile del programa de exención de visa con Estados Unidos. Al igual que en el caso brasileño, las amenazas diplomáticas coercitivas se reforzaron por incentivos.

LATINOAMERICANOS COMO USUARIOS DE LA GEOECONOMÍA

Los países de Latinoamérica no se han limitado a estar sujetos a las dinámicas geoeconómicas, sino que también han recurrido a su poder de mercado para conseguir metas estratégicas, por lo cual se han posicionado como usuarios con agencia activa. Este tipo de accionar ha recibido menos atención y, de cierto modo, hasta contradice parte de la literatura previa; sin embargo, resulta clave para identificar posibles líneas de acción para la región.

Se observan tres tipos de acciones: dinámicas coercitivas impulsadas por tensiones geopolíticas regionales; dinámicas coercitivas impulsadas por valores y principios, y dinámicas defensivas precautorias e intentos de instrumentalización de los recursos naturales regionales.

Dinámicas coercitivas impulsadas por tensiones geopolíticas regionales

Bajo esta dinámica, los países latinoamericanos han recurrido a estrategias coercitivas para presionar las políticas de terceros actores que se perciben como contrarias a sus intereses geopolíticos territoriales estratégicos. Este objetivo se asemeja al uso tradicional de la estrategia económica y no está específicamente vinculado al giro geoeconómico de la última década, pues no implica una competencia por moldear el entorno internacional o por tener control sobre tecnologías clave.

En la muestra analizada, Argentina, en el marco del prolongado conflicto con el Reino Unido por las islas Malvinas, ha aplicado restricciones administrativas al limitar los permisos de exploración y de explotación de hidrocarburos a las empresas británicas que no reconocen sus derechos soberanos sobre dichas islas. En otras ocasiones, también ha afectado las licencias de pesca.

Paraguay, como una medida coercitiva contra la decisión argentina de aplicar peajes sobre la hidrovía Paraná-Paraguay, intentó utilizar el suministro de energía

a Argentina desde la represa de Itaipú, lo que evidencia el uso de acciones de tipo geoeconómico para dirimir una disputa sobre el recurso hídrico compartido.

En ambos casos, los países latinoamericanos recurrieron al control de sus recursos naturales estratégicos —exportaciones de energía y acceso a la exploración y explotación de hidrocarburos— para ejercer poder en el marco de conflictos geopolíticos.

Dinámicas coercitivas impulsadas por valores y principios

Otro tipo de dinámica geoeconómica en la que Latinoamérica se involucra como usuario es la impulsada por valores. Los gobiernos de esta región, de manera semejante a las potencias extrarregionales, se han involucrado en sanciones económicas y medidas coercitivas para castigar violaciones de derechos humanos y proteger las libertades liberales y los derechos democráticos. El detonante de todos los casos se vincula de forma estrecha con los valores del orden liberal internacional y, en consecuencia, con la identidad occidental de los países de la región. Las herramientas utilizadas incluyen restricciones financieras, congelamiento de activos y suspensión de concesiones y de derechos, aunque los objetivos no sean económicamente vulnerables a estas acciones. Es posible asumir que estas medidas usan la geoeconomía, sobre todo, como una estrategia de señalización.

La Cláusula Democrática, incorporada en el proceso regional del Mercado Común del Sur (Mercosur) y en otros mecanismos latinoamericanos, es uno de los ejemplos de cómo esta dinámica se plasma en la región. Durante el periodo estudiado, Venezuela fue el foco de estas acciones. No solo hay expresiones como la del Mercosur, sino también unilaterales. Entre otros, en 2018, Panamá aplicó sanciones económicas a Venezuela, pero con un rasgo llamativo: su accionar siguió una lógica doble, pues no solo buscó penalizar las acciones de este país, sino que, a la vez, se alineó con el paquete de restricciones financieras de Estados Unidos, con lo cual marcó una señalización geopolítica hacia Washington.

El uso de dinámicas coercitivas por países latinoamericanos se extendió también hacia actores extrarregionales, estatales y no estatales. En 2019, Argentina impuso restricciones financieras dirigidas contra Hezbolá, identificado como una organización terrorista. De manera reciente, en 2024, Colombia limitó sus exportaciones de carbón a Israel por su accionar durante la guerra en la Franja de Gaza.

Dinámicas defensivas precautorias e instrumentalización de los recursos naturales

Frente al uso creciente de la geoeconomía en el mundo, se identifica solo un caso en el que un país latinoamericano —Brasil— ha desplegado una estrategia de respuesta específica. Se trata del quinto tipo identificado: la “estrategia económica defensiva y precautoria”.

En 2021, en el contexto del bloqueo del Órgano de Apelación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Brasil aprobó la Ley 14353, que prevé la suspensión de concesiones u obligaciones en caso de que un miembro de la OMC incumpla sus obligaciones multilaterales. Esta medida no apunta a un objetivo inmediato, sino que busca disuadir o prevenir que otros países recurran a la estrategia de “apelar al vacío”

en disputas comerciales contra Brasil. El texto guarda similitudes con las revisiones del Reglamento de Cumplimiento de la Unión Europea de 2019 y de 2020, dirigidas a fortalecer la capacidad de la Unión para proteger sus intereses cuando una disputa comercial queda bloqueada.

Por su parte, encontramos un caso discutido: la negociación impulsada por Ecuador para la firma de un tratado de libre comercio con China bajo el gobierno de Guillermo Lasso. Esta iniciativa puede interpretarse como una acción geoeconómica si se acepta que, en el curso de las negociaciones, el gobierno buscó posicionar al país como nodo estratégico en Latinoamérica frente a sus competidores regionales y, al mismo tiempo, apalancarse para tener mayor incidencia en la negociación de su

deuda con Beijing. Sin embargo, este accionar podría ser, más bien, una justificación o racionalización posterior de una respuesta a demandas chinas; de allí lo polémico del caso.

Además de estas iniciativas, en el estudio se identifican dos instancias preliminares que no alcanzaron a configurar acciones geoeconómicas. En 2022, el Vicepresidente de Brasil,

Son pocas las instancias donde Latinoamérica se posiciona como emisor de dinámicas geoeconómicas.

Geraldo Alckmin, propuso crear una “organización tipo OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) para la seguridad alimentaria”. En 2023, el Presidente de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, llamó a establecer una política conjunta latinoamericana sobre el litio para ganar influencia en la geoeconomía mundial. Aunque ninguna de estas iniciativas ha logrado consolidar un mecanismo colectivo que convierta los alimentos o el litio en herramientas estratégicas, constituyen antecedentes relevantes para posibles ejemplos futuros de este tipo de participación.

En efecto, a pesar de estos antecedentes, son pocas las instancias donde Latinoamérica se posiciona como emisor de dinámicas geoeconómicas en el marco del juego estratégico de poderes del siglo XXI. La coyuntura actual plantea la necesidad de reposicionar este accionar.

EL DESAFÍO DE TRUMP 2.0

Las semanas transcurridas desde la asunción del segundo mandato de Trump auguran un recrudecimiento de las dinámicas geoeconómicas. A la competencia hegemónica con China, que caracterizó las acciones del primer mandato, se le suma ahora una ambición por remodelar las reglas de funcionamiento de la globalización y el lugar que ocupa Estados Unidos en la política internacional. Se observa un bajo acatamiento por parte de Washington de las pautas de la conducta del sistema internacional, que se refleja en un alejamiento de las instancias multilaterales, y en un uso intenso de amenazas de coerción económica ante un conjunto amplio de temas —tecnología, narcotráfico, migración— contra un grupo extenso de países, incluidos los latinoamericanos.

En la región, las dinámicas geoeconómicas afectaron mayormente a México, que recibió un incremento de aranceles por cuestiones migratorias y por las políticas de

control del fentanilo. La amenaza de contramedidas y la negociación bilateral llevaron a poner en suspenso parte de estos aranceles durante umbrales temporales reducidos. Otras cuestiones, como la presencia de capitales chinos en empresas exportadoras, han sido también objeto de amenazas de coerción por Washington.

Parecería que estas acciones sugieren una dinámica geoeconómica distinta a las vistas hasta ahora. Desde Washington, se propone un uso mucho más intensivo de los instrumentos coercitivos para obtener cambios de política de corto plazo en Latinoamérica, asociados a activos estratégicos que trascienden los aspectos tecnológicos de la competencia con China.

No solo México; también Colombia, otrora socio predilecto en la región, fue amenazado con la implementación de aranceles para forzar la aceptación de migrantes deportados, según las condiciones impuestas por Washington. La lista de casos se amplía semana a semana.

Un caso destacado es el de Panamá, que se posiciona entre las dinámicas coercitivas sobre activos y tecnologías estratégicas, y las de origen geopolítico. Esto resulta novedoso porque, durante el periodo anterior, no se encontraron actores extrarregionales como iniciadores de este tipo de acciones. Entre enero y febrero de 2025, Panamá fue blanco de coerción por Trump respecto de la soberanía del canal, en una posición revisionista del Tratado Carter-Torrijos, signada por una pretensión de Washington de tomar control sobre los cuellos de botella de la logística internacional y reducir la incidencia de China en el área. En sintonía con esta escalada de tensiones, el fondo de inversión estadounidense BlackRock compró la participación mayoritaria de CK Hutchinson (Hong Kong) y tomó el control de los puertos de Balboa y Cristóbal en el canal de Panamá, medida que China ha rechazado, lo que evidenció su trasfondo geopolítico.

En Venezuela, Trump revocó los permisos de explotación para Chevron y otras empresas petroleras. Este tipo de acciones marca una continuación en las dinámicas de uso del comercio e inversión asociado a valores y principios. La innovación, entonces, consiste en extender el impacto de las medidas más allá de los límites territoriales. Washington anunció —o amenazó con— establecer un arancel de 25% a todos los países que importen petróleo y gas de Venezuela; así, extendió las medidas más allá de Caracas.

En contraposición a estas dinámicas, hasta ahora no se observa en Washington el recurso de incentivos económicos positivos como mecanismos de poder. De hecho, la región latinoamericana, como el resto del mundo, resultó afectada por la suspensión de las medidas de ayuda de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. La era de Trump 2.0 marca, al menos durante el primer trimestre de 2025, una disminución de este tipo de dinámica geoeconómica antes recurrente en Latinoamérica.

Respecto a las respuestas de los latinoamericanos, a pesar de que el accionar de Estados Unidos ha afectado a la región en forma directa e indirecta, no hay —hasta ahora— evidencia de reacciones en clave geoeconómica que puedan ser generalizadas. Las respuestas iniciales de Colombia, México y Panamá se mantuvieron por canales

bilaterales, por lo que entraron en la lógica transaccional que pretende Trump. En casos puntuales hubo amenazas de implementación de aranceles en forma de contramedidas, pero no un uso estratégico de recursos económicos clave, ni hacia Estados Unidos ni hacia otros actores extrarregionales.

Por su parte, el fracaso de la convocatoria a una reunión de emergencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños a fines de enero de 2025 marca lo debilitados que se encuentran los mecanismos de concertación regional como para imaginar acciones conjuntas de mayor volumen.

REFLEXIONES FINALES

Los tipos de dinámicas geoeconómicas revisadas permiten dar cuenta de que, ya sea como actores iniciadores o como objetivos, los países latinoamericanos no han permanecido ajenos a las transformaciones del sistema internacional que, desde 2017, avanza hacia una era de dinámicas geoeconómicas. Con sus particularidades, la región ha manifestado tener agencia en ese proceso en curso.

El inicio de un nuevo mandato de Trump agrega un desafío adicional a este complejo entretejido de las arenas de la seguridad estratégica y la economía internacional. Como se ha visto, las acciones de las primeras semanas sugieren un recrudecimiento de las tendencias existentes respecto a la instrumentalización de comercio, inversiones, finanzas y ayuda internacional, y hasta el esbozo de nuevos tipos de dinámicas geoeconómicas.

Hasta ahora, las respuestas latinoamericanas han sido limitadas. Si bien se han identificado algunos antecedentes en las dinámicas geoeconómicas, no se ha manifestado un uso estratégico de los recursos en el último periodo. El hecho de que tanto México como Panamá hayan tenido éxitos parciales en su resistencia al embate de Washington abona a la hipótesis sobre la existencia de capacidades relevantes en el territorio. La ausencia de respuestas coordinadas mayores, sin embargo, sugiere una vulnerabilidad recrudecida ante el debilitamiento de la cooperación y de los liderazgos latinoamericanos.

Los países de esta región, aprovechando su papel destacado en la seguridad alimentaria o en los minerales críticos como herramientas estratégicas, pueden convertirse en participantes proactivos en la geoeconomía del siglo *xxi*. Una correcta interpretación de las dinámicas geoeconómicas, así como un posicionamiento de los actores de la región como usuarios y no solo como objetos de dichas tendencias, resulta central para el desarrollo de estrategias de inserción internacional resilientes y estratégicas en un contexto cada vez más complejo. **N**

China y el fin de la primacía estadounidense en Latinoamérica

Una nueva cartografía del poder económico

✉ *Francisco Urdinez*

El cambio tectónico en las relaciones económicas entre China, Estados Unidos y Latinoamérica durante las primeras 2 décadas del siglo XXI constituye, quizá, la transformación geopolítica más significativa en el hemisferio occidental desde la Guerra Fría. Sin embargo, para muchos analistas centrados en narrativas tradicionales sobre la región, esto ha pasado relativamente inadvertido.

Mi investigación, plasmada en *Economic Displacement: China and the End of U.S. Primacy in Latin America* (en prensa), documenta con meticulosidad esta revolución silenciosa. Los hallazgos desafían concepciones arraigadas sobre la influencia estadounidense en lo que se consideraba su “patio trasero”.

Tras años de recopilación de datos relativos a inversiones, comercio, ayuda y créditos de ambas potencias hacia la región, el patrón es inequívoco: China ha desplazado económicamente a Estados Unidos en países que representan 60% de la población latinoamericana. Esta nueva realidad exige repensar paradigmas establecidos sobre la geopolítica hemisférica.

DESPLAZAMIENTO ECONÓMICO: UN NUEVO LENTE ANALÍTICO

Durante el primer mandato de Donald Trump, cuando Washington proclamaba su intención de “contener a China” en Latinoamérica, la realidad material mostraba una historia diferente. Para entonces, en la mayoría de los países sudamericanos, el peso económico chino ya superaba al estadounidense.

FRANCISCO URDINEZ es profesor asociado en el Instituto de Ciencia Política y Director del Centro de Estudios Asiáticos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, así como Director del Núcleo Milenio ICLAC (www.iclac.cl). Es autor de *Economic Displacement: China and the End of U.S. Primacy in Latin America* (Cambridge University Press, en prensa). Sigalo en X en @FranciscoUrdin.

¿Cómo medir este fenómeno? Desarrollé un índice que cuantifica el “peso económico” mediante la suma anual de capital que un país receptor acumula de entidades económicas originarias de otro, ajustada en proporción al tamaño de su economía. El “desplazamiento económico” ocurre cuando el peso de China supera al de Estados Unidos.

Los resultados son reveladores. Entre 2001 y 2020, el chino aumentó quince veces en Latinoamérica, mientras que el estadounidense se contrajo en un cuarto. Para 2020, China había desplazado a Estados Unidos en doce países latinoamericanos, incluyendo a gigantes regionales como Argentina y Brasil.

Este fenómeno constituye una transformación histórica. Durante el siglo xx, Estados Unidos mantuvo una supremacía económica incontestable en la región. Ni la Unión Soviética durante la Guerra Fría, ni Japón en la década de 1980, ni la Unión Europea en la de 1990 lograron desafiar de manera significativa esta hegemonía.

La contundencia de los datos plantea preguntas ineludibles: ¿cómo logró China, sin superar a Estados Unidos en las listas económicas mundiales, desplazarlo en su tradicional esfera de influencia? ¿Qué implicaciones tiene este fenómeno en la gobernanza regional y el orden internacional?

Para comprender la magnitud de esta transformación, es preciso considerar la fuerza histórica de la presencia económica estadounidense en Latinoamérica. Los datos son contundentes: mientras en la década de 1990 las exportaciones de Estados Unidos casi se triplicaron (de 54 000 millones de dólares a 142 000 millones) y su inversión directa creció de 71 000 millones de dólares a 223 000 millones; China apenas figuraba en el panorama regional. Sin embargo, para 2020, Beijing había invertido 265 000 millones en Latinoamérica, superando los 192 000 millones de inversión estadounidense (sin contar a México). En sectores estratégicos, como el financiamiento de infraestructura, la ventaja china es aún más evidente: 66 000 millones de dólares frente a solo 39 000 millones de las instituciones lideradas por Estados Unidos. Incluso en la exportación de materias primas, tradicionalmente dominada por intereses estadounidenses, China ha alcanzado la paridad: 1.3 billones de dólares frente a 1.27 billones. Estas cifras no representan fluctuaciones temporales, sino un cambio estructural en los fundamentos del poder económico regional.

La narrativa convencional suele atribuir este cambio a una estrategia deliberada de Beijing para desafiar a Washington en su “patio trasero”, pero mi investigación revela una realidad más compleja: el papel crucial que desempeñaron la contracción estadounidense y la agencia activa de los países latinoamericanos.

EL VACÍO ESTADOUNIDENSE: OPORTUNIDAD PARA CHINA

Contrario a interpretaciones simplistas, el avance chino no puede explicarse de forma adecuada por el auge de las materias primas o por afinidades ideológicas con gobiernos progresistas. Estos factores, aunque relevantes, no resisten un escrutinio riguroso.

Si la dependencia de materias primas fuera determinante, la influencia china debería haber disminuido tras el fin del superciclo en 2013. No fue así. El comercio y las inversiones entre China y Latinoamérica continuaron creciendo. Más revelador aún: líderes de derecha como Mauricio Macri en Argentina o Sebastián Piñera en Chile buscaron profundizar relaciones con Beijing.

La explicación más convincente radica en la contracción de la presencia estadounidense. Mientras Washington reorientaba su atención hacia el Medio Oriente tras el 11-s y, después, a Asia-Pacífico, su participación en los flujos económicos hacia Latinoamérica se reducía de forma dramática. Su inventario de inversión en la región pasó de representar 20% de sus inversiones mundiales a finales del siglo xx a apenas 5% en 2020.

En términos absolutos, la caída es aún más significativa. Entre 1982 y 1990, las empresas estadounidenses ya habían reducido su exposición a Latinoamérica con su inventario de inversión en la región, que disminuyó de 23% a 15% de sus inversiones mundiales totales. Si bien estas repuntaron en la década de 1990, hasta alcanzar 20% al final del siglo xx, la tendencia descendente se reanudó con el nuevo milenio, al culminar en ese mínimo histórico de 5% en 2020.

Esta retirada no fue resultado de decisiones aleatorias, sino de prioridades estratégicas. La “Doctrina Obama” de 2009 significó un giro deliberado desde la dominación histórica hacia relaciones más igualitarias con Latinoamérica. Más adelante, el “giro a Asia” redujo aún más la atención hacia el hemisferio occidental. El historiador Robert Pastor, reconocido especialista en relaciones interamericanas, describió la política estadounidense hacia la región como un “remo-

lino”: Washington disminuye su enfoque en Latinoamérica cuando no percibe amenazas externas, para luego reactivarse de manera abrupta ante la primera señal de peligro.

China, con su pragmatismo característico, llenó estos vacíos. Entre 2001 y 2020, 238 de sus empresas invirtieron en la región. Para 2020, gigantes como China Communications Construction Company, Huawei y China Railway Construction mantenían presencia en múltiples países latinoamericanos.

El cambio es particularmente notorio en sectores estratégicos. En infraestructura energética, los bancos chinos prestaron 58 000 millones de dólares entre 2001 y 2020, mientras que instituciones lideradas por Estados Unidos aportaron apenas 32 000 millones. Las diferencias son aún más dramáticas cuando se analiza por país: en Argentina, por cada dólar estadounidense invertido en energía, China aportó casi 10; en Brasil, la proporción fue de 5.6 a 1, y en Ecuador, de 4.2 a 1. Estos desequilibrios reflejan no solo la creciente capacidad financiera china, sino también

Contrario a interpretaciones simplistas, el avance chino no puede explicarse de forma adecuada por el auge de las materias primas o por afinidades ideológicas con gobiernos progresistas.

la retirada relativa de instituciones financieras occidentales de proyectos estratégicos en la región.

La infraestructura portuaria ofrece otro ejemplo ilustrativo. El puerto de Chancay, en Perú, con una inversión de 3000 millones por parte de COSCO Shipping, representa la mayor inversión china en el sector portuario latinoamericano. Cuando esté operando, permitirá que buques de 18 000 TEU (los más grandes del mundo) atraquen por primera vez en costas latinoamericanas, con lo que se transformarán las cadenas logísticas regionales.

Durante la pandemia de covid-19, este fenómeno alcanzó dimensiones inéditas. Mientras Estados Unidos se centraba en su crisis sanitaria, China se posicionó como proveedor crucial de vacunas y de equipos médicos para Latinoamérica. Sinovac en Brasil y Chile, Sinopharm en Argentina y Perú: las vacunas chinas llegaron masivamente a la región cuando las occidentales escaseaban.

LA AGENCIA LATINOAMERICANA: ACTORES, NO VÍCTIMAS

Quizá el hallazgo más significativo de mi investigación es el papel activo que desempeñaron los países latinoamericanos en este proceso. Lejos de ser receptores pasivos de la influencia china, buscaron alternativas ante la ausencia de opciones occidentales.

Esta agencia se manifestó mediante dos mecanismos principales: dinámicas de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. En el primer caso, los gobiernos nacionales actuaron como “intermediarios” al canalizar inversiones chinas hacia necesidades subnacionales. El proyecto de las represas patagónicas en Argentina lo ejemplifica. Frente a un déficit energético que obstaculizaba el crecimiento nacional, el gobierno argentino recurrió al Grupo Gezhouba y a bancos chinos para financiar este megaproyecto de 4700 millones de dólares. Las condiciones favorables del préstamo —que incluían un periodo de gracia de 66 meses y un modelo de repago autofinanciado— hicieron de China un socio atractivo en un contexto donde el financiamiento occidental para infraestructura era escaso o inexistente.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en su visita a Beijing en 2010, aseguró acuerdos por 10 000 millones de dólares. Estos no fueron imposiciones chinas, sino respuestas a demandas argentinas específicas. En palabras de un exfuncionario del Ministerio de Obras Públicas: “Necesitábamos financiamiento para infraestructura energética, y China era el único oferente con capacidad y disposición para proyectos de esta escala”.

El segundo mecanismo revela dinámicas de abajo hacia arriba, en las que actores subnacionales y privados toman la iniciativa. El Puerto Multipropósito de Chancay, en Perú, ilustra de manera perfecta este fenómeno. Volcan Compañía Minera, una empresa peruana, estableció contacto directo con COSCO Shipping para desarrollar un puerto con una inversión estimada de 3000 millones de dólares. El gobierno peruano desempeñó un papel secundario, al evidenciar cómo actores privados pueden catalizar la presencia económica china.

En una entrevista, José Ignacio de Romaña, Director de Volcan durante las negociaciones, relató: “Buscábamos un socio con experiencia portuaria mundial. Evaluamos

trece empresas de Asia, Estados Unidos y Europa. cosco ofreció no solo financiamiento, sino una visión estratégica para insertar a Perú en las cadenas logísticas mundiales”.

Durante la pandemia de covid-19, este fenómeno se manifestó dramáticamente en Brasil. A pesar de la retórica anti-China del presidente Jair Bolsonaro, gobernadores y alcaldes establecieron contactos directos con la embajada china y con empresas como Sinovac para asegurar vacunas y equipos médicos. Así, mientras el gobierno federal priorizaba relaciones con Estados Unidos, el Frente Nacional de Alcaldes y el Consorcio Nordeste, que agrupa a nueve estados brasileños, negociaron directamente con proveedores chinos.

El Gobernador de São Paulo, João Doria, emergió como interlocutor clave con China y, en ocasiones, eclipsó al propio Ministerio de Salud federal. Así, mientras el gobierno federal priorizaba sus relaciones con Estados Unidos, el Instituto Butantan en São Paulo, en colaboración con Sinovac, llegó a producir la mayoría de las vacunas utilizadas en el país. El Proyecto S, en la municipalidad de Serrana, que vacunó a 75% de su población con dosis de Sinovac, demostró la eficacia de las vacunas chinas cuando su efectividad era cuestionada por sectores alineados con Washington.

Estos casos ilustran un patrón consistente: los actores latinoamericanos no fueron peones en un tablero geopolítico mundial, sino jugadores activos que buscaron maximizar sus opciones ante la retirada relativa de Estados Unidos y el surgimiento de China como proveedor alternativo de bienes públicos y privados.

EROSIÓN DEL LIDERAZGO ESTADOUNIDENSE

Las implicaciones del desplazamiento económico trascienden lo comercial. Los datos revelan una correlación directa entre este fenómeno y la disminución de la influencia política estadounidense.

En términos de opinión pública, encuestas del Latinobarómetro muestran que, en países donde la economía china ha desplazado a la estadounidense, la probabilidad de tener una visión positiva sobre la capacidad de China para resolver problemas latinoamericanos aumenta 30%, mientras que la percepción favorable hacia Estados Unidos disminuye 21%.

Un análisis más detallado de la encuesta de 2023 confirma esta tendencia: en países que han experimentado desplazamiento económico, 58% de los encuestados afirmaba preferir una relación más estrecha con Estados Unidos, frente a 27% que optaba por China; sin embargo, en países donde no ha ocurrido este fenómeno, la inclinación por Estados Unidos alcanzaba 71%, mientras que la opción por China se reducía a 20%. Este diferencial de 13 puntos porcentuales es estadísticamente significativo y demuestra el impacto tangible del desplazamiento económico en las percepciones públicas.

Más revelador aún es el comportamiento de las élites políticas. El análisis de datos del Proyecto de Élites Latinoamericanas de la Universidad de Salamanca, que abarca a más de 2500 legisladores de 15 países durante un periodo de 10 años, demuestra que, en contextos de desplazamiento económico, la probabilidad de que prioricen a China

en política exterior aumenta 6.5%, mientras que la preferencia por Estados Unidos disminuye 13%.

Este fenómeno se manifiesta de manera concreta en debates parlamentarios sobre inversiones chinas. En 2015, cuando el Congreso argentino debatió la aprobación de una estación espacial china en Neuquén, los legisladores tanto a favor como en contra reconocieron el creciente peso económico del gigante asiático. Los defensores enfatizaron las oportunidades económicas y tecnológicas, mientras que los críticos expresaron preocupaciones sobre soberanía nacional e implicaciones geopolíticas. En gran medida, ambos bandos enmarcaron sus argumentos en términos de la creciente importancia de China como contrapeso a Estados Unidos.

Esta tendencia tiene consecuencias tangibles en foros multilaterales. Mi análisis de votaciones en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos y la Organización de los Estados Americanos (OEA) revela patrones consistentes: el desplazamiento económico reduce de manera importante la alineación de países latinoamericanos con posiciones estadounidenses.

En la Asamblea General, el desplazamiento económico aumenta la distancia ideológica entre los países latinoamericanos y Estados Unidos. En específico, reduce la probabilidad de votar como Washington en 2.5% en todas las resoluciones, y hasta 7.1% en resoluciones consideradas importantes por el Departamento de Estado. Este efecto se

pronuncia, sobre todo, en temas de derechos humanos y desarrollo económico.

En el Consejo de Derechos Humanos, los resultados son aún más dramáticos. Los países que han experimentado desplazamiento económico tienen una probabilidad treientas veces mayor de oponerse a una resolución apoyada por Estados Unidos, en comparación con países donde no ha ocurrido este fenómeno. Tal hallazgo adquiere especial relevancia teniendo en cuenta la importancia que Washington ha otorgado a los derechos humanos en su política exterior.

En especial, es revelador lo que ocurre en la OEA, tradicionalmente considerada un bastión de la influencia estadounidense. En países donde la economía china ha desplazado a la estadounidense, la probabilidad de votar de acuerdo con Washington disminuye de 75% a 50%, un efecto de magnitud considerable. Lo relevante es que China ni siquiera es miembro de la Organización, lo que sugiere que el desplazamiento económico otorga mayor autonomía a los países latinoamericanos respecto a Estados Unidos, independientemente de la presencia institucional china.

El desplazamiento económico reduce significativamente la alineación de países latinoamericanos con posiciones estadounidenses.

HACIA UN NUEVO ORDEN REGIONAL

¿Qué implican estos hallazgos para el futuro de las relaciones hemisféricas? Tres tendencias emergen con claridad.

Primero, la competencia entre China y Estados Unidos se centrará cada vez más en la provisión de bienes económicos. Estamos transitando de una era en la que Washington tenía un monopolio virtual sobre estos bienes en Latinoamérica, a un escenario competitivo donde Beijing ofrece alternativas viables en sectores clave.

Para Estados Unidos, esto representa un reto monumental. Mientras China puede movilizar con facilidad sus empresas estatales con propósitos estratégicos, Washington enfrenta mayores dificultades para orientar su sector privado. Como señaló la Exsubsecretaria de Estado, Roberta Jacobson: “Numerosos funcionarios gubernamentales nos dijeron que simplemente no hay interés por parte de las empresas estadounidenses, sobre todo en los países más pequeños”.

Iniciativas como la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional constituyeron intentos de competir con instrumentos como la Iniciativa de la Franja y la Ruta china, pero enfrentan limitaciones presupuestarias y restricciones operativas importantes. En 2019, el gobierno de Trump lanzó el programa América Crece, otro intento de movilizar inversión privada estadounidense hacia infraestructura latinoamericana. No obstante, como muchas iniciativas similares, su impacto ha sido limitado y su memoria institucional, efímera.

Segundo, Latinoamérica emerge como dos regiones distintas, no una: Sudamérica —donde China ha desplazado con efectividad a Estados Unidos— y México, Centroamérica y el Caribe —donde Washington mantiene mayor influencia—. Esta bifurcación tendrá profundas implicaciones para la integración regional y las dinámicas geopolíticas.

El análisis de los patrones de desplazamiento revela que, en Sudamérica, el peso económico estadounidense se redujo a la mitad, mientras que el chino creció significativamente (de casi 0% a 20% del PIB regional); por su parte, en México, Centroamérica y el Caribe, el peso económico de ambas potencias aumentó, pero el estadounidense lo hizo de forma más marcada. Esta divergencia obstaculizará la cohesión latinoamericana, al debilitar iniciativas de integración regional que ya enfrentan dificultades. Como afirmó Jorge Castañeda, Exsecretario de Relaciones Exteriores de México: “Latinoamérica se está dividiendo en dos, con diferentes socios, prioridades e intereses estratégicos”.

Tercero, la intensificación de la competencia sinoestadounidense está penetrando cada vez más en la política interna latinoamericana al reducir el espacio para estrategias de “no alineamiento activo”. Los países se verán presionados de forma progresiva para elegir bandos, una situación reminiscente de la Guerra Fría, aunque con características distintivas del siglo XXI.

Durante su participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, en 2022, el presidente chileno Gabriel Boric manifestó esta preocupación: “Como país soberano, tenemos la autonomía para tener relaciones con todos y queremos aumentar nuestras relaciones con ambos [China y Estados Unidos]”. Sin embargo, reconoció haber “recibido presiones para decir de qué lado estamos”.

Esta presión para alinearse tal vez aumentará. Estados Unidos está implementando medidas que dificultan la entrada de empresas chinas, como reglas de origen

más estrictas, cumplimiento de estándares ambientales y leyes de selección de inversiones. Conceptos como deslocalización concertada (*friend shoring*) reflejan esta creciente securitización de las relaciones económicas.

HACIA UNA NUEVA CARTOGRAFÍA DEL PODER

El desplazamiento económico de Estados Unidos por China en Latinoamérica constituye una transformación histórica cuyas implicaciones apenas se empiezan a comprender. Lejos de ser un fenómeno coyuntural, representa un realineamiento estructural de las relaciones económicas y políticas en el hemisferio.

Esto no significa que Estados Unidos haya perdido completamente su influencia en la región, o que China no enfrente desafíos significativos para consolidar su posición. Los procesos geopolíticos rara vez son lineales. Sin embargo, los datos revelan un cambio profundo en los fundamentos materiales del poder en Latinoamérica, con consecuencias de largo alcance para el orden internacional.

La comparación con momentos históricos anteriores resulta ilustrativa. En la década de 1950, Robert F. Kennedy reflexionaba con frustración sobre la política estadounidense hacia el mundo en desarrollo: “Solo tenemos lo que ha sido para ofrecer a estas personas”. Tal observación resuena con particular actualidad en el contexto latinoamericano contemporáneo.

Durante la Guerra Fría, Estados Unidos desplegó iniciativas como la Alianza para el Progreso, que, entre 1962 y 1967, proporcionó cerca de 22 300 millones en ayuda, préstamos e inversiones a Latinoamérica. Ajustado por la inflación, esto equivaldría a cerca de 32 300 millones anuales en 2022. China ha igualado esta cifra: sus inversiones, infraestructura y préstamos a Latinoamérica promediaron 33 000 millones de dólares anuales entre 2001 y 2020.

La competencia entre Beijing y Washington por ofrecer bienes económicos que satisfagan las necesidades de desarrollo en Latinoamérica definirá, en gran medida, la geopolítica regional en las próximas décadas. Para los países latinoamericanos, el desafío consistirá en navegar estas aguas turbulentas maximizando los beneficios de la competencia mientras preservan su autonomía.

En última instancia, el caso latinoamericano ofrece lecciones valiosas sobre la evolución del orden internacional en el siglo XXI. Frente a narrativas que solo enfatizan factores ideológicos o militares, mi investigación subraya una verdad fundamental: el liderazgo mundial se construye sobre cimientos económicos. Cuando estos se erosionan, es inevitable que la influencia política disminuya.

Esta realidad debería inspirar una reflexión profunda en Washington sobre los costos de su desatención económica hacia Latinoamérica. Mientras tanto, los países de la región enfrentan el reto de desarrollar una visión estratégica coherente ante el nuevo panorama geopolítico, algo que, hasta ahora, ha estado notablemente ausente en las capitales latinoamericanas. ❸

Megapuerto de Chancay

China y el nuevo mapa geoeconómico del Pacífico Sur

🇳🇵 *Pamela Aróstica Fernández*

En el primer cuarto del siglo XXI, las relaciones económicas entre China y Latinoamérica han tenido una expansión notable, impulsada por el incremento sostenido del comercio bilateral, la ejecución de inversiones estratégicas y la puesta en marcha de proyectos de infraestructura de gran escala. Estos procesos no solo han intensificado sus vínculos económicos, sino que también han contribuido a transformar las dinámicas tradicionales del sistema de intercambio mundial. En tal contexto, la conectividad marítima se erige como un elemento clave para la consolidación de los flujos comerciales transpacíficos. Así, la inauguración de una ruta marítima directa entre China y Perú mediante el megapuerto de Chancay representa un hito de gran relevancia no solo desde la perspectiva logística y del comercio internacional, sino también por el posicionamiento del Pacífico Sur en la nueva arquitectura geoeconómica y geopolítica.

El 14 de noviembre de 2024, en el marco de la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, celebrada en Lima, la presidenta peruana Dina Boluarte y su homólogo chino Xi Jinping oficializaron el inicio de la primera fase del megapuerto de Chancay. Este proyecto portuario es gestionado por COSCO Shipping Ports Chancay Perú SA, una empresa de capital mixto en la que la empresa estatal china COSCO Shipping Ports tiene 60% de participación, mientras que 40% es de Volcan Compañía Minera SAA, una empresa privada peruana. Inserto en la Iniciativa de la Franja y la Ruta —específicamente en la Ruta de la Seda Marítima del Siglo XXI—, este megapuerto se perfila como un nodo logístico fundamental para Sudamérica al facilitar la optimización del comercio transpacífico. Se estima que permitirá reducir los costos logísticos en más de 20% y acortar los tiempos de tránsito marítimo en hasta 12 días.

PAMELA ARÓSTICA FERNÁNDEZ es Directora de la Red China y América Latina: Enfoques Multidisciplinarios (REDCAEM) y del Diplomado Internacional en Relaciones de China y América Latina de la Universidad Católica del Uruguay. Es Doctora en Ciencia Política por la Freie Universität Berlin. Sus líneas de investigación se centran en geopolítica y política exterior comparada en las relaciones entre China y Latinoamérica. Sígala en X en @RedChinaALatina.

El diseño del megapuerto de Chancay se estructuró en torno a tres ejes: 1) la zona operativa portuaria, 2) el complejo de ingreso, y 3) un túnel viaducto subterráneo de aproximadamente 2 kilómetros que conecta con la autopista Panamericana. En la primera etapa, concluida en noviembre de 2024, se construyeron cuatro muelles, un complejo administrativo y servicios logísticos de última generación, con una inversión inicial de 1300 millones de dólares. Para la segunda fase, se prevé una inversión total de 3600 millones de dólares, con una finalización proyectada para 2032. Su ubicación estratégica en la costa central de Perú, a 80 kilómetros al norte de Lima, le otorga importantes ventajas logísticas, pues conecta con los principales corredores viales, lo que facilita el acceso al interior del país y a los países vecinos.

Chancay es un puerto multipropósito, ya que puede recibir graneles sólidos y líquidos, carga rodante y contenedores. Esto constituye ventajas operativas significativas para el manejo de grandes volúmenes de carga, tanto de Perú como de otras economías sudamericanas (como Argentina, Bolivia, Brasil y Chile). Además, su capacidad para recibir buques portacontenedores de gran escala lo posiciona como uno de los desarrollos portuarios más ambiciosos y modernos de la región.

PLATAFORMA LOGÍSTICA Y CLÚSTER REGIONAL

El megapuerto de Chancay establece una nueva ruta marítima directa entre China y Latinoamérica, por lo que se consolida como un componente estratégico de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Su incorporación a esta iniciativa mundial refuerza la proyección geoeconómica del gigante asiático en el hemisferio occidental al facilitar una mayor conectividad comercial con los países sudamericanos. Actualmente, China es el principal socio comercial de Sudamérica y el segundo de Latinoamérica, después de Estados Unidos. En países como Brasil, Chile, Perú y Uruguay, ocupa el primer lugar.

La moderna infraestructura del megapuerto contempla la construcción de terminales automatizadas, áreas de almacenamiento logístico y una futura conexión ferroviaria con el interior del país. Estas características permitirán una mejor integración de Perú en las cadenas mundiales de valor, al optimizar los procesos de exportación e importación. Además, se inserta en un corredor logístico regional más amplio, vinculado con otros puntos estratégicos, como los puertos de Manzanillo en México y San Antonio en Chile, lo que incrementa su alcance y relevancia en el comercio regional.

Una vez concluida la segunda fase del proyecto, contará con una capacidad operativa estimada de 3.5 millones de TEU (unidad equivalente a un contenedor estándar de veinte pies), que podría posicionarlo como el tercer puerto más grande de Latinoamérica, por detrás del puerto de Santos en Brasil y de Manzanillo en México.

Desde el punto de vista económico, tiene el potencial de dinamizar sectores estratégicos como la minería, la agroindustria y la manufactura, pues facilitará el acceso eficiente a los mercados asiáticos. Además, puede recibir buques de gran calado. Estas condiciones no solo optimizarán operaciones logísticas, sino que también generarán empleo, ingresos fiscales y una mayor competitividad para Perú.

Además, se plantea como un “puerto inteligente”, ya que incorporará tecnologías avanzadas como grúas automatizadas, vehículos autónomos eléctricos y sistemas inteligentes de control de mercancías. Estas innovaciones lo posicionan como un referente en modernización portuaria en la región, lo que amplía su atractivo para la inversión extranjera y para la relocalización de actividades industriales vinculadas al comercio exterior.

No obstante, el pleno aprovechamiento del potencial del megapuerto de Chancay dependerá de una coordinación eficaz entre los sectores público y privado, así como del desarrollo de un entorno normativo y logístico que favorezca la diversificación económica del país. La integración de sectores productivos nacionales y su articulación con redes de transporte multimodal serán esenciales para consolidarlo como un clúster logístico regional.

Desde una perspectiva geopolítica, su incorporación en la estrategia mundial de China plantea desafíos adicionales respecto a la gobernanza, la autonomía estratégica y la necesidad de asegurar una relación bilateral equilibrada y mutuamente beneficiosa. Para ello, será necesario establecer un marco de gobernanza que garantice una distribución equitativa de los beneficios y resguarde los intereses estratégicos de Perú.

La integración de sectores productivos nacionales y la articulación con redes de transporte multimodal serán esenciales para consolidar a Chancay como un clúster logístico regional.

IMPACTO DE LA RUTA DE LA SEDA MARÍTIMA DEL SIGLO XXI

La integración del megapuerto de Chancay en la Ruta de la Seda Marítima del Siglo XXI, como parte de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, constituye un elemento estratégico de la expansión comercial y logística de China en Latinoamérica. Este proyecto portuario tiene la capacidad para redistribuir mercancías hacia el Cono Sur y, así, consolidar una presencia operativa estable en la región.

Desde una perspectiva económica, generará un impacto significativo a nivel local y regional. La mejora de la conectividad logística y de la infraestructura de transporte podría facilitar la integración de diversas zonas del país en los circuitos del comercio internacional con la reducción de los costos logísticos y la optimización de los tiempos de tránsito. Esto, a su vez, impulsaría las oportunidades de exportación en sectores clave.

Se estima que, en un inicio, el megapuerto contribuya con 0.3% al PIB de Perú, pero este podría incrementarse hasta alcanzar 0.9% una vez que se consolide como un nodo logístico regional. Así pues, su impacto trasciende el ámbito comercial y también se proyecta como un motor clave para la generación de empleo, el desarrollo urbano y la promoción de la innovación tecnológica. Con base en proyecciones del gobierno peruano, se prevé la creación de 7500 empleos directos e indirectos en las distintas fases del proyecto, con un potencial mayor a largo plazo.

Para que este impacto sea equitativo y sostenible, será indispensable una coordinación efectiva entre el Estado, el sector privado y las comunidades locales. Dicha colaboración debe centrarse en garantizar la capacitación técnica de la mano de obra mediante programas especializados en logística, operación de maquinaria pesada y automatización portuaria; en mitigar los posibles impactos socioambientales, y en consolidar una administración eficiente, transparente y alineada con estándares internacionales. De forma paralela, el desarrollo del megapuerto impulsará la expansión urbana de su zona de influencia, dinamizando sectores como la construcción, el comercio, y los servicios públicos y financieros, lo que contribuirá a una transformación integral del entorno regional.

Sin embargo, también enfrenta desafíos relevantes en cuanto a integración territorial y conectividad logística. Aunque se reconoce su considerable capacidad, la infraestructura vial que lo conecta con el resto del país aún es insuficiente, lo que podría limitar la optimización de su operatividad. En tal sentido, es imprescindible el desarrollo de un marco normativo y técnico que refuerce los lazos entre el puerto, los principales corredores logísticos nacionales y los centros productivos del país. Esto garantizaría que se convierta en una plataforma efectiva para la inserción mundial de Perú, porque, además de consolidar la creciente presencia de China en Latinoamérica, posiciona al país latinoamericano como un actor estratégico crucial en las nuevas dinámicas del comercio transpacífico. Este megaproyecto constituye una oportunidad histórica para dinamizar la economía nacional, diversificar las exportaciones y mejorar la competitividad del país en un entorno geoeconómico interdependiente.

En el ámbito macroeconómico, Chancay podría incrementar la competitividad de Perú al eliminar barreras logísticas para productos de alta demanda, como cobre, zinc, litio, oro y productos agroindustriales. Esto facilitaría el acceso a los mercados asiáticos e incrementaría las exportaciones y los ingresos fiscales del país. En consecuencia, se podrían fortalecer las políticas públicas en sectores clave como educación, salud e infraestructura.

El nuevo corredor marítimo también favorece el intercambio bilateral: mientras que China incrementa sus exportaciones de manufacturas, Latinoamérica puede acceder con más rapidez al mercado asiático con productos del mar y agroindustriales frescos. Paralelamente, la diversificación de las rutas marítimas reduce la dependencia al canal de Panamá y, con ello, mitiga riesgos asociados a cuellos de botella logísticos.

En conjunto, el megapuerto y su integración a la red mundial promovida por China representan una oportunidad estructural para transformar la economía peruana y regional, aunque su éxito dependerá de una gestión equilibrada y sostenible.

CONSIDERACIONES GEOPOLÍTICAS Y ESTRATÉGICAS

El megapuerto de Chancay no solo se configura como una infraestructura de relevancia económica, sino que tiene una significativa dimensión geopolítica que trasciende las fronteras de Perú. La presencia de COSCO, una de las principales empresas chinas de logística y transporte, subraya la importancia estratégica del proyecto en el

marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Esta iniciativa, impulsada por el presidente Xi en 2013, es un ambicioso proyecto mundial que tiene por objetivo fomentar el comercio y la inversión, desarrollar infraestructura para mejorar la conectividad con los principales corredores económicos internacionales, fortalecer el papel de las empresas chinas en el extranjero, y proyectar influencia geoeconómica y geopolítica.

En este contexto, se perfila como un eslabón clave en una red integrada de puertos y centros logísticos que no solo facilitará el intercambio de productos y recursos entre China y Sudamérica, sino que también garantizará el transporte eficiente de manufacturas chinas hacia otros mercados latinoamericanos.

En la dimensión geopolítica, el megapuerto contribuye a consolidar las relaciones entre China y Perú, dos países cuyos lazos son de larga data y se han fortalecido de manera significativa. Desde 2009, Beijing es el principal socio comercial de Lima, y las relaciones bilaterales se han profundizado en diversas áreas, como comercio, inversión en infraestructura y minería. La presencia de empresas chinas en Perú —como COSCO— refleja la creciente influencia del gigante asiático en la región, sobre todo en sectores estratégicos esenciales para el crecimiento de la economía peruana.

Ahora bien, la participación de empresas chinas en el desarrollo de infraestructuras en Latinoamérica ha suscitado inquietudes. Algunos críticos de la creciente presencia de China en la región señalan que podría generar una dependencia excesiva, lo que a largo plazo podría influir en las decisiones políticas y estratégicas de los países latinoamericanos. A pesar de estas preocupaciones, los beneficios económicos y las crecientes relaciones comerciales con China son evidentes. Muchos gobiernos en la región —incluido el de Perú— perciben estas inversiones como una oportunidad para impulsar el desarrollo económico y reducir las brechas en infraestructura.

El megapuerto no se limita a ser un proyecto de infraestructura; se configura como una cuestión clave de posicionamiento geopolítico mundial. Su éxito dependerá, en gran medida, de cómo Perú logre equilibrar los beneficios económicos con los desafíos políticos derivados de la creciente influencia de China en la región. Este equilibrio requerirá una gestión estratégica, sumada a políticas claras que aseguren que los beneficios se distribuyan de manera equitativa entre la población peruana.

El megapuerto de Chancay no se limita a ser un proyecto de infraestructura; se configura como una cuestión clave de posicionamiento geopolítico mundial.

IMPACTO AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD

El megapuerto de Chancay plantea algunos debates en relación con su impacto ambiental, sobre todo debido a su magnitud y su localización en un entorno ecológicamente sensible, lo que generaría efectos colaterales sobre los ecosistemas marino y terrestre, y sobre las comunidades locales. Dadas las circunstancias, el Estudio de

Impacto Ambiental ha sido una herramienta clave para anticipar y mitigar las posibles consecuencias ecológicas y garantizar su viabilidad en esta materia.

Uno de los aspectos más críticos identificados es la afectación a la fauna marina, debido a las alteraciones en la calidad del agua, el ruido submarino generado durante las actividades portuarias, y la interrupción de hábitats y rutas migratorias. Además, las fases de construcción y operación podrían generar contaminación atmosférica y acústica, así como residuos industriales. También se prevé que el proyecto impacte debido a la expansión de las infraestructuras, lo que supondría una pérdida significativa de biodiversidad local. Para atenuar lo anterior, se han implementado diversas medidas de compensación ambiental.

En cuanto a la sostenibilidad a largo plazo, el puerto tiene potencial para incorporar tecnologías limpias y prácticas que reduzcan su huella ecológica. La integración de energías renovables y el diseño de infraestructuras eficientes en el manejo de recursos, como agua y energía, podrían contribuir a un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente. Aún así, su viabilidad ambiental dependerá de la capacidad de las instituciones locales y nacionales para darle seguimiento, adoptar medidas correctivas oportunas, al igual que buscar un equilibrio entre el crecimiento portuario y la responsabilidad ecológica.

PERSPECTIVAS

Por su capacidad para recibir buques portacontenedores de gran escala, el megapuerto se posiciona como uno de los desarrollos portuarios más ambiciosos y modernos de China en Latinoamérica, destinado a la construcción de terminales altamente automatizadas, zonas especializadas de almacenamiento y una red ferroviaria que articulará el puerto con el interior del país. Estas infraestructuras no solo consolidarán a Chancay como un nodo logístico fundamental en el comercio transpacífico, sino que también posicionarán a Perú como un actor estratégico clave dentro del escenario geoeconómico de Sudamérica.

Desde esta perspectiva, se proyecta una creciente participación de China no solo en términos de financiamiento, sino también en la operación y administración de infraestructuras portuarias en la región, lo que puede modificar de manera sustancial las dinámicas geopolíticas y comerciales en el hemisferio, dado que refuerza la influencia de China mediante la combinación de inversión en infraestructura portuaria e instrumentos de diplomacia económica, en sintonía con los objetivos de la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

No obstante, el megapuerto de Chancay enfrenta desafíos técnicos y logísticos, sobre todo en lo relativo al fortalecimiento de las conexiones viales y ferroviarias nacionales y regionales, fundamentales para garantizar un flujo eficiente de mercancías. También es desafiante el contexto económico mundial, caracterizado por la incertidumbre, la volatilidad en los precios de las materias primas y las tensiones comerciales internacionales, que marcan tiempos disruptivos y podrían influir en sus proyecciones de exportación y rentabilidad.

En cuanto al ámbito normativo, se deberá asegurar el cumplimiento estricto de las regulaciones nacionales e internacionales en materia de sostenibilidad ambiental, transparencia operativa y seguridad. La magnitud del proyecto requiere una supervisión institucional robusta, así como una planificación integral que contemple mecanismos preventivos y correctivos ante posibles riesgos.

En la dimensión social, el impacto local del proyecto también es considerable. La fase de construcción y la posterior operación del puerto generarán empleo en distintos niveles, lo que puede impulsar el crecimiento económico peruano; sin embargo, para que estos beneficios se distribuyan de manera equitativa, es fundamental implementar programas de formación técnica y profesional, a fin de integrar a la población local en las nuevas dinámicas económicas a medida que el megapuerto opere plenamente. También puede repercutir de forma positiva en el tejido productivo de pequeñas y medianas empresas vinculadas al turismo y el comercio, así como en la mejora sustancial de la infraestructura pública.

Pese a todo, dichos avances pueden acompañarse de tensiones sociales, como el desplazamiento de comunidades o la percepción de una distribución asimétrica de los beneficios económicos. En tal sentido, el diálogo constante entre el Estado, los inversionistas y la sociedad civil será crucial para garantizar la sostenibilidad social del proyecto.

Desde una perspectiva económica, el megapuerto ofrece oportunidades sustanciales para la atracción de inversión extranjera directa hacia Perú, por su potencial para consolidarse como un nodo logístico regional y mejorar la conectividad entre China y Sudamérica.

En este escenario, Chancay adquiere un papel central como infraestructura nodal en los corredores interoceánicos, tanto por su ubicación privilegiada en el Pacífico Sur como por su diseño adaptado a los estándares tecnológicos más avanzados, pero su consolidación dependerá, en gran medida, de la capacidad para gestionar de manera eficiente los desafíos sociales, ambientales y técnicos que implica una obra de esta escala.

Finalmente, el megapuerto de Chancay no solo posibilita una reducción significativa en los costos logísticos y en los tiempos de transporte, sino que también se inserta en una estrategia más amplia de China orientada a fortalecer su presencia e influencia en Latinoamérica. La consolidación de esta conexión marítima tendrá efectos determinantes en la redistribución de los flujos comerciales internacionales, reforzará la importancia del Pacífico Sur, y promoverá un reposicionamiento estratégico de los países del Cono Sur en una renovada cartografía geoeconómica mundial. 

El poder blando de la India en Latinoamérica

✉ *Girisanker S.B.*

A medida que el orden internacional se desplaza hacia la multipolaridad, la India y Latinoamérica, como dos piezas fundamentales del Sur global, encuentran puntos en común en sus historias compartidas, objetivos de desarrollo y aspiraciones a un sistema de gobernanza global más inclusivo y representativo. Las dos regiones, formadas por legados poscoloniales y tradiciones no alineadas, han defendido de manera sistemática una cooperación Sur-Sur basada en el respeto mutuo y la solidaridad.

Aunque son territorios distantes, separados por vastos océanos, ambas experimentaron un retraso en el desarrollo de lazos diplomáticos, económicos y culturales fuertes. Durante la época colonial, fueron gobernadas por sistemas imperiales distintos —el ibérico en Latinoamérica y el británico en la India—, lo que imposibilitó su relación de forma directa. Sin embargo, esta experiencia colonial compartida fomentó, más adelante, una identidad colectiva basada en luchas anticoloniales, así como ambiciones de soberanía y desarrollo.

Tras su independencia, la India y muchos países latinoamericanos adoptaron estrategias de desarrollo dirigidas por el Estado, como la industrialización por sustitución de importaciones, que restringía el comercio mundial y, en consecuencia, limitaba el compromiso bilateral. No obstante, encontraron un objetivo común en los foros internacionales, sobre todo cuando varios Estados latinoamericanos se unieron al Movimiento de Países No Alineados, mediante el cual abogaron por la colaboración Sur-Sur y las políticas exteriores no alineadas durante la Guerra Fría. Además, las visitas simbólicas de alto nivel, como el viaje del primer ministro indio Jawaharlal Nehru a México, en 1961, y la gira latinoamericana de la primera ministra Indira Gandhi, en 1968, sentaron importantes bases diplomáticas. Sin embargo, después de la Guerra Fría y tras la liberalización económica de la India en la década de 1990, la relación llegó a un punto de

GIRISANKER S.B. es profesor e investigador en el Indian Council of World Affairs (ICWA), un grupo de expertos autónomo, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores de Nueva Delhi, especializado en estudios sobre Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Su trabajo más reciente es el capítulo “Ideological Fatigue and the Rise of Non-Traditional Parties in Latin America”, publicado en *Latin America: Escaping the Trap of Ideology* (Sapru House, 2025). Es doctor en Cooperación en materia de Seguridad entre Estados Unidos y México por el Centro para el Estudio de las Américas (CSA) de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Jawaharlal Nehru (JNU).

inflexión. El país asiático empezó a considerar a Latinoamérica como un socio estratégico al reconocer complementariedades en comercio, minerales críticos, seguridad energética y gobernanza global.

En los últimos años, esta asociación ha cobrado impulso mediante compromisos sostenidos de alto nivel, como la participación del primer ministro Narendra Modi en la Cumbre de los BRICS (Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica) de 2014, en Fortaleza, la visita del presidente Ram Nath Kovind, en 2018, y la gira del Ministro de Asuntos Exteriores, S. Jaishankar, en 2022, que incluyó la inauguración de la embajada de la India en Paraguay. Estos acontecimientos han reforzado sus objetivos de ampliar las oportunidades económicas, fortalecer los lazos institucionales y reafirmarse como una voz destacada del Sur global.

Al mismo tiempo, los países latinoamericanos han tratado de diversificar sus alianzas internacionales más allá de los vínculos tradicionales con Europa y Norteamérica. La estabilidad política de la India, su rápido crecimiento económico y su creciente influencia mundial la han convertido en un socio atractivo para la región. Esta relación se mantiene en constante evolución y resulta prometedora no solo en términos económicos —ya que la demanda india de energía, minerales y materias primas complementa los puntos fuertes de Latinoamérica en materia de exportación—, sino también estratégicos, pues ambas regiones colaboran para mejorar su poder colectivo de negociación en las instituciones internacionales. Asimismo, hay muchas áreas en las cuales compartir buenas prácticas, como infraestructura digital, inclusión financiera, energías renovables, salud y ayuda humanitaria. De ahí la importancia de examinar cómo el poder blando de la India está dando forma a un nuevo capítulo en sus relaciones con Latinoamérica, al mismo tiempo que promueve las aspiraciones del Sur global.

LA HUELLA LATINOAMERICANA EN LA INDIA

Latinoamérica ocupa un lugar único en el imaginario indio, manifestado en el pensamiento político, la expresión cultural y el discurso académico. Los lazos históricos entre ambas regiones, marcados por la solidaridad revolucionaria, los intercambios literarios y las luchas compartidas contra el colonialismo y el imperialismo, resuenan de manera profunda en la India. Desde figuras emblemáticas que inspiraron movimientos políticos hasta vibrantes interacciones culturales y contribuciones intelectuales, el impacto latinoamericano en el país asiático refleja una relación polifacética que trasciende la geografía.

Líderes revolucionarios como Fidel Castro y Ernesto *el Che* Guevara todavía son símbolos poderosos para los movimientos de izquierda en la India. *El Che* Guevara, venerado por los partidos comunistas indios desde la década de 1990, es especialmente reconocido en el estado de Kerala, donde su imagen adorna muchos campus universitarios. Sus escritos sobre el socialismo, junto con su admirado retrato en *Diarios de motocicleta* (1993), han inspirado a generaciones de jóvenes indios que buscan justicia y un propósito más allá del materialismo. Cabe destacar que una delegación encabezada por *el Che* Guevara se reunió con el primer ministro indio Nehru poco después de

la Revolución cubana, lo que puso de relieve los primeros lazos entre los ideales revolucionarios indios y latinoamericanos. Del mismo modo, el liderazgo de Castro y su desafío a la dominación estadounidense lo convirtieron en un héroe para los comunistas indios y las voces antimperialistas. Sus visitas en las décadas de 1970 y 1980 —en particular, su cálido abrazo a Indira Gandhi durante la cumbre del Movimiento de Países No Alineados de 1983— son momentos icónicos que simbolizan la solidaridad. Aunado a ello, los comunistas indios han citado la vía democrática de Salvador Allende hacia el socialismo en Chile como modelo de marxismo parlamentario.

La influencia fue recíproca, de tal forma que revolucionarios indios como M.N. Roy desempeñaron papeles clave en la historia política latinoamericana. Roy, refugiado en México, ayudó a fundar el Partido Comunista Mexicano, lo que ayudó a ligar movimientos políticos e ideológicos entre continentes. Del mismo modo, Pandurang Khankhoje, un luchador por la libertad nacido en Maharashtra, contribuyó de manera significativa al desarrollo agrícola de México en la década de 1920, al tiempo que se integraba en el entorno intelectual y cultural del país. Forjó amistades con figuras emblemáticas, como la artista Frida Kahlo, e impulsó investigaciones que apoyaron la Revolución verde en el país.

El impacto latinoamericano en la India refleja una relación polifacética que trasciende la geografía.

Los intercambios culturales fortalecieron aún más este vínculo. Pablo Neruda, poeta chileno y premio Nobel de Literatura en 1971, admirado por sus exploraciones líricas en torno al amor y la revolución, es muy leído en la India y traducido a sus lenguas. Del mismo modo, Octavio

Paz, poeta y diplomático mexicano, y también Nobel de Literatura en 1990, vivió ahí una larga temporada, lo que influyó de manera profunda en su obra; su libro *Vislumbres de la India* (1995) refleja un gran compromiso con la cultura y la historia de este país. Por otra parte, los clásicos literarios y espirituales indios —como *Gitanjali* (1910) de Rabindranath Tagore, el *Bhagavad Gita* y los *Upanishads*— han sido acogidos en Latinoamérica, traducidos al español y estudiados ampliamente. Autores contemporáneos —como Arundhati Roy, Salman Rushdie y Amitav Ghosh— también gozan de popularidad, mientras que los poetas místicos Kabir y Mirabai figuran en antologías en español.

Además, Latinoamérica ha enriquecido el patrimonio mundial, y de la India en particular, con el realismo mágico, género literario del que fueron pioneros autores como Gabriel García Márquez y Jorge Luis Borges. Mezclando lo fantástico con la vida cotidiana, este integra cosmovisiones indígenas y mestizas, y ofrece una crítica poscolonial de la racionalidad occidental. Su influencia trasciende la literatura y se extiende al arte, el cine y la teoría cultural, lo que fomenta el diálogo intercultural y profundiza en la comprensión de la historia y la identidad.

Asimismo, la conexión entre ambas regiones se observa en la cultura popular. Los filmes indios en ocasiones adoptan títulos del español para atraer a un público más amplio, y algunos incluso se han rodado en Latinoamérica; por ejemplo, la película en

malayalam *CIA* (*Camarada en América*) vincula el legado comunista de Kerala con los ideales revolucionarios latinoamericanos. Por su parte, el público latinoamericano ha acogido calurosamente la cultura india en sus producciones. La telenovela brasileña *Caminho das Índias* (2009) introdujo las costumbres, la moda, los valores familiares y la estética del país asiático en millones de hogares.

De igual manera, el fútbol actúa como puente cultural con aficionados de estados como Kerala, Goa y Bengala Occidental apasionados por seguir a las estrellas brasileñas y argentinas, y por apoyar con entusiasmo a varios equipos. Durante la Copa Mundial, lideran el frenesí futbolístico al pintar casas y vehículos, así como al decorar espacios públicos con recortes y carteles con las banderas y los jugadores de Argentina y Brasil. Además, la Superliga India atrae a jugadores latinoamericanos, lo que refuerza aún más los lazos culturales y deportivos.

Por otra parte, los marcos teóricos originarios de Latinoamérica han tenido mucha influencia en el pensamiento crítico mundial, incluyendo a la India. La teoría de la dependencia y el estructuralismo expuso las desigualdades económicas arraigadas en los legados coloniales y los desequilibrios comerciales mundiales, y abogó por la diversificación económica y una menor dependencia de los países desarrollados. La teoría de los sistemas mundiales amplió este marco clasificando a los países en núcleo, semiperiferia y periferia dentro del sistema capitalista. Otros marcos más recientes —como la teoría decolonial, que cuestiona las persistentes estructuras de poder coloniales en el conocimiento y la sociedad, y la teoría del extractivismo, que critica las consecuencias sociales y medioambientales de la extracción de recursos a gran escala— también resuenan con los retos de desarrollo y el discurso poscolonial de la India.

En conjunto, estas conexiones políticas, culturales e intelectuales ilustran la profunda y constante influencia de Latinoamérica en la India, una historia compartida de resistencia imperialista que aún hoy moldea a ambas regiones.

PROYECCIONES DE PODER BLANDO DE LA INDIA

Con una civilización de más de 5000 años de historia, la India ha hecho contribuciones duraderas a la cultura mundial por medio de sus ricas tradiciones en religión, filosofía, arte, literatura y comercio. La India, cuna del hinduismo, el budismo, el jainismo y el sijismo, y hogar de diversas religiones como el islam, el cristianismo, el judaísmo y el zoroastrismo, es un ejemplo de pluralidad espiritual, mientras que su patrimonio literario —desde los *Vedas* y los *Upanishads* hasta las epopeyas del *Mahabharata* y el *Ramayana*— ha moldeado los valores culturales. En la era contemporánea, la India recurre a este vasto patrimonio como piedra angular de su poder blando, un concepto popularizado por Joseph Nye, Jr. que se centra en influir en los demás por medio de la cultura y los valores en lugar de la coerción. Arraigada con firmeza en los ideales gandhianos de no violencia, verdad y coexistencia pacífica, la política exterior india aprovecha este enfoque para construir relaciones internacionales significativas, en particular en el Sur global.

Su poder blando ha encontrado un público receptivo en Latinoamérica mediante valores compartidos, alcance espiritual y conexiones con la diáspora. Los principios de

Mahatma Gandhi, en particular la no violencia y la satyagraha, han resonado en toda la región e influido en los movimientos sociales y en los líderes que buscan la justicia por medio de la resistencia pacífica. Un ejemplo simbólico de esta admiración es la ciudad de Cuiabá, en Brasil, que honró a Gandhi al inaugurar una estatua y dedicar un parque en su nombre.

Del mismo modo, las enseñanzas de Swami Vivekananda, que hacen hincapié en el vedanta, el yoga, el universalismo y la tolerancia religiosa, han tenido gran impacto. En México, la inauguración de una estatua de Vivekananda en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo refleja su perdurable influencia en la juventud y los círculos intelectuales.

Además, sus sistemas de conocimientos tradicionales bajo el esquema del Ministerio AYUSH (ayurveda, yoga, unani, siddha y homeopatía) han configurado de manera significativa su diplomacia sanitaria mundial. La creación del Centro Mundial de Medicina Tradicional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en Jamnagar, subraya este creciente interés internacional. Latinoamérica ha sido testigo de un aumento de la popularidad del yoga y de la espiritualidad india, y muchos recurren a sus tradiciones de bienestar en busca de salud física y mental. Uno de los ejemplos más destacados es Jonas Masetti, profesor brasileño de Vedanta y discípulo de Swami Dayananda Saraswati, quien recibió el premio Padma por difundir las enseñanzas filosóficas indias mediante su Instituto Vishva Vidya.

El alcance de este poder blando se amplifica aún más mediante su vibrante diáspora, sobre todo en países como Guyana, Surinam, y Trinidad y Tobago, donde los descendientes de trabajadores temporales, conocidos como girmitiyas, han conservado las lenguas, los rituales y las costumbres indias. La reciente propuesta del primer ministro Modi de crear una amplia base de datos de girmitiyas busca reforzar estas conexiones históricas y culturales. Templos como el Templo en el Mar de Trinidad, el Templo Shri Krishna de Guyana y Arya Dewaker de Surinam sirven de centros espirituales y culturales. Incluso en países latinoamericanos con comunidades indias más pequeñas, como Argentina, Brasil y México, la expansión de organizaciones como ISKON, la Misión Ramakrishna y Brahma Kumaris pone de manifiesto el creciente interés local por su filosofía. Un notable ejemplo es la reciente instalación de una estatua de cuatro metros de Bhagawan Hanuman en el Templo Seeta Ram Radhey Shyam de Sparta, Essequibo, Guyana, que simboliza el legado vivo de la espiritualidad india en la región. Además, festivales como Diwali, Holi y Navratri no solo han ganado popularidad en varias partes de Latinoamérica, sino que en algunos casos incluso se han declarado fiestas nacionales, debido al creciente compromiso cultural y a la influencia de su diáspora.

Por otra parte, sus embajadas, junto con el Consejo Indio para las Relaciones Culturales en Latinoamérica, promueven de forma activa su rico patrimonio cultural mediante iniciativas como sesiones de yoga, proyecciones de películas y presentaciones de danza clásica, como Bharatanatyam, Kathak, Odissi y Kuchipudi, junto con la celebración de festivales como Holi, Diwali y Durga Puja. Un hito en el intercambio cultural se produjo en marzo de 2021, cuando se celebró virtualmente, durante 3 días, el primer Congreso Latinoamericano de Danza Clásica de la India —organizado

por el Centro Cultural de la India en Buenos Aires, con el apoyo de la embajada india y el Ministerio de Cultura—, que reunió a artistas y participantes de ambas regiones. A su vez, las embajadas latinoamericanas en Nueva Delhi muestran sus diversas culturas con talleres de samba, noches de tango, festivales de cine y eventos culinarios con tacos, empanadas y vinos regionales, que ofrecen al público una vívida prueba de Latinoamérica.

El compromiso de la India con la región también se extiende a los intercambios culturales y la cooperación educativa. Mediante becas, programas de formación y asociaciones académicas en campos como la tecnología de la información, la medicina y la ingeniería, estudiantes latinoamericanos tienen la posibilidad de alcanzar conocimientos avanzados y desarrollar sus capacidades, lo que estrecha las relaciones bilaterales.

Además, fomenta la investigación y el interés académico mediante instituciones como el Centro para las Américas de la Universidad Jawaharlal Nehru, el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Kerala, el Centro de Estudios Sudafricanos y Brasileños de la Universidad Musulmana Aligarh, el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Goa y el Centro de Estudios Africanos, Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad Global Jindal. Asimismo, prioriza el aprendizaje del español y del portugués como lenguas extranjeras, como demuestra el Centro de Estudios Españoles y Latinoamericanos de la universidad Jamia Millia Islamia. Por su parte, el Consejo Indio de Asuntos Mundiales (ICWA) —un grupo de expertos autónomo dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores— ha investigado con amplitud temas sobre Latinoamérica. El ICWA ha firmado memorandos de entendimiento con importantes grupos de expertos latinoamericanos y acoge con regularidad a dignatarios destacados en sus prestigiosas cátedras Sapru House, lo que incentiva la comunicación y el intercambio intelectual. Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores demuestra la importancia estratégica que le concede al mantener dos divisiones dedicadas por separado a Sudamérica y Centroamérica, lo que demuestra la prioridad de la región en la agenda de política exterior india. A su vez, en Latinoamérica, el interés se refleja en instituciones como el Centro de Estudios sobre la India Contemporánea y Asia Meridional, de la Universidad Externado de Colombia, y el Programa de Inmersión India-Brasil, de la Escuela de Administración de Empresas de São Paulo de la Fundación Getulio Vargas.

Estos sólidos vínculos interpersonales y culturales, junto con un fuerte compromiso institucional, han allanado el camino para profundizar el comercio entre ambas.

PARTICIPACIÓN EN PLATAFORMAS

La India participa en agrupaciones regionales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Comunidad del Caribe (Caricom) y el Mercado Común del Sur (Mercosur). La asociación con la CELAC, promovida en la primera Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores en Nueva Delhi, en 2012, conectó a la India con 33 países de la región. Entre las iniciativas clave establecidas en este marco se incluyen un consejo empresarial, un foro de directores generales, uno de

energía, otro científico y un grupo de expertos agrícolas. Tras las reuniones periódicas entre 2014 y 2017, el diálogo que se había interrumpido, se reanudó en 2022, con la participación de la Asamblea General de la ONU, y se centró en la recuperación económica pospandémica, el comercio, la agricultura, la energía, la salud, la producción de vacunas y la cooperación multilateral.

Respecto a la Caricom, su relación también se ha fortalecido con dos cumbres. La más reciente se llevó a cabo en noviembre de 2024, en Guyana. En la segunda, la India expresó su solidaridad con los países caribeños afectados por el huracán Beryl e hizo hincapié en la cooperación en siete áreas clave, incluidas las energías renovables y el cambio climático. Los anuncios de 2019 del primer ministro Modi, sobre una subvención de 14 millones de dólares para el desarrollo comunitario y una línea de crédito de 150 millones de dólares para proyectos de energías renovables, subrayan su compromiso con el crecimiento sostenible de la región. La India y la Caricom comparten su posición respecto a las responsabilidades comunes pero diferenciadas (CBDR), enfatizando la acción climática equitativa y el refuerzo de la solidaridad Sur-Sur. Se propuso un grupo de trabajo entre ambas para avanzar en la cooperación sobre financiamiento verde, resiliencia ante desastres, transferencia de tecnología y negociaciones climáticas. Además, la India tiene estatus de observador en la Alianza del Pacífico y un acuerdo comercial preferencial con el Mercosur, que intenta ampliar.

De igual manera, se relaciona con otros países de Latinoamérica por medio de plataformas multilaterales como la Asamblea General de la ONU y el G-20. Con Brasil, mantiene estrechas relaciones por medio de organismos multilaterales como los BRICS, BASIC (Brasil, Sudáfrica, la India y China) e IBSA (la India, Brasil y Sudáfrica). Incluso, varios países participan en iniciativas lideradas por la India, como la Alianza Solar Internacional (ISA), la Coalición para Infraestructuras Resilientes ante Desastres (CDRI), Mission LIFE y la Alianza Global de Biocombustibles, que reflejan prioridades comunes en iniciativas de desarrollo sostenible y de capacitación.

COMERCIO E INVERSIÓN

Las relaciones entre la India y Latinoamérica han evolucionado de manera significativa en la última década, marcadas por la expansión de los lazos económicos y una sólida asociación comercial. El comercio bilateral creció de 24 050 millones de dólares entre 2010 y 2011 a 48 000 millones entre 2022 y 2023, y las proyecciones sugieren que podría alcanzar los 100 000 millones en 2028. Para el país asiático, Latinoamérica es una importante fuente de recursos naturales y energía; para esta región, la India representa un mercado creciente para sus exportaciones y un socio valioso en áreas como productos farmacéuticos, defensa, tecnologías de la información, energías renovables, entre otras.

Las importaciones desde Latinoamérica incluyen petróleo crudo, cobre, oro, litio, aceites comestibles como soya y girasol, legumbres, azúcar, frutas, madera, pulpa, vino y bebidas. Por su parte, las exportaciones indias comprenden, sobre todo, productos farmacéuticos, automóviles, bienes de ingeniería, petróleo refinado y servicios de tecnologías de la información.

De hecho, la India es el quinto mayor proveedor de productos farmacéuticos a Latinoamérica, con Brasil, Perú, Chile y México como los principales mercados; empresas como Dr. Reddy's, Ranbaxy, Aurobindo, Cipla, Lupin y Glenmark desempeñan un papel destacado en este sector. Sucede lo mismo con las tecnologías de la información. Tech Mahindra, Tata Consultancy Services, Wipro y HCL han consolidado su presencia al transformar a Latinoamérica en la base para sus operaciones mundiales. Su éxito ha inspirado incluso a empresas medianas indias a tener expansiones similares. Aparte de estos sectores, las exportaciones indias incluyen productos agroquímicos, textiles y maquinaria eléctrica; en particular, los transformadores eléctricos, los componentes para generadores y motores, los equipos de telecomunicaciones y otros. Entre sus importaciones se encuentran piezas para motores eléctricos y productos de telecomunicaciones, o el oro de países como Bolivia y Perú.

En el ámbito automotriz, Latinoamérica representa alrededor de 30% de sus exportaciones mundiales de automóviles; México es el segundo mercado, seguido de Chile y Perú. A su vez, la India es el segundo proveedor de motocicletas de la región, con empresas como Hero MotoCorp, Bajaj Auto, TVS Motor, Royal Enfield, Mahindra & Mahindra, Tata Motors y Maruti Suzuki a la cabeza. La adquisición por Tata de Jaguar-Land Rover y su producción en Río de Janeiro, junto con la fabricación de tractores de Mahindra en Brasil, subrayan aún más la fuerza de la cooperación automotriz.

En el sector energético, las importaciones de petróleo crudo procedentes de Brasil, Colombia y México han aumentado de forma constante, y las principales empresas públicas y privadas, como Reliance Industries y Bharat Petroleum, desempeñan un papel fundamental en el abastecimiento y el refinado. Asimismo, la India ha invertido en infraestructuras en todo el Caribe para proyectos de desarrollo de pequeñas y medianas empresas, generación de energía, refinerías de petróleo y puertos. Las importaciones de aceites vegetales, sobre todo de soya procedente de Argentina y Brasil, también han experimentado un gran aumento.

En tanto, las energías renovables se han convertido en un pilar clave de la cooperación. Las inversiones indias en la producción de biocombustibles y etanol se complementan con esfuerzos conjuntos mediante plataformas como la ISA y la CDRI. Estas iniciativas se alinean con los objetivos de ambas regiones en materia de energía limpia y resiliencia climática.

La India también está reforzando su compromiso en materia de defensa. Ha ofrecido a Argentina equipos militares, como el avión de combate Tejas, mientras que empresas brasileñas, como Embraer, están entrando en el mercado indio por medio de asociaciones, como con Mahindra Defence, para satisfacer las necesidades de su fuerza aérea.

Otro ámbito crítico de colaboración es el de los minerales estratégicos, en particular el litio, que es esencial para la transición energética y las tecnologías limpias. El "triángulo del litio" de Latinoamérica —Argentina, Bolivia y Chile— alberga las mayores reservas del mundo, y la India exhorta a empresas como Vedanta, Adani Group y Khanij Bidesh India Limited a explorar allí oportunidades mineras. Estos esfuerzos apoyan el objetivo del país asiático de lograr cero emisiones netas de carbono para 2070, y fomentan los beneficios mutuos en el desarrollo de elementos de tierras raras vitales

para la defensa y las tecnologías verdes. Por su parte, la inversión latinoamericana también ha aumentado, sobre todo las de multilatinas —empresas multinacionales regionales— que buscan acceder al mercado indio. Uno de los ejemplos más destacados es la mexicana Cinépolis, que es hoy el mayor inversionista latinoamericano en la India.

A pesar de esta cooperación, el comercio entre ambas aún está por debajo de su potencial debido a varias barreras clave: los elevados costes logísticos, la falta de conectividad directa y la ausencia de acuerdos comerciales sólidos, barreras arancelarias, escasa conciencia empresarial, lagunas lingüísticas y marcos institucionales débiles. Sin embargo, esto se puede superar si se mejoran el acceso al mercado y la conectividad, al flexibilizar la normativa comercial y al fortalecer las asociaciones institucionales.

RELACIONES CON POTENCIAL PARA EL SUR GLOBAL

A medida que el orden internacional cambia hacia la multipolaridad, la India y Latinoamérica —dos pilares clave del Sur global— están encontrando una mayor convergencia en sus experiencias históricas, trayectorias de desarrollo y aspiraciones compartidas para un sistema de gobernanza global más inclusivo y representativo. La relación también cuenta con un inmenso potencial para el aprendizaje mutuo y el intercambio de buenas prácticas en ámbitos como el desarrollo sostenible, el bienestar social, la innovación digital y la gobernanza democrática. Este creciente alineamiento es especialmente significativo en un momento en que las instituciones internacionales se esfuerzan por abordar los complejos retos del siglo *xxi*.

En la tercera Cumbre de la Voz del Sur global, celebrada el 17 de agosto de 2024, el primer ministro Modi subrayó la importancia de la acción colectiva para hacer frente al terrorismo mundial, la brecha digital y los marcos de gobernanza obsoletos, y reafirmó el compromiso de la India de compartir su experiencia en materia de desarrollo con otros países del Sur global, sobre todo en áreas como las infraestructuras públicas digitales, la inclusión financiera, las energías renovables, la salud y la ayuda humanitaria.

Su alcance digital en Latinoamérica es muestra de este compromiso en acción. Como parte de sus esfuerzos para construir ecosistemas digitales inclusivos en todo el Sur global, el país asiático apoya de forma activa la expansión de su Interfaz Unificada de Pagos (UPI) en la región. La UPI —central para el éxito de la inclusión financiera de la India— ya ha sido adoptada por Trinidad y Tobago, con colaboraciones similares en marcha en Guyana, Jamaica, Perú y Uruguay. Estas asociaciones no solo facilitan los pagos transfronterizos, sino que también fortalecen la conectividad digital y el crecimiento económico inclusivo, lo cual refuerza la agenda de desarrollo compartida.

La India también está contribuyendo al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Latinoamérica, sobre todo en el ámbito de las energías renovables. Mediante la transferencia de tecnología, el financiamiento en condiciones favorables y las inversiones estratégicas, apoya la transición hacia la energía limpia, mientras se posiciona como un socio confiable.

La cooperación sanitaria es otro pilar. Sus programas emblemáticos, como Ayushman Bharat, han mejorado la prestación de asistencia sanitaria, el acceso a la sanidad digital y

la protección financiera de millones de personas. Sus hitos en salud pública —incluida la certificación de la OMS como país libre de tracoma y los compromisos nacionales para erradicar la tuberculosis, la lepra, la filariasis linfática, el sarampión, la rubéola y el kala azar— subrayan su liderazgo mundial en el ámbito. También aboga por un tratado sobre pandemias centrado en el acceso equitativo a las vacunas, el intercambio transparente de información y el desarrollo de capacidades, que den prioridad a las necesidades del Sur global.

Asimismo, la cooperación entre las dos regiones se estrecha cada vez más en sectores críticos como la agricultura y la biotecnología, en consonancia con las prioridades de ambas en materia de seguridad alimentaria, sostenibilidad y desarrollo rural. Por ejemplo, las iniciativas conjuntas de investigación entre Argentina y la India, junto con las colaboraciones con Brasil en la mejora de la productividad lechera y ganadera mediante razas indias adaptadas a climas tropicales, ponen de manifiesto el valor del intercambio de conocimientos Sur-Sur en el ámbito de la agrotecnología.

En cuanto al espacio, la Organización India de Investigación Espacial se ha convertido en el socio preferido de los países latinoamericanos que buscan tecnologías asequibles y fiables. Las principales colaboraciones incluyen el satélite Amazonia-1 de Brasil, los programas de desarrollo de satélites de Argentina, la misión SUCIAI-1 de Chile, el FACSAT-1 de Colombia y los satélites de vigilancia medioambiental de México, lo que demuestra el compromiso indio con el desarrollo de capacidades y el avance tecnológico en la región.

En el sector nuclear, la cooperación de la India en Latinoamérica, en particular con Argentina y Perú, refleja el creciente énfasis en las aplicaciones pacíficas y de desarrollo de tecnología nuclear. Aunque la producción de esta energía aún es limitada —restringida a Argentina, Brasil y México—, cada vez se presta más atención a usos no energéticos como la agricultura, la salud, la gestión de los recursos hídricos y la vigilancia medioambiental. La experiencia india en seguridad de reactores, tecnología de la radiación y creación de capacidad institucional complementa el interés de Latinoamérica por aprovechar la ciencia nuclear para el desarrollo sostenible.

El papel de la India como socio fiable y empático se destaca por su compromiso con el apoyo humanitario y diplomático. Durante la pandemia de covid-19, Nueva Delhi proporcionó vacunas y suministros médicos para contribuir a los esfuerzos de recuperación. También ha ampliado las líneas de crédito a varios países caribeños para apoyar a la reconstrucción tras los desastres y reforzar las infraestructuras. Además, ha contribuido a la resiliencia ante los desastres y a las iniciativas de adaptación climática, al tiempo que ha ofrecido asistencia para el mantenimiento de la paz y ayuda humanitaria a países como Haití. En el frente diplomático, demostró su solidaridad apoyando una resolución cubana en la ONU para poner fin a las antiguas sanciones económicas estadounidenses,

Con una intención estratégica cada vez mayor, la relación entre la India y Latinoamérica se está convirtiendo en un modelo de cooperación Sur-Sur significativo.

y respaldó las negociaciones internacionales sobre la disputa entre Argentina y el Reino Unido respecto a las islas Malvinas.

Asimismo, la capacitación aún es un aspecto central del compromiso institucional. Por medio de programas de formación sobre gobernabilidad, justicia y seguridad interna, la India apoya a los países latinoamericanos en el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Los programas dirigidos por instituciones como la Academia Nacional de Policía Sardar Vallabhbhai Patel, la Academia Judicial Nacional y la iniciativa ITEC extienden su experiencia a funcionarios de la región. En particular, la Universidad Rashtriya Raksha ha colaborado con México en la lucha contra el terrorismo y la formación en seguridad interior, lo que pone de relieve el creciente interés por la cooperación estratégica.

La India y varios países latinoamericanos abogan por un orden internacional justo y orientado al desarrollo desde los foros multilaterales. Su apoyo conjunto al principio de las CBDR refuerza sus demandas de acción climática y el llamado a un financiamiento climático significativo, al desarrollo de capacidades y a la transferencia de tecnología por parte de los países desarrollados.

Con una intención estratégica cada vez mayor, la relación entre la India y Latinoamérica se está convirtiendo en un modelo de cooperación Sur-Sur significativo. Al profundizar el compromiso en las dimensiones digital, económica, científica y política, ambas regiones están bien posicionadas para dar forma a un orden internacional más equitativo, inclusivo y multipolar.

CONCLUSIÓN

La creciente asociación de la India con Latinoamérica supone un paso determinante hacia el fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur y la construcción de un orden internacional más equilibrado e inclusivo. Con base en sus valores civilizatorios y democráticos, el poder blando se ha convertido en un elemento central de este acercamiento, que se manifestó por medio de la diplomacia cultural, los intercambios educativos, la formación técnica y la cooperación al desarrollo.

Estos vínculos interpersonales sostenidos, con el apoyo de la colaboración institucional, han facilitado la profundización del comercio y la integración económica. Los esfuerzos del país asiático por compartir su experiencia en infraestructuras públicas digitales, inclusión financiera, energías renovables, salud y resiliencia climática han consolidado aún más su credibilidad como socio responsable y confiable en el crecimiento sostenible. Iniciativas como la diplomacia de las vacunas, o las contribuciones al apoyo en caso de catástrofe y al mantenimiento de la paz, destacan su papel de socio receptivo y empático.

Aprovechando los valores compartidos de la historia colonial y las aspiraciones de desarrollo, la India y Latinoamérica pueden impulsar el crecimiento económico inclusivo mediante el intercambio de buenas prácticas, reforzar la cooperación Sur-Sur y, por tanto, dar forma a una arquitectura de gobernanza global inclusiva que sea más justa y representativa de los intereses de los países en desarrollo. 🌐

Asimetrías e interdependencia

Nuevas propuestas para la relación entre Estados Unidos y México

🇺🇸 *Alan Bersin y Diego Marroquín Bitar*

De ser adversarios en el siglo XIX a vecinos distantes durante gran parte del siglo XX, la relación entre Estados Unidos y México ha evolucionado en las últimas 3 décadas hasta convertirse en una sociedad estratégica. A lo largo de su historia, dicha relación ha estado marcada por una profunda interdependencia, pero también por fuertes asimetrías. Hoy, 2 siglos después, estos mismos factores pueden impulsar un cambio estructural.

Por segundo año consecutivo, México se ha consolidado como el principal socio comercial de Estados Unidos, con un intercambio que supera los 1.8 millones de dólares por minuto; 30% más que China e incluso más que Canadá. En 2024, ningún otro país le vendió más productos de tecnología avanzada ni compró más frutas y productos agrícolas estadounidenses. Además, de cada peso de inversión extranjera en México, 40 centavos provienen de su vecino del norte, y más de 82% de sus exportaciones tienen como destino ese país. Hoy, México es el primer, segundo o tercer destino de exportaciones para 31 estados de Estados Unidos. De ahí que cualquier arancel impuesto por el presidente Donald Trump ponga en riesgo los vínculos económicos y de inversión construidos en los últimos 30 años.

Independientemente de quién ocupe la Casa Blanca, las industrias estratégicas de Estados Unidos no pueden competir contra China y la Unión Europea en sectores clave —como semiconductores, paneles solares y vehículos eléctricos— sin la base industrial, la mano de obra y los recursos naturales de México. De igual manera, la crisis del consumo de drogas y sus principales desafíos de seguridad no pueden resolverse sin la cooperación activa del gobierno y la sociedad civil mexicanos.

Históricamente, la balanza de poder en esta relación bilateral ha favorecido a Washington; sin embargo, la coyuntura actual ofrece a México una oportunidad para

ALAN BERSIN es Presidente Ejecutivo de Altana Technologies e investigador principal en el Centro Belfer para la Ciencia y Asuntos Internacionales de la Kennedy School of Government de la Harvard University. Sígalos en X en @AlanBersin. **DIEGO MARROQUÍN BITAR** es catedrático para Norteamérica del Woodrow Wilson Center. Sígalos en X en @DiegoTMEC. El autor dedica este artículo a la memoria de Héctor Bitar Haddad, su mentor y más grande amigo.

redefinir la dinámica. Incluso frente a un Presidente estadounidense que recurre a la coerción y las amenazas para influir en las políticas de socios y aliados, México puede asumir un papel proactivo y replantear a su favor aspectos clave de la relación bilateral.

Dicho de otra manera, para hacer frente a retos históricos que ambos países han discutido por años, pero nunca han abordado de forma integral y efectiva, México debería tomar la iniciativa y poner “grandes ideas” sobre la mesa de negociación en lo que respecta a seguridad, narcóticos, migración y comercio, en lugar de evitar los aranceles a toda costa. Para México, el clima actual de amenazas arancelarias y negociaciones ofrece una oportunidad histórica de poner su casa en orden. Al abordar de forma proactiva cuestiones como el crimen organizado, la inseguridad ciudadana, la migración y la integridad comercial —como pretende hacerlo con la desigualdad de género—, la presidenta Claudia Sheinbaum puede dejar su huella de manera indeleble en la “cuarta transformación” del país iniciada por su predecesor.

DE LA REACCIÓN A LA PROPUESTA

Cuando Trump amenazó por primera vez con disolver el Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1994, muchos anticiparon un desastre económico de consecuencias nunca previstas, pero el resultado fue la modernización del acuerdo en 2020, ahora conocido como Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Desde su implementación, el comercio regional de bienes y servicios ha superado los 2 billones de dólares anuales, lo que ha fortalecido la integración económica de Norteamérica. Durante la pandemia de covid-19, las cadenas de valor regionales demostraron ser de las más resilientes en el mundo.

Por segundo año consecutivo, México es el principal proveedor de Estados Unidos y su principal mercado de exportaciones; es decir, ninguna otra relación bilateral impacta más vidas en Estados Unidos que sus vínculos con México, y viceversa. De la mano de Canadá, las tres economías representan una tercera parte del PIB mundial, un peso económico 50% superior al de China, casi 60% más grande que el de toda la Unión Europea y once veces mayor al de agrupaciones como el Mercado Común del Sur, conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Recientemente, las amenazas de Trump de imponer aranceles a Canadá y a México provocaron negociaciones que culminaron en múltiples prórrogas, a excepción de sectores clave para Estados Unidos como el acero, el aluminio y la industria automotriz. En el caso de México, el despliegue de 10 000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera ayudó a postergar su imposición. Muchos analistas consideraron las amenazas como una especie de teatro político que México podía sortear exitosamente con gestos también simbólicos, pero superficiales. No obstante, como la historia lo demuestra, tal estrategia sería un error: no solo es una apuesta riesgosa, sino también una oportunidad desaprovechada para lograr avances sustanciales.

En marzo de 2025 se confirmó lo anticipado. Trump cumplió su promesa e impuso aranceles de 25% a los productos canadienses y mexicanos, a pesar de que ambos

países habían logrado importantes avances en materia de seguridad fronteriza, migración ilegal y tráfico de fentanilo. Sin embargo, tras una fuerte reacción de la bolsa, bajo la presión del cabildeo automotriz y del campo estadounidense, y ante las inminentes consecuencias inflacionarias de los aranceles, Trump pospuso la entrada en vigor de los aranceles, pero la amenaza sigue latente.

Cabe destacar que estos continúan aplicándose a los bienes que no cumplen con las reglas de origen y las certificaciones del T-MEC. Hoy, solo 50% de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos cumplen con tales requisitos. Aun así, el daño a la certeza jurídica y económica de la región ya está hecho. En un mundo donde los tratos de Trump importan más que las alianzas estratégicas, surgen tres consideraciones.

En primer lugar, los aranceles son más que una simple moneda de cambio o una herramienta de extracción de concesiones. En el corto plazo, socavan el potencial de Norteamérica para atraer inversión extranjera que fomente la deslocalización cercana (*nearshoring*) de cadenas de producción; en el largo plazo, parecen estar diseñados para alejar la inversión manufacturera tanto de México como de Canadá.

En segundo, si los aranceles se mantienen por varias semanas, podrían destruir la credibilidad y la utilidad del T-MEC al debilitar la capacidad de Estados Unidos para competir e innovar a nivel mundial.

En tercero, los aranceles no acabarán con el comercio regional tal como se conoce, pero la trayectoria de integración comercial experimentará turbulencias. Después de 40 años de cooperación económica, es demasiado tarde (y demasiado costoso) desmantelar las cadenas de suministro y de valor. Sobra decir que los aranceles tendrán un impacto significativo en la estructura económica de Norteamérica con consecuencias reales e inmediatas tanto para las empresas transnacionales como para las familias y los consumidores de los tres países.

En lugar de limitarse a reaccionar y a desactivar amenazas arancelarias, México tiene la posibilidad de asumir la iniciativa y proponer soluciones estructurales en tres áreas clave: seguridad, migración y comercio.

*En lugar de limitarse
a reaccionar y a desactivar
amenazas arancelarias,
México tiene la posibilidad
de asumir la iniciativa
y proponer soluciones
estructurales.*

SEGURIDAD: FENTANILO, ARMAS Y CRIMEN ORGANIZADO

Desde 2010, el fentanilo, la heroína y los opioides de prescripción (medicamentos para el dolor) han causado más de 575 000 muertes en Estados Unidos, una cifra superior a las bajas estadounidenses en ambas guerras mundiales combinadas. Aunque se percibe como un problema interno, esta crisis ha fortalecido a los cárteles en México, por lo que se han agravado los problemas de corrupción y de impunidad.

Ambos deben abordar esta crisis de manera conjunta. México podría unirse a Estados Unidos en la designación de los cárteles como organizaciones terroristas, pero estableciendo garantías claras que eviten una intervención estadounidense en suelo mexicano y minimicen el impacto económico de tal designación. Esto permitiría aplicar sanciones más severas, enjuiciar de manera eficaz a miembros y a facilitadores de los cárteles, mejorar el control del lavado de dinero y compensar a las víctimas. Otorgar un “perdón generalizado”, al estilo Trump, en ambas jurisdicciones para todos los actores (desde pequeñas y medianas empresas hasta negocios familiares que son extorsionados y que, según la designación terrorista, también serían afectados por esta), excepto los miembros de los cárteles, hasta la fecha de la declaración, podría hacer que la medida sea políticamente factible. Además, Estados Unidos y México deberían colaborar para bloquear la entrada de precursores químicos utilizados en la producción de fentanilo, provenientes de China y otras partes de Asia. La reactivación de la cooperación en inteligencia y las operaciones entre agencias de seguridad de ambos países será clave. De igual forma, la cooperación contra las importaciones de precursores quizá liberaría cientos de millones de pesos en aranceles no recaudados debido a la clasificación incorrecta de mercancías chinas.

Por último, México debe impulsar un plan escalonado para escanear 100% de los vehículos que cruzan la frontera en ambas direcciones mediante tecnología no intrusiva. Esta medida mejoraría la detección de cargamentos de drogas hacia el norte, así como las cerca de 120 000 armas automáticas de alto calibre que cada año ingresan de forma ilegal a México para abastecer al crimen organizado. Comenzando con el tráfico comercial, el programa podría expandirse de manera gradual a vehículos privados. Además, para manejar la relación comercial más grande del mundo, la implementación de una gestión fronteriza conjunta permitiría la adaptación de “carriles reversibles” a fin de optimizar el flujo vehicular durante los momentos de mayor tráfico, con lo que se duplicaría la capacidad de la infraestructura fronteriza de la noche a la mañana, sin demoras excesivas y a un costo mínimo.

MIGRACIÓN: EL PAPEL DE MÉXICO COMO PAÍS DE TRÁNSITO

Es crucial que ambos países prioricen la frontera como una región segura, ordenada y próspera que facilite la creación y el desarrollo de empresas, que garantice la movilidad laboral y familiar, y que consolide la plataforma de producción y de comercio transfronteriza ya existente. Además, una frontera próspera debe estar libre del control del crimen organizado.

La reciente disminución en los cruces fronterizos ilegales se debe, en gran parte, al endurecimiento del control migratorio por parte de México. Al asumir este costo, ha ganado influencia para exigir que los residentes mexicanos de larga estancia en Estados Unidos —incluidos los beneficiarios del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia— no resulten afectados por políticas de deportación masiva, y para ampliar vías de residencia legal para trabajadores migrantes.

Más allá del control migratorio inmediato, México debe adoptar una estrategia de largo plazo que reconozca su papel como país de tránsito y de destino migratorio. La modernización de la frontera sur con Belice y Guatemala, postergada por décadas, debe convertirse en una prioridad. Un plan de infraestructura fronteriza binacional, con inversión mexicana en su territorio y apoyo estadounidense en dichos países, permitiría una gestión migratoria más eficaz.

Es tiempo de volverlo realidad y, al hacerlo, proclamar públicamente y dotar de los recursos adecuados a la sociedad Estados Unidos-México en materia de gestión migratoria. Aunque no se reconozca oficialmente, de una u otra forma, esta colaboración ha existido de manera operativa durante casi 3 décadas. Un enfoque con financiamiento robusto y transparencia, mejoraría la estabilidad regional y solidificaría la posición de México como líder mundial en la gobernanza migratoria.

Además, el gobierno mexicano podría proponer la construcción de un gasoducto desde Estados Unidos hasta Centroamérica, con lo que se beneficiaría a productores de gas estadounidenses, para reducir costos energéticos en México y fomentar el desarrollo económico en el Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras). Esto mitigaría la migración forzada y reduciría tensiones en la relación energética entre los dos países.

Por último, México debería abogar por la expansión de acuerdos bilaterales de movilidad laboral. Ampliar y agilizar las vías para visas de trabajo temporal en Estados Unidos (H-1B, H-2A, TN), al igual que otorgar visas para nómadas digitales estadounidenses en suelo mexicano, reduciría los incentivos para la migración irregular y beneficiaría a ambas economías.

COMERCIO: ALEGATOS DEL ACCESO CHINO A NORTEAMÉRICA

Una de las principales preocupaciones detrás de las amenazas arancelarias de Trump es la presencia china en las cadenas de valor de Norteamérica. Aunque no hay evidencia concluyente, voces en Washington —e incluso en Ottawa— han impulsado una narrativa sobre el uso de México como un trampolín para evadir los aranceles y las restricciones a las importaciones impuestos por Estados Unidos. Los dos países tienen un fuerte interés en monitorear la veracidad de estas afirmaciones, cerrar cualquier vacío legal que lo permita, así como garantizar que las tecnologías y los productos importados en ambos cumplan con los estándares de seguridad y de cumplimiento de Norteamérica.

Para disipar dudas y evitar presiones arancelarias, deberían implementar inspecciones conjuntas de bienes chinos que ingresen a México con destino final a Estados Unidos, así como un monitoreo más riguroso de las inversiones de empresas chinas en el país. Esto garantizaría el cumplimiento del T-MEC y cerraría la puerta a prácticas de evasión fiscal y comercial. Las bases para este enfoque ya se sentaron con el Memorando de Entendimiento firmado en diciembre de 2023 para monitorear de forma bilateral la inversión extranjera en infraestructura crítica, telecomunicaciones y datos sensibles.

*Con o sin aranceles,
los riesgos de redoblar
la apuesta por la
cooperación son altos, pero
los beneficios lo son aún más.*

Una aplicación más rigurosa de las normas comerciales en esta línea también podría abrir la puerta a una expansión significativa de los programas de preliberación aduanera para operadores confiables. De forma paralela, México podría negociar un

esquema en el que oficiales aduaneros estadounidenses preautoricen mercancías directamente en fábricas y centros de carga en el país, lo que agilizaría el comercio transfronterizo sin comprometer la seguridad.

Lejos de ser un instrumento de política temporal, los aranceles aún serán una pieza central de la estrategia comercial de Estados Unidos, ya sea como fuente de ingresos, como herramienta para impulsar la manufactura, o como palanca

para entrelazar los temas comerciales y de seguridad. Si bien México podría utilizar su acercamiento a China como ficha de negociación, sus vínculos estructurales y económicos con Estados Unidos hacen que un giro estratégico sea poco viable. La reciente decisión de México de imponer aranceles a productos chinos, en sintonía con las medidas estadounidenses, envía un mensaje contundente, en línea con el enfoque adoptado por el presidente Trump en su manejo de la relación comercial con el gigante asiático.

TRANSFORMAR LA NEGOCIACIÓN EN UNA OPORTUNIDAD

Más que tratar las negociaciones impulsadas por Trump como una necesidad incómoda, México, en función de su interés nacional, debería aprovechar este momento para redefinir su relación con Estados Unidos como un auténtico socio en materia de seguridad y economía. Impulsar propuestas ambiciosas no solo fortalecería su seguridad nacional y su crecimiento económico, sino que también demostraría al gobierno de Trump el valor estratégico de la colaboración por encima de la confrontación y las amenazas con su principal socio comercial.

En su momento, Porfirio Díaz lamentó con amargura: “Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”. Durante décadas, el país ha navegado esta cercanía con cautela, al reaccionar ante los vaivenes de la política estadounidense en lugar de influir sobre ellos. Hoy, la historia ofrece una oportunidad única para cambiar esta situación. Desde sus inicios, México ha asumido un papel reactivo en la relación bilateral, que responde a la agenda de Washington; sin embargo, el contexto actual le ofrece una oportunidad única para posicionarse como un socio propositivo, capaz de liderar una agenda bilateral más equitativa y ambiciosa. Aprovechar este momento dependerá de su capacidad para transformar la coyuntura en una estrategia sostenible que fortalezca su papel en Norteamérica.

Con o sin aranceles, los riesgos de redoblar la apuesta por la cooperación son altos, pero los beneficios lo son aún más. Después de 2 siglos, es turno de México para liderar. **N**

Carney y los nuevos desafíos de Canadá

¿La persona indicada en el momento correcto?

🇳🇦 *Athanasios Hristoulas*

Los canadienses consideran que su país enfrenta múltiples amenazas que atentan contra su existencia, pues Canadá se ve amagado por Donald Trump en el sur y por Rusia en el Ártico. Esa fue la narrativa de campaña que le dio a Mark Carney la victoria en las elecciones parlamentarias celebradas a finales de abril de 2025, y refleja el tema central de la jornada electoral canadiense. En primer lugar, hizo hincapié en la amenaza de los aranceles del Presidente estadounidense al argumentar que la Casa Blanca intentaba “romper nuestra economía para anexarnos”. En segundo, aseguró que la creciente presencia militar de Rusia en el Ártico amenaza de forma directa la soberanía del país.

Las provocaciones de Trump han sido un golpe especialmente doloroso para los canadienses en comparación con el resto de la comunidad internacional, incluidos China y México, que también han sido objetivos constantes de sus hostilidades. Discutir sobre Canadá como el estado 51 de Estados Unidos, referirse al exprimer ministro Justin Trudeau como “gobernador”, traicionar una alianza política-económica tan importante, así como menoscabar los lazos culturales y personales de más de 200 años, han provocado una reacción emocional en la población. Esta deslealtad desencadenó un nacionalismo nunca antes visto, incluso en territorios históricamente separatistas —como Quebec—, así como el movimiento “compra solo canadiense”, mediante el cual, por propia voluntad, los comerciantes han etiquetado los productos hechos en su país para que el consumidor, que ya no quiere comprar artículos estadounidenses, los identifique con facilidad.

Este es el clima político que Carney explotó durante su campaña. Su perfil de economista, su doctorado por la Universidad de Oxford, al igual que sus más de 30 años

ATHANASIOS HRISTOULAS es experto en Seguridad y Cooperación en Norteamérica. Es doctor en Ciencia Política por la McGill University y profesor en el Departamento Académico de Estudios Internacionales del ITAM. Sígalo en X en @saki_itam.

de experiencia en el sector financiero privado y público en puestos como Gobernador de los bancos centrales de Canadá y del Reino Unido, hacen que se le perciba como “la persona indicada en el momento correcto”. No se le considera un político, sino un administrador que guiará la economía y las negociaciones con Estados Unidos en los próximos años. Eso es lo que vendió en la campaña electoral, y es lo que la gente cree y espera.

Hasta principios de 2025, el candidato del Partido Conservador de Canadá, Pierre Poilievre, era, por mucho, el favorito para ganar las elecciones, pues representaba los valores que contrarrestarían el caos de los últimos 2 años del gobierno liberal de Trudeau. Al iniciar el año, anunció que se retiraba como Primer Ministro ante las intensas tensiones al interior de su partido, el cual elegiría a su remplazo. En ese momento se fortaleció la campaña conservadora, que se centraba en temas como el aumento del crimen en Canadá, los impuestos de carbono, la migración y la inflación. Sin embargo, ante la declaración de Trump sobre la imposición de aranceles unilaterales, casi simultánea a la crisis de Trudeau y del Partido Liberal de Canadá, Poilievre expuso su incapacidad para adaptarse a la nueva agenda y mantuvo la retórica original de su campaña. En cambio, Carney, representando a los liberales, emergió como el héroe que Canadá necesitaba y condujo a un partido en crisis hacia la victoria.

Carney, con el Partido Liberal, necesitaba ganar 171 de los 343 escaños disponibles en el Parlamento para tener un gobierno mayoritario. Cada asiento corresponde a un distrito federal geográfico que representa a cerca de 100 000 habitantes. Los líderes de los partidos ganan solo su distrito —en el caso de Carney, el de Ottawa—, no la elección en general. Es el partido, con la suma de asientos, el que gana o pierde la mayoría de los distritos.

En este caso ganaron 170 escaños, por lo que, técnicamente, Carney logró un gobierno minoritario. Al ser un sistema parlamentario, requiere un voto de algún otro partido para aprobar cualquier ley. En otras palabras, es un gobierno minoritario, pero fuerte. Los últimos dos gobiernos de Trudeau fueron de minorías débiles, así que se vio obligado a formar una alianza parlamentaria con otro partido, el Nuevo Partido Democrático (NPD), que lo obligó a adoptar varias de sus políticas. Esto generó un gobierno caótico, y la aprobación de nuevas leyes se convirtió en un proceso largo e ineficiente. Carney no enfrenta esta situación y, dada la coyuntura del país, será fácil para su gobierno conseguir el único voto faltante.

El riesgo político en gobiernos minoritarios es que no consigan los votos necesarios y, en consecuencia, colapse el gobierno, lo que provoca una nueva elección. Lo último que los canadienses quieren ahora es otro proceso electoral; por ende, ningún otro partido tiene interés en colapsar el gobierno actual. Por ahora, la prioridad para los canadienses es la lucha contra la política económica de Trump, así que los conflictos políticos interparlamentarios son irrelevantes.

Además, es importante subrayar que el NPD, el antiguo aliado de Trudeau, quedó hundido en las últimas elecciones: perdió dos tercios de la representación que tenía e incluso su líder se quedó sin su escaño, lo que ocasionó su renuncia; por tanto, necesitan de manera imperante una reorganización completa con un nuevo líder. Aunque

en la historia han sido una enorme amenaza, lo último que el partido quiere en este momento es una nueva elección. No están en posición de amenazar a Carney.

Algo parecido ocurrió con el Partido Conservador, pues, aunque quedó en segundo lugar con 143 asientos parlamentarios, Poilievre perdió el suyo y dejó al partido sin liderazgo y en desorden. De igual manera, es poco probable que sean una amenaza para el mandato técnicamente minoritario de Carney.

LA POLÍTICA EXTERIOR ECONÓMICA COMO PRIORIDAD

Días después de las elecciones, el 6 de mayo de 2025, Carney visitó la Casa Blanca. El temor de que saliera de la reunión con una mala imagen, como sucedió con los encuentros de Trump con algunos líderes de otros países, era latente. Por ejemplo, el mandatario ucraniano Volodimir Zelenski fue confrontado con total brutalidad por el Presidente y el Vicepresidente de Estados Unidos, e incluso por los reporteros. Por otro lado, el Primer Ministro británico, Keir Starmer, mostró una sumisión total ante Trump, lo que ha dañado de forma severa su credibilidad en su país y ante la comunidad internacional. Los canadienses esperaban un penoso encuentro; sin embargo, la reunión superó toda expectativa del gobierno y de la prensa canadienses, así como del estadounidense. El consenso fue que, de manera serena, pero firme, Carney defendió la posición y los intereses de Canadá frente a Trump.

La controversia alrededor del “estado 51” surgió en las discusiones frente a la prensa. Trump reiteró que, desde su experiencia en bienes raíces, Canadá es una propiedad que quiere adquirir, y considera que dicha transacción sería de utilidad para ambos países; no obstante, para sorpresa de muchos, también resaltó que “se necesitan dos para bailar un tango” al sugerir que la cuestión requería negociaciones. Carney afirmó que la posición de los “dueños de Canadá” —es decir, de los canadienses— es que el país no está en venta. Literalmente, dijo frente a Trump que hay muchas propiedades, como la Casa Blanca y el Palacio de Buckingham, que no están ni estarán nunca a la venta. A Trump no le quedó más remedio que asentir.

En otra entrevista en Washington, DC, Carney argumentó que la discusión en la Casa Blanca fue solo el comienzo de un proceso para redefinir las relaciones entre Canadá y Estados Unidos, y que su gobierno estaba en discusiones con nuevos socios políticos-económicos. Este mensaje se diseñó para enfatizar que Canadá está priorizando la diversificación de sus relaciones, con lo que se minimizan no solo las políticas de Trump, sino también la importancia de Estados Unidos como su principal aliado.

Por tanto, es evidente que el gobierno de Carney se concentrará, sobre todo, en la política exterior y dejará la política interna en segundo plano. La prioridad de su gobierno es renegociar la relación bilateral entre Canadá y Estados Unidos en términos económicos, pero también políticos y de cooperación en materia de seguridad. Carney ha dicho que se debe hacer un pensamiento holístico de la relación bilateral por la ruptura de la relación tradicional que tardó 200 años en construirse.

Esta retórica de Ottawa, diseñada para enviar una señal a la Casa Blanca, deja en claro que Canadá no se quedará de brazos cruzados. Gran parte de la estrategia para

demostrar esta posición será expandir las relaciones económicas hacia la región europea, cuyos líderes han sido muy receptivos a la idea. Desde hace tiempo, Canadá y Europa tienen un tratado de libre comercio, pero nunca se ha tomado en consideración a mayor escala, como se pretende hacer ahora. Canadá es, en esencia, un exportador de materia prima, como petróleo, minería, maderas, pesca, entre otros. La estrategia es que el país se convierta en la principal fuente de estos productos de Europa. Por ejemplo, dado que los gobiernos europeos están en proceso de cortar los lazos petroleros con Rusia ante la invasión de Ucrania, han considerado de manera positiva este nuevo papel canadiense. Incluso, algunos analistas han mencionado la posibilidad de una eventual alianza aduanera entre Canadá y la Unión Europea.

En tal sentido, la Cumbre del G-7, celebrada en Alberta a mediados de junio de 2025, fue relevante para Carney por varias razones. Estas reuniones congregan a las economías más grandes del mundo, por lo que el clima político-económico previo es caótico, con los líderes en distintas posiciones, sobre todo ahora ante las políticas de

De manera serena, pero firme, Carney defendió la posición y los intereses de Canadá frente a Trump.

Trump. Y, aunque la falta de coordinación no es algo nuevo, hoy es particularmente notable. Justo por esta razón existen las cumbres del G-7: para intentar alinear las políticas económicas de los países más importantes.

En estas reuniones se espera que el país sede lidere negociaciones y defina la agenda. Con Canadá como sede, fue una oportunidad para que Carney mostrara liderazgo ante las mayo-

res economías y tomara las riendas, junto con los otros seis países, de las acciones por emprender ante los aranceles impuestos por Trump.

La segunda prioridad del gobierno de Carney, con un enfoque interno, es eliminar las barreras comerciales interprovinciales. El tema puede parecer paradójico, pero el sistema político canadiense, que es una federación en estricto sentido, les otorga mucho poder a las provincias, sobre todo en cuestiones económicas. Desde la Confederación en 1867, han mantenido barreras comerciales entre ellas, lo que provoca, por ejemplo, que sea más complicado para Columbia Británica exportar vino a Ontario que a Oregón. De hecho, las otras provincias tienen aranceles en contra de la exportación de vino de Columbia Británica todavía más altos que los que aplica Estados Unidos. Se estima que dichas barreras comerciales son responsables de la disminución de entre 1% y 2% anual en el índice de crecimiento del país. Su eliminación es un propósito ambicioso, pues requiere un cambio a la Constitución canadiense, y este proceso no involucra al Parlamento federal en Ottawa, sino que exige que 75% de los parlamentos provinciales como mínimo estén de acuerdo.

La tercera prioridad del nuevo Primer Ministro es un ambicioso proyecto que delinea un corredor energético transcanadiense, cuyo objetivo es conectar el petróleo del oeste —sobre todo de Alberta— con los productores de energía hidroeléctrica en el este —de Ontario y de Quebec—. La mayoría de la distribución de energía producida en Canadá, ya sea petrolera o eléctrica, está dirigida a Estados Unidos, con un

pequeño porcentaje de exportación de petróleo a Asia a través de Columbia Británica. Se pretende reorientar su producción y distribución para el consumidor interno, y no solo para Estados Unidos.

Esta orientación norte-sur, en vez de este-oeste, que domina el sector energético está presente en la mayoría de las transacciones económicas, políticas e incluso culturales en Canadá. En materia económica, el sector energético es solo un caso; otro es el automotriz. En el ámbito político, por ejemplo, los gobiernos de las provincias de Ontario y Quebec tienen más lazos con los estados del noroeste de Estados Unidos que con otras provincias canadienses, como Alberta y Manitoba.

La cuarta prioridad de Carney es la inversión y la modernización de la capacidad militar canadiense. Ante las constantes insistencias del gobierno de Estados Unidos, e incluso de algunos gobiernos europeos, Canadá está bajo mucha presión para incrementar su contribución a la defensa colectiva de Occidente. Es uno de los países con menor contribución per cápita a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), y ha sido el único sin un plan definido para llegar a la acordada aportación de 2% del PIB. Carney anunció que, para 2030, Canadá cumplirá con sus obligaciones con la OTAN.

Una parte importante de dicho aumento en el gasto está enfocada en el Ártico. La principal razón es, claramente, la protección ante la amenaza que representa Vladimir Putin desde Rusia. Sin embargo, es evidente que Carney está poniendo énfasis en el tema de defensa para responder a la percepción de que Canadá, en esta materia, representa al problema del polizón —es decir, la distribución ineficiente de bienes o servicios al permitir que alguien se beneficie de ellos sin contribuir económicamente a sostenerlos—, lo que podría tener un impacto sobre la narrativa que hay en la Casa Blanca de que Canadá no es un país.

IMPLICACIONES PARA LA REVISIÓN DEL T-MEC

Múltiples analistas han mencionado la posibilidad de una cooperación bilateral más cercana entre Canadá y México para contrarrestar la influencia estadounidense en la inminente revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). No obstante, en lo que respecta al gobierno canadiense, esta coalición parece poco probable.

Durante los 45 días de campaña electoral en Canadá, ni Carney, ni los demás candidatos ni los analistas mencionaron siquiera la relación con México, pues, en el contexto coyuntural, no figura de manera relevante para el nuevo gobierno ni para la población canadiense. En cambio, la solución propuesta ante la creciente amenaza de Trump fue la posibilidad de que Europa se convirtiera en un nuevo socio comercial. Carney sostuvo que “hoy, Canadá es el país no europeo más europeo”. Esta aseveración sugiere que, aunque no es parte de ese continente, sí lo es en los ámbitos político, económico y cultural. Esta noción fue bien recibida por los europeos, en particular por Francia. Es notable que su primera visita internacional como Primer Ministro fue a Francia y al Reino Unido, y no a Estados Unidos.

Para el gobierno canadiense, parece tener más sentido en enfoque europeo que el mexicano. Incluso, si se tiene en cuenta la relación comercial entre ambos países

desde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, su porcentaje de comercio directo es muy bajo (alrededor de 3%). Esto no quiere decir que Canadá se oponga de forma activa a un nuevo tratado trilateral ante la revisión del T-MEC, pero tiene poco interés en el papel mexicano, y si el gobierno estadounidense propone un tratado bilateral, los canadienses no se opondrán a la ausencia de México.

Más allá de su débil relación económica desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador y la “cuarta transformación”, el gobierno canadiense ha mostrado una persistente preocupación por el retroceso del Estado de derecho y la democracia en México, al igual que por la creciente debilidad de sus instituciones. El gobierno previo de Trudeau, en particular, fue muy crítico de las reformas judicial y energética. Además, en varias ocasiones en los últimos 7 años, ha llevado al país al mecanismo de resolución de disputas del T-MEC.

En este sentido, México no representa más que un riesgo político para los canadienses, similar al percibido con Trump en Estados Unidos, y hoy la prioridad del gobierno es reducir la incertidumbre. 

RMPE 131



Precio por ejemplar: \$79.00 (USD \$8.00)
Números atrasados: \$55.00 (USD \$8.00)

**INSTITUTO
MATIAS
ROMERO**

De venta en el IMR
República de El Salvador Núm. 42, Col. Centro,
Alcalá Quauhtémoc C.P. 06080, Ciudad de México

Informes: (55) 36 86 50 00 Exts. 8268 y 8247
(55) 36 86 51 48
iminfo@imr.gob.mx
<http://www.gob.mx/imr>

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Un largo peregrinar

✉ *Nicolás Pose-Ferraro y José Victor Ferro*

A raíz del anuncio de la exitosa renegociación del Acuerdo de Asociación Estratégica entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea en el ámbito técnico, el tema ha regresado a la palestra pública. ¿Qué factores impulsan el interés por concretarlo? ¿Cuáles son las trabas? ¿Cuáles son los posibles escenarios? Al impulso de la geopolítica, los equipos negociadores de ambos bloques han alcanzado un nuevo entendimiento; sin embargo, su aprobación no está asegurada.

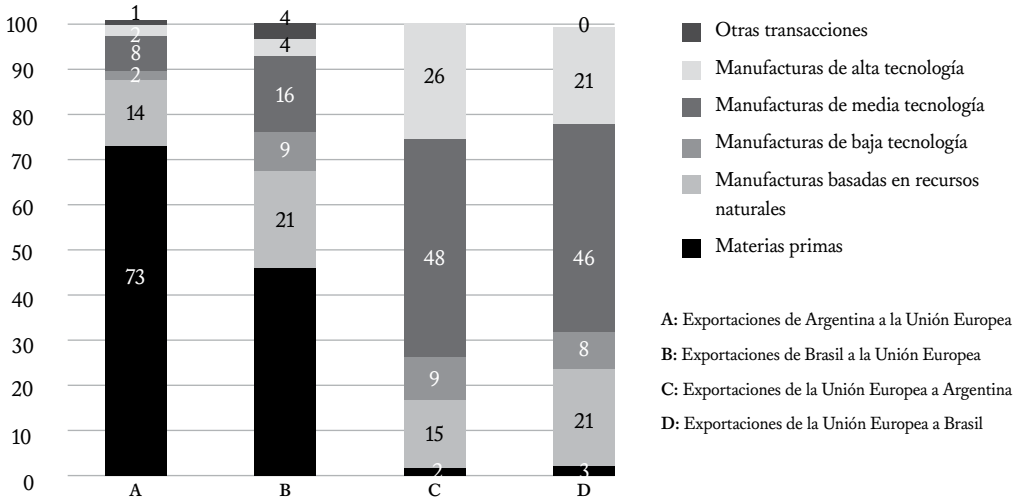
ALGUNOS ANTECEDENTES CRUCIALES

Hace poco más de 25 años, en la Cumbre Unión Europea-América Latina y el Caribe (EU-LAC), que tuvo lugar en Río de Janeiro en junio de 1999, comenzaron las negociaciones para alcanzar un acuerdo de asociación estratégica entre el Mercosur y la Unión Europea.

Entre 1999 y 2019, cuando alcanzaron un “acuerdo en principio” respecto al pilar comercial del acuerdo, el proceso no fue uniforme, pues tuvo constantes vaivenes de ambos lados, en particular, debido a los intereses comerciales confrontantes de las economías en los dos lados del Atlántico, como se muestra en la gráfica 1. Al inicio, acordaron terminar las negociaciones hasta finales de octubre de 2004 para coincidir con el fin de la Comisión Romano Prodi (1999-2004). Sin embargo, debido a que

NICOLÁS POSE-FERRARO es doctor en Ciencia Política por la Universidad de la República (Udelar) y maestro en Economía Política Internacional por la London School of Economics. Es profesor asistente en la Udelar e investigador del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) de Uruguay. Es autor de *The Political Economy of Industry Organizations and Mercosur's North-South Trade Negotiations* (Palgrave Macmillan, 2024). Sígalo en X en @PoseNicolas. **JOSÉ VÍCTOR FERRO** es licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad de São Paulo (USP) y maestro en Estudios Latinoamericanos por las universidades de Salamanca, Estocolmo y Sorbonne Nouvelle - París 3, mediante el programa LAGLOBE (América Latina y Europa en un Mundo Global), becado por la Comisión Europea. Es miembro del grupo de investigación Observatorio de Regionalismo (ODR).

Gráfica 1: Comercio de bienes entre el Mercosur y la Unión Europea (Argentina y Brasil) por composición, promedio 2015-2017 (en porcentaje)



FUENTE: Nicolás Pose-Ferraro, "Between Geopolitics and Political Economy: The European Union-Mercosur Negotiation to Form a Trade Agreement", *Journal of Common Market Studies*, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1111/jcms.13743>

no llegaron a un punto en común en el cual las sensibilidades fueran suficientemente contempladas, el Mercosur y la Unión Europea suspendieron las pláticas. Al final, prefirieron seguir apostando a las concomitantes negociaciones multilaterales de la Ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Con el punto agrícola muerto en las negociaciones multilaterales en la OMC, el interés por retomarlas de forma progresiva ganó espacio; así pues, en 2010 se anunció su continuación. A pesar de ello, en el periodo de 2010 a 2015 no hubo muchos avances. De 2010 a 2012, el Mercosur y la Unión Europea mantuvieron posiciones muy distintas: los europeos defendían que se intercambiaban ofertas, mientras que los sudamericanos sostenían que los aspectos técnicos de las futuras ofertas debían discutirse con anterioridad de manera amplia. Al final del 25° Comité Bilateral de Negociaciones (CNB), la Unión Europea dejó en claro que era imprescindible proceder al intercambio de ofertas para que ese órgano —destinado a llevar a cabo las tratativas para el acuerdo de asociación, como sugiere su nombre— avanzara de manera efectiva con sus trabajos. En la misma ocasión, el Mercosur solicitó un encuentro a nivel ministerial para resolver ese punto muerto. En enero de 2013, en los márgenes de la primera Cumbre Regional entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y

Caribeños (CELAC), tuvo lugar el demandado encuentro, donde se decidió que el CNB solo volvería a reunirse cuando ambas ofertas regionales estuvieran listas.

De manera paralela, se desarrolló un proceso clave para el devenir de la posición del Mercosur: el cambio de preferencias de las organizaciones cupulares que representaban a la industria manufacturera de Brasil, la Confederación Nacional de la Industria (CNI) y la Federación de Industrias del Estado de São Paulo (FIESP). Entre 1999 y 2010, la CNI y la FIESP, como representantes de los “perdedores distributivos” de un eventual acuerdo, se opusieron al avance de la negociación. Sin embargo, a inicios de la década de 2010, en un entorno de crisis industrial y gran incertidumbre, y con el impulso de ideas promovidas por técnicos de estas entidades y por funcionarios de la Secretaría de Comercio Exterior de Brasil, la CNI y la FIESP comenzaron a impulsar una posición favorable en la industria brasileña. Como resultado, en 2013, el gobierno de Brasil coincidió con la posición europea de avanzar al intercambio de ofertas.

El desacuerdo del lado sudamericano subsistió en el otro socio mayor del Mercosur: Argentina. Este bloque había acordado presentar una oferta de liberalización de 87%, como mínimo, de sus importaciones (en valor) provenientes de la Unión Europea, similar al menos a la última oferta de 2004. No obstante, siempre que se reunían para conformar su propuesta conjunta, el porcentaje de liberalización de su mercado a las importaciones de la Unión Europea caía mucho con la oferta argentina. Cuando en 2014, después de mucha presión de los otros socios del bloque, se formó una oferta común, fue la Unión Europea la que pidió una pausa en el proceso debido a las elecciones europeas de 2014. En el año siguiente, solo hubo un encuentro informal entre representantes de ambos lados para confirmar la magnitud de las futuras ofertas.

El proceso ganó un fuerte impulso entre 2016 y 2018 con los nuevos gobiernos de centroderecha en Argentina y Brasil, los cuales, desde un prisma liberal, procuraron reactivar la agenda de negociaciones externas del Mercosur. Con más de 80% del contenido del texto acordado a finales de 2018, las concesiones definitivas llegaron durante el gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil, quien aceptó demandas rechazadas con anterioridad por este país en diversos planos, como acceso limitado a cuotas modestas para diversos productos de la canasta de bienes agrícolas exportables del Mercosur, reglas de origen más flexibles para los productos de sectores como maquinaria y autopartes, mayor acceso al mercado brasileño de compras gubernamentales, así como inclusión de los servicios marítimos en la oferta brasileña y del principio precautorio en el capítulo de desarrollo sostenible, por mencionar algunos ejemplos.

A pesar de estos logros desde la perspectiva de la Unión Europea, el anuncio del acuerdo a inicios de 2019 provocó una fuerte oposición en el Viejo Continente a partir de la conformación de una coalición contraria, compuesta por productores agrícolas y activistas medioambientales. A los primeros, históricamente opuestos por consideraciones distributivas, se sumaron las preocupaciones de los segundos por el impacto de un acuerdo sobre el cambio climático, alentadas por las políticas del gobierno de Bolsonaro relativas a la deforestación en la Amazonia. Así, a diferencia del pasado, el Acuerdo se volvió objeto de un elevado nivel de “politización”, en términos de Dirk De Bièvre y Arlo Poletti; esto es, de una fuerte oposición de actores no tradicionales

en asuntos de comercio provenientes de la sociedad civil, movilizados, en este caso, por la temática ambiental.

La construcción de esta coalición agrícola-ambiental tuvo consecuencias políticas tangibles. No solo diversos parlamentos nacionales aprobaron mociones de expresión contrarias al Acuerdo, sino que, además, el Parlamento Europeo hizo lo propio en 2020. En dicha votación, grupos políticos tradicionalmente favorables a la negociación, sobre todo el grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (s&D), se expresaron en contra de forma mayoritaria. Tal era el clima de opinión en Europa que incluso la canciller alemana Angela Merkel, histórica defensora del Acuerdo, manifestó sus dudas respecto a su ratificación debido al incremento de la deforestación de la Amazonia en Brasil. Así, el proceso de ratificación se paralizó.

UN NUEVO IMPULSO GEOPOLÍTICO

A partir de finales de 2022, varios factores se combinaron para dar un nuevo impulso geopolítico al Acuerdo. En el marco de lo que autores como Sophie Meunier y Kalypso Nicolaidis denominan la “geopolitización” de la política comercial de la Unión Europea, después conceptualizada por Anna Herranz-Surrallés, Chad Damro y Sandra Eckert como “giro geoeconómico”, la Comisión Europea retomó los esfuerzos por concluir las negociaciones. En un contexto de guerra en Europa, debido a la invasión rusa a Ucrania, los aprendizajes derivados de la falta de insumos durante la pandemia de covid-19, las crecientes tensiones geopolíticas entre Occidente y China, y el eventual retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos —ahora confirmado—, la Comisión argumentó que la Unión Europea precisaba concretar nuevos acuerdos comerciales para diversificar aliados y riesgos, y así rebalancear el campo geopolítico.

Como muestra de estos desafíos, cabe señalar la situación de Alemania, el motor económico de la Unión Europea. Desde su reunificación y el fin de la Guerra Fría, el ascenso internacional alemán fue pautado por un modelo de tres pilares: 1) militar, provisto por la Organización del Tratado del Atlántico Norte y, por lo tanto, por Estados Unidos; 2) económico, pautado por un modelo de crecimiento vía exportaciones que, a su vez, se volvían cada vez más relevantes, estimuladas por el apetito del mercado chino, y 3) energético, sobre todo sostenido por Rusia, que proveía gas y petróleo a su pujante economía. Con la escalada de la llamada crisis de la globalización y del orden liberal internacional, el modelo alemán encontró sus tres pilares cuestionados. En ese contexto, el Acuerdo de Asociación Estratégica entre el Mercosur y la Unión Europea se volvió una posibilidad económica nada despreciable para Alemania, dado el tamaño de los mercados brasileño y argentino juntos (casi 300 millones de personas).

Con el retorno de Luiz Inácio Lula da Silva a la presidencia de Brasil, a fin de aplacar la oposición de la sociedad civil europea, la Comisión Europea procuró negociar algunas garantías adicionales en materia ambiental. Según los textos del nuevo Acuerdo, anunciado el 6 de diciembre de 2024, a partir de la renegociación se incluyeron nuevas disposiciones que permiten su eventual suspensión si una parte abandona el Acuerdo de París sobre el cambio climático de manera formal o por vía de los

hechos. A su vez, la renegociación implicó incorporar nuevos compromisos en materia de deforestación en un anexo al capítulo de desarrollo sostenible.

A cambio de estos compromisos adicionales, el gobierno de Lula da Silva trajo sus propias exigencias a la mesa negociadora, que básicamente implicaron revertir algunas de las concesiones otorgadas por su predecesor con miras a retener un mayor espacio para la implementación de políticas de desarrollo. Dichos planteamientos estuvieron en línea con posiciones históricas de Brasil que la Unión Europea había rechazado de manera tajante en el pasado y que aceptó en este nuevo contexto geopolítico. En particular, destaca la reducción del acceso al mercado de compras gubernamentales de Brasil al sacar del texto de 2019 las compras del sistema brasileño de salud, consideradas fundamentales para el plan Nueva Industria Brasil del gobierno del actual mandatario. Asimismo, cabe señalar la introducción de canastas mayores a 15 años, como estaba previsto en 2019, para eliminar los aranceles a la importación de vehículos europeos basados en tecnologías distintas a la combustión tradicional. Para los vehículos eléctricos e híbridos se incluyó una nueva canasta a 18 años —con una reducción de 35% a 25% desde el momento de entrada en vigor del Acuerdo—, mientras que, para los vehículos propulsados por hidrógeno, se renegócié una canasta a 25 años con 6 años adicionales de carencia.

A todo esto, se agregó una nueva demanda desde el Mercosur, motivada por las políticas comerciales unilaterales derivadas del Pacto Verde Europeo —el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono y el Reglamento 2023/1115 sobre deforestación— que fueron diseñadas luego del acuerdo entre ambos bloques en 2019. Para compensar la potencial reversión de las ganancias de acceso a mercados para el Mercosur resultantes de un acuerdo producto de estas iniciativas, se acordó la introducción de un mecanismo de equilibrio. Este instrumento, que constituye una novedad en materia de disciplinas a nivel preferencial, se esboza, a su vez, como una potencial solución a los desafíos que surgen de la incompatibilidad entre las nuevas iniciativas unilaterales europeas y las reglas multilaterales de comercio. Más allá, lo cierto es que, con base en la transacción descrita, ambos bloques encaminaron el nuevo entendimiento.

LAS RESISTENCIAS DE LA ECONOMÍA POLÍTICA

Si bien la renegociación logró apaciguar el escepticismo derivado de la preocupación ambiental en Europa, todo el proceso estuvo signado por la oposición de los productores agrícolas europeos. A diferencia de los “perdedores distributivos” del Mercosur —es decir, la mayoría de los sectores industriales de Argentina y Brasil que pasaron progresivamente de una postura de oposición a otra de apoyo en Brasil, o de aceptación pasiva en Argentina—, los productores agrícolas europeos continúan movilizados en contra de un acuerdo. Como consecuencia, los países con sectores agrícolas poderosos, con Francia a la cabeza, han mantenido su rechazo.

De hecho, una primera aproximación a un nuevo Acuerdo a inicios de 2024 fue detenida por una comunicación telefónica entre el presidente francés Emmanuel Macron y la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen. De acuerdo con un

reporte del periodista brasileño Jamil Chade: “En un sms [mensaje de texto], el francés advirtió que no aceptaría el acuerdo de libre comercio entre los dos bloques, alegando que la supuesta invasión de alimentos exportados desde Sudamérica pondría en peligro a sus agricultores”. En el marco de fuertes movilizaciones que paralizaron Europa —motivadas por la apertura de las importaciones agrícolas desde Ucrania como apoyo a sus esfuerzos en la guerra contra Rusia, las nuevas exigencias ambientales asociadas a los subsidios agrícolas y el eventual acuerdo con el Mercosur—, y ante la necesidad de tener el apoyo francés para asegurar su reelección, Von der Leyen postergó la iniciativa. Más adelante, las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2024 tuvieron el mismo efecto. Como reconoció entonces el Negociador en Jefe de la Comisión Europea, Rupert Schlegelmilch, en una entrevista concedida al diario *El País* de Uruguay: “Ahora mismo estamos trancados, para ser honestos, por las elecciones europeas y las protestas de agricultores en Europa”.

Pasadas las elecciones, la Comisión Europea retomó sus esfuerzos para concluir la negociación. En paralelo, con el impulso de nuevas manifestaciones agrícolas en Francia y el apoyo abrumador del sistema político, el gobierno francés ratificó, una vez más, su rechazo al Acuerdo. Sin embargo, Von der Leyen decidió continuar incluso ante la oposición frontal de Francia, en una apuesta política sin precedentes, dado el papel medular de este país en el proceso de integración europeo. La debilidad política del gobierno francés, evidenciada en la destitución del primer ministro Michel Barnier el día previo al anuncio del Acuerdo, y tan solo a 3 meses de su designación, seguramente incidió en esta decisión. De hecho, hasta el día de su destitución, Barnier hizo contactos políticos para atraer a otros países europeos al campo opositor al Acuerdo liderado por Francia. Cerrada la etapa de (re)negociación, los productores agrícolas procurarán detener el proceso en la fase de ratificación.

¿CÓMO SE APRUEBA EL ACUERDO? POSIBLES ESCENARIOS

Al momento, en términos formales, el Acuerdo se encuentra en el mismo lugar que en junio de 2019: un texto acordado en el ámbito técnico que necesita revisión legal, traducción y posterior ratificación en la Unión Europea y en los países del Mercosur. Para explorar los posibles escenarios, cabe considerar las reglas que regulan su eventual aprobación en la Unión Europea, por ser el bloque donde se concentran las mayores resistencias. En la legislación europea, el Acuerdo de Asociación Estratégica con el Mercosur tiene un carácter mixto, es decir, combina competencias comunitarias con otras que se mantienen a nivel de los Estados miembros. Por ende, de acuerdo con el artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, su aprobación requiere, entre otras cosas, la unanimidad del Consejo Europeo, donde están representados todos los Estados, lo que lleva a descartar este escenario.

No obstante, de ser dividido, el pilar comercial, en tanto competencia exclusiva de la Unión Europea, solo puede aprobarse con la anuencia del Parlamento Europeo y de una “mayoría calificada” en el Consejo Europeo. Tal mayoría requiere el apoyo de, al menos, 55% de los Estados miembros que representen 65% del total de la población

de la Unión Europea, junto con la ausencia de una “minoría de bloqueo”, la cual necesita, para su conformación, al menos a cuatro miembros, que representen más de 35% de la población.

A diferencia del panorama registrado en 2020, con el apoyo mayoritario de los dos principales grupos parlamentarios —el del Partido Popular Europeo y de la *s&d*—, la ratificación del Parlamento Europeo aparece encaminada en buena medida. En este sentido, destaca la conversión —o, más bien, el retorno a sus posiciones previas a 2019— de la *s&d*, motivada por la agenda ambiental negociada en esta última etapa.

Por el contrario, el resultado en el Consejo Europeo genera, en principio, mayores interrogantes. Al impulso de sus productores agrícolas, Francia procura ensamblar una minoría de bloqueo junto a otros países con fuertes comunidades agrícolas. Hasta el momento, este país cuenta con el apoyo explícito de Polonia, así como con el apoyo probable de Austria, Irlanda y Países Bajos. Combinados, se acercan al umbral de 35% necesario para bloquear el Acuerdo, pero no logran alcanzarlo.

Sin embargo, a principios de 2025, el gobierno de Italia, un país históricamente favorable a la negociación, manifestó objeciones de manera pública. En un inicio provinieron de su Ministerio de Agricultura, como eco de los planteamientos de las organizaciones de productores agrícolas italianos, pero fueron matizadas desde el Ministerio de Asuntos Exteriores. Dicho esto, 2 días antes del anuncio, el propio Ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, reclamó cambios en materia de bienes agrícolas para que su gobierno brindara el visto bueno. De confirmarse el rechazo de Italia, los países opositores liderados por Francia alcanzarían el umbral mínimo necesario para bloquear el Acuerdo en el Consejo Europeo.

Considerando que Von der Leyer viajó a Montevideo para anunciar la conclusión exitosa de las negociaciones, es posible inferir que Italia no terminó por definir su oposición. Como hipótesis, puede decirse que el gobierno de Giorgia Meloni está utilizando su posición de pivote como *leverage* para negociar otros asuntos de su interés con la Comisión Europea, en particular en lo referido a su cuestionada política migratoria. En la actualidad, los reportes de prensa que llegan desde Europa muestran señales mixtas. Por un lado, algunos sugieren que, efectivamente, Meloni está utilizando esta posición para extraer nuevas concesiones en la Unión Europea, sean compensaciones para sus productores agrícolas o espacio para su política migratoria. Por el otro, algunos se preguntan si, al impulso del reclamo de la Coldiretti —organización que representa a los productores agrícolas italianos y conforma la base de apoyo social del gobierno—, el ejecutivo italiano se decantará por la oposición.

Así, la inclinación de Italia hacia la coalición pro-Acuerdo —liderada por la Comisión Europea, Alemania y España—, o bien hacia la coalición opositora —liderada por Francia—, podría decidir si se concreta, tras 25 años, el acuerdo con el Mercosur. 

Al impulso de la geopolítica, los equipos negociadores de ambos bloques han alcanzado un nuevo entendimiento; sin embargo, su aprobación no está asegurada.

México y la Unión Europea

La modernización de una alianza estratégica en tiempos de incertidumbre mundial

✉ *Luis Huacuja y Simone Lucatello*

La relación entre México y la Unión Europea adquiere una renovada relevancia en un contexto internacional caracterizado por tensiones geopolíticas, fragmentación económica y desafíos mundiales compartidos, como el cambio climático o la transición energética, además de la incertidumbre que genera el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Desde 2000, ambas partes han mantenido una alianza estructurada mediante el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre la Unión Europea y México (Acuerdo Global), un instrumento que abarca comercio, cooperación y diálogo político. Sin embargo, la necesidad de actualizar este marco se volvió evidente a medida que emergían nuevos temas en la agenda internacional: desarrollo sostenible, digitalización, igualdad de género, lucha contra la corrupción y el crimen organizado transnacional, fortalecimiento del multilateralismo, entre otros. De ahí la importancia de analizar el proceso de modernización del Acuerdo Global, su estado actual, las oportunidades que ofrece para ambas regiones, así como los retos que aún enfrenta para su firma, ratificación e implementación.

LUIS ANTONIO HUACUJA es maestro en Derecho y doctorando en Derecho e Integración Europea por el Institut Universitari d'Estudis Europeus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Cuenta con un posgrado en la Unión Europea por el College of Europe. Ha sido responsable del Programa de Estudios sobre la Unión Europea en el posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sígalo en X en @Luis_Huacuja_A. **SIMONE LUCATELLO** es profesor e investigador en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, Centro de Investigación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti). Es maestro en Relaciones Internacionales por la London School of Economics and Political Science (LSE) y doctor en Análisis y Gobernanza del Desarrollo Sustentable por la Università Ca' Foscari Venezia (UNIVE), Italia. Es científico del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nivel 2. Contáctelo en slucatello@institutomora.edu.mx.

CONTEXTO HISTÓRICO

El Acuerdo Global entre México y la Unión Europea, firmado en 1997 y en vigor desde el 1 de julio de 2000, fue un hito en la arquitectura internacional de las relaciones entre Latinoamérica y Europa, no solo por su amplitud temática, sino por el tipo de vínculo que consolidó un marco legal exhaustivo que integraba el comercio, la cooperación política y técnica, así como el diálogo político en distintos niveles, con el involucramiento de diversos actores. A diferencia de otros acuerdos bilaterales centrados solo en lo comercial, el Acuerdo se erigió desde un inicio como un instrumento de asociación de cuarta generación, ya que, además de la economía de mercado, se ha sustentado en valores compartidos, como el respeto a los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho.

Para México, significó una ampliación relevante de su política de diversificación de las relaciones exteriores, sobre todo en un momento en el que el país acababa de consolidar su integración comercial con Canadá y Estados Unidos mediante el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, vigente desde 1994. En ese contexto, la relación con la Unión Europea le permitió proyectar su política exterior más allá de la órbita estadounidense y buscar nuevos socios con los cuales establecer vínculos más equilibrados y plurales.

Desde la perspectiva europea, este acuerdo puede describirse como el más ambicioso hasta entonces con un país no miembro de la Unión Europea y el primero en Latinoamérica. Para México, representó un reconocimiento explícito como un actor regional relevante, capaz de establecer compromisos de largo plazo con los países del bloque europeo. Este hecho también respondió a los intereses estratégicos de Europa, que buscaba fortalecer sus lazos con Latinoamérica como parte de su política de “regionalismo abierto”, en especial después del fin de la Guerra Fría, y en el marco de una creciente competencia geopolítica por la influencia en la región.

El Acuerdo trajo consigo una liberalización comercial progresiva y ambiciosa. Durante la primera década del siglo **xxi**, el comercio bilateral entre México y la Unión Europea se duplicó, y las inversiones europeas comenzaron a consolidarse como una de las principales fuentes de financiamiento externo para la economía mexicana. Empresas europeas de sectores clave —como la industria automotriz, farmacéutica, de telecomunicaciones, energética, y de alimentos y bebidas— establecieron operaciones en México, por lo que se beneficiaron de la estabilidad macroeconómica, la cercanía comercial con Estados Unidos y la mano de obra calificada.

Sin embargo, más allá de los flujos comerciales, financieros y de inversión, el Acuerdo Global sentó las bases para una relación de diálogo político y de cooperación más estructurada. Este componente ha sido menos visible, pero no menos importante. Se establecieron canales institucionalizados de consulta entre ambos gobiernos, así como mecanismos de cooperación en áreas tan diversas como derechos humanos, medio ambiente, lucha contra el narcotráfico, desarrollo rural, educación superior, y ciencia y tecnología. Programas como **ALBAN** y **Erasmus Mundus**, o el proyecto **Horizon 2020**, han permitido que cientos de estudiantes mexicanos cursen estudios en universidades europeas, y que centros de investigación colaboren en proyectos conjuntos de

innovación. Con el tiempo se institucionalizaron y fortalecieron espacios de diálogo, como el interparlamentario, y se posibilitaron otros, como el de la sociedad civil.

La proclamación de la Asociación Estratégica entre la Unión Europea y México, en 2008, fue un signo de madurez que se consolidó, 2 años después, con el Plan Ejecutivo Conjunto, que permitió ampliar el catálogo de temas e intereses en común y propició la creación de otros mecanismos de diálogo especializados, como el de seguridad y justicia, y el de asuntos multilaterales, entre otros, al tiempo que se fortalecieron aquellos de cooperación descentralizada (entre regiones y ciudades), que posibilitaron el intercambio cultural entre instituciones de ambos lados del Atlántico. La celebración periódica de Cumbres México-Unión Europea, así como la participación activa de México en los foros birregionales —como las Cumbres de la Unión Europea y la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, o la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana—, han contribuido a consolidar esta alianza multidimensional.

El acuerdo de largo plazo entre ambas partes se formalizó en el Documento de Visión Conjunta, de 2015, que fue el sustento para iniciar, en 2016, las negociaciones para renovar y modernizar el Acuerdo Global. En 2017 se completaron las correspondientes al apartado político y de cooperación; en 2018 se dio a conocer el principio de acuerdo del apartado comercial y, con algunas cuestiones pendientes superadas, en abril de 2020 se anunció la conclusión de las negociaciones.

Para 2024, los frutos de esta relación eran evidentes. La Unión Europea se consolidó como el tercer socio comercial de México, solo por detrás de Estados Unidos y China, y como el segundo inversionista extranjero directo. Más de 6000 empresas europeas que tienen presencia en el país generan empleos de calidad y contribuyen al desarrollo de cadenas de valor transatlánticas. A su vez, México se ha convertido en un punto de conexión estratégica para la Unión Europea, no solo hacia el mercado norteamericano, sino también hacia Latinoamérica. Esta doble proyección geoeconómica y geopolítica le confiere a México un papel privilegiado en la visión estratégica europea, especialmente en el actual contexto mundial de fragmentación de cadenas productivas y necesidad de deslocalización cercana (*nearshoring*).

La relevancia del Acuerdo también debe leerse desde una óptica reguladora. Durante estos años, la Unión Europea ha desarrollado un modelo distintivo de relaciones exteriores basado en el uso del “poder normativo”, mediante el cual busca promover estándares internacionales en áreas como comercio justo, sostenibilidad ambiental, derechos humanos y gobernanza democrática. México, por medio del Acuerdo Global y como socio estratégico de la Unión Europea, se integró a esta lógica de relaciones internacionales, en la que el comercio es un instrumento al servicio de objetivos sociales más amplios.

UN ACUERDO RALENTIZADO, PERO SÓLIDO

Aunque el Acuerdo Global modernizado es una oportunidad estratégica de primer orden, su implementación enfrenta obstáculos significativos que han ralentizado su avance. Si bien se anunció la conclusión de las negociaciones técnicas en 2020 y hay

consenso político general sobre su conveniencia, diversos factores internos y externos han contribuido a que su ratificación aún no se haya concretado. Estos desafíos deben entenderse no solo como trabas administrativas, sino como reflejo de tensiones más profundas que atraviesan tanto las dinámicas internas de México y de la Unión Europea como las expectativas sociales en torno a los tratados internacionales. Abordarlos de forma realista y proactiva será clave para que el Acuerdo se traduzca en una realidad jurídica y política.

Uno de los principales desafíos es la ratificación legislativa en la Unión Europea. Al tratarse de un acuerdo de contenido “mixto” —es decir, que incluye competencias tanto de la Unión como de los Estados miembros—, debe ratificarse no solo por el Parlamento Europeo, sino también por los veintisiete parlamentos nacionales de los Estados miembros e, incluso, por los parlamentos regionales en el caso de Bélgica. Este proceso, altamente complejo desde el punto de vista institucional, puede tardar años si no se gestiona con decisión política y coordinación diplomática. Además, en varios países europeos, los tratados internacionales deben pasar por audiencias públicas y debates en comisiones legislativas, y, en ocasiones, enfrentar impugnaciones judiciales o movilizaciones sociales que retrasan su aprobación, pues hay sensibilidades sectoriales que generan resistencias, tanto en México como en la Unión Europea.

Esta circunstancia, que dificultó la aprobación parlamentaria en la Unión Europea, llevó a la Comisión Europea a proponer, en 2021, la fragmentación del Acuerdo Global modernizado en tres partes: comercio, protección de inversiones, y cooperación y diálogo político. Sin embargo, México se opuso a la propuesta e insistió en que debía firmarse en los términos en que se negoció. Al final, se acordó preservar su integridad y optar por la misma fórmula del Acuerdo original de 1997, consistente en uno integral y otro interino sobre comercio, para avanzar en la liberalización comercial mientras se completa el proceso de aprobación general.

Otro reto central han sido las circunstancias externas, sensibles y cambiantes en torno al tema energético. La firma del Acuerdo quedó relegada frente a otras urgencias, como la guerra en Ucrania, que, entre otras cosas, modificó de manera sustancial el mapa y las prioridades energéticas, y motivó, en el caso de Europa, la búsqueda de nuevas alternativas de abastecimiento en medio de la transición energética.

En el caso de México, y con la intención de recuperar la soberanía de este recurso, durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se impulsaron políticas que pretendían revertir la reforma energética de 2013, aprobada en el sexenio de su antecesor, Enrique Peña Nieto. Con la mayoría parlamentaria suficiente, en octubre de 2024, el Congreso mexicano aprobó una nueva reforma constitucional que devolvía al Estado mexicano la rectoría en esta materia. Debido a esta circunstancia,

*El altamente complejo
proceso de ratificación
en la Unión Europea puede
tardar años si no se gestiona
con decisión política
y coordinación diplomática.*

se reabrió la negociación para modificar el texto del Acuerdo Global modernizado y excluir el capítulo de energía, aunque con garantías para la inversión europea.

Además de lo anterior, se amplió el catálogo de compras públicas subnacionales, se introdujeron modificaciones para la industria automotriz y México hizo algunas concesiones tarifarias adicionales en el sector agrícola.

Con los últimos cambios acordados, ambas partes plantearon la conveniencia de retomar la senda rumbo a la modernización del Acuerdo y el 17 de enero de 2025, 3 días antes del regreso formal de Trump a la Casa Blanca, México y la Unión Europea anunciaron el cierre definitivo de las negociaciones y la reactivación del proceso rumbo a la firma y posterior ratificación del Acuerdo Global modernizado.

Después de casi 10 años de un arduo proceso de negociación, en el que ambas partes han invertido trabajo, esfuerzo y una voluntad política sostenida, todo indica que las condiciones están dadas y los obstáculos, superados. Desde hace tiempo se ha trabajado en la revisión jurídica y la traducción a las veinticuatro lenguas oficiales de la Unión Europea, además de la adecuación al español de México, de las más de 1300 páginas que contiene. Concluida esta etapa, la Comisión Europea debe solicitar al Consejo de la Unión Europea la autorización y la fecha para su firma, lo que puede tardar entre 3 y 4 meses.

Otro aspecto relevante son los cambios de gobierno en ambos lados del Atlántico. La llegada de nuevos liderazgos —como el de Claudia Sheinbaum en México, con un perfil científico y medioambientalista que ha despertado mucha expectación en la Unión Europea, y un segundo mandato de Ursula von der Leyen al frente de la Comisión Europea— representa una oportunidad para culminar el proceso, pero esto dependerá de que ambas partes mantengan el Acuerdo como una prioridad estratégica de política exterior. La impredecibilidad de Trump es un desafío importante para su implementación y obliga a buscar un momento propicio para anunciar su firma.

Finalmente, el Acuerdo habrá de enfrentar el desafío de la coherencia normativa e institucional. Para que entre en vigor de manera efectiva, no basta con su firma y ratificación; también será necesario adecuar marcos legales internos, armonizar procedimientos administrativos y capacitar a las autoridades responsables de su implementación. Esto incluye desde autoridades aduaneras y agencias de comercio exterior, hasta ministerios de medio ambiente, tribunales laborales y organismos de propiedad intelectual e industrial y de compras públicas. Su modernización exige una inversión institucional significativa, tanto en México como en la Unión Europea, para que sus disposiciones no queden en el papel, sino que se traduzcan en beneficios tangibles.

IMPLICACIONES Y OPORTUNIDADES SECTORIALES

La modernización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea promete transformaciones significativas en sectores clave de la economía mexicana. Al eliminar barreras comerciales, armonizar estándares regulatorios y fomentar la cooperación tecnológica y financiera, se busca no solo aumentar el intercambio comercial,

sino también impulsar el desarrollo estructural de áreas estratégicas para la competitividad y la sostenibilidad en el siglo *xxi*.

Uno de los sectores más beneficiados es el agroalimentario. Para los productores agrícolas mexicanos, el Acuerdo representa una oportunidad sin precedentes para acceder a mercados europeos de alto valor agregado. La reducción de aranceles y la simplificación de procedimientos aduaneros permitirá que productos emblemáticos —como el aguacate, los frutos rojos, el café, el tequila y el mezcal— ingresen con mayor facilidad y competitividad. Un aspecto clave es la ampliación del reconocimiento de las indicaciones geográficas, lo que brindará protección legal y comercial a productos con identidad regional y cultural, y les permitirá posicionarse como bienes de primera calidad en los supermercados y restaurantes europeos. Esta diferenciación contribuirá al desarrollo de economías rurales y al fortalecimiento de la agricultura sustentable.

La creciente demanda europea de productos frescos, orgánicos y éticos se alinea perfectamente con la oferta mexicana, siempre y cuando se respeten los rigurosos estándares sanitarios y fitosanitarios del bloque. En este sentido, el Acuerdo incluye disposiciones de cooperación técnica y la armonización regulatoria para facilitar la certificación de productos mexicanos conforme a la normativa europea. Además, la transferencia de tecnología agrícola desde Europa hacia México —en áreas como irrigación eficiente, agroecología y manejo de suelos— puede contribuir a enfrentar los desafíos derivados del cambio climático y mejorar la resiliencia de las comunidades rurales.

Otro sector estratégico es el automotriz, uno de los pilares de larga data de la economía exportadora mexicana. A pesar de la nueva guerra arancelaria impulsada por el gobierno de Trump, las armadoras europeas, sobre todo alemanas, francesas e italianas, ya tienen una presencia robusta en México, con plantas de ensamblaje, centros de ingeniería y redes de proveedores. La modernización del Acuerdo permitirá una mayor integración de estas operaciones a las cadenas de suministro europeas, lo que facilitará el cumplimiento de las reglas de origen, la estandarización de normas técnicas y la simplificación de trámites aduanales. Esto adquiere aún más relevancia ante la transformación mundial del sector hacia los vehículos eléctricos, la movilidad inteligente y la digitalización del transporte.

Al incorporar los estándares europeos en seguridad vehicular, emisiones contaminantes y sistemas digitales, México no solo podría aumentar su capacidad exportadora, sino que fortalecería su base industrial tecnológica y ambiental. La colaboración con empresas europeas podría traducirse en nuevas inversiones en infraestructura de carga eléctrica, centros de investigación en baterías y formación especializada de técnicos e ingenieros. Asimismo, la adopción de principios de la Industria 4.0 (automatización, inteligencia artificial, robótica) en la manufactura mexicana incrementará la productividad, reducirá el impacto ambiental y mejorará la calidad de los productos.

En el ámbito de la salud y la industria farmacéutica, el Acuerdo crea un entorno favorable para la cooperación regulatoria, la protección de la propiedad intelectual y la innovación conjunta. Si bien la actualización en materia de patentes ha generado

preocupaciones entre los fabricantes de medicamentos genéricos en México, también ofrece certidumbre jurídica a las empresas que deseen invertir en investigación y desarrollo. La armonización de procesos regulatorios permitirá que los medicamentos y los dispositivos médicos mexicanos accedan con más facilidad al mercado europeo, y que los productos europeos ingresen a México de manera más ágil, segura y transparente.

Más allá del comercio de productos farmacéuticos, el Acuerdo abre la posibilidad de establecer alianzas estratégicas en investigación biomédica, desarrollo de vacunas, medicina personalizada y tecnologías para la salud digital. Las instituciones académicas, los hospitales y los centros de innovación mexicanos podrán colaborar con sus contrapartes europeas en proyectos conjuntos para enfrentar enfermedades crónicas, mejorar la calidad de los servicios sanitarios y reducir brechas en el acceso a la atención médica. Además, el financiamiento europeo puede apoyar la modernización de hospitales, la digitalización de expedientes clínicos y la expansión de servicios de telemedicina en zonas marginadas.

Finalmente, y como se ha mencionado, un tema importante es la renegociación y exclusión del capítulo energético, el cual obedece a una serie de factores estratégicos, jurídicos y económicos que no solo reflejan la transformación del sector energético mexicano en estos últimos años, sino que representan la visión de soberanía energética impulsada bajo la presidencia de López Obrador (2018-2024), que continúa bajo la actual presidencia de Sheinbaum (2024-2030) y que tiene sustento legal en virtud de la reforma constitucional de 2024.

Cuando se firmó el Acuerdo original en 1997, el sector energético mexicano operaba bajo un modelo de monopolio estatal, donde el Estado ejercía el control exclusivo de la exploración, la producción, la distribución y la comercialización de hidrocarburos y electricidad. Con la reforma energética de 2013-2014, México abrió este sector a la inversión privada y extranjera, permitiendo la participación de empresas nacionales e internacionales en proyectos de generación eléctrica, energías renovables, infraestructura energética y distribución. Es importante destacar que la reforma fue motivo de controversia debido a la corrupción y a la falta de transparencia durante su proceso legislativo de aprobación.

La reforma constitucional en materia energética de 2024 procura fortalecer el papel del Estado mexicano y le otorga prevalencia en la generación de energía, al tiempo que permite la participación privada; es decir, se concede la inversión extranjera, con determinadas condiciones y modificaciones respecto a la reforma de 2013. Por ello, y aunque se excluyó el capítulo de energía en el nuevo texto del Acuerdo, se ofreció la protección a las inversiones europeas, con las garantías suficientes para sostener relaciones de largo plazo en un sector altamente regulado y vulnerable a los cambios de política interna.

La Unión Europea tiene un interés concreto: proteger y ampliar la participación de empresas europeas en el mercado energético mexicano, en particular en el ámbito de las energías limpias, donde firmas provenientes de Alemania, España, Francia e Italia habían comenzado a invertir de forma activa en proyectos de energía solar,

eólica y eficiencia energética. Además, la Unión Europea ha consolidado una política energética y climática ambiciosa mediante el Pacto Verde Europeo, lo que obliga a que todos sus socios estratégicos compartan estándares mínimos en materia ambiental, sostenibilidad y regulación de carbono.

Más allá de la exclusión del capítulo en materia de energía, el tema tiene un sentido transversal en el Acuerdo, ya que existe el propósito de alinear ambos marcos normativos en función de compromisos comunes, como el cumplimiento del Acuerdo de París sobre cambio climático, la descarbonización de las economías y la promoción de tecnologías verdes. México buscó garantizar que este nuevo marco no contradijera sus principios de soberanía energética ni su derecho a regular el sector conforme a prioridades nacionales, por lo que equilibra la atracción de inversión extranjera con la protección de intereses estratégicos del Estado mexicano. También incorpora mecanismos de cooperación técnica, financiamiento verde y transferencia tecnológica que permitirán al país fortalecer sus capacidades institucionales y acelerar su transición hacia un modelo energético más sustentable, competitivo e inclusivo.

Por último, el componente digital del Acuerdo es una apuesta estratégica por el futuro. Las nuevas disposiciones en comercio electrónico, gobernanza de datos, ciberseguridad y servicios digitales buscan integrar a México en la economía digital mundial bajo principios de confianza, protección de datos y competencia justa. Para las pequeñas y medianas empresas esto significa mayores oportunidades para exportar sus productos en línea, acceder a plataformas tecnológicas y ofrecer servicios transfronterizos a clientes europeos. El nuevo impulso que se ha dado en México a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones posibilita la adopción de mejores prácticas y soluciones tecnológicas. La cooperación en temas digitales también puede traducirse en inversiones en infraestructura de conectividad, capacitación de talento, digitalización de trámites gubernamentales y desarrollo de inteligencia artificial responsable. La experiencia europea en regulación de plataformas, protección de derechos digitales y gobernanza algorítmica puede servir como guía para el diseño de marcos normativos mexicanos adaptados a los desafíos de la era digital.

La modernización del Acuerdo Global implica una adecuación de intereses comunes ante los nuevos retos mundiales.

MUCHO MÁS QUE UN ACUERDO INTERNACIONAL

El Acuerdo Global, en vigor desde 2000, no ha sido solo un tratado comercial, sino una apuesta estructural por una relación a largo plazo basada en valores, intereses comunes y una visión compartida del orden internacional. Este marco ha servido como cimiento para una relación sólida que ahora busca modernizarse para responder a los desafíos del siglo XXI. Su modernización no parte de cero, sino que tiene sus raíces en más de 2 décadas de cooperación exitosa, aprendizaje y beneficio mutuos, además de una confianza política que ha resistido múltiples crisis mundiales.

La variedad de diálogos temáticos y sectoriales, que involucran a una diversidad de actores, le ha conferido al Acuerdo Global una dimensión multinivel, que conviene reforzar e interconectar para garantizar un seguimiento y un aprovechamiento más exhaustivo, y otorgar a la relación bilateral un sentido democratizador en la toma de decisiones.

La asociación entre México y la Unión Europea se ha convertido en una relación estratégica necesaria, que trasciende el ámbito bilateral en los temas tradicionales e involucra, además, temáticas birregionales. México es un interlocutor importante en la relación entre Latinoamérica y la Unión Europea, y es, además, un aliado confiable en el ámbito multilateral. Por ello, la modernización del Acuerdo implica una adecuación de intereses comunes ante los nuevos retos mundiales.

En un mundo volátil y amenazado de forma constante, la certidumbre y la previsibilidad son factores determinantes en las relaciones internacionales. La probable firma del Acuerdo Global modernizado en los próximos meses, con preferencia en el marco de una Cumbre Unión Europea-México, sería una muy buena señal para reforzar y lanzar de nuevo la relación en momentos especialmente complejos en la arena internacional.

Sin duda, los obstáculos que enfrenta el proceso rumbo a su firma e implementación no deben subestimarse, pero tampoco son insuperables. Hay precedentes, capacidades institucionales y voluntad diplomática que pueden movilizarse para superar las trabas.

Lo fundamental será actuar con visión estratégica, con compromiso político de alto nivel y con una narrativa pública que resalte los beneficios compartidos de una relación más sólida, sostenible y equilibrada entre México y la Unión Europea. Superar estos desafíos no es solo una cuestión técnica: es una decisión política, de interés mutuo, que puede marcar el rumbo de la cooperación internacional en los años por venir.

Diálogo **N**

La construcción de la paz en Latinoamérica



Latinoamérica ante los nuevos desafíos para lograr la paz

✉ *Sabina Puig Cartes*

En julio de 2023, el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, presentó la Nueva Agenda de Paz, un importante documento que apela a reforzar el compromiso por la paz frente a un nuevo orden internacional y un escenario geopolítico cada vez más fragmentado, así como amenazas entrelazadas y transfronterizas.

Han pasado 2 años y, lejos de disiparse, estas amenazas se han reafirmado y se han precipitado en crisis catastróficas. La guerra en Ucrania está enquistada: los daños causados a la población civil no han cesado, los muertos en combate se cuentan por decenas de miles y la tensión regional está al rojo vivo. La respuesta israelí a la atroz e injustificable matanza perpetrada por Hamás en octubre de 2023 ha desatado un ciclo de violencias desmedidas contra Palestina y ha convertido a la Franja de Gaza en un infierno calificable de genocidio, ante la inacción o incluso la complicidad de una parte de la comunidad internacional. La ofensiva de Israel contra Gaza ha conllevado, además, ataques a otros países del Medio Oriente. Más guerras, demasiado ignoradas, aún devastan la vida de millones de personas en África (Burkina Faso, Camerún, Etiopía, Libia, Mali, Mozambique, Níger, Nigeria, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, entre otros). Sin olvidar a Siria, que, tras una sangrienta guerra de 14 años, aún debe hacer frente a importantes focos de violencia, ni a Myanmar (Birmania), donde los crímenes de guerra y otras violaciones graves al Derecho Internacional Humanitario parecen no tener fin.

El Programa de Datos sobre Conflictos de Uppsala indica que 2023 fue el año más violento desde el final de la Guerra Fría. El Índice de Paz Global 2024 apunta

SABINA PUIG CARTES es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y maestra en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la University of Essex. Desde 2010, forma parte del Instituto Catalán Internacional para la Paz (ICIP), donde coordina el programa Violencias Fuera de Contextos Bélicos. Ha laborado en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Corte Penal Internacional (CPI), Amnistía Internacional y Justicia i Pau. Sígala en Bluesky en @sabinapuigc.bsky.social y en X en @ICIPeace.

en la misma dirección: en los últimos años, el mundo se ha convertido en un lugar menos pacífico, con un aumento significativo de conflictos, muertes violentas, inestabilidad política y tensiones. Los contextos bélicos hoy son mucho más complejos, por sus dinámicas y su mayor variedad de actores armados. Las posibilidades de llegar a acuerdos de paz son mínimas. En muchos casos, el conflicto en sí es un negocio para las partes enfrentadas; en otros, el final de las hostilidades no se contempla si no es por victoria militar, lo que enquistas y alarga aún más los enfrentamientos, dificulta pensar más allá de un alto al fuego, y reduce la creación de procesos integrales capaces de abordar las causas profundas de las hostilidades y de proponer transformaciones que limiten el riesgo de repetición.

Otras tendencias ilustran el retroceso mundial de los últimos años, como el temerario cambio en la doctrina nuclear de las grandes potencias y la desenfrenada escalada armamentista. El Instituto Internacional para la Investigación de la Paz, en Estocolmo, advierte que el gasto militar mundial ha tenido un incremento de 9.4% respecto a 2023 y ha alcanzado los 2718 millones de dólares en 2024, el más pronunciado desde el final de la Guerra Fría. En Europa hay un aumento sin precedentes en las últimas décadas, con un crecimiento de 28% en Alemania y de 31% en Polonia. Preocupa sobremedida esta carrera armamentista y el afán por “prepararnos para la guerra”, en detrimento de otras necesidades sociales y de la cooperación y la solidaridad internacional, más necesarias que nunca.

Efectivamente, la reducción de la pobreza se ha ido paralizando y han aumentado las desigualdades entre países y dentro de ellos. Según el Banco Mundial, en 2024, alrededor de 700 millones de personas vivían en situaciones de pobreza extrema, es decir, con menos de 2.15 dólares por persona al día (respecto a los precios de 2017). Además, el Programa Mundial de Alimentos advierte que 343 millones de personas en el mundo padecen graves niveles de inseguridad alimentaria y 1.9 millones sufrieron hambruna en 2024.

A ello se suma un deterioro paulatino de las democracias, con un repunte del autoritarismo en muchos países y la adopción de medidas que restringen las libertades de expresión, de asociación y de reunión pacífica. Con el avance de grupos políticos de extrema derecha, también avanza un discurso que cuestiona principios básicos como la universalidad de los derechos humanos o la igualdad de género, lo que causa temores justificados en el seno de muchos colectivos discriminados a lo largo de la historia.

De igual manera, la violencia, la pobreza y el cambio climático empujan a millones de personas a huir de sus lugares de origen. De acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados, a finales de abril de 2024, más de 120 millones de personas se encontraban desplazadas por la fuerza, un número que no ha parado de incrementarse en los últimos años, como también han aumentado las trabas para encontrar refugio.

Ante estos grandes retos para la paz mundial, en vez de apostar por el multilateralismo, la cooperación, la diplomacia y los instrumentos internacionales establecidos precisamente para fortalecer la paz y la seguridad mundial, la mayoría de los Estados intensifican dinámicas de competencia geoestratégica que no hacen más que

ahondar en la desconfianza y la fragmentación. La elección de Donald Trump para un segundo mandato añade sal a la herida. Hoy, su declaración de guerra comercial tiene al mundo entero en vilo, y las amenazas de anexión de nuevos territorios que emanan erráticamente de la Casa Blanca tensionan, aún más, los frágiles espacios de diálogo internacional.

LATINOAMÉRICA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL

En las últimas décadas, Latinoamérica ha sido escenario de conflictos armados de carácter internacional en muy pocas ocasiones. Por otra parte, los Acuerdos de Paz de La Habana entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia pusieron fin, en 2016, a la última gran guerra en territorio latinoamericano. A su vez, los grupos insurgentes que protagonizaron parte de las violencias de la segunda mitad del siglo xx han ido abandonando su lucha armada. El Ejército de Liberación Nacional es, quizá, el último grupo guerrillero activo y con control territorial en América.

Sin embargo, la ausencia de guerras y guerrillas importantes en Latinoamérica —con esta excepción colombiana— no significa que el continente sea inmune a las dinámicas mundiales descritas ni esté exento de otro tipo de violencias también letales y destructivas. Paradójicamente, es el continente más pacífico en términos de conflictos armados tradicionales y el más violento en otros parámetros.

Los retos para la paz en Latinoamérica tienen que ver con la inseguridad en las calles y en las casas, con profundas desigualdades socioeconómicas que impiden a millones de personas acceder a los derechos sociales más básicos, con el cierre de espacios democráticos y recortes a las libertades, con una cultura discriminadora todavía muy arraigada en las élites y las instituciones, con el uso abusivo de sus riquezas naturales y la destrucción del medio ambiente, y con el ataque a las personas y los colectivos que defienden los derechos humanos.

Hoy en día, el crimen organizado es la principal amenaza para la paz y la seguridad. En un número creciente de países latinoamericanos, su actividad provoca niveles de violencia equiparables a los que se viven en una situación de guerra.

El proyecto Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados da seguimiento a los contextos violentos en el mundo. Cada año publica un índice que contempla indicadores como mortalidad, nivel de peligro para la población civil, extensión geográfica y número de grupos armados. Según su última clasificación, de 2024, cuatro de los once contextos violentos más importantes se encontraban en América: México, Brasil, Colombia y Haití. Curiosamente, todos se sitúan en una posición más preocupante que Ucrania, un país inmerso en uno de los conflictos armados internacionales más intensos del momento.

El último Estudio Global sobre Homicidios, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), apunta que Latinoamérica, aunque es la región donde habita solo 8% de la población mundial, concentra más del tercio de los homicidios. Hay muchos factores convergentes que explican estas tasas; entre

ellos, la UNODC destaca la producción y el tráfico récord de drogas, la proliferación y la fragmentación de grupos criminales fuertemente armados (así como las respuestas a la presencia del crimen), y el uso de armas de fuego.

Incluso países con un pasado reciente que podría considerarse pacífico, como Chile o Costa Rica, viven un aumento de formas de violencia; por ejemplo, los homicidios a sueldo. En Ecuador se ha registrado un rápido incremento de la tasa de homicidios, con un alarmante pico en 2023. También ha aumentado la violencia en la Triple Frontera. La región paraguaya fronteriza con Brasil ha sido identificada como una de las regiones con mayor violencia letal en el país, pues registra tasas de homicidios que alcanzan los 70 por cada 100 000 habitantes.

Si bien la mayoría de las víctimas directas de estas violencias homicidas son hombres, y sobre todo hombres jóvenes, el fenómeno no perdona a niñas ni a mujeres, y tiene una clara dimensión de género. Ellas están mucho más expuestas a la violencia dentro del hogar, una tendencia que se repite en todas las regiones del mundo. El agravante en América es que los feminicidios, como la violencia sexual y otras expresiones de violencia de género, suelen quedar impunes.

La respuesta de los Estados se ha basado, sobre todo, en políticas de “mano dura”, que han alcanzado su ápice con el “modelo Bukele”: estado de excepción, suspensión de derechos, recortes democráticos y escenificación, mucha escenificación. Son respuestas que, en algunos casos —como en El Salvador—, efectivamente logran sacar a los grupos violentos de las calles en el corto plazo, pero con muchas incertezas de cara al futuro, y a un precio muy caro para las libertades individuales de toda la población y para los equilibrios democráticos que toda sociedad necesita a fin de vivir en paz y garantizar condiciones de vida digna.

En otros casos, como en México, la llamada “guerra contra el narcotráfico”, lejos de solucionar la crisis de violencia, ha fragmentado a los grupos criminales, lo que ha intensificado la violencia entre ellos y contra la población civil. En los casi 20 años de “guerra”, los homicidios no han bajado de los 30 000 anuales y son más de 120 000 las personas desaparecidas.

Se trata de respuestas coercitivas que parten de una visión muy sesgada de lo que significa la seguridad, y que no tienen en cuenta las necesidades reales y diversas de sus víctimas. En Argentina, por ejemplo, donde se registra un feminicidio cada 33 horas, el gobierno se jacta de aplicar la mano dura, a la vez que ha impuesto recortes presupuestarios a las políticas que abordaban la violencia de género.

Las tasas de homicidios y de feminicidios son un indicador bastante fiable para medir el nivel de violencia directa en un país y su evolución en la historia, pero hay que tener en cuenta también otro tipo de violencias, a menudo infradocumentadas, que tienen un impacto enorme en la vida de las personas: extorsiones, desplazamientos forzados, tráfico de personas migrantes, reclutamiento forzado, entre otros.

Hoy, el crimen organizado es la principal amenaza para la paz y la seguridad en Latinoamérica.

En tal sentido, la desaparición de personas y la impunidad generalizada que ampara esta grave violación de los derechos humanos todavía son uno de los mayores obstáculos para la paz en Latinoamérica. Y no nos referimos solo a las desapariciones ocurridas en conflictos armados o dictaduras del pasado que todavía desgarran a familias enteras, y cuyos mecanismos de verdad, justicia y reparación están sufriendo retrocesos; nos referimos también a aquellas desapariciones actuales, ya sea a manos de autoridades o de grupos criminales con connivencia de estas. Las desapariciones forzadas son, en 2025, una dolorosa y escandalosa realidad en países como Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, México y Venezuela. Las rutas migratorias, cada vez más peligrosas y dominadas por la criminalidad, son escenario crónico de desapariciones.

Los derechos humanos están en crisis en todo el mundo y Latinoamérica no escapa a esta tendencia. Es, de hecho, la región más peligrosa para ejercer su defensa, en particular para las mujeres y las personas afrodescendientes, indígenas y de la diversidad sexual. La defensa de la tierra y del territorio —es decir, al fin y al cabo, la defensa del medio ambiente— frente a megaproyectos o industrias extractivistas se ha convertido en una actividad de alto riesgo en un continente que, precisamente, cada vez está más afectado por el impacto del cambio climático.

La región, con toda su heterogeneidad, tampoco escapa al deterioro de los sistemas democráticos. Los altísimos niveles de corrupción y de colusión con el crimen organizado explican, en buena medida, esta tendencia. También el auge de los autoritarismos. Nicaragua se ha convertido en un régimen dictatorial con gravísimos ataques a los derechos humanos. En Venezuela se reporta una brutal represión, con detenciones, torturas, asesinatos y desapariciones de personas que buscaban un cambio democrático. Cuba es un país sin libertades políticas. En otros países, sobre todo en aquellos donde se decreta un estado de excepción, los contrapoderes al ejecutivo se desmoronan, lo que desmonta el Estado de derecho y deja a la intemperie los derechos y las libertades más básicas. Incluso en países como Guatemala, con perspectivas de mejoras democráticas, se denuncia la falta de independencia judicial, así como la criminalización y el hostigamiento de la oposición política, la prensa y los defensores de los derechos humanos.

En el ámbito social, el Banco Mundial reporta que, a pesar de los avances lentos, la pobreza cayó a su punto más bajo en 2023. Aun así, todavía está muy extendida en la región y afecta derechos básicos como la salud y la alimentación. El último informe anual de Amnistía Internacional denuncia que la inseguridad alimentaria afecta a millones de personas —incluso a niños— en Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Haití y Venezuela. El mismo Banco Mundial advierte, además, que Latinoamérica es una de las regiones más desiguales, con Brasil y Colombia a la cabeza. Numerosos movimientos sociales también denuncian que el racismo estructural, presente en buena parte del continente, reproduce estas desigualdades.

Y si el multilateralismo no es tendencia en el mundo, tampoco lo es en la región. En los últimos años se han observado mayores polarizaciones políticas y divisiones en la diplomacia continental, una disminución de los espacios de diálogo y un

debilitamiento de las organizaciones multilaterales. Esto hace aún más complicado abordar problemas compartidos, como el desarrollo económico, el desmantelamiento del crimen organizado, la gestión de la migración, la lucha contra el cambio climático y, ahora, la agresión comercial estadounidense.

A PESAR DE TODO, UNA REGIÓN COMPROMETIDA CON LA PAZ

En la búsqueda de la paz y los derechos humanos, Latinoamérica ha vivido episodios dramáticos, pero también es precursora de grandes aportaciones a la humanidad, ya sea en el ámbito conceptual, intelectual y espiritual, así como en la práctica y el desarrollo de propuestas para avanzar hacia realidades más justas y sostenibles.

Respecto al multilateralismo, la región ha sido capaz de llegar a grandes consensos que han contribuido a la paz y la seguridad regional e internacional. Por ejemplo, el primer acuerdo internacional de derechos humanos, que precede por unos meses a la Declaración Universal de Derechos Humanos, es americano. En 1967, con la firma del Tratado de Tlatelolco, Latinoamérica se configuró como zona libre de armas nucleares. Más recientemente, en 2014, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños proclamó a la región como “zona de paz” y reafirmó su compromiso por la solución pacífica de conflictos, el respeto al Estado de derecho y el desarme nuclear. A pesar de su impacto más simbólico que práctico, su vigencia se ha ido reafirmando, un gesto nada desdeñable en una región y un mundo impregnados de confrontación donde escasean compromisos como este.

Se debe recordar también que el germen de los mecanismos especiales de la ONU es latinoamericano, con el establecimiento de un relator —primero— y un grupo de trabajo —después— para examinar la situación de las personas desaparecidas tras el golpe de Estado en Chile. La valentía de las familias al presentar denuncias fue clave para detonar un cambio esencial en la entonces Comisión de Derechos Humanos y en el posterior desarrollo del sistema internacional de derechos humanos que hoy cubre al mundo.

La región también ha sido pionera en el ámbito de la justicia, con la implementación de una gran variedad de mecanismos para hacer frente a los crímenes del pasado y construir sociedades pacíficas: desde la creación de comisiones de la verdad e instrumentos de reparación y memoria, hasta procesos judiciales contra dictadores. Con todas sus debilidades, estas iniciativas han permitido transitar hacia democracias, dignificar a las víctimas y socavar, en cierta medida, la imperante cultura de la impunidad, pero también han inspirado procesos similares en otros países y han contribuido a fortalecer el concepto de justicia transicional.

Sin duda, el ejemplo más reciente es la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia, un modelo de justicia restaurativa que ubica el reconocimiento del sufrimiento de las víctimas en el centro del proceso y garantiza su participación, con un enfoque integral y estructural, así como una puesta en práctica interinstitucional. Con sus más y sus menos, el modelo se estudia en el mundo como base para posibles procesos similares. Otro experimento latinoamericano inédito fue la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, una entidad internacional independiente,

creada por un acuerdo entre el gobierno de Guatemala y la ONU, para investigar estructuras criminales incrustadas en el Estado.

Vale la pena mencionar también la estrategia de “paz total” de Colombia. Basada en negociaciones simultáneas con todas las partes y en transformaciones de carácter territorial, es de las más ambiciosas e innovadoras en los últimos tiempos. A pesar de que no ha podido evitar el repunte de la violencia, esta apuesta contrasta con las tendencias mundiales a la mano dura, así como al uso de la fuerza armada y la unilateralidad antes que la negociación.

Pero, sin duda, el gran capital que tiene Latinoamérica para enfrentar sus grandes desafíos en torno a la paz es su tejido social, al igual que el rico ecosistema de asociaciones y colectivos. A pesar de las grandes dificultades por los drásticos recortes financieros y la

La construcción de la paz es un esfuerzo de largo aliento que requiere un compromiso sostenido en el tiempo.

creciente fiscalización —y, en algunos países, la señalización y la represión—, la sociedad civil organizada no ha cesado de impulsar iniciativas transformadoras con una visión de paz.

Los movimientos sociales, como los feministas, decoloniales, afrodescendientes, campesinos y medioambientalistas, ponen en entredicho modelos de desarrollo excluyentes, reivindican derechos y proponen esquemas alternativos. Abundan las movilizaciones e impresiona la diversidad de méto-

dos creativos, simbólicos y noviolentos en la región. Los pocos ejemplos que se citan a continuación no hacen justicia a la gran cantidad de aportaciones que ha ofrecido el continente.

El reconocimiento del “buen vivir” en la Constitución de Ecuador en 2008 y del “vivir bien” en la de Bolivia en 2009, conseguidos gracias a la presión social —sobre todo indígena—, fortalecieron y ampliaron el concepto democrático. La repercusión internacional fue considerable, y han inspirado centenares de iniciativas que promueven una vida en armonía con la naturaleza y la comunidad, y que priorizan el bienestar colectivo sobre el individualismo y el crecimiento económico desmedido. En las elecciones de 2023, la movilización indígena de Guatemala desempeñó un papel crucial en la defensa de la democracia.

En el tema medioambiental, la articulación popular fue clave para que El Salvador adoptara, en 2017, una ley que prohibía la minería metálica, que lo llevó a ser el primer país en implementar una medida de este tipo (por desgracia, esta ley pionera fue revocada en 2024).

Los colectivos de víctimas también tienen una increíble capacidad de resiliencia y de movilización. Muchos de ellos se han constituido como verdaderos actores de construcción de paz y de transformación social. Las Madres y las Abuelas de la Plaza de Mayo, en Argentina, iniciaron un camino que muchas otras familias de desaparecidos han continuado. Las madres buscadoras de México, y de otros países latinoamericanos, son una de estas voces que se han convertido en un referente mundial a favor de la justicia y la paz para frenar el avance de la cultura de la violencia.

La construcción de la paz es un esfuerzo de largo aliento que requiere un compromiso sostenido en el tiempo, y en Latinoamérica este esfuerzo tiene una extensa trayectoria. En un momento de grandes desafíos mundiales y de desconcierto, los métodos tradicionales para construir la paz no están dando frutos. El mundo se encuentra ante la necesidad de generar otras visiones, estrategias, formas y diálogos, y, en tal sentido, Latinoamérica y su resiliencia son inspiradoras. Resiliencias interiorizadas a base de resistencias centenarias dan hoy valiosos aprendizajes: metodologías de diálogo (incluso los más improbables), de prevención de violencias, de construcción de comunidad, de mecanismos de seguridad colectiva, de documentación, archivo y procesos de verdad, de cuidados, de arte al servicio de la denuncia, y de sanación. En definitiva, experiencias que nos enseñan a habitar de otra forma el mundo, “un mundo donde quepan muchos mundos”. 



La construcción de la paz en México

Desafíos de la democracia y los derechos humanos en la coyuntura actual

✉ *Dolores González Saravia*

México vive un proceso de reconfiguración política y social a partir de la llegada al poder, en 2018, de un proyecto con amplio respaldo popular denominado “cuarta transformación”, con cambios e impactos que plantean nuevas posibilidades y retos para el establecimiento de condiciones democráticas, el pleno ejercicio de los derechos humanos y la construcción de la paz.

Sin embargo, en los años recientes, la polarización en el análisis de la realidad nacional, en la sociedad civil y en la academia, ha impedido avanzar en la construcción de una visión común en torno al diagnóstico y sus desafíos estratégicos. Si se trata de incidir más efectivamente desde estos espacios, es necesaria una lectura más dialogante e incluyente que permita identificar los matices y las diferencias no antagónicas, así como reconocer los elementos positivos, los obstáculos y los pendientes, para generar los cambios necesarios, a fin de crear marcos de entendimiento más plurales y sinergias más amplias en los procesos de transformación social.

Para abordar la complejidad del contexto actual en México, es necesario partir de un análisis estructural que ubique el momento histórico de crisis civilizatoria, de exacerbación de las contradicciones sistémicas y de incertidumbre sobre la manera en que habrán de resolverse.

DOLORES GONZÁLEZ SARAVIA es directora de una plataforma de pensamiento social estratégico en el Centro de Investigaciones de Economía Social y Solidaria de la Universidad Iberoamericana. Ha sido medidora en diversos conflictos sociales en México y fundadora de la Escuela de Paz Nacional. Cuenta con estudios en Economía y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es autora de dos manuales sobre diseño estratégico para la transformación positiva de conflictos.

LA DEMOCRACIA ACECHADA

Vivimos una etapa en la que el proceso de acumulación capitalista neoliberal se ha tornado cada vez más violento, menos coherente y, en muchos sentidos, contrario a la trama de la vida, debido a la expansión imparable del modelo extractivo, a pesar de las consecuencias catastróficas previsibles, a las enormes desigualdades de todo tipo, así como al crecimiento, la implantación y la diversificación de las economías criminal y de guerra altamente rentables.

Esta dinámica económica también define la crisis del modelo de democracia liberal y de derechos humanos en el mundo después de 30 años de una apuesta por la reducción del Estado, en particular de su función social y de su papel regulatorio, así como el acotamiento de lo público frente a lo privado, la prevalencia de lo particular frente al bien común, la competencia como el eje de las relaciones sociales y la ganancia como único propósito.

Así, el ámbito y la razón de la política han cambiado de forma sustantiva. Colonizada por intereses particulares, ha dado pie a nuevos liderazgos atípicos que, si bien los hay de distinto signo, predominan con una fuerte tendencia conservadora, incluyendo de ultraderecha, los cuales, desde prácticas autoritarias o populistas, prometen soluciones radicales e inmediatas a costa de los mecanismos democráticos y los derechos humanos. Un caso emblemático es el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, con la plutocracia a la cabeza del Estado, y otros emergentes en Europa y Latinoamérica.

De igual manera, el ámbito de la política se ha reducido. Los asuntos públicos se dirimen cada vez más en la arena judicial, mediática y del mercado. Hay una tendencia a judicializar los asuntos políticos (muchas de las decisiones gubernamentales, partidarias e incluso legislativas se llevan a los tribunales), lo que deja de lado la deliberación y la participación en los procesos de decisión. En la historia reciente de Latinoamérica, hay muchas evidencias del uso faccioso de la justicia como herramienta de los grupos de poder; tal es el caso de Brasil, Bolivia, Guatemala y Perú, por mencionar algunos ejemplos.

Por otra parte, las redes sociales y los medios de comunicación tradicionales han tenido un papel preponderante en la desinformación y la manipulación que, con enormes recursos y sin regulación alguna, han llevado a la polarización, la mentira o la posverdad, así como al miedo en el centro del debate público. Sus dueños desempeñan un papel decisivo en la vida política de la sociedad actual. La polarización ha derivado en escenarios de decisión plebiscitarios sin posibilidades de explicar, matizar o discernir sobre las alternativas. Aunque hay muchos ejemplos al respecto, el caso de Elon Musk es alarmante.

También destacan la presencia y la influencia de otros actores en la vida pública, como las élites económicas o los grupos criminales, con una importante capacidad de captura corporativa o criminal de poderes públicos. Esta es, sin duda, la mayor amenaza para una verdadera democracia.

RADIOGRAFÍA MEXICANA

En México, como en otros países, por varias décadas se gestó un malestar con la política y con el aparato estatal que sirvió para beneficiar a unos cuantos en detrimento del

bienestar de los sectores populares. La violencia estructural y la desviación del poder público propiciaron una ruptura del consenso social frente a la élite política incapaz de proteger, en lo más elemental, la integridad y la seguridad de las personas, así como las condiciones de vida y el trabajo digno. Se conformó, entonces, una nueva mayoría que se ha ido articulando de manera gradual en el proyecto de la cuarta transformación.

Este nuevo proyecto de país no propone transformaciones estructurales o antisistémicas. Es un proyecto reformista y progresista, que considera transformar la situación en el marco del sistema. Se asume “antineoliberal” y se plantea la gestión de lo posible para contener los excesos del capital, aumentar el espacio de lo público y promover la redistribución de la riqueza social. Por su historia y composición, la ejecución del proyecto está inmersa en numerosas tensiones y contradicciones entre los diversos intereses de la vida económica y social del país.

México es la decimotercera economía del mundo; sin embargo, a lo largo de su historia se ha encontrado entre los países más desiguales y, por muchos años, el diseño de las políticas públicas profundizó las múltiples brechas de desigualdad y favoreció tributariamente a los más acaudalados. Así, puede decirse que México es un país rico por la magnitud de su economía, de renta media por su nivel de desarrollo y pobre por su ingreso público. En este difícil escenario, se han puesto en marcha los ejes del gobierno del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que aspira a una política económica más redistributiva.

Por un lado, se plantea un proyecto de “prosperidad compartida” o “prosperidad con bienestar”, cuyas políticas públicas y acciones de gobierno apuntan en ese sentido en varios rubros: el aumento del salario mínimo, que en estos años pasó de 88 a 278 pesos diarios y hoy se encamina hacia la reducción de la jornada laboral; las transferencias sociales, es decir, apoyos a diversos grupos con necesidades específicas que tienen un impacto directo en 30 millones de familias; los planes de justicia para los pueblos indígenas, a fin de restituir y mejorar sus condiciones de reproducción material y cultural, así como las obras estratégicas en el sur del país —históricamente empobrecido— como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec —que conecta el golfo de México con el océano Pacífico— y la refinería Dos Bocas. Además, se impulsan un sistema de cuidados y una agenda para la igualdad sustantiva de las mujeres.

En conjunto, todas estas medidas lograron reducir los niveles de pobreza y de desigualdad, así como generar una percepción de mayor justicia social y dignificación de los sectores populares, y, con ello, la reivindicación y la adhesión al proceso y al proyecto de las personas que se han sentido favorecidas.

Por otro lado, hay una apuesta por el modelo de economía extractiva, articulado en el sistema capitalista mundial, ahora con mayor intervención y regulación pública: la política energética como pieza clave del proyecto distintivo de este gobierno, el Plan México, que impulsa un proceso de transición energética y la rectoría del Estado en el sector; la atracción de inversión extranjera directa en el marco de la deslocalización cercana (*nearshoring*), así como la construcción de una amplia red de infraestructura y de transporte para trasladar mercancías. Si bien se toman algunas medidas para acotar la explotación minera, el uso de transgénicos, la fracturación hidráulica y las concesiones

de agua, y para generar el crecimiento de áreas naturales protegidas con un enfoque de protección ambiental, el carácter desarrollista y extractivista de este proyecto sigue produciendo un deterioro constante de los ecosistemas y de la vida comunitaria.

Además, el momento mexicano está atravesado por la presencia de las estructuras criminales en todos los ámbitos de la vida pública. La economía criminal es cada vez más versátil, flexible y diversa, y, para operar, requiere altos niveles de implantación territorial, articulación comercial, influencia social, protección y colusión, sobre todo de los poderes locales y policiales. La forma en la que se ha arraigado en los tejidos económico, político y cultural plantea retos de enorme complejidad para su combate y erradicación.

Lo cierto es que esta compleja dinámica económica ha permitido continuar el proceso de hiperacumulación de la riqueza, pues las fortunas de los ultrarricos se han duplicado en los años recientes, ante la ausencia de una reforma fiscal progresiva y una orientación diferente de la economía que contribuyan a un esquema de mayor justicia económica y climática.

LA ERA MORENISTA

A pesar de sus contradicciones y limitaciones, durante los últimos años, el gobierno morenista ha logrado una mayor penetración en la base social al reconocer y reivindicar las demandas de numerosos actores sociales, con organizaciones débiles o insuficientes, que se sintieron representados en el liderazgo de este movimiento, primero en la figura del expresidente Andrés Manuel López Obrador y luego de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con un creciente sentido de pertenencia que sentó las bases de una nueva hegemonía política en el país.

Los resultados electorales y su avance en el mapa gubernamental y parlamentario son contundentes. Su representación política es, por ahora, incontestable. La mayoría de Morena y la coalición que encabeza es abrumadora, salvo quizá en el orden municipal, donde los poderes locales mantienen mayores niveles de pluralidad, aunque también de captura por los poderes fácticos.

La llamada cuarta transformación es el gran referente en torno al cual se ordenan el discurso, el programa y el horizonte. Todos los días, en un ejercicio de comunicación y pedagogía política, una conferencia de prensa y un proceso de masas organizativo-formativo denominado “la revolución de las conciencias” perfilan la guía política para sus instituciones y sus adherentes. Además, la conferencia dicta los temas centrales de la agenda para todos los actores de la vida pública.

A fin de alcanzar este anclaje y expansión, se construyó una identidad que encuentra el consenso de grandes segmentos de la población respecto a nuevos sentidos comunes en la lectura de la realidad, nociones y valores compartidos que se expresan en frases cotidianamente repetidas como “por el bien de todos, primero los pobres”, “terminar con los privilegios”, “austeridad republicana”, “no podemos tener un gobierno rico con un pueblo pobre”, “separar el poder político del poder económico”, “humanismo mexicano”, “es tiempo de mujeres”, “las personas migrantes son héroes y heroínas”, y otras ideas que le dan contenido y pensamiento común.

Se mide frente a la noción de un adversario, la “oligarquía conservadora”, “los neoliberales del viejo régimen”, “los grupos de interés” que aparecen en la crítica al gobierno, en la oposición parlamentaria, en la resistencia a las decisiones gubernamentales, en las organizaciones de la sociedad civil, fundaciones u otros actores internacionales, en la academia, en los comunicadores críticos adversos al proyecto y, ahora, en el gobierno de Trump, que atenta contra la soberanía nacional y los migrantes; todos ellos cuestionados en sus motivos y en su legitimidad. De manera general, ha logrado desarticular cualquier liderazgo o referente de oposición que pudiera ser un rival significativo.

En el escenario político general, la cuarta transformación se ubica en el centro. Desde ahí dialoga con los distintos sectores, tanto empresariales como de movimientos sociales, con personajes relevantes nacionales o internacionales, con los partidos a su derecha o movimientos a su izquierda, integrando a sus filas a muchos de estos dirigentes políticos y sociales.

Uno de los rasgos principales de este proceso ha sido el centralismo político, que tiene como eje a la titular del poder ejecutivo federal. En torno a la figura de la Presidenta se da un cierto disciplinamiento político que incluye a las entidades federativas y los municipios, así como a sus legisladores y a sus seguidores. Hay diferencias y tensiones; sin embargo, por ahora se mantiene una cohesión suficiente para dar viabilidad política al proyecto.

El gobierno morenista ha generado una forma de ejercicio del poder público y ha aprobado una serie de reformas institucionales que apuntan a la edificación de un nuevo régimen político, lo que implica cambios en las instituciones, las prácticas y los valores.

Considerando el panorama en su conjunto, todavía está por verse cuál será el resultado final de este proceso. Por ahora, están en la mira la controvertida y audaz elección de los juzgadores y ministros del poder judicial, la propuesta —todavía en discusión— para modificar la forma de representación de las minorías parlamentarias, y la disolución de algunos órganos autónomos de control interno, por ejemplo. Del otro lado, el reconocimiento del derecho a la libre determinación y la autonomía de pueblos y comunidades indígenas, el derecho a la consulta, así como la revocación de mandato, son señales disímolas para imaginar la reconfiguración del poder público en México.

LA SOCIEDAD CIVIL

Los movimientos sociales y civiles, por su parte, enfrentan grandes retos. Algunos son internos, como la fragmentación y la desarticulación, o la dificultad para conciliar las visiones sobre la coyuntura y la cuarta transformación y, por lo tanto, las diferencias estratégicas para avanzar en las agendas sociales.

Como en otras experiencias de gobiernos progresistas, un sector del movimiento social limita su independencia y su autonomía al encontrar afinidad con los postulados y contenidos del proyecto de gobierno. Claramente, disminuyó la conflictividad social en este periodo.

Los movimientos sociales tradicionales que tienen una agenda de lucha vinculada a la distribución de recursos, la incidencia en decisiones públicas y la representación —como los sindicatos, las organizaciones campesinas, los sectores urbano-populares y las organizaciones tradicionales indígenas— han establecido, en su mayoría, una relación más colaborativa con el gobierno de diálogo y de negociación, sin confrontación.

Otros movimientos emergentes —como las diversas vertientes feministas, los ambientalistas y los defensores del territorio, las víctimas de la violencia, la lucha contra el colonialismo y el racismo, los migrantes, al igual que los proyectos autogestivos o autonómicos—, que tienen planteamientos que prefiguran y apuestan por la construcción de nuevas relaciones sociales, económicas, ambientales y culturales, lo hacen desde la construcción de un poder propio y un horizonte civilizatorio alterno.

En algunos casos, estos actores abrieron procesos de diálogo y de negociación para hacer posible que sus agendas se lleven a cabo, pero, en general, se hicieron presentes desde una lógica de interpelación al Estado y de movilización social. Esa es la experiencia de las madres buscadoras —familiares de personas desaparecidas—, y la exigencia de verdad y de justicia para los 43 estudiantes de Ayotzinapa, así como de las resistencias a los megaproyectos, las marchas del 8M, las acciones de visibilidad y de organización del zapatismo, y la estrategia de “lo común”, entre otras.

Los procesos y los actores alineados a la derecha que tuvieron capacidad de articularse y de movilizarse en varios momentos para cuestionar decisiones estatales, y generar una voz pública potente, han alcanzado, en algún punto, una confluencia importante de actores sociales y partidarios. No obstante, los resultados electorales fueron una señal inequívoca de su derrota política como alternativa frente a Morena.

Finalmente, está el caso de las organizaciones de la sociedad civil, un sector muy amplio, plural y heterogéneo que se fue quedando descolocado ante el cuestionamiento de su papel, función y legitimidad. Se han llevado a cabo varios procesos de reflexión colectiva, y convergencia temática y sectorial, tendientes a identificar las rutas de acción, así como los posibles acuerdos para la acción social compartida y el replanteamiento de su ser y quehacer.

Sin embargo, no son menores los desafíos que enfrentan para construir agendas, alianzas, y estrategias pertinentes y eficaces en las actuales condiciones: el debilitamiento nacional e internacional del andamiaje institucional de derechos humanos, los riesgos por la violencia en los territorios y el aumento de las agresiones a personas defensoras y periodistas por las redes de colusión delincuencia, nuevos marcos jurídicos y fiscales más restrictivos, la reducción de fondos para operar, al igual que la dificultad para posicionarse fuera de la polarización política y desde el pensamiento crítico.

La cuestión es cómo remontar el punto muerto y cómo modificar la estrategia de relación con el Estado para propiciar procesos productivos, al mismo tiempo que se

*El momento mexicano está
atravesado por la presencia
de las estructuras
criminales en todos los
ámbitos de la vida pública.*

mantiene el espíritu crítico y su autonomía, con un anclaje en los procesos sociales de base. Asimismo, cómo proponer narrativas para fortalecer miradas de esperanza como el factor movilizador y hacer presencia desde la lógica de habitar los procesos, más que gobernarlos, así como establecer vínculos basados en la ética del cuidado y la solidaridad.

OPORTUNIDAD TRANSFORMADORA

Este es un momento de claroscuros, con oportunidades y amenazas, de luces y sombras. A fin de impulsar procesos de construcción de la paz y defensa de derechos humanos en este escenario de complejidad y de fragmentación, es necesaria una mirada fina, de largo plazo y amplio espectro, para abordar los desafíos expuestos. Hay que redefinir identidades y tareas de las organizaciones de la sociedad civil, reconociendo los cambios que se han dado en las dinámicas del contexto, en los temas, en los actores institucionales y sociales, en las formas de relación y alianzas nacionales e internacionales, al igual que en las correlaciones sociales y políticas, para actuar en consecuencia.

No será posible dar un salto cualitativo sin trabajar y construir lo común en torno a los paradigmas civilizatorios que orientan el rumbo y la profundidad del proceso transformador hacia un horizonte de esperanza, de paz justa y digna, para diseñar estrategias creativas con propuestas integrales y de largo alcance.

Necesitamos reconceptualizar la democracia, la paz y los derechos humanos a la luz del presente y las tendencias que apuntan al futuro posible, así como afirmar imágenes de cambio desde distintos lugares y experiencias de diálogo horizontal en varias escalas, y combinar las experiencias que encarnan nuevas pautas civilizatorias con las luchas por las condiciones que posibilitan su transcendencia, habitando estos procesos. En realidad, el futuro de la democracia dependerá de la capacidad social de establecer un nuevo modelo de organización y regulación política que represente y ponga al centro el interés social, basada en los valores no solo de la democracia participativa, sino de la justicia, la equidad, la autonomía, la diversidad, la sustentabilidad y el cuidado de la vida en todas sus expresiones, desde una noción del bien común y la comunalidad.

En este sentido, la crisis civilizatoria, y el conflicto estructural que entraña, también se convierten en una oportunidad de transformación civilizatoria. **N**

Mundo



EFE/KYODO

Los presidentes sudamericanos Gabriel Boric (Chile), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Gustavo Petro (Colombia) sostuvieron un encuentro con su homólogo chino, Xi Jinping, en el marco de la Cuarta Reunión Ministerial del Foro China-Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada en Beijing el 13 de mayo de 2025. Además del tema de la integración comercial entre el gigante asiático y la región latinoamericana, los mandatarios ahondaron en la necesidad de apostar por el multilateralismo y de reformar el sistema de gobernanza global.

Derechización en Latinoamérica

¿Progresismo o fascismo?

✎ *Ernesto Samper Pizano*

La Segunda Guerra Mundial terminó con un acuerdo de convivencia entre sus ganadores, que incluía la creación del sistema multilateral de la Organización de las Naciones Unidas, un modelo de desarrollo que, siguiendo las orientaciones keynesianas, garantizaba la presencia simultánea del Estado y del mercado como actores económicos, y la democracia como la cancha de juego donde se enfrentarían los partidos con diversas alternativas de cambio, más políticas que ideológicas. En Latinoamérica, estos acuerdos se reflejaron en el modelo cepalino de desarrollo, que privilegiaba el proteccionismo comercial externo en aras de la sustitución interna de importaciones, y lo social se manejaba en función de la satisfacción de las necesidades básicas de los más pobres en términos de alimentación, salud, educación, vivienda y servicios públicos domiciliarios, mediante procesos de focalización de los recursos fiscales. La libertad al servicio de la satisfacción universal de la necesidad, en lo propuesto por Amartya Sen, se convirtió en el eje ideológico del modelo.

En el cuarto final del siglo xx, los mismos organismos económicos creados por el sistema de Bretton Woods, como parte de los acuerdos de la posguerra, impusieron un nuevo modelo de desarrollo económico regional centrado en el mercado. Se cambió el principio neoclásico del valor como determinante del precio por el del precio de mercado como referente del valor. La apertura económica internacional se convirtió en el eje rector de las transformaciones productivas internas. Los procesos sociales quedaron subordinados a las exigencias de las políticas de estabilización

ERNESTO SAMPER PIZANO fue Presidente de Colombia (1994-1998) y Secretario General de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) (1994-1998). Actualmente es miembro de la Junta Directiva del Centro del Sur, organismo de las Naciones Unidas con sede en Ginebra. Es abogado y economista, y ha sido una figura clave en el trabajo por la integración de Latinoamérica y la búsqueda de la paz en Colombia. Sígalo en X en @ernestosamperp. Este artículo se basa en la conferencia impartida por el autor en el Instituto Nacional de Formación Política del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Ciudad de México, el 30 de abril de 2025.

macroeconómica, y el concepto del orden social —según el cual el hombre solo puede ser libre en una sociedad ordenada, y la sociedad solo se ordena al seguir las leyes del mercado (Friedrich Hayek)— sustituyó el de la necesidad dentro de la libertad como columna de los nuevos proyectos de desarrollo latinoamericanos (Sen).

POLÍTICA SIN POLÍTICOS

La aparición de fenómenos asociados con esta neoliberalización —como la concentración del capital, la corrupción en el sector público y la deslegitimación social de la democracia, entre otros— alteraron los acuerdos de convivencia de la posguerra. La proliferación de proyectos de gobierno progresistas a inicios del siglo **xxi**, como los del socialismo democrático en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador, no pudo evitar que en varios países de la región aparecieran propuestas de derecha apoyadas en construcciones autocráticas por medio de las cuales grupos, clases o sectores asumían la dirección moral e intelectual de los gobiernos, y determinaban sus metas y valores (Antonio Gramsci). Estas primeras manifestaciones de ideologización política coincidieron con el debilitamiento de los partidos políticos tradicionales y la aparición de poderes fácticos que, desde la derecha, llenaron los espacios de representación que dejaron los partidos progresistas como intermediarios de las reclamaciones colectivas de cambio desde el siglo **xix**. Este sistema representativo de gobierno ya enfrentaba una crisis de legitimidad por los sistemas presidencialistas latinoamericanos, que mezclaban fallas del modelo presidencial estadounidense con vestigios monárquicos de España. El presidencialismo latinoamericano se mantiene, hasta hoy, por una perversa relación clientelista y corrupta entre el poder ejecutivo y los parlamentarios que ignora las diferencias propias de estos sistemas en los cuales sí funciona el binomio gobierno-oposición.

Esta crisis de los partidos políticos los llevó a abandonar la representación de sus electores, lo cual le quitó la legitimidad a la política y abrió el camino para que los medios de comunicación promovieran a los líderes “antipolíticos” como los nuevos voceros contestatarios de la democracia. Como el café sin cafeína, la leche sin lactosa y la cerveza sin alcohol, la región vio prosperar a nuevas figuras externas (*outsiders*) identificadas con la derecha que ejercían la política y presumían no ser políticas. Los espacios abandonados por los líderes políticos tradicionales comenzaron a llenarse con poderes fácticos que hacían política, pero sin responsabilidad política. Conglomerados económicos, grupos comunicacionales, gremios patronales, organizaciones no gubernamentales, sectas, iglesias y prelados, antiguos militares, empresas de certificación internacional de países, algunos jueces y fiscales protagónicos, técnicos neoliberales: toda una constelación de nuevos actores políticos.

EL FANTASMA DE LA DESIGUALDAD SOCIAL

Mientras esto sucedía en el plano político, el panorama social se deterioraba. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, los niveles de

desigualdad existentes al inicio del siglo **xxi** se profundizaron a partir de 2016 y aumentaron durante la pandemia de covid-19 en hasta 209 millones de pobres. En la práctica, la desigualdad social se convirtió en una forma de deslegitimación de la democracia. A medida que aumentaba la inequidad social, disminuía la libertad y, con ella, la legitimidad de la democracia (Sen y Thomas Piketty). En Latinoamérica, la desigualdad no es un proceso, sino una construcción económica, histórica, cultural y legal que se origina en la discriminación cultural y la exclusión social de muchos años. Como en otras partes del mundo, los últimos proyectos progresistas latinoamericanos se han concentrado más en la reducción de las brechas de discriminación de minorías sociales por razones de sexo, raza u ocupación laboral que en la exclusión social por clases, que resulta de las inequitativas condiciones de distribución del ingreso y su relación con las condiciones colectivas de reparto de la propiedad.

La derecha critica la preocupación por cerrar las brechas de la discriminación argumentando que el progresismo, mediante esta defensa compartimentalizada de las minorías que ellos denominan *wokismo* (de *wake up*, despertar), está desintegrando el concepto colectivo que supone la idea de una sociedad. En la realidad, la lucha contra la discriminación que libran los sectores progresistas se explica como la reivindicación de unos derechos sociales que constituyen la base para el ejercicio de los derechos políticos (Susan Neiman). Este reclamo ayuda a esconder el tribalismo fascista de sexistas, racistas, clasistas y nacionalistas contra el universalismo progresista, el cual alimenta una propuesta de solidaridad colectiva contra la desigualdad y la discriminación, que no son opuestas, sino complementarias, como dos hermanas mellizas. En el fondo, se trata de distinguir entre el concepto “libertario” de libertad individual —la de Javier Milei para que cada persona haga lo que le dé la gana— y la que predicaban movimientos sociales y políticas progresistas —que se asocia con la búsqueda de la igualdad social para todos los ciudadanos como parte de una sociedad, esa sí, libre—.

Los gobiernos de derecha mantienen mecanismos que reproducen esta desigualdad e, incluso, la deterioran, como la obstrucción de la movilidad educativa —según la cual a más educación pública, mayor ascenso en la posición social—, la baja fiscalidad en una región donde los ingresos tributarios representan 21.5% del PIB, frente a los países de la Organización donde pesan 34% (informe “Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2025”, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), así como la alta informalidad de millones de empleos sin garantías de estabilidad, que representan 47.6% del mercado laboral (informe “Avances en el empleo en América Latina y el Caribe son insuficientes”, de la Organización Internacional del Trabajo).

La amenaza fascista de un gobierno en medio de la desigualdad social que afecta la legitimidad real de la democracia va acompañada de la pérdida de su legitimidad formal, que la derecha mantiene cuestionada al denunciar supuestos fraudes en todos los procesos electorales, como lo ha hecho recientemente en Colombia, Ecuador, Honduras y México. Este fenómeno de la pérdida progresiva de la legitimidad democrática se refleja en las encuestas de opinión. En 2023, solo 48% de los ciudadanos en la región apoyaba la democracia, frente a 63% en 2010, mientras que el apoyo al autoritarismo pasaba de 13% en 2020 a 17% en 2023 (Latinobarómetro 2023).

EJE MORAL VS. EJE SOCIAL

El cambio de signo ideológico en elecciones presidenciales recientes, como las celebradas en Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Panamá y Paraguay, se explica por el giro pendular de los partidos en el gobierno, pero, sobre todo, por una peligrosa radicalización de los proyectos políticos locales en juego, la polarización ideológica que se mueve en las redes sociales, la judicialización de la política (*lawfare*), la profundización de las condiciones de desigualdad social y las denuncias de supuestos fraudes en los procesos electorales.

Carl Schmitt, ideólogo de la derecha radical —activista nazi—, fue el primero en proponer que los programas de la derecha se presentaran en clave de amigos-ene-migos y emociones negativas-emociones positivas, a fin de distinguirlos con claridad de los de la izquierda. La adopción de un eje moral para dividir a los electores en buenos (a favor) y malos (en contra) difiere de la tendencia progresista que se apoya en un eje social que divide el mundo entre pobres y ricos. Como motor de cambio, la derecha recomienda procedimientos autocráticos y el progresismo, procedimientos democráticos. Con la concentración económica de los medios de comunicación y el surgimiento de las bodegas digitales a su servicio, la diferenciación ideológica entre buenos y malos escala a niveles de polarización que reducen las alternativas políticas a la confrontación de los extremos del espectro ideológico. Con la aparición de la inteligencia artificial, surge la posibilidad de segmentar los mensajes en función de los miedos selectivos de los potenciales electores, mediante complejos algoritmos que bombardean digitalmente a los ciudadanos con mensajes que refuerzan sus convicciones, alimentan sus ilusiones o confirman sus miedos. Las bodegas digitales se convierten, así, en verdaderos directorios políticos de quienes apoyan a líderes virtuales y actúan como “zombis digitales” al servicio del olimpo mediático —como lo menciona Irene Lozano en *Son molinos, no gigantes* (2020)—, donde la hiperinformación alimenta el síndrome de la confirmación del mundo “me gusta”. A medida que aumenta la

información, disminuye la atención, con el agravante de que todo ocurre al mismo tiempo, sin dejar espacio para una reflexión epistemológica sobre lo que es verdad y lo que es mentira. Se trata de una forma de populismo digital que, al aumentar la velocidad de la información, la hace menos creíble (Susan Sontag).

La radicalización de las redes sociales actúa de manera directa en los jóvenes, quienes en Latinoamérica están conectados a ellas, en promedio, entre 3 y 4 horas al día, durante las cuales les venden cambios virtuales presentados de forma más emocionante que los cambios reales planteados por los líderes políticos tradicionales. Muchas bodegas fascistas utilizan un lenguaje violento para sus mensajes —comunistas, narcotraficantes, apuestos, terroristas, demonios—, que consigue que la violencia en línea se convierta en violencia real (Maria Ressa, premio Nobel de la Paz en 2021).

*Como motor de cambio,
la derecha recomienda
procedimientos autocráticos
y el progresismo,
procedimientos democráticos.*

Se trata de una violencia simbólica a partir de una apología de la autodestrucción que justifica la deshumanización del otro (Ariel Goldstein).

La polarización ideológica se intensifica porque los influenciadores de derecha se benefician de la amplia audiencia de los grandes medios de comunicación que, a su vez, desorientan o manipulan publicando solo lo negativo o invisibilizando a quienes consideran sus enemigos. Estas matrices informativas autoritarias alimentan patologías fascistas, como el caudillismo, el mesianismo o la paranoia, que en el pasado lideraron procesos de derechización de la política hasta llegar a las dictaduras.

JUDICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA

A la invasión digital de lo político se suman nuevas prácticas disruptivas, como la judicialización de la política (*lawfare*). Las diferencias partidistas regionales se han trasladado de los escenarios democráticos a los estrados judiciales. Muchos jueces y fiscales, animados por pasajeros protagonismos mediáticos, se han prestado para dirimir estos enfrentamientos políticos sin respetar el derecho al debido proceso de los implicados, como el principio de la presunción universal de inocencia.

En virtud de esta práctica, Luiz Inácio Lula da Silva fue “secuestrado” judicialmente para que no pudiera presentarse a las elecciones contra Jair Bolsonaro en 2018. El Presidente brasileño acaba de ser absuelto por el Supremo Tribunal Federal, que ahora procesa a Bolsonaro por intentar un golpe de Estado a fin de impedir que Lula da Silva, elegido democráticamente, se posesionara.

La judicialización de la política está llevando a la politización de la justicia, con impredecibles daños institucionales y sociales porque, además de producir un perjuicio jurídico a la persona acusada, debilita sus posibilidades de gobernabilidad por medio de “golpes blandos de Estado” —como el intentado contra el presidente Gustavo Petro en Colombia—, y ocasiona un daño reputacional a las víctimas y sus familias que puede demorar muchos años en desvanecerse.

DESEMBARCO IDEOLÓGICO

Mientras todo esto sucedía en Latinoamérica, el partido Vox en España preparaba un desembarco espiritual, ideológico y político de Europa en el mundo progresista latinoamericano, inspirado en las ideas de José Antonio Primo de Rivera, motivado por el rastro aún vivo del franquismo, honrando las fuentes esenciales del fascismo ibérico del continuismo, el confesionalismo y el elitismo (José Ortega y Gasset), y decidido a sembrar el mismo odio que más tarde se convertiría en violencia, según Baltasar Garzón. Atendiendo la consigna “la política es la guerra” de su máximo líder, Santiago Abascal, los fascistas europeos empezaron a subir al nuevo barco de negra bandera. La gente de Marine Le Pen en Francia, el partido Ley y Justicia de Polonia, la Unión Cívica Húngara (Fidesz), dirigida por Viktor Orbán, y los Hermanos de Italia —hijos de la primera ministra Giorgia Meloni y nietos de Benito Mussolini—, articulados por la Fundación Disenso española, bautizaron como Iberoesfera a su

operación demencial de reconquista —como lo explica Goldstein en su artículo “La reconquista autoritaria” (2022)—.

Este proyecto fue consignado en la Carta de Madrid, que empieza por considerar a Iberoamérica como una región secuestrada por regímenes totalitarios de inspiración comunista, apoyados por el narcotráfico, bajo el paraguas de Cuba, el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla, que tuvo el honor de coordinar hasta enero de 2025. Por sus propuestas los conocerás: justicia punitiva, criminalización de la protesta social, estigmatización de los migrantes, populismo nacionalista, racismo, sexismo, clasismo, impuestos regresivos, nada verde, cero vacunas, la supremacía de la seguridad de Estado, y no perder nunca de vista las indicaciones de Estados Unidos (*respeice polum*).

Las acciones del desembarco se valorizaron con la elección de Donald Trump para su segundo mandato y la acogida entusiasta de Florida como base de lanzamiento de la propuesta para Latinoamérica, cuyo venturoso arribo estaban esperando Mario Díaz-Balart, Marco Rubio y Rocío Monasterio con la Fundación Heritage del Partido Republicano, considerada el azote del feminismo (Goldstein). Además, como aporte a la nueva semilla fascista, Florida ofreció la mayor concentración de enemigos de Cuba y Venezuela en el mundo, y la disposición de 30% de los funcionarios del nuevo gobierno de Trump para sumarse a su heroica epopeya.

“A Estados Unidos no le interesa Latinoamérica”, declaró Trump al inicio de su segundo mandato, recordando las acciones de su primer periodo de gobierno, cuando inició la construcción del fatídico muro en la frontera con México, anunció la persecución de los migrantes latinoamericanos —que hoy se ha convertido en la columna vertebral de su política externa—, retiró a Estados Unidos del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, patrocinó una invasión militar frustrada en Venezuela, combatió las vacunas en medio de la pandemia de covid-19, nombró por primera vez en 60 años a un estadounidense como Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, apoyó la desintegración de la Unión de Naciones Suramericanas para remplazarla por un club ideológico de gobiernos de derecha —el Foro para el Progreso de América del Sur, que no sobrevivió al final de su mandato—, y apoyó, por medio de la Organización de los Estados Americanos y su obsecuente Secretario General, Luis Almagro, el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia.

Entre los patrocinadores del macabro proyecto destacan Nayib Bukele en El Salvador; Andrés Pastrana en Colombia; Leopoldo López en Venezuela; el fujimorismo en sintonía con los bancos, los caviares neoliberales y el Opus Dei en Perú; la derecha pinochetista en Chile; el bolsonarismo militarista y cristiano en Brasil; Milei en Argentina, y El Yunque, después de “comerse” al Partido Acción Nacional en México.

La agresividad antilatinamericana del trumpismo, así como el silencio cómplice de sus amigos en la región, se han demostrado con las decisiones adoptadas durante los primeros 100 días del nuevo gobierno de Estados Unidos, como la persecución de los migrantes latinoamericanos; la desintegración de sus familias, y la violación de las leyes y los acuerdos migratorios que los protegen; el aumento arbitrario de los aranceles para todos los países de la región; la suspensión de los programas humanitarios

regionales y de asistencia social de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que llegaban a 44 000 millones de dólares anuales; la absurda reivindicación de derechos territoriales sobre Canadá, el golfo de México y Panamá; la ratificación de sanciones unilaterales contra Cuba y Venezuela, y la clara discriminación de Trump entre gobiernos amigos y enemigos por razones ideológicas. El Presidente estadounidense y sus amigos en la región han conseguido el regreso del odiado Tío Sam de la década de 1950 y la Operación Cóndor de la de 1960, que instaló las dictaduras militares en el sur del continente.

Para responder a esta amenaza, hay que avanzar en la construcción de un nuevo modelo solidario de desarrollo económico que remplace el desacreditado modelo neoliberal con una nueva propuesta generadora de crecimiento sostenible, inclusión social y ciudadanía, así como en la organización de frentes amplios de resistencia popular, como el que logró conformar el Movimiento Regeneración Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum en México, y el del presidente Yamandú Orsi en Uruguay, todo ello para reintegrarnos regionalmente como parte del Sur global, a cuya familia pertenecemos: *respice similia*, mira a tus vecinos.

PROGRESISMO: CAMINO A SEGUIR

Las decisiones que está tomando la derecha trumpista en el mundo —como la renuncia a la Organización Mundial de la Salud, el incumplimiento de los compromisos adquiridos para el alivio del cambio climático, y la persecución de los fiscales de la Corte Penal Internacional que investigan la conducta genocida del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en la Franja de Gaza— acelerarán el proceso de desglobalización. El modelo de convivencia resultante del final de la Segunda Guerra Mundial no se sustituirá por otra hegemonía, como piensan algunos. Es un hecho que a China no le interesa gobernar el mundo, aunque sí tiene la firme intención de luchar para que el nuevo orden internacional siga los principios milenarios de su relación con los otros países, como la paz, la convivencia social y la prosperidad económica colectiva.

En este nuevo escenario, Latinoamérica deberá presentarse integrada como una sola voz y afirmar en su discurso conceptos como el racismo, el sexismo, la xenofobia y el machismo, cuestionando la prohibición del libre pensamiento, la obstrucción de la investigación científica y las tesis eugenésicas hacia las cuales apunta hoy el peligroso proceso de derechización que vive la región. Latinoamérica no necesita esperar a que haya campos de concentración de migrantes —como los de los nazis— para entender que ese camino lleva directo al abismo fascista, y que el único antídoto para no caer en él es, y será siempre, el progresismo. ㊦

Las guerras comerciales son fáciles de perder

Beijing domina la escalada en la lucha arancelaria entre China y Estados Unidos

 *Adam S. Posen*

Cuando un país (Estados Unidos) está perdiendo muchos miles de millones de dólares en el comercio con casi todos los países con los que hace negocios, “las guerras comerciales son buenas, y fáciles de ganar”, tuiteó célebremente el presidente estadounidense Donald Trump en 2018. A inicios de abril de 2025, cuando su gobierno impuso aranceles de más de 100% a las importaciones estadounidenses procedentes de China, lo que desencadenó una nueva y aún más peligrosa guerra comercial, el Secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ofreció una justificación similar: “Creo que fue un gran error esta escalada china, porque están jugando con un par de dos. ¿Qué perdemos nosotros si los chinos nos aumentan los aranceles? Les exportamos una quinta parte de lo que ellos nos exportan, así que es una mano perdedora para ellos”.

En resumen, el gobierno de Trump cree que tiene lo que los expertos en la teoría de juegos llaman “dominio de la escalada” sobre China y sobre cualquier otra economía con la que tenga un déficit comercial bilateral. En palabras de un informe de la Corporación RAND, el dominio de la escalada significa que “un combatiente tiene la capacidad de escalar un conflicto de maneras desventajosas o costosas para el adversario, mientras que el adversario no puede hacer lo mismo a cambio”. Si la lógica del gobierno de Estados Unidos es correcta, entonces Canadá, China y cualquier otro país que tome represalias contra los aranceles estadounidenses está jugando, en efecto, una mano perdedora.

Sin embargo, esta lógica es errónea: es Beijing quien tiene el dominio de la escalada en esta guerra comercial. Estados Unidos recibe bienes vitales de China que no pueden sustituirse a corto plazo ni fabricarse en el país a un costo que no sea prohibitivo. Reducir esa dependencia puede ser una razón para actuar, pero lanzarse a la

ADAM S. POSEN es Presidente del Peterson Institute for International Economics. Sigalo en X en @AdamPosen.

guerra actual sin antes preparar la batalla es una condena a la derrota casi segura, a un costo enorme. Dicho en términos de Bessent: es Washington, y no Beijing, quien está apostando todo a una mano perdedora.

MUESTRA TU MANO

Las afirmaciones del gobierno estadounidense son erróneas en dos aspectos. Por un lado, ambas partes resultan perjudicadas en una guerra comercial, porque las dos pierden acceso a cosas que sus economías quieren y necesitan, y por las cuales sus ciudadanos y empresas están dispuestos a pagar. Al igual que el lanzamiento de una guerra real, una comercial es un acto de destrucción que pone en riesgo las propias fuerzas y el frente interno del atacante: si la parte defensora no creyera que puede tomar represalias de una forma que perjudique al atacante, se rendiría.

La analogía de Bessent es errónea porque el póquer es un juego de suma cero: yo gano solo si tú pierdes; tú ganas solo si yo pierdo. En el comercio, por lo contrario, el juego es de suma positiva: en la mayoría de las situaciones, cuanto mejor te vaya a ti,

mejor me irá a mí, y viceversa. En el póquer no recuperas nada de lo que pones sobre la mesa a menos que ganes; en el comercio, lo recuperas inmediatamente, en forma de los bienes y servicios que compras.

El gobierno de Trump cree que cuanto más importa, menos gana en el juego: dado que Washington tiene un déficit comercial con Beijing (importa más bienes y servicios chinos de los que China importa de Estados Unidos), cree que si importara menos sería menos vulnerable. Esto es objetivamente incorrecto, pues

El gobierno de Trump puede pensar que actúa con dureza, pero en realidad está poniendo la economía estadounidense a merced de la escalada china.

no es una cuestión de opinión. Al restringir el comercio, se reducen la renta nacional y el poder adquisitivo de un país; los países exportan a fin de obtener los recursos necesarios para comprar lo que no producen o lo que les resultaría demasiado costoso fabricar localmente.

Es más, incluso si nos centramos solo en la balanza comercial bilateral, como hace el gobierno de Trump, es un mal presagio para Estados Unidos en una guerra comercial con China. En 2024, las exportaciones estadounidenses de bienes y servicios al gigante asiático fueron de 199 200 millones de dólares, mientras que las importaciones de China fueron de 462 500 millones, lo que resulta en un déficit comercial de 263 300 millones.

En la medida en que la balanza comercial bilateral predice qué bando “ganará” en una guerra comercial, la ventaja corresponde a la economía excedentaria, no a la deficitaria. China, el país con superávit, está renunciando a las ventas, que son únicamente dinero; Estados Unidos, el país deficitario, está renunciando a bienes y servicios que no produce de forma competitiva o en absoluto en su país.

El dinero es fungible: si se pierden ingresos, se puede recortar el gasto, encontrar ventas en otros lugares, repartir la carga por todo el país o recurrir a los ahorros (por ejemplo, haciendo un estímulo fiscal). China, como la mayoría de los países con superávits comerciales mundiales, ahorra más de lo que invierte, lo que significa que, en cierto sentido, tiene demasiados ahorros. El ajuste sería bastante fácil. No habría escasez crítica y podría sustituir gran parte de lo que normalmente vende a Estados Unidos por ventas internas o a otros países.

Los Estados con déficits comerciales mundiales, como Estados Unidos, gastan más de lo que ahorran. En las guerras comerciales, renuncian o reducen el suministro de cosas que necesitan (ya que los aranceles hacen que cuesten más), y no son tan fungibles o de fácil sustitución como el dinero. En consecuencia, el impacto se siente en industrias, lugares u hogares concretos que se enfrentan a la escasez, a veces de artículos necesarios, algunos de los cuales son insustituibles a corto plazo. Los países deficitarios también importan capital, lo que hace a Estados Unidos más vulnerable a los cambios de opinión sobre la fiabilidad de su gobierno y sobre su atractivo como lugar para hacer negocios.

Cuando el gobierno de Trump tome decisiones caprichosas para imponer un enorme aumento de impuestos y una gran incertidumbre en las cadenas de suministro de los fabricantes, el resultado será una reducción de la inversión en Estados Unidos, lo que elevará las tasas de interés de su deuda.

DE DÉFICITS Y DOMINIO

En definitiva, la economía estadounidense sufrirá enormemente en una guerra comercial a gran escala con China si se mantienen los niveles actuales de aranceles impuestos por Trump en más de 100%. De hecho, sufrirá más que la china, y el sufrimiento aumentará si Estados Unidos intensifica la escalada. El gobierno de Trump puede pensar que actúa con dureza, pero en realidad está poniendo su economía a merced de la escalada china.

Estados Unidos se enfrentará a la escasez de insumos críticos, como ingredientes básicos de la mayoría de los productos farmacéuticos, semiconductores baratos utilizados en automóviles y electrodomésticos, y minerales críticos para los procesos industriales, incluida la producción de armas. El choque de suministro que supondría reducir de manera sustancial o eliminar por completo las importaciones de China —como Trump pretende conseguir— significaría estancamiento, la pesadilla macroeconómica vista en la década de 1970 y durante la pandemia de covid-19, cuando la economía se contrajo y la inflación aumentó a un mismo tiempo.

En una situación así, que puede estar más cerca de lo que muchos piensan, a la Reserva Federal y a los responsables de la política fiscal solo les quedan terribles opciones y pocas posibilidades de conjurar el desempleo, salvo aumentar aún más la inflación.

En una guerra real, si tienes motivos para temer ser invadido, es suicida provocar a tu adversario antes de armarte. Eso es en resumen lo que arriesga el ataque

económico de Trump: dado que la economía estadounidense depende por completo de fuentes chinas para bienes vitales (existencias farmacéuticas, chips electrónicos baratos, minerales críticos), el no asegurar proveedores alternativos o una producción nacional adecuada antes de cortar el comercio, es una acción en extremo imprudente.

Si lo hace al revés, el gobierno estadounidense está provocando exactamente el tipo de daño que dice querer evitar. Todo esto podría ser solo una táctica de negociación, a pesar de las repetidas declaraciones y acciones de Trump y de Bessent, pero, incluso en esos términos, la estrategia hará más daño que beneficio. Como advertí en *Foreign Affairs Latinoamérica* (vol. 25, núm. 1), el problema fundamental del enfoque económico de Trump es que necesitaría llevar a cabo suficientes amenazas autodesestructivas para ser creíble, lo que significa que los mercados y los hogares esperarían una incertidumbre continua.

Tanto estadounidenses como extranjeros invertirían menos en lugar de más en la economía de Estados Unidos, y ya no confiarían en que su gobierno cumpliera cualquier acuerdo, lo que dificultaría un pacto negociado o uno para desescalar. Como resultado, su capacidad productiva disminuiría en lugar de mejorar, lo que solo aumentaría la influencia que China y otros tienen sobre este país.

El gobierno de Trump se está embarcando en un equivalente económico de la guerra de Vietnam —una guerra de elección que pronto resultará en un atolladero, lo que socava la fe, en el país y en el extranjero, tanto en la confiabilidad como en las capacidades de Estados Unidos— y todos sabemos cómo acabó. 🌐



Coincidiendo con el 70 aniversario de la Conferencia de Bandung, el número 139 de la Revista CIDOB d'Afers Internacionals aborda el impacto creciente del Sur Global en el sistema internacional, en un contexto marcado por transformaciones profundas de los órdenes surgidos de las dos guerras mundiales y del fin de la Guerra Fría: la fragmentación del orden liberal, la pérdida de centralidad de Occidente y la emergencia de nuevas dinámicas de poder. A través de nueve aportaciones, se analiza cómo actores diversos del Sur Global están incidendo en normas, instituciones y agendas globales. Se concluye que el Sur Global, lejos de ser un bloque homogéneo, representa una fuerza diversa, creciente y muy relevante en el sistema internacional. El grupo de países que lo conforma muestra una agencia cada vez mayor y desafía los marcos dominantes de las relaciones internacionales, bajo la demanda de nuevas narrativas más inclusivas y menos occidentaloctrinarias para comprender los cambios en curso.

Rafael Grasa
Paula Ruiz-Camacho
Daniel Morales Ruvalcaba
Diego S. Crescentino
y Sergio Caballero
Jerónimo Delgado Calcedo
y Guillermo Estebell de Oliveira
Rita Giacalone
Antonio Alonso Marcos
María del Carmen Villarreal Villamar
y Adriana Montenegro
Julietta Zelkovich y Esteban Actis



EDITA
CIDOB
CENTRE D'INFORMACIÓ
D'INTERNACIONALITAT
I DE PAU
Elisabet, 12, 08001, Barcelona
www.cidob.org
PEDIDOS
publicacions@cidob.org

DOI: 10.5367/01856383.0152000314781 ISSN: 0185-6383

ESTUDIOS

Filosofía • Historia • Letras primavera 2025

152

«El juzgar»,
horizontes humanos
para su comprensión y praxis

Arturo Peláez Gálvez
Javier Martínez Villarroya
Florence Rosenberg Seifer
Rafael Estrada Michel
Luis Barrón
Marcela Mijares Lara
Arturo Mota Rodríguez
Karla Alejandra Hernández Alvarado
Vidal Romero
Adriana García y Giammarco Coronado Graci
José Alfonso Montalvo Martínez
Andrés Luis García Jasso
Paco Dorado
Renato Sales Heredia

ITAM INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MÉXICO

El orden económico roto

Cómo reconectar el sistema internacional en la era de Trump

 *Mariana Mazzucato*

En muchos sentidos, la elección de Donald Trump para un segundo mandato como Presidente de Estados Unidos es una historia de insatisfacción económica. Por primera vez en décadas, quien ostentaba la candidatura demócrata recibió más apoyo de los estadounidenses más ricos que de los más pobres: quienes ganaban más de 100 000 dólares al año se inclinaron a votar por Kamala Harris. En cambio, en 2020, la mayoría de las familias que ganaban menos de 50 000 dólares anuales optaron por el demócrata Joseph R. Biden; en 2024, favorecieron al republicano Trump.

La disminución del apoyo al Partido Demócrata entre los votantes de clase trabajadora refleja un profundo desencanto con un sistema económico que, durante el gobierno de presidentes de ambos partidos, ha concentrado la riqueza entre los más adinerados, ha permitido el crecimiento del sector financiero a expensas del resto de la economía, ha atrapado a la gente en ciclos de endeudamiento y ha dejado de dar prioridad al bienestar de millones de estadounidenses.

Aunque sus promesas de alivio económico se basaron en un problema real, Trump ofrece las soluciones equivocadas y sus políticas no cambiarán de forma significativa el impopular modelo económico causante de la ola de enojo que lo llevó a la victoria. En cambio, muy probablemente, los aranceles que propuso aumentarán el costo de vida y aportarán pocos beneficios a la clase trabajadora estadounidense. De seguir adelante con los planes de Trump de reducir el tamaño del sector público de forma drástica, el gobierno estadounidense perderá gran parte de su capacidad para llevar a cabo grandes proyectos en los próximos años, y sus políticas mercantilistas podrían tanto incitar a la inestabilidad económica en el extranjero como reducir la capacidad de liderazgo económico de Estados Unidos.

MARIANA MAZZUCATO es profesora en la University College London, Copresidenta del Grupo de Expertos del Grupo de Trabajo del G-20 para la Movilización Mundial contra el Cambio Climático y autora de *Mission Economy: A Moonshot Guide to Changing Capitalism* (Harper Business, 2021). Sígala en X en @MazzucatoM.

Sin embargo, el renacimiento del nacionalismo económico estadounidense no tiene por qué significar el fin de la búsqueda mundial de un crecimiento más integrador y sostenible. Países como Brasil, el Reino Unido y Sudáfrica están probando ambiciosas agendas económicas propias y abundan las propuestas para volver más equitativas y eficaces a las instituciones multilaterales. Puede ser que un Estados Unidos en retirada no esté en condiciones de liderar este esfuerzo de reforma, pero su ausencia dejará un espacio que otros países podrían llenar. Las nuevas ideas podrían hacerse oír y tal vez surgirán nuevas relaciones comerciales, además de que las nuevas dinámicas de poder quizá den pie a un cambio más amplio.

No hay garantías de que el próximo equilibrio del orden internacional conduzca a un futuro más equitativo y sostenible. Para avanzar hacia un sistema económico con un acceso asequible al financiamiento, una gobernanza justa del comercio mundial, y el apoyo a todos los países para que inviertan y se beneficien del crecimiento de las industrias ecológicas, los gobiernos deben estar dispuestos a tomar medidas audaces. Deben aprender las lecciones correctas de la victoria de Trump: que el modelo económico actual está fracasando y que las políticas incrementales que ofrecieron Biden y Harris no lo habrían salvado, pero tampoco lo hará la agenda proteccionista de Trump. Un cambio transformador requiere una visión diferente, que le dé prioridad al bienestar de las personas y a la salud del planeta.

OPORTUNIDAD DESAPROVECHADA

La derrota de Harris frente a Trump refleja la incapacidad de Washington para corregir los graves defectos del modelo económico imperante. Décadas de políticas económicas que se tradujeron en un debilitamiento de las leyes laborales, subinversión en educación y servicios de salud, así como un fortalecimiento del sector de servicios financieros, han perpetuado las desigualdades estructurales en Estados Unidos. Podría decirse que Biden hizo más que la mayoría de sus predecesores recientes para atender el estancamiento salarial y el alto costo de vida, como bajar la inflación de 9.1% en junio de 2022 a 2.4% en septiembre de 2024, y firmar una orden ejecutiva para garantizar un salario mínimo de 15 dólares por hora para los empleados y el personal subcontratado del gobierno federal. No obstante, al igual que sus predecesores, dejó pendientes muchos problemas de fondo: desigualdad de los ingresos y la riqueza, altas tasas de endeudamiento personal, acceso desigual a educación y atención médica de alta calidad, leyes laborales inadecuadas y la participación e influencia crecientes del sector financiero en la economía.

El problema no son los malos resultados económicos. Durante el gobierno de Biden, el PIB creció, en promedio, más o menos lo mismo que durante el primer mandato de Trump, y la recuperación pospandemia de Estados Unidos fue la más vigorosa del G-7. Se agregaron casi 15 millones de empleos a la economía estadounidense entre enero de 2021 y enero de 2024, en comparación con menos de 7 millones en los 3 primeros años del gobierno de Trump.

Sobre todo, el crecimiento económico no se ha traducido en una mejor situación para muchos estadounidenses. Según los últimos datos censales, 36.8 millones de

estadounidenses —11% de la población— vivían en la pobreza en 2023. En junio de ese año, 43.6 millones adeudaban préstamos estudiantiles —cerca de 38 000 dólares por prestatario, en promedio—. Las frustraciones económicas de los estadounidenses se han incrementado debido a la inflación, que durante los 2 primeros años del gobierno de Biden aumentó hasta alcanzar un máximo superior a 9% en junio de 2022.

Cuando los suministros sufrieron cuellos de botella debido a la pandemia y a la invasión rusa de Ucrania, las empresas subieron el precio de los alimentos, los energéticos y otros productos, lo que empeoró la inflación. Sin embargo, quizá lo más importante es el estancamiento salarial: el ingreso semanal promedio aumentó con Biden, pero no tanto como para seguirle el paso a la inflación. Con esto, muchos estadounidenses de clase trabajadora no veían motivos bien fundados para pensar que las políticas de Biden les beneficiarían, y sí muchas razones para dudar de las promesas de Harris de crear una economía que los dejara en mejores circunstancias.

Tal desconexión entre crecimiento y beneficio material para la clase trabajadora es producto de décadas de política estadounidense. Durante el último medio siglo, los demócratas han apoyado medidas que aumentaron la influencia del sector financiero en la economía, debilitaron el poder de negociación de los trabajadores y contuvieron los salarios. En la década de 1970, durante el gobierno de Jimmy Carter se desregularon las industrias del transporte carretero y aéreo. Por su parte, el presidente William Clinton firmó la Ley Gramm-Leach-Bliley de 1999 y la Ley de Modernización de Futuros de Materias Primas de 2000, que, entre otras cosas, facilitaron la concentración y la desregulación del sector financiero estadounidense que contribuyó a la crisis financiera de 2008. En la década de 1990, el Partido Demócrata apoyó la entrada de Estados Unidos al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y permitió el estatus de “relaciones comerciales normales permanentes” con China, lo que quizá contribuyó a la pérdida de empleos y presionó los salarios.

Los políticos republicanos también apoyaron estas políticas y no pocas veces se centraron en menoscabar los derechos laborales. También se han opuesto a aumentar el salario mínimo federal, han hecho recortes presupuestarios y nombramientos que debilitaron la Junta Nacional de Relaciones Laborales, y, en lo estatal, han intentado abolir los derechos de negociación colectiva de los empleados públicos e impulsado las leyes de derecho al trabajo, las cuales prohíben los contratos entre sindicatos y empleadores que exigen la afiliación de los empleados al sindicato en su lugar de trabajo. En parte debido a estas presiones, la sindicalización en Estados Unidos ha ido disminuyendo de más de 30% en la década de 1950 a alrededor de 10% en la actualidad. No obstante, de acuerdo con una encuesta Gallup de 2020, 65% de los estadounidenses aprueban los sindicatos y, según un estudio de 2017, casi 50% de los empleados no sindicalizados afirman que se afiliarían a uno si pudieran hacerlo.

*A fin de erigir una
economía funcional
para todos, la inversión
pública resulta esencial.*

Mientras tanto, las fuerzas estructurales que ponen los intereses de los accionistas por encima del interés ciudadano han privado aún más de sus derechos a los estadounidenses de clase trabajadora. Las recompras de acciones propias por parte de las empresas para inflar su precio han aumentado en Estados Unidos, y representaron más de 4 billones de dólares en la última década y 795 000 millones de dólares tan solo en 2023. Las farmacéuticas y las empresas manufactureras gastan más en recomprar sus acciones que en capacitar a los trabajadores, mejorar infraestructuras y tecnología, o generar investigación y desarrollo. Los mercados financieros están cada vez más desvinculados de la economía real y las inversiones con frecuencia se concentran en empresas financieras, aseguradoras e inmobiliarias. La campaña de Harris resultó, en todo caso, más favorable para Wall Street que la de Biden: el impuesto de 28% sobre las ganancias de capital que Harris propuso para los estadounidenses con ingresos superiores a 1 millón de dólares anuales era muy inferior al de casi 40% propuesto por Biden en 2020.

La política industrial del gobierno de Biden cosechó ciertos éxitos, pero nunca fue la panacea para las penurias económicas de la mayoría de los trabajadores estadounidenses. La Ley de Reducción de la Inflación (IRA) de 2022, por ejemplo, generó, en el sector de energías limpias, más de 330 000 puestos de trabajo y más de 265 000 millones de dólares en nuevas inversiones en tan solo 2 años. La estrategia de Biden también incluía disposiciones laborales y comunitarias: la Ley CHIPS y Ciencia de 2022 —para la que fungí como asesora— ponía condiciones al acceso del sector privado a fondos para la producción de microchips, incluidos requisitos salariales y acceso garantizado a prestaciones como guarderías asequibles. Pero el alcance de estas políticas era limitado, ya que estaban diseñadas para impulsar la producción y crear nuevos empleos con mejores prestaciones solo en determinados sectores, no en toda la economía. Al limitar el alcance de su agenda industrial, el gobierno de Biden perdió oportunidades para acelerar el cambio y abordar las debilidades económicas estructurales.

Incluso en los sectores cubiertos por sus políticas se quedaron cortas para apoyar a las comunidades y a los trabajadores. Por ejemplo, los estándares de salario mínimo exigidos a las empresas beneficiarias de dichos fondos podrían haberse aplicado a todas las categorías de trabajadores, no solo a los obreros y a los mecánicos. En lugar de solo incluir compromisos de participación y de inversión en la comunidad en los criterios para evaluar a los solicitantes, el gobierno podría haberles exigido que firmaran acuerdos para dar voz a los grupos de interés comunitarios en la mesa de negociación. También podría haber exigido a las empresas que dieran a los representantes de los trabajadores un lugar en sus consejos de administración y que firmaran acuerdos para proteger el derecho de sindicación. La inversión en capacidad de los gobiernos estatales y locales también podría haber ayudado a encauzar el dinero más rápidamente a nuevos proyectos, como la construcción de plantas de fabricación de semiconductores, y programas de capacitación y contratación de trabajadores locales.

Una estrategia industrial eficaz debe crear buenas oportunidades de empleo, pero también oportunidades de mercado para las empresas. Las huelgas del Sindicato

Unido de Trabajadores del Automóvil en 2023 pusieron de relieve los riesgos de centrarse en lo segundo a expensas de lo primero. Antes de la huelga, las “tres grandes” armadoras estadounidenses solicitaron créditos fiscales y préstamos a bajo interés al amparo de la IRA, en muchos casos para fábricas de baterías no sindicadas que pagarían salarios muy por debajo de los estándares de la industria. La legislación redundaba en nuevos puestos de trabajo, pero, como dejaron en claro los huelguistas, la calidad de esos empleos aún era inferior a lo aceptable para los trabajadores estadounidenses. Al final, fueron pocos los que consideraron que la estrategia industrial del gobierno de Biden generaba oportunidades de empleo atractivas o que impulsaba otros objetivos de su interés. Además de contribuir a una transición ecológica, por ejemplo, la estrategia podría haber incluido medidas para mejorar el acceso a alimentos saludables y asequibles, o para reducir los costos de los medicamentos con receta y otras formas de atención médica. Si bien parte del problema de los demócratas fue su mensaje, no tomaron medidas suficientemente audaces para transformar un modelo económico subyacente que no sirve a los intereses de la mayoría de los estadounidenses.

UN PASO ADELANTE, ¿DOS PASOS ATRÁS?

Es poco probable que Trump, en su segundo mandato, resuelva los problemas que avivaron el descontento de los votantes hacia el gobierno de Biden y crearon un público receptivo a sus llamados populistas. Su equipo no ha presentado un plan económico integral, sino un batiburrillo de recortes fiscales, aranceles y desregulación financiera; tampoco ha indicado un rumbo claro para la estrategia industrial estadounidense hacia adelante, y el nacionalismo económico que Trump parece favorecer podría exacerbar los problemas internos y provocar problemas económicos en todo el mundo.

Si el Presidente continúa con una estrategia muy proteccionista basada en aranceles, los consumidores estadounidenses quizá se verán perjudicados. El gobierno de Biden también incrementó ciertos aranceles —en particular a los productos chinos, como vehículos eléctricos, celdas solares, y ciertos productos de acero y aluminio—, pero las políticas mercantilistas más radicales de Trump incluyen un arancel inicial propuesto de 60% sobre todos los productos chinos, que representan más de 16% del total de mercancías importadas a Estados Unidos, y un arancel de 10% a 20% sobre todos los demás productos extranjeros. Estas barreras comerciales podrían disparar fácilmente la inflación y las tasas de interés en Estados Unidos, y los consumidores estadounidenses asumirían la carga del aumento de precios: según cálculos en un estudio del Fondo del Centro para el Progreso Estadounidense, un arancel universal de 10% supondría un aumento en costos de 1500 dólares por persona al año. Además, solo hay —en el mejor de los casos— pruebas poco concluyentes de que los aranceles impulsarían el empleo manufacturero del país. Si no cuentan con alternativas nacionales de rápida disponibilidad a los insumos para producción fabricados en el extranjero, las empresas estadounidenses podrían trasladar al consumidor el aumento en costos de los materiales importados.

Algunos miembros del bando de Trump —como el Secretario de Estado, Marco Rubio, y, en menor medida, el Vicepresidente, J.D. Vance— han abogado por un crecimiento impulsado con inversiones en lugar de limitarse a erigir muros comerciales. Rubio, en particular, se inclina por una estrategia basada en incentivar la producción nacional. Ha criticado la Ley de CHIPS y Ciencia y la IRA por ser excesivamente costosas, verticalistas y susceptibles de crear ineficiencias en el mercado, pero también ha abogado por el apoyo gubernamental en toda la cadena de suministros, “de la mina a la fábrica”. Si un enfoque como el de Rubio se afianza en el gobierno de Trump, el resultado podría ser una política industrial que, comparada con la de su predecesor demócrata, ponga igual énfasis en la inversión, pero se incline más a la desregulación y menos al papel del gobierno como timonel del rumbo del crecimiento.

Es probable que con Trump se dé cierta continuidad a algunos elementos concretos de la estrategia industrial de Biden. El nuevo gobierno podría eliminar los incentivos fiscales a las energías limpias, por ejemplo, pero es poco probable que derogue por completo la IRA porque ha beneficiado a distritos republicanos. Seguir dando prioridad al desarrollo nacional de semiconductores también encaja de manera perfecta con la agenda trumpista de “Estados Unidos primero”. Y la intervención estatal en

*Es probable que el
bloque de los BRICS
gane influencia.*

la economía ha caracterizado desde hace tiempo a la política pública de ambos partidos. Si Trump decide comprometerse con la estrategia industrial —una posibilidad que no debe pasarse por alto—, debería intentar encontrar formas de hacer que la política pública sirva a los trabajadores estadounidenses. La estrategia industrial vinculada a objetivos climáticos quizá puede descartarse, pero su gobierno

podría vincular las subvenciones y otras medidas que benefician a las empresas a objetivos que benefician a las personas, como garantizar una oferta de empleos bien remunerados, y volver accesibles y asequibles los alimentos y la atención médica en todo el país.

Sin embargo, las medidas que quizá tome para reducir el tamaño del gobierno federal podrían socavar la capacidad de Washington para perseguir objetivos ambiciosos, no solo durante los próximos 4 años, sino mucho tiempo después. En un principio, Trump designó a los empresarios Elon Musk y Vivek Ramaswamy para dirigir un nuevo organismo, el Departamento de Eficiencia Gubernamental, que, según él, buscará “desmantelar la burocracia gubernamental, desregular, reducir los gastos superfluos y reestructurar los organismos federales”. Este planteamiento supone equivocadamente que el gobierno debe gestionarse como una empresa; no reconoce que el papel del Estado no es solo administrar servicios y solucionar fallos del mercado, sino también formular y desplegar políticas que den forma a los mercados para beneficio de la ciudadanía. El éxito de las propias empresas de Musk se debe al apoyo estatal: Tesla ha recibido al menos 4900 millones de dólares en subvenciones públicas y SpaceX depende, en gran medida, de contratos con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), así como de la tecnología y el personal que ahí se desarrollaron. En el futuro, la salud económica de Estados Unidos y el avance hacia

objetivos ambiciosos, como la transición a energías limpias, requerirán un Estado muy ágil que conforme los mercados, oriente el crecimiento y llegue a acuerdos con el sector privado que generen valor para los ciudadanos, no solo para las empresas.

A fin de erigir una economía funcione para todos, la inversión pública resulta esencial. La inversión privada en la producción nacional no llegará sin inversión pública, y las empresas abandonadas a su suerte no necesariamente invertirán de maneras que beneficien a los trabajadores. Una política industrial orientada a una misión puede encauzar la inversión privada hacia la resolución de problemas reales, como más acceso a alimentos saludables y menos emisiones de gases de efecto invernadero, lo que alinea los objetivos sociales y ambientales con las oportunidades del mercado nacional e internacional. El gobierno puede estimular la inversión y la innovación en todos los sectores, al igual que promover un crecimiento inclusivo y sostenible. Este enfoque puede producir resultados mucho mejores que la típica estrategia industrial, que se limita a elegir determinados sectores a los cuales apoyar —y, por tanto, es más susceptible de ser capturada por intereses privados— y que tiene menos probabilidades de impulsar una transformación de toda la economía. La estrategia del gobierno de Biden se quedó corta en este sentido y, aunque la de Trump tiene la oportunidad de hacerlo mejor, su retórica inicial sugiere que tampoco dará el ancho.

EN BUSCA DE LÍDERES

El nacionalismo económico de Trump también podría causar problemas al mundo. Los aranceles estadounidenses elevados podrían provocar inestabilidad de precios y guerras comerciales, pues otros países resultarían muy afectados dada una economía mundial dependiente de las exportaciones a Estados Unidos. Muchos están siguiendo estrategias industriales propias, motivados por el proteccionismo, los intereses geoestratégicos y el reconocimiento de que la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono ofrece una ventaja a aquellos que construyan sus industrias verdes ahora. Si Trump desmantela las medidas para asegurar el dominio de Estados Unidos en los mercados de tecnología verde, otros países podrán hacerse de su propia participación de mercado. No obstante, al menos en el corto plazo, es probable que los aranceles estadounidenses y las medidas de represalia a las que darán lugar causen problemas, como interrupciones en la cadena de suministros y precios más altos para las personas tanto en Estados Unidos como en gran parte del mundo.

Si Estados Unidos también se retira de las instituciones internacionales, dejará un agujero en la gobernanza global. Durante su primer gobierno, Trump recortó los fondos estadounidenses para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que, en 2023, representaban 22% del presupuesto de las instituciones. También se retiró del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y amenazó con abandonar la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial del Comercio (OMC). El gobierno de Biden tampoco destacó en materia de multilateralismo: se atrasó en los pagos de Estados Unidos a la ONU y mantuvo la política de Trump de bloquear los nombramientos para

el Órgano de Apelación de la OMC. Además, la retirada de Estados Unidos ocurre en medio de un deterioro generalizado de la confianza en las instituciones internacionales para facilitar una cooperación significativa en cuestiones clave.

Con el propósito de hacer frente al cambio climático, la escasez de agua y la desigualdad mundial, es necesario revertir esa tendencia, pero las instituciones multilaterales actuales requerirán primero un equipamiento de fondo. Se necesitan reformas como la Iniciativa de Bridgetown, liderada por la Primera Ministra de Barbados, Mia Mottley, para componer un sistema financiero internacional que niega a muchos países el acceso a fondos asequibles para proyectos ecológicos. La Iniciativa incluye medidas para proporcionar liquidez de emergencia, reducir la carga del endeudamiento y aumentar los fondos para el desarrollo, todo ello al servicio del crecimiento sostenible y las sociedades resilientes. Asimismo, las convenciones ambientales existentes deberían tratar los recursos naturales críticos como bienes mundiales de uso común y, en el caso del agua, por ejemplo, fijarse objetivos cuantificables para estabilizar el ciclo hidrológico.

También es necesario actualizar las estructuras de gobernanza global para que todos los países —no solo los ricos— apliquen estrategias industriales ecológicas, coordinar sus políticas públicas y solucionar las controversias comerciales relacionadas. Las reglas de la OMC, por ejemplo, deben reformarse para que no obstaculicen las políticas ecológicas de los países miembros ni perjudiquen a los países con menores ingresos.

De igual manera, un nuevo mecanismo dentro de la OMC podría ayudar a garantizar que las estrategias industriales de cada miembro no socaven los objetivos de política pública compartidos. El mecanismo de ajuste en frontera por emisiones de carbono de la Unión Europea, por ejemplo, es una política valiosa que impone un ecoarancel a los productos importados que eluden la tarificación del carbono dentro de la Unión tan solo mudando producción intensiva en carbono a países no miembros, pero el arancel también perjudica las economías de los países que exportan a la Unión Europea. Un mecanismo específico de la OMC podría haber servido de foro para abordar estas inquietudes. En tal caso, los acuerdos de apoyo financiero y técnico de la Unión Europea para ayudar a los países de ingreso medio y bajo a mejorar los estándares de producción podrían haber reducido los efectos negativos de las políticas de la Unión en sus economías. Impulsar estas reformas para alcanzar la meta exigirá liderazgo. Es improbable que un Estados Unidos que rehúye el multilateralismo desempeñe ese papel, como tampoco lo hará la Unión Europea. El crecimiento y la productividad europeos van a la zaga, y los líderes populistas de Hungría, Italia, Países Bajos y otros Estados dificultan la acción colectiva de la Unión. La economía alemana se contrajo y las luchas políticas internas han impedido acciones para resolver el problema. Las protestas en Francia han demostrado que la clase trabajadora del país —similar a la de Estados Unidos— no ve en la transición a una economía verde un motor para mejorar el empleo. Todo esto supone un problema para la estrategia industrial ecológica de la Unión Europea, por no hablar de su influencia económica mundial. En Latinoamérica, por ejemplo, la Unión lucha por seguir el paso a China en la competencia por los tratados de comercio y de inversión.

Sin embargo, conforme mengua la presencia internacional de Estados Unidos y la Unión Europea, es probable que aumente la influencia de los BRICS, la agrupación integrada inicialmente por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, y que ahora incluye a Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Indonesia e Irán. Este bloque —que ha crecido en tamaño y alcance en las 2 últimas décadas y que ahora representa más de un tercio de la economía internacional y la mitad de la población mundial— aspira a servir de contrapeso a Occidente en las instituciones internacionales, y, recientemente, la presidencia del G-20 pasó de un miembro fundador del BRICS —Brasil— a otro —Sudáfrica—.

A pesar de la inestabilidad económica que podría acarrear el gobierno de Trump, conforme el centro de gravedad de la gobernanza global se desplaza, podrían surgir oportunidades para reconfigurar las normas internacionales y construir nuevas formas de colaboración. Sudáfrica, por ejemplo, ha anunciado que el lema de su presidencia del G-20 será “solidaridad, igualdad y sostenibilidad” y, en la práctica, podría utilizar su mandato para impulsar políticas financieras y reglas comerciales más equitativas. Con el apoyo de otros miembros del G-20 y de los BRICS, podría impulsar reformas de las estructuras financieras mundiales que permitan atajar la crisis de la deuda en la que están sumidos muchos países de ingreso medio y bajo. Sin dicha reforma, la deuda inmanejable seguirá impidiéndoles invertir en estrategias industriales ecológicas nacionales o en otras medidas para prevenir y responder a emergencias climáticas, sanitarias y de otro tipo.

También podrían darse nuevas relaciones comerciales menos dependientes del mercado estadounidense. Si los países con peso económico —como Brasil y Sudáfrica— deciden tratar el giro proteccionista de Washington como una oportunidad no solo para garantizar el acceso al mercado y la resiliencia de la cadena de suministros, sino también para incorporar protecciones climáticas y laborales a los nuevos acuerdos, la proliferación de una actividad comercial no centrada en Estados Unidos podría recalibrar el sistema de comercio mundial. Este rumbo dista de ser algo seguro, pero tampoco lo es un repliegue planetario en trincheras nacionalistas. La búsqueda de nuevas formas de colaboración puede terminar por servir a intereses sociales y ambientales, además de económicos.

Uno de los miembros de los BRICS, Brasil, está impulsando una estrategia industrial (en la que he colaborado) que adopta un enfoque orientado a la misión y puede ofrecer lecciones para otros países. Encauzada en torno a seis objetivos relacionados con la seguridad alimentaria, la salud, las ciudades sostenibles y habitables, la transformación digital, la transición energética y la defensa, busca catalizar la inversión, estimular el desarrollo productivo y tecnológico, así como aumentar el acceso al mercado mundial, todo ello al tiempo que mejora la vida cotidiana de las personas. Este enfoque supone una mejora con respecto a la estrategia industrial tradicional de apoyo a sectores específicos, propensa a ser capturada por intereses privados, pero aún está por verse si la estrategia de Brasil, que inició en enero de 2024 y está previsto que dure hasta 2033, cumplirá su promesa de transformar la economía del país y tendrá éxito allí donde la estrategia de Estados Unidos fracasó al momento de distribuir los beneficios entre los segmentos menos favorecidos de la población.

Además de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, dirigentes como Keir Starmer en el Reino Unido, Pedro Sánchez en España y Cyril Ramaphosa en Sudáfrica han prometido situar a las personas y al planeta en el centro de sus políticas económicas nacionales. Estos líderes deben aprender ahora de las deficiencias del gobierno de Biden. Incluso, rechazar la falsa dicotomía de prosperidad económica y sostenibilidad ambiental, formular políticas sólidas para prevenir la desigualdad en lugar de confiar en la redistribución para solucionar los problemas en el futuro, al igual que establecer relaciones de colaboración y reciprocidad con empresas y sindicatos para garantizar que sus economías crezcan de forma inclusiva y equitativa. Si lo consiguen en sus respectivos países, podrán impulsar políticas financieras y comerciales mundiales que permitan a otros seguir un camino similar.

LA HORA DE LA AMBICIÓN

La coyuntura actual entraña grandes riesgos. Resulta demasiado fácil predecir un escenario en el cual el giro mercantilista de unos pocos grandes actores empuje la economía mundial a una espiral descendente de medidas comerciales de represalia, rechazo de las instituciones multilaterales y retirada de la cooperación mundial para hacer frente a las crisis internacionales. Este resultado produciría muy pocos ganadores y volvería aún más inalcanzables las soluciones duraderas a los problemas compartidos.

Sin embargo, este momento también brinda la oportunidad de jubilar en definitiva el modelo económico fallido que privilegia la creación del valor privado sobre el valor público, y sustituirlo por un orden económico mundial más sostenible y equitativo. Esta recalibración tal vez parece basada en un conjunto de escasas esperanzas. Los líderes deben promover una visión audaz para reestructurar las finanzas y el comercio internacionales, y estar dispuestos a desafiar los intereses creados en el proceso. Deben formar nuevas alianzas nacionales —reajustando las relaciones entre gobiernos, empresas y sindicatos—, pero también extranjeras —buscando países con ideas afines para que la reforma a escala planetaria sea una posibilidad viable—, y deben convencer a sus electores de que este proyecto redundará en beneficio de todos. Nada de esto será sencillo, pero tampoco es imposible. En el actual periodo de cambio, el futuro está en juego.

Mientras Brasil, el Reino Unido, Sudáfrica y otras grandes economías se plantean cómo proceder, la derrota de Harris frente a Trump es una advertencia. El ejemplo de Estados Unidos no debe inspirar un cambio hacia políticas económicas insulares, lejos de la inversión gubernamental en bienestar social y acción climática; más bien, debe aclarar el peligro de la ambición insuficiente. El orden económico actual desatiende los intereses de las personas y del planeta, y el mundo necesita un sistema que sirva a ambos. Lograr ese cambio requerirá algo más que retoques marginales: exige una profunda reestructuración de cómo funcionan las economías y a quién benefician. 🌍

La verdadera jugada ganadora contra China

Un argumento contundente contra la desvinculación

 *Stephen G. Brooks y Ben A. Vagle*

La competencia geopolítica entre China y Estados Unidos es el tema definitorio en la política internacional. Se trata de una contienda entre las economías más grandes del mundo y enfrenta dos sistemas políticos radicalmente diferentes: uno democrático y el otro autoritario. Asimismo, tiene lugar en casi todas las regiones del mundo.

Para la mayoría de los analistas estadounidenses, esta competencia será cerrada. Aunque el ritmo del crecimiento chino se ha ralentizado, la visión convencional de Washington es que China ya es un par, o al menos casi par, en el poder económico. “Si no actuamos, [los chinos] nos van a comer el mandado”, bromeó el expresidente de Estados Unidos Joseph R. Biden poco después de asumir la presidencia en 2021. Ese mismo año, Elbridge Colby, a quien el actual presidente Donald Trump nombró Subsecretario de Política del Departamento de Defensa, advirtió que “la economía china es casi tan grande [como] o tal vez más grande ya que la de Estados Unidos”.

Sin embargo, la noción de que China está cerca de alcanzar el poder económico de Estados Unidos es incorrecta. Las estadísticas del gobierno chino podrán indicar que está casi a la par; no obstante, si el poder económico de ambos se mide de forma precisa, Washington todavía tiene una ventaja dominante y duradera. Su PIB es aproximadamente el doble del de Beijing. Sus empresas y las de sus aliados dominan el comercio mundial, y poseen y controlan buena parte de la producción china, en especial en lo que atañe a las tecnologías avanzadas. Como resultado, Estados Unidos tiene una enorme influencia sobre el país asiático. Con este poder, Washington, junto

STEPHEN G. BROOKS es profesor de Gobierno en el Dartmouth College y profesor invitado en la Stockholm University. **BEN A. VAGLE** es analista político en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Sigalo en X en @ben_vagle. Las opiniones de los autores son personales. Este artículo es una adaptación del libro *Command of Commerce: America's Enduring Economic Power Advantage Over China* (Oxford University Press, 2025).

con sus aliados, podría realizar un extenso corte económico —en la práctica, una desvinculación rápida— que para China sería devastador, mientras que al país americano le provocaría un daño mucho menor en el corto plazo y casi nulo en el largo.

Este hecho tiene implicaciones estratégicas mayores. Los analistas que se oponen a la desvinculación de China suelen argumentar disrupciones económicas enormes de largo plazo para Estados Unidos. Se equivocan. Sin embargo, esto no significa que una desvinculación ahora sería positiva: una desvinculación en tiempo de paz le costaría a Washington renunciar a una de las herramientas más fuertes con las que cuenta para disuadir a Beijing de una agresión. Podría llevar al gigante asiático a asumir la ofensiva e iniciar conflictos que de otra forma podrían haberse evitado. Asimismo, podría no lograr su propósito: para que un corte económico le cause un daño desproporcionado a China, los aliados de Estados Unidos tendrían que participar; no obstante, si Washington trata de avanzar con el corte durante tiempos de paz, con toda probabilidad van a resistirse. Los formuladores de políticas públicas estadounidenses deben entender la posición real de su país en su competencia con China, y conservar su ventaja intacta para los tiempos de crisis en vez de debilitar una de las mejores armas que tienen.

UNA POTENCIA ECONÓMICA POTEKIN

La economía China creció de manera impresionante durante varias décadas. Ahora es, con certeza, la segunda más grande del mundo y se volvió mucho más innovadora de lo que era. Aun así, no está ni cerca de ser tan poderosa como suele mostrarse, en parte porque Beijing manipula directamente métricas económicas clave, incluido el PIB.

Según sus estadísticas oficiales, su PIB es de casi 20 billones de dólares, apenas dos tercios del de Estados Unidos, pero las métricas que no han sido alteradas artificialmente sugieren que es mucho menor. Pensemos en las imágenes satelitales nocturnas de la iluminación en el país, supuestamente la mejor manera de aproximarse al PIB chino. Los estudios que las analizan encuentran menos concentración lumínica de lo que se esperaría si las estadísticas oficiales chinas fueran ciertas. De hecho, en conjunto, los estudios más rigurosos indican que el PIB de China está sobrestimado en un tercio, lo que significa que representa solo cerca de la mitad del de Estados Unidos. Para darnos una idea, el PIB más alto que tuvo la Unión Soviética, en 1975, representaba 57% del estadounidense.

Desde hace tiempo, los expertos dentro y fuera de China han asumido que las estadísticas oficiales no son creíbles. Li Keqiang, quien fue Primer Ministro de China de 2013 a 2023, dijo en 2007 que él no creía en las cifras “hechas por el hombre”, que eran “solo de referencia”. Logan Wright y Daniel Rosen, investigadores del Rhodium Group expertos en China, fueron incluso más contundentes. “En casi 2 décadas de experiencia profesional en este campo —escribieron en 2019— nunca encontramos a un funcionario chino que confesara en privado que realmente creía en las cifras del PIB”.

Mucha de la inflación del PIB chino se genera por la singular naturaleza de su modelo de desarrollo. El país depende (como ningún otro) de una fuerte inversión

para sostener su crecimiento. De acuerdo con el economista Michael Pettis, dicha inversión ha promediado más de 40% del PIB chino durante los últimos 30 años. Sin embargo, mucho de este gasto no tuvo un efecto productivo. Por ejemplo, China ahora tiene la mayor tasa de desocupación de vivienda en el mundo, con 20%. Una inmensa proporción de los proyectos de infraestructura terminarán con una construcción más costosa que los retornos económicos que pueden llegar a generar. Según el reportero Brian Spegele, de *The Wall Street Journal*, la red de trenes de alta velocidad de casi 50 000 kilómetros de Beijing (una cantidad que podría circundar el planeta) generó una deuda de más de 1 billón de dólares y muchas de sus rutas apenas se usan. A pesar de ello, este tipo de inversiones no rentables continúa fortaleciendo su PIB. En las economías avanzadas, por el contrario, si una inversión no reditúa, generalmente se cuenta como una reducción del ingreso, que entonces disminuye el PIB. Incluso si las estimaciones del PIB de Beijing fueran confiables, estarían sobrevaluando su poder económico. Muchos analistas quedan impresionados por los grandes resultados económicos de China en manufactura, pero, si se fijan más allá de la superficie, verán que mucha de esta producción es simple o no está realmente bajo el control del país.

La producción es mucho más intrincada y globalizada de lo que era en épocas anteriores, en especial en industrias complejas como la de los semiconductores y los aviones de reacción. Como resultado, las grandes corporaciones multinacionales en la cima de las cadenas de producción internacionales tienen una influencia desmesurada en la economía mundial. Y estas empresas tienen su sede en Estados Unidos y sus países aliados, no en China.

Este hecho queda claro al analizar las ganancias registradas por las 2000 empresas más grandes del mundo, según la lista anual de Forbes Global 2000, de 2022. Las ganancias son la medida preferida del poder económico, porque si una empresa es la que está generando las ganancias de un sector, probablemente significa que hay barreras que impiden que los competidores entren a ese mercado y reduzcan los márgenes de esa empresa.

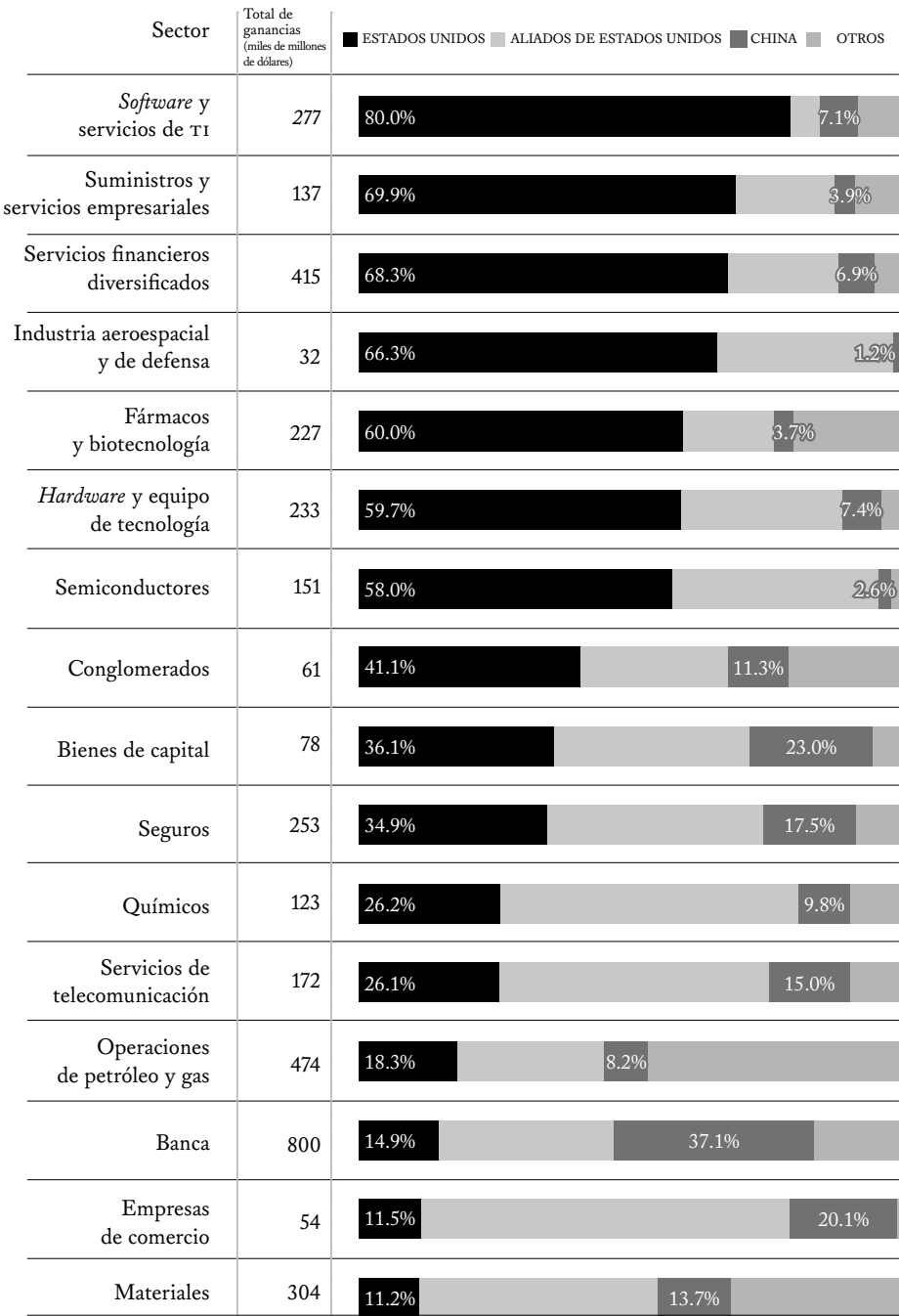
Así es como mejor se obtienen los nodos estratégicos de la economía mundial. Las empresas de Estados Unidos generaron 38% de las ganancias mundiales, mientras que las firmas con sede en países aliados generaron 35%. Las empresas chinas, aun incluyendo a las que tienen su sede en Hong Kong, generaron solo 16%.

Si se observan con mayor atención las veintisiete industrias de Forbes Global 2000, la ventaja del gigante americano sobre el asiático es todavía más clara. China lidera tres de estas industrias. Estados Unidos, en cambio, lleva la delantera en veinte, y casi siempre por dos dígitos. De las siete industrias en las que este no es el líder, tres son de un aliado. Juntos, Estados Unidos y sus países aliados y socios ocupan los cinco primeros lugares en términos de participación en las ganancias de cinco industrias: aeroespacial y defensa, farmacéutica y biotecnología, medios de comunicación, semiconductores y servicios públicos.

*Beijing manipula
directamente métricas
económicas clave,
como el PIB.*

EL PODER DE LA SUPREMACÍA

Gráfica 1: Participación en las ganancias de Forbes Global 2000, excluyendo las industrias de consumo



FUENTE: Forbes Global 2000 (2022); cálculos de los autores. La información de China incluye empresas con sede en Hong Kong.

La ventaja de Estados Unidos es excepcionalmente palpable en sectores de tecnología de punta como el aeroespacial y de defensa, el farmacéutico y de biotecnología, y el de semiconductores, en los que las empresas estadounidenses generan 55% de las ganancias y sus aliados, 29%. Las empresas chinas de alta tecnología, en cambio, apenas generan 6% de las ganancias en todo el mundo, poco más que las de Corea del Sur. Las chinas se concentran en gran medida en sectores nacionales que carecen de importancia geopolítica, sobre todo en el bancario, el de construcción y el de seguros.

Las empresas de Estados Unidos y sus países aliados, desde luego, fabrican muchos de sus productos en China, pero para Beijing ese es, en realidad, el problema: buena parte de su manufactura avanzada son bienes creados y diseñados por empresas extranjeras, como Apple, Bosch, Panasonic, Samsung y Volkswagen. Si estas no instalan fábricas propias en China, suelen contratar a otras empresas extranjeras —como Foxconn de Taiwán— para hacerlo en su nombre. Entonces, sin importar quién sea el dueño de la manufactura de avanzada de China, la producción del país en general depende profundamente de tecnologías, conocimientos y componentes de Estados Unidos y sus aliados.

Para ver cómo funciona esta dependencia, consideremos la producción del iPhone 14, aprovechando la extensa información disponible sobre su manufactura. Este se ensambla en el gigante asiático, de modo que cuenta como exportación suya en las métricas oficiales y, por tanto, suma muchos miles de millones de dólares anuales al déficit comercial de Estados Unidos (un estimado de 10 000 millones en 2018). Sin embargo, no tiene ningún sentido contar el iPhone como exportación china, porque sus empresas contribuyen a una parte relativamente insignificante de esta producción. El teléfono se diseña en California y se ensambla en fábricas de una empresa de Taiwán. Las empresas chinas aportan solo 4% del valor de sus componentes. Antes de su contribución, está la de Corea del Sur (25%), la de Japón (11%) y la de Taiwán (7%). En primer lugar, está Estados Unidos, que aporta 32% del valor de los componentes del iPhone.

Desde la perspectiva del bienestar económico, no importa si la producción china le pertenece a empresas extranjeras o está bajo su control. Mientras se haga allí, contribuye al crecimiento de su economía y al bienestar de sus ciudadanos. No obstante, desde una perspectiva geopolítica, esta distinción es vital. Las empresas extranjeras no están obligadas a operar en China si esto ya no sirve a sus intereses o si los gobiernos de su país las obligan o incentivan a salirse. Lo mismo aplica para los proveedores extranjeros de componentes. Ellos tampoco pueden ser forzados a continuar vendiéndoles sus productos si perciben que no les conviene o si sus gobiernos les impiden hacerlo.

MEDIOS DE PRODUCCIÓN

Hasta ahora, los intentos de Washington de restringir a China se han dirigido en mayor medida al campo de la tecnología, pero, para determinar qué sucedería si Estados Unidos y sus aliados impusieran un corte económico mayor, modelamos con esmero los costos de la desvinculación y diseñamos doce escenarios hipotéticos variando tres parámetros: 1) Taiwán, que podría ser parte de la economía mundial o ser conquistada

por la fuerza, bloqueada o bombardeada por China; 2) el alcance del corte comercial de China con Estados Unidos y sus aliados, y 3) el nivel de daño que estas disrupciones comerciales infligirían en las cadenas de suministro mundiales. Probamos estos escenarios para estimar el perjuicio que provocaría una disrupción del comercio en el corto plazo, en las semanas y en los meses siguientes a su inicio.

En los doce escenarios, encontramos que China sufriría un daño económico inmensamente desproporcionado respecto al de Estados Unidos. En el caso más extremo, sería cerca de once veces mayor.

Esto se traduce en costos insostenibles para China, equivalentes a los de la Gran Depresión, con disrupciones económicas de corto plazo que afectarían entre 15% y 51% del PIB del país, dependiendo del escenario. En nuestro modelo base, donde todo su comercio marítimo quedaría restringido por un bloqueo naval a distancia, por ejemplo, 39.9% de su PIB se vería afectado, frente a un 3.6% de afectación del PIB estadounidense. En otras palabras, Beijing podría sancionar a todas y cada una de las industrias y

China solo puede ser aislada una vez.

los ciudadanos estadounidenses, y el daño a la economía de Estados Unidos sería, cuando mucho, una minúscula fracción del daño que Washington y sus aliados pueden infligirles a ellos.

Para determinar las consecuencias de largo plazo de reducir el intercambio económico, también modelamos cómo se restablecería con el tiempo el comercio mundial luego del golpe inicial de la desvinculación y cómo este nuevo equilibrio definiría la trayectoria de crecimiento de ambos países. Encontramos que la posición de Washington incluso sería mejor que la anterior. Estados Unidos y casi todos sus aliados recuperarían sus niveles estándares de crecimiento, pero el declive en la trayectoria económica de China sería permanente.

La razón fundamental de este desequilibrio persistente es simple. La economía china está muy ligada a empresas extranjeras que producen bienes dentro de sus fronteras o subcontratan empresas nacionales para que lo hagan. Los cortes se llevarían esa producción. Las empresas estadounidenses y las de sus aliados, mientras tanto, no son tan dependientes. El comercio y la producción de estos enfrentarían problemas logísticos en el corto plazo después de la desvinculación, pero pueden recomponerse sin China a medida que las empresas encuentren fábricas alternativas que manufacturen sus productos y nuevas fuentes de componentes básicos. (Aunque parte de la producción puede regresar a China algún día, mucha se quedará donde las empresas extranjeras se hayan tomado el trabajo de crear nuevas líneas de suministro.)

De hecho, las empresas estadounidenses y las de sus aliados que operan en China ya están buscando la diversificación. Si llegara a imponerse un amplio cerco económico de tiempos de guerra en el gigante asiático, muchas tomarían medidas para acelerar este proceso. Además, puesto que todas las empresas occidentales enfrentarían la presión para diversificarse de China simultáneamente, la preocupación de quedar en desventaja por mudar su producción antes que sus competidores quedaría anulada.

TIEMPO, LUGAR Y FORMA

El gobierno del expresidente Biden trató de implementar un enfoque “patio pequeño con barda alta” en sus relaciones económicas con China: recortó mucho el intercambio, pero solo en los sectores más críticos para la seguridad nacional, como los semiconductores. En palabras del Asesor de Seguridad Nacional de Biden, Jake Sullivan, esta estrategia estaba motivada por el deseo de “mantener el liderazgo tanto como fuera posible” en las áreas tecnológicas más críticas mientras sigue beneficiándose del resto de las relaciones comerciales con China.

Aun así, para muchos partidarios de la línea dura con China, este enfoque no era lo bastante agresivo. Según ellos, una “reducción del riesgo” de las cadenas de suministro aplicada con bisturí no protegía adecuadamente a los estadounidenses de los peligros que supone China; creen que las economías de ambos países deberían desvincularse por completo. Sostienen que un intercambio económico significativo con China presenta riesgos intolerables, ya sea porque fortalece a Beijing, porque perjudica las comunidades industriales en Estados Unidos o porque provoca una tensión generalizada entre el sistema de libre mercado de Estados Unidos y el chino, controlado por el Estado. Los defensores de esta posición ahora tienen una audiencia receptiva en la Casa Blanca. Durante su campaña electoral, el presidente Donald Trump propuso aranceles de 60% a las importaciones chinas. Asimismo, ha sugerido que se levanten barreras más drásticas o incluso un cierre total si Beijing ataca Taiwán.

Emprender un amplio cerco económico en respuesta al revisionismo territorial chino sería sensato. No obstante, usar este método en tiempos de paz es completamente diferente y no obedece a un criterio estratégico. China solo puede ser aislada una vez, y hacerlo en ausencia de conflicto sería malgastar una ventaja vital para detener una agresión militar de Beijing. A diferencia de Rusia, tiene una fuerte presencia en los mercados mundiales y disfruta de inmensos beneficios económicos de la globalización que le va a costar mucho dejar ir. Si la relación económica sustancial se deja intacta, Washington puede darle indicios a Beijing de que le conviene abstenerse de tratar de cambiar la situación actual, y de que podría ser objeto en una retaliación económica enorme si incursiona en el camino de la agresión. Estados Unidos debe entonces mantener seca la pólvora de su poder económico hasta que llegue el momento de una crisis real.

Una desvinculación preventiva podría causar precisamente el conflicto entre China y Estados Unidos que los formuladores de políticas públicas quieren evitar. Si el país americano inicia cortes de gran escala en tiempos de paz y el asiático considera que la pérdida de muchos de los productos y tecnologías dificultaría la capacidad de replicación efectiva, podría pensar que su ventana de oportunidad para atacar Taiwán se está cerrando. Eso lo llevaría a usar la fuerza rápidamente, sobre todo porque el riesgo de que esto afecte su acceso económico al mundo ya fue anulado.

Por último, una desvinculación amplia en tiempos de paz podría fracasar. Para infligirle un daño enorme y desproporcionado, Washington necesita la participación de sus aliados; si se desvincula solo, las interrupciones de corto plazo en el PIB chino serían de entre 5% y 7%, apenas por encima de 4% o 5% de interrupción del

PIB de Estados Unidos en las mismas circunstancias. Además, en ausencia de crisis, es probable que sus socios no quieran sumarse. Aunque Estados Unidos podía sufrir relativamente poco por desvincularse de China, muchos de sus socios pagarían un precio alto. Alemania, por ejemplo, tendría el doble de impacto económico que el de Estados Unidos, Japón el triple, Australia cinco veces más y la disrupción económica en Corea del Sur sería siete veces mayor, aproximadamente.

Desde luego, Estados Unidos podría tratar de forzar a sus aliados para que cooperen desplegando sanciones secundarias o usando sus activos navales para restringir el comercio chino. Sin embargo, aun cuando lograra tener éxito, semejante esfuerzo equivaldría a cuidar los centavos y derrochar los dólares, porque llevaría a sus aliados a alejarse de Washington en el largo plazo. Las alianzas de Estados Unidos son un recurso de poder increíble y sus acciones no deberían socavarlas. Por lo tanto, Washington debe atenerse al enfoque de reducción de riesgos y desplegar un amplio cerco contra China solo si Beijing incumple lo actualmente establecido de manera severa y económicamente costosa. Si China bloquea o invade Taiwán, las disrupciones económicas de corto plazo para Estados Unidos y sus aliados serían bastante grandes para rivalizar con las pérdidas causadas por una amplia desvinculación. Entonces, las penas adicionales de aislarla podrían parecer marginales y estratégicamente valiosas para sus aliados, en particular, si Washington los presiona.

LA SEGURIDAD EN NÚMEROS

A fin de estar preparados para enfrentar un momento así, Estados Unidos y sus aliados deben compartir la estrategia económica; en la actualidad, su coordinación en política se establece sobre la marcha. Washington y los gobiernos aliados comenzaron a planificar con detenimiento cómo sancionar a Rusia cuando supieron, en octubre de 2021, que intentaba invadir Ucrania. Con China es posible que no haya un anuncio y cualquier agresión que confronten podría ser menos evidente. Así como la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) emprende acciones preparatorias de largo plazo —entrenamientos, planeación, asignación de recursos, etc.— para asegurar una cooperación militar efectiva, Washington y sus aliados deberían coordinar desde ahora cómo librar una guerra económica.

Hay muchas formas de facilitar dicha colaboración; la mejor sería crear una alianza económica formal mediante una nueva organización intergubernamental. Una función vital de esta alianza sería saber si sus miembros estarían dispuestos a sumarse a la desvinculación en respuesta al revisionismo territorial chino. Debido a que los costos de un corte extenso varían de país a país, sería razonable preguntarse si los más vulnerables participarían. Una planeación cuidadosa dentro de la alianza reduciría esta incertidumbre, en parte mediante la búsqueda de mecanismos para asistir a los Estados que más podrían sufrir el impacto. Por ejemplo, la alianza podría proyectar que los países con grandes reservas de recursos clave los distribuyan entre los miembros más expuestos. Con ese fin, Washington y sus aliados deberían esforzarse por ver quiénes pueden desembolsar mejor sus inventarios o impulsar la producción de

bienes que antes suministraba China. Deberían planear cómo implementar esta promoción y cómo distribuir esa producción.

La alianza también podría considerar formas de cooperación incluso más amplias. Por ejemplo, podría planificar cómo coordinar las políticas fiscales y monetarias durante una crisis o cómo incautar y distribuir activos de países (como China) que infringen la condición territorial. Podrían establecer un fondo colectivo de reserva financiera de donde los miembros pudieran extraer dinero para mitigar los daños más severos del corte. La reserva podría ayudar a resolver cuestiones complicadas sobre el volumen de gasto de los aliados de Washington en defensa. Por ejemplo, los funcionarios estadounidenses podrían considerar que las contribuciones a este fondo de reserva funcionen como una alternativa al aumento del gasto en defensa.

Pese a todo, Washington no puede invertir en una nueva alianza económica a expensas de las alianzas de seguridad que ya existen, en especial en Europa. Cada vez más políticos parecen pensar que proteger a Asia de China y a Europa de Rusia son objetivos antagónicos. El vicepresidente J.D. Vance, por ejemplo, ha criticado la presencia militar estadounidense en el continente argumentando que los recursos allí invertidos estarían mejor usados en limitar la capacidad de agresión militar de China, pero este razonamiento asume erróneamente que frenar al gigante asiático es un objetivo que solo puede lograrse por medios militares. Delimitar el comportamiento y las capacidades de seguridad chinas también requiere herramientas económicas, lo que significa que Estados Unidos necesita a Europa. El continente alberga una gran parte de las empresas líderes del mundo y cualquier corte económico con China sería ineficaz si no participan los países europeos.

El esfuerzo del gobierno de Biden por negarle a China semiconductores avanzados es un caso claro. Para que esta política restrictiva tuviera efecto, Washington necesitó la cooperación de la empresa holandesa ASML, la única que produce máquinas de litografía ultravioleta extrema, esenciales para manufacturar chips semiconductores avanzados. Al final, ASML aceptó la demanda estadounidense de dejar de exportar estas máquinas a China. No obstante, si Estados Unidos no desempeñara un papel importante en la seguridad europea, quizá su intensa campaña de negociación habría fracasado.

Por lo tanto, Washington haría bien en sostener su inversión en la OTAN. Incluso, podría tratar ese compromiso como la base para una nueva interpretación del pacto transatlántico. En este nuevo acuerdo, Europa continuaría recibiendo la ayuda militar que necesita de Estados Unidos en relación con Rusia, sobre todo en capacidades que para el continente serían muy costosas o políticamente difíciles de desarrollar por su cuenta, como la disuasión nuclear o las ciberarmas. A cambio, Washington recibiría la ayuda de Europa en forma de políticas económicas que limiten el revisionismo de Beijing.

EN SUS MARCAS, LISTOS... ¿FUERA?

Aunque los aliados de Washington quedarían mucho más expuestos ante un corte económico con China, Estados Unidos tampoco está libre de vulnerabilidades. Algunas

industrias estadounidenses se verían fuertemente perjudicadas por una amplia desvinculación económica: destaca sobre todo el sector agropecuario, que exporta una significativa cantidad de productos a China. Sería prudente que Washington planificara no solo cómo proteger las economías de sus socios, sino también la suya. Esto sería vital para que el gobierno proporcione la ayuda necesaria a las industrias vulnerables en caso de un corte, lo que les daría a los líderes de esas industrias la seguridad de que pueden sobrevivir a una desvinculación.

Una manera importante de proteger a las industrias de Estados Unidos es almacenar más recursos naturales. Tal es el área clave en la que China lo aventaja económicamente, pero esto solo sucedió porque Washington optó por quedar expuesto, un problema que puede y debe rectificar. El Departamento de Defensa tiene una reserva de recursos críticos para usarlos en emergencias nacionales, el Abasto de Defensa Nacional, pero está pensado solo para contrarrestar una disrupción del suministro en defensa y en sectores civiles vitales, no en la economía en su conjunto. Para proteger al país de forma exhaustiva, Estados Unidos necesita incrementar sus existencias de recursos naturales hasta los niveles de la Guerra Fría: aproximadamente diez veces lo que es ahora. Una medida semejante tendría enormes beneficios estratégicos y el costo sería moderado, seguro no mucho más que el precio de un nuevo portaviones. A la par, Washington necesita incentivar mejor el desarrollo de sustitutos para los recursos naturales que ahora compra de China, como los metales raros galio y germanio. Más aún, Estados Unidos debería aumentar la extracción y el procesamiento de recursos naturales nacionales críticos donde sea posible.

Washington también haría bien en identificar otras áreas en las que el país es vulnerable frente a los cortes de suministro de China y promover medidas de remediación adecuadas, como acabó haciendo con el equipo de protección personal durante la pandemia de covid-19. El gobierno estadounidense tendrá que contratar a más expertos para evaluar las vulnerabilidades económicas en constante cambio. De hecho, Washington debería crear una nueva estructura institucional para impulsar una mayor planeación y coordinación de largo plazo en relación con los temas de seguridad en este ámbito. Por ejemplo, podría crear nuevos grupos específicos de seguridad económica dentro de los departamentos del Tesoro y de Comercio, y del Consejo de Seguridad Nacional, cada uno supervisado por un político designado en específico para ello, como lo sugirió Justin Muzinich, el Exsubsecretario del Tesoro de Estados Unidos.

Estos nuevos funcionarios e instituciones a la larga podrían admitir que China está lejos de igualar el poder económico de Estados Unidos y que Washington tiene una gran ventaja económica sobre Beijing. Si Estados Unidos consume esta ventaja en tiempos de paz, podría llevar a China a actuar sobre sus ambiciones territoriales y le costaría a Washington amistades vitales. En cambio, si se reserva esta ventaja, podría ayudar a mantener a raya el revisionismo chino. Así, se reduciría el margen de error catastrófico entre Beijing y Washington. 🌐

¿Llegó la nueva revolución nuclear a Latinoamérica?

Oportunidades, retos y riesgos

✎ *Arturo C. Sotomayor*

Recientemente, el sector energético ha revaluado las oportunidades que ofrece la energía nuclear. Según las predicciones de la Agencia Internacional de la Energía (IEA), se espera que su generación aumente 3.5% en 2025, lo que representará un récord histórico y la colocará como la segunda fuente más importante de electricidad de bajas emisiones, después de la hidroeléctrica. Esta tendencia se enmarca en una nueva revolución nuclear impulsada por la innovación tecnológica y los avances científicos. Las próximas generaciones de reactores serán más seguros, compactos y eficientes, con diseños que facilitarán su construcción, transporte y menor dependencia de combustibles. De cumplirse esta expectativa, la revolución nuclear atenderá tanto los compromisos internacionales de reducción de emisiones como la creciente demanda energética impulsada por la inteligencia artificial (IA).

En Latinoamérica, la explotación de la energía nuclear ha sido históricamente limitada. Solo Argentina, Brasil y México han logrado generar energía mediante reactores nucleares, lo que ha contribuido apenas con 2% de la generación regional de electricidad. Sin embargo, las innovaciones tecnológicas recientes en dicho sector prometen hacer esta fuente de energía más accesible para los países en desarrollo. La región posee abundantes minerales críticos, como el litio y el cobre. Colombia, Guyana, México, Paraguay y Perú tienen yacimientos de uranio sin explorar, mientras que Argentina y Brasil cuentan con experiencia en la exploración y la explotación de estas minas. La presencia de diez reactores de investigación nuclear en la región también facilita la adquisición de experiencia operacional.

ARTURO C. SOTOMAYOR es profesor en el Centro de Estudios de Defensa Hemisférica William J. Perry de la Universidad Nacional de la Defensa. Las opiniones del autor son personales y no reflejan la posición oficial del Centro de Estudios de Defensa Hemisférica William J. Perry, de la Universidad Nacional de Defensa, del Departamento de Defensa ni del gobierno de Estados Unidos.

Con aproximadamente 5% de los recursos mundiales de uranio y con bajos costos de mano de obra, Latinoamérica se presenta como una región atractiva para el sector, lo que plantea interrogantes sobre cómo la nueva revolución nuclear puede afectarla, qué oportunidades y desafíos conlleva, y cuáles son sus mayores riesgos.

LA PRIMERA REVOLUCIÓN NUCLEAR LATINOAMERICANA

Latinoamérica fue pionera en la energía nuclear al establecer los primeros proyectos de nucleoelectricas destinados a países en desarrollo. Argentina, Brasil y México compartieron una historia de enseñanza e investigación científica, incluyendo la física nuclear experimental. A partir de 1953, estos países se beneficiaron del programa Átomos para la Paz, iniciado por el gobierno del expresidente estadounidense Dwight D. Eisenhower, que transfirió tecnología en este ámbito, proporcionó recursos para programas nucleares civiles y fomentó la cooperación internacional en intercambios científicos. Durante las décadas de 1950 y 1960, la región logró avances significativos gracias a la llegada de científicos nucleares, muchos de ellos educados en instituciones estadounidenses o refugiados de Europa del Este. En este periodo crítico, se crearon grandes instituciones latinoamericanas de investigación, como el Instituto Balseiro en Argentina, el Instituto de Investigaciones Energéticas y Nucleares en Brasil, y el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares en México. Además, estos países fundaron el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en 1957, y establecieron comisiones regulatorias nacionales a fin de otorgar licencias de comercialización e instaurar protocolos de seguridad para usos pacíficos del material radiactivo. La comunidad científica latinoamericana estaba convencida de que la energía nuclear podía potenciar el desarrollo económico de la región mediante aplicaciones en electricidad, medicina, arquitectura, computación, ingeniería, minas y propulsión espacial. Este periodo se conoce como la primera revolución nuclear latinoamericana, cuyo legado se observa de manera fiel en algunos murales del principal campus de la Universidad Nacional Autónoma de México, los cuales representan la aspiración latinoamericana de conquistar la energía nuclear para incentivar el desarrollo autónomo y reducir la dependencia tecnológica.

A pesar de ello, hacia la década de 1970, la inflación, la falta de capital, la dependencia tecnológica, así como las recurrentes crisis económicas y políticas, frenaron las ambiciones nucleares de la mayoría de los países de la región. Argentina inició la construcción de su primera planta, Atucha I, en 1968, pero comenzó a operar comercialmente hasta 1974. Pasó más de una década para que se inaugurara la segunda, Embalse, en 1984, y casi 3 décadas para que Atucha II entrara en funcionamiento, en 2014. Brasil también enfrentó retrasos significativos: inició la construcción de Angra I en 1971, pero no la operó sino hasta 1985, mientras que Angra II se completó 2 décadas después, en 2001. La tercera planta, Angra III, ha estado en construcción durante más de 4 décadas, sin una fecha concreta para su apertura. En México, la Central Nuclear Laguna Verde I comenzó su construcción en 1976 y abrió hasta 1990, mientras que Laguna Verde II se inauguró en 1995.

Más adelante, los accidentes en Three Mile Island, Chernóbil y Fukushima aumentaron el temor público y fomentaron los movimientos ambientales antinucleares en Latinoamérica. Como resultado, la generación de esta energía se volvió costosa, lenta e impopular, lo que llevó a la región a explorar alternativas como las energías fósiles y renovables.

COSTOS Y OBSTÁCULOS DE LA NUEVA REVOLUCIÓN NUCLEAR

En la actualidad, uno de los principales retos para Latinoamérica es modernizar sus instalaciones nucleares. La región cuenta con reactores de segunda generación que, aunque operativos, presentan utilidades decrecientes en el largo plazo y requieren constantes actualizaciones para mantener su seguridad. Según la Asociación Nuclear Mundial (ANM), las tres plantas nucleares argentinas generan 5.4% de la energía eléctrica del país, porcentaje menor al de 2011, cuando solo existían dos centrales. Con la capacidad actual, se esperaría que la generación oscilara entre 6% y 9%. Situaciones similares se observan en Brasil y México, donde las plantas apenas producen 3% de la energía eléctrica, cuando su capacidad potencial se estima entre 4% y 7%.

La nueva revolución nuclear promete modernizar el suministro energético con plantas de tercera generación, las cuales tienen sistemas más seguros que protegen el núcleo del reactor y previenen fugas radiactivas, poseen menos componentes —lo que facilita su operación— y ofrecen mayor rendimiento, así como una vida útil de aproximadamente 60 años, que supera los 40 años de la generación anterior. Con todo, hoy no es factible reemplazar de manera directa una planta de segunda generación por una de tercera. Cuando una central nuclear deja de ser rentable, las opciones se limitan a subsidiar sus altos costos de mantenimiento o a desmantelarla. De hecho, el Servicio de Investigación del Congreso estadounidense ha identificado que en Estados Unidos —el principal productor de energía nuclear mundial— se han desmantelado más de doce plantas de segunda generación entre 2013 y 2021, con siete más programadas para cesar operaciones debido a su baja rentabilidad y productividad. En las últimas tres décadas, solo se han construido dos nuevas centrales de tercera generación en el estado de Georgia, sumándose a un total de 94 reactores.

La energía nuclear es inviable para muchos países por su alto costo de generación. Como industria pesada e intensiva en capital, requiere inversiones sustanciales en activos fijos, tecnología, infraestructura y personal altamente calificado. Además, el sector enfrenta volatilidad significativa debido a su cadena de suministros, sobre todo en el abastecimiento y el enriquecimiento de uranio. Las fluctuaciones en precios y disponibilidad de combustible tienen efectos inflacionarios. A pesar de la existencia de múltiples yacimientos, la extracción y el enriquecimiento de uranio están

*Para Latinoamérica,
con abundantes recursos
minerales pero escasez en
capital, la construcción de
plantas nucleares de tercera
generación es incosteable.*

concentrados en cinco países —Kazajistán, Canadá, Namibia, Australia y Rusia— que poseen las minas más grandes y rentables. En consecuencia, las crisis geopolíticas, como la guerra en Ucrania, generan inestabilidad en el abasto y el costo de la energía nuclear, considerando que Kiev es un productor clave en Europa y Rusia, un proveedor líder de uranio.

¿Cuánto cuesta construir una central nuclear de tercera generación? Las centrales de Vogtle en Estados Unidos, operativas desde 2024, tuvieron un costo final de 36 000 millones de dólares, 18 000 millones más de lo previsto. Westinghouse, la empresa constructora del reactor, se declaró en bancarrota en 2017 y abandonó el proyecto. Se trata de la misma que diseñó el primer reactor nuclear brasileño, Angra 1. En el Reino Unido, la planta nuclear de Hinkley Point ha excedido los 60 000 millones de dólares y aún no tiene fecha de apertura. Es probable que esta inversión se recupere en el largo plazo, una vez que entre en operación y consiga generar luz para más de seis millones de usuarios por 6 décadas. En el caso de Vogtle, el costo de la construcción fue financiado por el consumidor, pues hubo incrementos anuales en los costos del suministro de luz de alrededor de 172 dólares mensuales por vivienda.

Para Latinoamérica, con abundantes recursos minerales pero escasez en capital, la construcción de plantas nucleares de tercera generación es incosteable. El monto invertido en Hinkley supera la suma de todos los proyectos de infraestructura crítica en construcción de la región. Una alternativa es atraer capital extranjero ofreciendo acceso a yacimientos de uranio, estrategia que Brasil está implementando al permitir la inversión privada en la extracción de minerales. Esto no solo permitiría la llegada de capital, sino que reduciría los costos operativos de sus centrales. Brasil dependería menos de la importación de uranio, controlaría de manera más eficiente la cadena de suministro y tendría mayor control sobre el ciclo de combustible nuclear.

Si bien han llegado los inversionistas, sobre todo de China, esto no ha impulsado el resto de la industria nuclear brasileña. Parte del problema para atraer capital privado radica en el diseño institucional del sector nuclear, que tanto en Brasil como en México es público y monopólico. En ambos países, las centrales nucleares son consideradas infraestructura crítica estratégica, lo que da al gobierno federal la exclusividad en los servicios y las instalaciones.

Los préstamos internacionales para el desarrollo, que otorgan organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la OIEA, son alternativas disponibles para financiar proyectos nuevos y modernizar centrales nucleares, pero generan deuda pública y deben pagarse con tasas de interés a valor de mercado.

Un análisis costo-beneficio revela la estrategia de un país latinoamericano donde la inversión en el sector nuclear no es prioritaria. La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha anunciado un plan que busca atraer inversores privados, excluyendo al sector nuclear. Su estrategia omite la construcción de nuevas centrales nucleares y la modernización de las existentes, mientras que prioriza el desarrollo de energía eólica y solar, alternativas menos intensas en capital y, por lo tanto, más costeables. El objetivo es ampliar las fuentes de energía renovable hasta 38% para 2030; no obstante, de materializarse este plan, México deberá considerar seriamente el desmantelamiento

de Laguna Verde 1, cuya vida operativa promedio de 40 años concluirá ese año. Es importante destacar que el desmantelamiento de una central nuclear es un proceso costoso, prolongado y complejo que involucra el tratamiento de desechos radiactivos.

REACTORES MODULARES: ¿OPORTUNIDAD O CALLEJÓN SIN SALIDA?

La nueva revolución nuclear tiene una característica única que la distingue de sus antecesoras: sus principales voceros y propulsores son las industrias tecnológicas, entre las que se encuentran Amazon, Google y Microsoft, las cuales han migrado a ese sector ante la creciente demanda energética. Según la IEA, los centros de datos representan alrededor de 1% del consumo mundial de electricidad. Se estima que la demanda aumentará porque la IA utiliza aún más energía que otras formas de consumo de electricidad, como computadoras, teléfonos y televisores. Esto ha motivado la búsqueda de opciones más baratas para generar energía nuclear. El proyecto TerraPower, que encabeza el magnate Bill Gates, pretende diseñar reactores nucleares más económicos y sostenibles. Por ejemplo, en lugar de utilizar agua, se planea usar sodio para enfriar de manera más eficiente los reactores y disminuir sus costos operativos. También se piensa modificar la escala de los reactores, haciéndolos más pequeños y construyéndolos modularmente, como si fueran productos de fábrica. Al reducir su tamaño, también se disminuyen los peligros de exposición radiactiva al medio ambiente, pues se contiene su interior con mayor seguridad. Además, su dimensión permitiría transportarlos a diferentes sitios donde haya demanda de energía. El combustible principal que se utilizaría para el reactor es uranio poco enriquecido y de alto ensayo (HALEU), lo cual posibilita que los reactores sean más enriquecidos y logren ciclos de operación más largos. En un inicio, Gates estimaba que un reactor modular producido por su empresa costaría alrededor de 4000 millones de dólares, una cifra significativa, pero mucho menor que el capital que requieren las grandes centrales nucleares de tercera generación.

Justo en el rubro de los reactores modulares pequeños, donde algunos países latinoamericanos pueden tener mejores oportunidades de participación, Argentina es el primero en apostar a su desarrollo y es, quizá, el mejor posicionado. Al ser pionero de la energía nuclear en la región, tiene tres atractivos para ese sector: capacidad nuclear (tres centrales y cinco reactores de investigación operativos), marco regulatorio para desarrollar aplicaciones vinculadas con la energía nuclear, y capital humano, que incluye a científicos e ingenieros. El Plan Nuclear Argentino, que anunció el presidente Javier Milei en diciembre de 2024, busca que el país se convierta en un nodo de IA, una especie de sede mundial o regional de centros de datos, que fomente, de manera paralela, el desarrollo de reactores modulares.

El Salvador es el otro país latinoamericano que ha expresado interés en este tipo de reactores. Posee menos atributos institucionales y capacidades nucleares que su contraparte argentina, pero ha tomado una serie de medidas dispuestas a acelerar el desarrollo nuclear, como la Ley de Energía Nuclear, aprobada en 2023, y la autorización para instalar un reactor de investigación, el primero en

Centroamérica. A la par, también ha firmado convenios internacionales de cooperación nuclear con dos de sus socios estratégicos —Argentina y Estados Unidos— y con la OIEA. Con ello, busca cumplir su compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, a la vez que incentiva la formación de cuadros científicos. Resulta curioso que su interés en los reactores modulares coincide con sus iniciativas de criptomonedas, ya que ambos sectores comparten algunas conexiones. El Salvador ha participado de forma activa en la minería de bitcoins, y los reactores modulares podrían proporcionar fuentes de energía limpia adicionales para las operaciones mineras de criptomonedas.

El principal reto de este modelo de desarrollo nuclear es que, hasta ahora, no hay ningún reactor modular operable de manera comercial fuera de China y Rusia. La ANM ha identificado más de ochenta prototipos en desarrollo, todos intensivos en capital. El sector nuclear es de los más regulados, lo que implica que cualquier innovación en métodos, sistemas o usos de combustible debe pasar por un riguroso proceso de inspecciones antes de aprobarse para su uso comercial. Por ejemplo, Gates ha comenzado la construcción de su reactor en Wyoming, pero no tiene la aprobación de la Comisión Nuclear Regulatoria de Estados Unidos, lo que significa que no puede comercializarlo. El HALEU solo se fabrica en Rusia, está sujeto a sanciones internacionales y su venta está prohibida por ley en Estados Unidos. Esto implica que Gates tendrá que buscar alternativas de combustible, recaudar más fondos y solicitar subsidios gubernamentales del Departamento de Energía para, quizá, tener el primer reactor operable en 2030, a un costo mayor a los 4000 millones de dólares estimados al inicio. En 2024, algunas de las empresas más avanzadas en el desarrollo de reactores modulares basadas en Seattle —donde opera Microsoft—, como Ultra Safe Nuclear, se declararon en bancarrota, lo cual fue un serio revés para esta industria. El dilema inherente en los reactores modulares es que, al reducir la escala, disminuye también el número de usuarios a los que pretenden servir. Un reactor modular genera cerca de un tercio de la capacidad de los reactores nucleares convencionales y, por lo tanto, menor rentabilidad. Hoy, ninguna empresa de luz estadounidense se ha arriesgado a contratar la fabricación de un reactor modular.

En el contexto latinoamericano, esto implica que no se podrán instalar o comercializar los reactores modulares pequeños en el corto o el mediano plazo. Aún más, Argentina tiene un doble reto: atraer el capital de la IA cuando tiene una banda ancha de internet muy limitada, y luego atraer el capital para el desarrollo de reactores modulares. Si bien cuenta con capital humano capacitado, los datos del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación indican que los recortes del primer año de gobierno de Milei redujeron hasta en 30% los presupuestos públicos destinados al fomento de la ciencia, la investigación y la tecnología. Esta situación está generando una fuga de cerebros, precisamente en el momento en que se requieren más científicos e ingenieros en el país. De poco servirán los bajos costos de mano de obra si el capital humano emigra a otros mercados. Para El Salvador, el reto es todavía mayor al ser importador neto de capital y de tecnología, además de que, por ahora, no cuenta con ninguna institución de educación superior que forme cuadros

de ingenieros o físicos nucleares. Países como Chile, Colombia, Jamaica y Perú también tienen reactores de investigación y llevan décadas formando cuadros de científicos, pero ninguno ha podido instalar un reactor con fines comerciales. Por tanto, la ola mundial de la revolución nuclear bien podría saltarse la oportunidad que representa tanto en Argentina como en El Salvador por déficits estructurales en ambos países.

SEGURIDAD, RIESGOS Y PELIGROS DEL SECTOR NUCLEAR

Ninguna oportunidad de mercado está exenta de riesgos, y la energía nuclear no es la excepción. China, el país que ha logrado el mayor avance en la nueva revolución nuclear, también es el que más puede disrupir el sector. En la última década, Beijing ha aumentado su capacidad nuclear en más de 34 gigavatios al sumar más de 54 reactores, entre ellos, 20 de tercera generación y el primer reactor modular comercial del mercado. Aunque es el segundo productor mundial de energía nuclear, sus centrales solo cubren 5% de la generación eléctrica del país. Las empresas nucleares estatales chinas pueden construir, instalar y operar reactores a un tercio del costo de sus competidores occidentales. Aún más, la banca de desarrollo china ofrece préstamos con tasas de interés más bajas para financiar la construcción de plantas nucleares. No obstante, los países que abren su sector energético a China exponen su infraestructura crítica, ya que las plantas dependen de sistemas digitales, lo que las hace vulnerables a ataques cibernéticos estratégicos dirigidos a dependencias gubernamentales, de seguridad nacional y de inteligencia. Recientemente, tanto Argentina como el Reino Unido consideraron firmar contratos con China para construir centrales nucleares, pero al final desistieron debido a preocupaciones de seguridad nacional.

Asimismo, las tecnologías emergentes amenazan la seguridad internacional debido a su uso dual, pues sus innovaciones pueden aplicarse con fines tanto civiles como militares. Brasil es el único país latinoamericano que está desarrollando un proyecto similar al de un reactor modular, aunque su aplicación es puramente militar. Desde la época de la dictadura, Brasil ha buscado tener un submarino de propulsión nuclear para vigilar y proteger su “Amazonia azul”, un área de 4.5 millones de kilómetros cuadrados en el mar Atlántico donde se concentran sus reservas de petróleo. Gracias a los avances tecnológicos y a un acuerdo de cooperación nuclear con Francia, está cerca de alcanzar su objetivo: ya cuenta con el astillero y el casco del submarino, mientras que el reactor nuclear está en desarrollo. Los reactores submarinos son similares a los modulares en tamaño y sistemas de seguridad, pero difieren en su operación y requieren uranio altamente enriquecido, lo cual los destina al uso militar. Aunque Brasil se ha comprometido a no desarrollar armas nucleares, los submarinos de propulsión nuclear generan sospechas debido al riesgo de proliferación. Al permanecer sumergidos durante largos periodos, operan sin inspecciones regulares. El Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares, del cual Brasil es signatario, permite el uso dual, pero establece un marco complejo para equilibrar el uso pacífico de la energía nuclear con los esfuerzos de no proliferación. Desde 2022, Brasil trabaja con la OIEA para garantizar que no haya desviaciones hacia sistemas de armas nucleares; sin

embargo, aún no ha obtenido el combustible necesario para la propulsión del submarino, y su programa plantea riesgos adicionales relacionados con el desmantelamiento y la gestión de desechos radiactivos, procesos que requieren tecnologías avanzadas que solo tienen algunos países, sobre todo aquellos con armas nucleares.

La nueva revolución nuclear también tiene sus limitaciones. Ninguna de las innovaciones recientes ha resuelto el problema de los desechos, que permanecen radiactivos durante millones de años. Solo un pequeño porcentaje es reciclable; el resto debe almacenarse de forma temporal en depósitos de enfriamiento, para luego sellarse y enterrarse de manera permanente. Un estudio de la Universidad de Stanford, publicado en *Proceedings of the National Academy of Sciences*, demostró que los reactores modulares son más radiotóxicos y generarán más volumen de desecho que los convencionales, lo que representa un mayor riesgo. Incluso una pequeña fuga de material radiactivo es una amenaza debido a los daños que puede causar tanto al ecosistema como al sistema alimenticio y a la salud humana. Es preocupante que los desechos nucleares puedan usarse para fabricar bombas sucias, las cuales son dispositivos que diseminan contaminación radiactiva. Aunque hasta ahora ningún

Cualquier incremento en la capacidad energética nuclear de la región generará una mayor demanda de seguridad y capacitación.

grupo terrorista ha logrado detonar con éxito un dispositivo de este tipo, en 1995 hubo un incidente en Moscú en el que grupos rebeldes chechenos colocaron una bomba sucia que, por fortuna, no explotó. El aumento en el uso de reactores nucleares puede incentivar el terrorismo nuclear, ya que los reactores pueden convertirse en blancos de guerra o ataques terroristas, como ocurrió recientemente en Ucrania. Además, la acumulación de desechos radiactivos aumenta las oportunidades

para que individuos o grupos criminales intenten hacerse de ese material para trafcarlo o utilizarlo como fuente detonante. Considerando la presencia de organizaciones criminales transnacionales interesadas en el tráfico ilícito, este escenario no es hipotético para los países latinoamericanos. En 2013, un camión que transportaba cobalto 60, el cual es radiactivo, fue robado en México y luego abandonado con el material expuesto a la intemperie. Por este motivo, en Latinoamérica, las fuerzas armadas y de seguridad pública son las encargadas de vigilar y proteger las centrales nucleares, establecer cordones de seguridad cuando hay accidentes, y evitar el tráfico ilícito de material radiactivo. Por lo tanto, cualquier incremento en la capacidad energética nuclear de la región generará una mayor demanda de seguridad y capacitación para atender emergencias causadas por fugas o detonantes radiactivos.

En resumen, a pesar de ser pionera en el sector, Latinoamérica no está a la vanguardia de la nueva revolución nuclear. Si bien hay rezago tecnológico y faltan fondos para financiar megaproyectos, existe una pequeña ventana de oportunidad para que la región se beneficie de las innovaciones del sector. Mucho dependerá de cómo evolucionen las alternativas energéticas y si terminan siendo más costeables que las opciones nucleares. Pese a todo, para que la industria de alta tecnología se asome al

mercado nuclear latinoamericano, se requiere modificar marcos regulatorios y jurídicos, reformar el sector educativo superior para formar capital humano, invertir más en la investigación científica, y modernizar los sistemas de seguridad y salvaguarda nucleares. La industria nuclear no se activa con promesas o planes estratégicos; en cambio, responde a incentivos estructurales e institucionales tangibles. Hasta ahora, los proyectos energéticos latinoamericanos, sobre todo los nucleares, se perciben más como dichos a los que les falta un gran trecho que recorrer. **N**



NORTEAMÉRICA

REVISTA ACADÉMICA DEL CISAN-UNAM

Foro abierto para debatir e intercambiar, desde una perspectiva multidisciplinaria, estudios y análisis de actualidad sobre la región de América del Norte y sus vínculos con el mundo.

Año 19, número 2, julio-diciembre de 2024 / Year 19, Issue 2, July-December 2024

ENSAYOS / ESSAYS

Efectos de la especialización en hortalizas de exportación en México: aspectos institucionales ante las ventajas comparativas reveladas y la sostenibilidad productiva
Effects of the Specialization in Vegetables for Exportation in Mexico: Institutional Aspects before Revealed Comparative Advantages and Productive Sustainability
Blanca Araceli Borja Rodríguez
Seyka Sandoval

Humanitarian Governance and Migration Dynamics: Analyzing Policy Impacts at the U.S.-Mexico Border
Gobernanza humanitaria y dinámica migratoria: análisis de los impactos de las políticas en la frontera Estados Unidos-México
José María Ramos García
Jimmy Emmanuel Ramos Valencia

Redes productivas globales y núcleos dinámicos en Norteamérica: la transición tecnológico-productiva de la industria automotriz
Global Productive Networks and Dynamic Cores in North America: the Technological-Productive Transition of the Automotive Industry
Sergio Ordóñez Gutiérrez

Canadian Cannabis Industry and Social Responsibility: The Case of Canopy Growth
Industria cannábica canadiense y la responsabilidad social: el caso de Canopy Growth
Araón Díaz Mendiburo

La correlación entre el detrimento económico y la radicalización hacia la extrema derecha en Estados Unidos: el caso de los grupos de odio en el Rust Belt
The Correlation between Economic Decline and Radicalization towards the Far Right in the United States: The Case of Hate Groups in the Rust Belt
Estefanía Cruz Lera

A Fork in the Road? Rethinking Culinary Genius, Power Dynamics, and the Impact of Social Movements on U.S. Food Media and Popular Culture
¿Una encrucijada? Repensando el genio culinario, las dinámicas de poder y el impacto de los movimientos sociales en los medios de comunicación gastronómicos y la cultura popular de Estados Unidos
Julietta Flores Jurado

ANÁLISIS DE ACTUALIDAD / CONTEMPORARY ISSUES

El papel de la mujer en los nuevos tránsitos migratorios africanos a través de las Américas
Women's Role in New African Migratory Transits Across the Americas
Esther Serra Mingot

VENTAS



SUSCRIPCIONES

Positioning and Resistance: A Narrative Inquiry of Undocumented Mexican Domestic Workers in New York City
Posicionamiento y resistencia: una investigación narrativa sobre trabajadoras domésticas mexicanas indocumentadas en Nueva York
Colette Ilse Despagne Broxner
María del Socorro Gutiérrez-Magallanes
José Jorge Gómez Izquierdo

Seguridad e interdependencia entre México y Estados Unidos (2019-2023): ¿cómo evitan declarar terroristas a los narcotraficantes?
Security and Interdependence between Mexico and the United States (2019-2023): How Do They Avoid Declaring Drug Traffickers as Terrorists?
Luis Miguel Morales Gámez
Adriana Sletza Ortega Ramírez

Migrantes haitianos en Tijuana. Surgimiento y consolidación de la primera comunidad afrodescendiente en el norte de México
Haitian Migrants in Tijuana: Emergence and Consolidation of the First Afro-descendant Community in Northern Mexico
Victor Hugo Rentería Pedraza
David Rocha Romero
Marlenny Albaladejo Rodríguez

Inmigrantes estadounidenses en México: análisis de sus características socioeconómicas y laborales
American Immigrants in Mexico: Analysis of Their Socioeconomic and Labor Characteristics
Pedro Paulo Orraca Romano

DOSSIER

Introducción. Conmemoración de los 80 años de relaciones diplomáticas México-Canadá
Introduction. Commemoration of the 80th Anniversary of Mexico-Canada Diplomatic Relations
Claudia Lucotti
Laura López Morales

La visibilización de Canadá en México: a 80 años de relaciones diplomáticas y 30 de la región comercial
The Visibility of Canada in Mexico: 80 Years of Diplomatic Relations and 30 Years of the Commercial Region
Graciela Martínez-Zalce

La Estrategia de Exportación Creativa canadiense y las misiones comerciales como herramienta de relaciones culturales internacionales
The Canadian Creative Export Strategy and Trade Missions as Tools for International Cultural Relations
Ernesto Miranda Trigueros

Interacciones, vínculos y puentes entre pueblos originarios de Canadá y México (1995-2023)
Interactions, Connections, and Bridges between Indigenous Peoples of Canada and Mexico (1995-2023)
Liliana Cordero Marín

El camino hacia el autoritarismo estadounidense

¿Qué viene después de la ruptura democrática?

 *Steven Levitsky y Lucan A. Way*

El primer triunfo electoral de Donald Trump en 2016 desencadenó una enérgica defensa de la democracia por parte del poder establecido en Estados Unidos. En contraste, su regreso a la presidencia se ha recibido con sorprendente indiferencia. Muchos de los políticos, críticos, figuras mediáticas y líderes empresariales que lo veían como una amenaza para la democracia hace 8 años ahora consideran que esas preocupaciones eran exageradas. Después de todo, sobrevivió a su primer mandato. En 2025, preocuparse por el destino de la democracia estadounidense prácticamente ya no está de moda.

Tal viraje ocurre en muy mal momento: la democracia en Estados Unidos corre hoy más peligro que en ninguna otra época de su historia moderna. Su retroceso en este frente empezó hace 10 años: Freedom House, cuyo informe “Freedom in the World” califica la libertad mundial de todos los países mediante una clasificación del 0 al 100, degradó a Estados Unidos de la posición 92 en 2014 (empatado con Francia) a la 83 en 2021 (por debajo de Argentina y empatado con Panamá y Rumania). Y el país aún no logra recuperarse.

Los tan pregonados controles constitucionales de Estados Unidos no están cumpliendo su función. Ni el Congreso ni el poder judicial exigieron responsabilidades a Trump, cuando violó la regla cardinal de la democracia al intentar anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 e impedir un traspaso pacífico de poderes. Aún así, el Partido Republicano lo volvió a nominar para la presidencia. Su campaña en 2024 fue abiertamente autoritaria porque prometió perseguir a

STEVEN LEVITSKY es profesor David Rockefeller de Estudios Latinoamericanos y de Gobierno en la Harvard University, así como investigador principal para la Democracia en el Council on Foreign Relations (CFR). **LUCAN A. WAY** es profesor distinguido de Democracia en el Departamento de Ciencia Política de la University of Toronto e investigador de la Royal Society de Canadá. Son autores de *Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes After the Cold War* (Cambridge University Press, 2010).

sus rivales, castigar a los medios de comunicación críticos y desplegar el ejército para reprimir las protestas. Ganó y, gracias a un inusitado fallo de la Corte Suprema, disfrutará de amplia inmunidad presidencial durante su segundo mandato.

A decir verdad, la democracia sobrevivió a su primer gobierno a resultas de su falta de experiencia, plan y equipo. Cuando asumió el cargo en 2017, no controlaba al Partido Republicano, y la mayoría de los líderes republicanos aún seguían comprometidos con las reglas democráticas del juego. Trump tuvo que gobernar con el poder establecido de los republicanos y los tecnócratas, quienes lo limitaron en extremo. Ya no es así. Esta vez, ha dejado en claro que pretende gobernar con partidarios leales. Ahora domina el Partido Republicano que, sin las fuerzas contrarias a Trump, consiente su comportamiento autoritario.

Es probable que la democracia estadounidense se resquebraje durante su segundo gobierno porque dejará de cumplir con los criterios estándar de una democracia liberal: sufragio universal, elecciones libres y justas, y amplia protección de las libertades civiles. Este desmoronamiento no derivará en una dictadura clásica, con sus farsas electorales y el encarcelamiento, el exilio o el asesinato de los opositores. Incluso, en el peor de los casos, Trump no podrá rescibir la Constitución ni anular el orden constitucional. Se verá limitado por la independencia de los jueces, el federalismo, el profesionalismo militar y los grandes obstáculos a la reforma constitucional. También habrá elecciones en 2028 y los republicanos podrían perderlas.

Sin embargo, el autoritarismo no requiere la destrucción del orden constitucional. No se avecina una dictadura fascista ni unipartidista, sino un autoritarismo competitivo: un sistema en el que los partidos compiten en las elecciones, pero el abuso de poder del presidente en funciones crea condiciones desfavorables para la oposición. La mayoría de las autocracias que surgieron desde el final de la Guerra Fría entran en esta categoría, como el Perú de Alberto Fujimori, la Venezuela de Hugo Chávez y, más recientemente, El Salvador, Hungría, la India, Túnez y Turquía. Con el autoritarismo competitivo, la arquitectura formal de la democracia —incluidas las elecciones pluripartidistas— permanece intacta. Las fuerzas de la oposición son legales, legítimas y se disputan el poder. Las elecciones suelen ser batallas encarnizadas en las que el presidente en funciones se mantiene en tensión. Y de vez en cuando pierden, como ocurrió en Malasia en 2018 y en Polonia en 2023. No obstante, como aman el juego porque usan la maquinaria del gobierno para atacar a los oponentes y asimilar a los críticos del sistema para neutralizarlos, el sistema no es democrático. La competencia es real, pero injusta.

El autoritarismo competitivo transformará la vida política en Estados Unidos. Como dejó en claro el aluvión de órdenes ejecutivas dudosamente constitucionales de Trump, el costo de formar parte de la oposición ciudadana aumentará de forma considerable: el fisco podría perseguir a los donantes del Partido Demócrata; las empresas que financian grupos de derechos civiles tal vez enfrenten un mayor escrutinio fiscal y legal o vean sus negocios entorpecidos por las autoridades reguladoras, y los medios de comunicación reprobatorios quizá encaren costosas demandas por difamación y litigios de diversa índole, así como políticas de represalia contra su empresa matriz. Los

estadounidenses podrán seguir oponiéndose al gobierno, pero será más difícil y arriesgado, lo que llevará a muchas élites y ciudadanos a decidir que la lucha no merece la pena. Así pues, la falta de resistencia podría allanar el camino para un atrincheramiento autoritario, con consecuencias graves y perdurables para la democracia mundial.

EL ESTADO COMO ARMA

En el segundo gobierno de Trump, podrían violarse las libertades civiles básicas de maneras que subviertan inequívocamente la democracia. El Presidente, por ejemplo, podría ordenar al ejército que dispare a los manifestantes, como al parecer quería hacer durante su primer mandato. También podría cumplir su promesa electoral de poner en marcha la “mayor operación de deportación de la historia de Estados Unidos”, dirigida contra millones de personas en un proceso plagado de abusos que conduciría, de manera inevitable, a la detención equivocada de miles de ciudadanos estadounidenses.

Pero gran parte del autoritarismo que se avecina adoptará formas menos evidentes: la politización y la armificación de la burocracia gubernamental. Los Estados modernos son entidades poderosas. El gobierno federal de Estados Unidos emplea a más de dos millones de personas y recibe un presupuesto anual de casi 7 billones de dólares. Los funcionarios actúan como árbitros relevantes de la vida política, económica y social; ayudan a determinar a quién se le juzga por un delito y le audita el fisco; cuándo y cómo se aplican las normas y los reglamentos; qué organizaciones están exentas de impuestos; cuáles empresas obtienen contratos para acreditar universidades, y cuáles obtienen licencias, concesiones, contratos, subvenciones, exenciones arancelarias y rescates. Incluso en países como Estados Unidos, con gobiernos *laissez faire* relativamente pequeños, esta facultad crea un sinfín de oportunidades para que los líderes recompensen a sus aliados y castiguen a sus oponentes. Ninguna democracia está exenta de este tipo de politización, pero cuando los gobiernos hacen del Estado un arma, al utilizar su poder para perjudicar y debilitar de forma sistemática a la oposición, socavan la democracia liberal. La política se convierte, entonces, en un partido de fútbol en el que árbitros, mediocampistas y delanteros trabajan para que su equipo sabotee al rival.

Por lo anterior, todas las democracias establecidas cuentan con complejas legislaciones, reglas y normatividades para impedir la armificación del Estado, y con un poder judicial independiente, un banco central y autoridades electorales autónomas, así como una administración pública con protecciones del empleo. En Estados Unidos, la Ley de Servicio Civil Pendleton de 1883 creó una función pública profesionalizada en la que la contratación se basa en méritos. Los trabajadores federales tienen prohibido participar en campañas políticas y no pueden ser despedidos ni degradados por motivos políticos. La gran mayoría de los más de 2 millones de empleados federales disfrutan desde hace tiempo de la protección de la función pública. Al inicio del segundo mandato de Trump, solo unos 4000 de ellos eran nombrados por motivos políticos.

Estados Unidos también ha formulado un amplio conjunto de reglas y normas para impedir la politización de las principales instituciones estatales; entre otras, la confirmación de los nombramientos presidenciales por parte del Senado, el cargo vitalicio de los jueces de la Corte Suprema, la seguridad en el cargo del presidente de la Reserva Federal, al igual que los mandatos de 10 años de los directores del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y de 5 años de los directores del Servicio de Impuestos Internos (IRS). Las fuerzas armadas están protegidas de la politización mediante lo que el jurista Zachary Price describe como “una capa inusualmente gruesa de estatutos” que rigen el nombramiento, el ascenso y la destitución de los oficiales militares. Una serie de reformas posteriores al escándalo de Watergate pusieron fin a la politización del Departamento de Justicia, el FBI y el IRS durante la década de 1970.

Los funcionarios profesionales a menudo resultan fundamentales para resistir los esfuerzos del gobierno por armificar los organismos estatales y, en años recientes, han servido como primera línea de defensa de la democracia en Brasil, la India, Israel, México y Polonia, así como en Estados Unidos durante el primer gobierno de Trump. Por tal motivo, una de las primeras medidas que adoptaron autócratas electos como Nayib Bukele en El Salvador, Chávez en Venezuela, Viktor Orbán en Hungría, Narendra Modi en la India y Recep Tayyip Erdogan en Turquía fue sacar a los funcionarios profesionales de las entidades públicas responsables de investigar y perseguir delitos, regular los medios de comunicación y la economía, así como supervisar las elecciones, y sustituirlos por personas fieles al régimen. Después de que Orbán se convirtiera en Primer Ministro en 2010, su gobierno despojó a los funcionarios de las principales protecciones de la función pública, despidió a miles de ellos y los reemplazó con miembros leales del partido gobernante, Fidesz. Del mismo modo, el partido polaco Ley y Justicia debilitó las leyes de la función pública eliminando la convocatoria pública y llenando la burocracia, la judicatura y el ejército de aliados partidistas.

Trump y sus partidarios planean algo similar. Por un lado, Trump está reintentando debilitar la función pública mediante el restablecimiento de la Lista F, una orden ejecutiva que permite al Presidente excluir a decenas de miles de servidores públicos de las salvaguardas del servicio en puestos considerados “de índole confidencial o relacionados con la determinación, la formulación o la defensa de las políticas públicas”. Si se aplica, el decreto los transformaría en empleados “precarios” que pueden reemplazarse fácilmente con aliados políticos. La cantidad de nombramientos por afiliación —más elevada en el gobierno estadounidense que en la mayoría de las democracias establecidas— podría más que decuplicarse. La Fundación Heritage y otros grupos de derechas han gastado millones de dólares en reclutar e investigar a un ejército de hasta 54 000 partidarios para ocupar puestos en el gobierno. Estos cambios podrían amedrentar al público en general y disuadir a los funcionarios de cuestionar al Presidente. Por último, el señalamiento de Trump de despedir al Director del FBI,

*Estados Unidos se dirige
hacia un autoritarismo
competitivo, no hacia una
dictadura unipartidista.*

Christopher Wray, y al Director del IRS, Danny Werfel, antes de concluir sus respectivos mandatos los orilló a dimitir, lo que allanó el camino para remplazarlos por partidarios con poca experiencia.

Una vez que organismos clave como el Departamento de Justicia, el FBI y el IRS se llenan de partidarios, los gobiernos pueden utilizarlos para tres fines antidemocráticos: investigar y perseguir a los rivales, neutralizar por asimilación a la sociedad civil, y proteger a los aliados de ser perseguidos.

GOLPE Y LEY

El medio más visible de la armificación del Estado es la persecución selectiva. Prácticamente todos los gobiernos autocráticos electos se valen del ministerio y la procuraduría de justicia, del fisco y de los centros de inteligencia para investigar y enjuiciar a políticos rivales, empresas mediáticas, editores y periodistas, líderes gremiales, universidades y otros críticos. En las dictaduras tradicionales, se les suele acusar de delitos como sedición, traición o conspiración para actos de insurrección, pero los autócratas contemporáneos tienden a perseguirlos por delitos más mundanos, como corrupción, evasión fiscal, difamación e incluso infracciones menores de normas arcanas. Si los investigadores escudriñan, suelen encontrar infracciones, como ingresos no informados en las declaraciones de impuestos o incumplimiento de normas que rara vez se aplican.

Trump ha reiterado su intención de enjuiciar a rivales como Liz Cheney, Exrepresentante republicana, y otros miembros del comité de la Cámara de Representantes que investigaron la toma del Capitolio del 6 de enero de 2021. En diciembre de 2024, los republicanos de la Cámara solicitaron al FBI investigar a Cheney. Los intentos de Trump de armificar al Departamento de Justicia durante su gobierno anterior se frustraron sobre todo desde dentro, por lo que esta vez buscó a personas que compartieran su objetivo de perseguir a los supuestos enemigos. Su Procuradora General, Pam Bondi, señaló que los “procuradores de Trump serán perseguidos”, mientras que su Director del FBI, Kash Patel, ha insistido en que se persiga a sus rivales. En 2023, Patel incluso publicó un libro con una lista de funcionarios públicos “enemigos” en la diana.

Dado que el gobierno de Trump no controlará los tribunales, la mayoría de los blancos de la persecución selectiva no acabarán en la cárcel. Pero el gobierno no necesita encarcelar a sus críticos para causarles daño. Quienes sean investigados tendrán que dedicar tiempo, energía y recursos considerables para defenderse; gastarán sus ahorros en abogados; su vida se verá alterada; su carrera profesional se descarrilará, y su reputación se empañará. Como mínimo, ellos y sus familias sufrirán meses o años de ansiedad y noches de insomnio.

La intención de Trump de servirse de los organismos gubernamentales para acosar a sus presuntos adversarios no se limitará al Departamento de Justicia y al FBI. Los gobiernos autocráticos, por ejemplo, suelen valerse del fisco para perseguir a sus contrarios e investigarlos por motivos políticos. En Turquía, el gobierno de Erdogan acabó con el grupo mediático Dogan Yayin —cuyos periódicos y televisoras informaban

sobre la corrupción gubernamental— al acusarlo de evasión fiscal e imponerle una multa discapacitante de 2500 millones de dólares que obligó a la familia Dogan a vender su imperio mediático a compinches del gobierno. Erdogan también se valió de las auditorías fiscales para presionar al Grupo Koc, el mayor conglomerado industrial de Turquía, para que dejara de apoyar a los partidos de la oposición.

De la misma forma, el gobierno de Trump podría usar a las autoridades fiscales contra los críticos. Durante sus mandatos, John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson y Richard Nixon politizaron al IRS antes de las reformas surgidas del escándalo de Watergate de la década de 1970. Una serie de nombramientos con fines políticos debilitaría esas salvaguardias y podría poner a los donadores del Partido Demócrata en el punto de mira. Dado que todas las donaciones de campaña de personas físicas se hacen públicas, el gobierno de Trump identificaría y perseguiría fácilmente a esos donadores; de hecho, el temor a tal persecución podría disuadirlos de respaldar a los políticos de la oposición en primer lugar.

La exención fiscal también puede politizarse. El presidente Nixon logró denegar o postergar la exención fiscal de organizaciones y grupos de pensamiento que consideraba políticamente hostiles. Con Trump, esos esfuerzos podrían resultar más fáciles gracias a la legislación antiterrorista que la Cámara de Representantes aprobó en noviembre de 2024 y que faculta al Departamento del Tesoro para, sin proporcionar prueba alguna, retirar la exención fiscal a cualquier organización sospechosa de apoyar el terrorismo. Dado que el término “apoyo al terrorismo” es muy amplio, Trump podría “empuñarlo contra quienes considera sus enemigos políticos”, como explica el representante demócrata Lloyd Doggett.

Es casi seguro que use al Departamento de Educación contra las universidades, que por ser centros de activismo opositor resultan blanco frecuente de la ira de gobiernos autoritarios competitivos. El Departamento de Educación asigna fondos federales por miles de millones de dólares a las universidades y supervisa a las entidades responsables de darles reconocimiento oficial, además de que vigila el cumplimiento de las secciones VI y IX de la legislación que prohíbe a las instituciones educativas discriminar por motivos de raza, color, país de origen o sexo. Estas facultades rara vez se politizaron con anterioridad, pero los líderes republicanos solicitaron que se apliquen contra las escuelas de élite.

Los autócratas electos también suelen iniciar demandas por difamación y otras formas de acción legal para silenciar a sus críticos en los medios de comunicación. En Ecuador, por ejemplo, en 2011, el presidente Rafael Correa ganó una demanda de 40 millones de dólares contra un columnista y tres ejecutivos de un periódico connotado por publicar un editorial en el que lo llamaban “dictador”. Aunque las figuras públicas rara vez ganan este tipo de demandas en Estados Unidos, Trump ha usado acciones legales de distinta índole para desgastar a los medios de comunicación, como ABC News, CBS News, The Des Moines Register y Simon & Schuster. Su estrategia ya ha dado frutos. En diciembre de 2024, ABC tomó la sorprendente decisión de llegar a un acuerdo en una demanda por difamación presentada por Trump y le pagó 15 millones de dólares para evitar un juicio que la emisora quizá habría ganado. Al parecer, los propietarios de CBS también están

considerando llegar a un acuerdo en una demanda de Trump, lo que demuestra cómo las acciones legales espurias pueden resultar políticamente eficaces.

El gobierno no necesita atacar de forma directa a todos sus críticos para silenciar a la mayor parte de la disidencia. Unos cuantos ataques sonados pueden resultar muy disuasorios. Por ejemplo, otros políticos seguirían con lupa un proceso judicial contra Cheney; una demanda contra *The New York Times* o contra la Universidad de Harvard amedrentaría a otros medios de comunicación o universidades.

TRAMPA DE SEDUCCIÓN

Un Estado armado es mucho más que una herramienta para castigar a los adversarios; se puede utilizar para obtener apoyo. Los gobiernos de los regímenes autoritarios competitivos suelen usar las políticas económicas y las decisiones normativas para recompensar a personas, empresas y organizaciones políticamente afines. Los líderes empresariales, las empresas mediáticas, las universidades y otras organizaciones tienen tanto que ganar como que perder con las decisiones antimonopolio del gobierno, la concesión de permisos y licencias, la adjudicación de contratos y las concesiones gubernamentales, la exención de normativas o los aranceles, y el otorgamiento de exenciones fiscales. Si creen que estas decisiones se toman por causas políticas —y no técnicas—, se verán muy motivadas a alinearse con el presidente en funciones.

Las posibilidades de granjearse al sector empresarial son más elevadas. Para las grandes empresas en Estados Unidos, hay mucho en juego tras las decisiones antimonopolio, arancelarias y regulatorias, y la adjudicación de contratos públicos. (En 2023, el gobierno federal gastó más de 750 000 millones de dólares, casi 3% del PIB, en la adjudicación de contratos). Para los aspirantes a autócratas, las decisiones de política pública y la normatividad pueden servir como premio o castigo para atraer el apoyo empresarial. Este tipo de clientelismo económico ayudó a los autócratas en Hungría, Rusia y Turquía a asegurar la cooperación del sector privado. Si Trump envía señales claras de que seguirá este proceder, las consecuencias políticas serán de gran alcance. Los líderes empresariales se conducirán de otra manera si se convencen de que les resulta más rentable no financiar a los candidatos de la oposición ni invertir en medios de comunicación independientes.

De hecho, su comportamiento ya ha empezado a cambiar. En lo que la columnista de *The New York Times* Michelle Goldberg denominó “la gran capitulación”, poderosos directores ejecutivos que antes criticaron el comportamiento autoritario de Trump ahora se apresuran a reunirse con él, elogiarlo y darle recursos. Amazon, Google, Meta, Microsoft y Toyota donaron cada uno un millón de dólares para financiar su investidura presidencial, más del doble de sus anteriores donaciones para este evento de recepción del cargo. A principios de enero de 2025, Meta anunció que dejaría de verificar datos, una medida que, según se jactó Trump, “probablemente” se derivó de sus amenazas de demandar a su fundador, Mark Zuckerberg. El propio Trump reconoce que en su primer mandato “todo el mundo se peleaba conmigo”, pero ahora “todo el mundo quiere ser mi amigo”.

En el sector de los medios de comunicación se observa un patrón similar. Grandes conglomerados poseen y operan muchos de los principales medios de Estados Unidos, como ABC, CBS, CNN, NBC, *The Washington Post*, entre otros. Aunque Trump no puede cumplir su amenaza de revocar licencias a las cadenas de televisión nacionales porque su licencia no es nacional, las difusoras sí pueden servir de cadena de transmisión para presionar a los grupos que son sus propietarios. Por ejemplo, Jeff Bezos controla *The Washington Post* y es propietario de Amazon, su principal empresa y licitante por jugosos contratos federales. Asimismo, el propietario de *Los Angeles Times*, Patrick Soon-Shiong, vende productos médicos sujetos a la revisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos. En la antesala de las elecciones presidenciales de 2024, ambos anularon el apoyo de sus periódicos a Kamala Harris.

DERECHO DE PISO

Por último, un Estado armado puede servir de escudo legal para proteger a funcionarios del gobierno o a aliados que incurran en conductas antidemocráticas. Un Departamento de Justicia leal, por ejemplo, podría fingir no ver los actos de violencia política pro-Trump como ataques o amenazas contra periodistas, funcionarios electorales, manifestantes o políticos y activistas de la oposición. Es más, podría negarse a investigar a sus partidarios por intentar intimidar a votantes o incluso manipular resultados electorales.

Esto ya ha ocurrido antes en Estados Unidos. Durante y después del periodo conocido como la Reconstrucción, el Ku Klux Klan y otros grupos armados de supremacistas blancos vinculados al Partido Demócrata sembraron el terror en el sur asesinando a políticos afroestadounidenses y republicanos; quemando casas, negocios e iglesias de afroestadounidenses; cometiendo fraude electoral, y amenazando, golpeando y matando a los ciudadanos afroestadounidenses que intentaban votar. Esta campaña de terror, que contribuyó a casi un siglo de gobierno unipartidista en todo el sur, fue posible gracias a la connivencia de las autoridades policiales estatales y locales, que siempre ignoraban la violencia y no llevaban ante la justicia a los responsables.

La violencia de extrema derecha de Estados Unidos aumentó en gran medida durante el primer gobierno de Trump. Las amenazas contra miembros del Congreso se decuplicaron y tuvieron consecuencias. Según el senador republicano Mitt Romney, el miedo a la violencia trumpista disuadió a algunos senadores republicanos de votar a favor de destituirlo tras el atentado del 6 de enero de 2021. La mayoría de los indicadores muestran que la violencia política disminuyó inmediatamente después, en parte porque se enjuició, condenó y encarceló a cientos de los insurrectos. Sin embargo, en cuanto Trump regresó a la presidencia, indultó a casi todos, lo que hace suponer que los actores violentos o antidemocráticos contarán con protección durante su gobierno. Tales señales fomentan el extremismo violento y, por ende, los críticos del gobierno y los periodistas independientes se enfrentarán casi con seguridad a amenazas más frecuentes e incluso a ataques abiertos durante su segundo mandato.

Nada de esto es una novedad en Estados Unidos, donde los presidentes ya antes han usado a las dependencias gubernamentales como arma. El Director del FBI,

J. Edgar Hoover, utilizó a la entidad como arma política al servicio de los seis presidentes a quienes sirvió. El gobierno de Nixon utilizó el Departamento de Justicia y otros organismos contra los enemigos percibidos. Pero ahora las cosas son diferentes, sobre todo porque los estándares democráticos mundiales son mucho más elevados. Independientemente de como se vea, Estados Unidos era mucho menos democrático en la década de 1950 que ahora, y un regreso a las prácticas de mediados del siglo xx constituiría un gran retroceso de la democracia.

Y lo que es más importante, la armificación gubernamental que se avecina quizá irá mucho más allá de las prácticas de mediados del siglo xx. Hace 50 años, los dos principales partidos estadounidenses eran, en sus asuntos internos, heterogéneos, relativamente moderados y muy comprometidos con las reglas del juego democráticas. Ahora están mucho más polarizados y, además, el radicalizado Partido Republicano ha renunciado a su inveterado compromiso con las reglas democráticas elementales, incluida la aceptación de la derrota electoral y el rechazo inequívoco de la violencia.

Gran parte del Partido Republicano también acepta la concepción de que las ideologías de izquierda han corrompido las instituciones estadounidenses, desde la burocracia federal y las escuelas públicas hasta los medios de comunicación y las universidades privadas. Los movimientos autoritarios suelen comulgar con la opinión de que los enemigos han subvertido a las instituciones de su país; líderes autocráticos como Erdogan, Orbán y el venezolano Nicolás Maduro lo afirman de manera repetida. Tal visión del mundo tiende a justificar —e incluso motivar— el tipo de depuración y de organización que Trump promete. Mientras que Nixon armificó al Estado de forma discreta y encaró a la oposición republicana cuando tal acción salió a la luz, el Partido Republicano de hoy alienta de forma abierta esos abusos. La armificación del Estado se ha convertido en la estrategia republicana. El partido que una vez aceptó la proposición de campaña del presidente Ronald Reagan de que el gobierno era el problema ahora acepta con entusiasmo al gobierno como arma política.

Utilizar el poder ejecutivo de este modo es lo que los republicanos aprendieron de Orbán, quien enseñó a una generación de conservadores que el Estado no debe desmantelarse, sino usarse en favor de las causas de la derecha y contra los opositores. De ahí que la pequeña Hungría se haya convertido en un modelo para tantos partidarios de Trump. La armificación del Estado no es una característica nueva de la filosofía conservadora; más bien, es un viejo rasgo del autoritarismo.

*Un gobierno no
necesita encarcelar
a sus críticos para
silenciar a la disidencia.*

¿INMUNIDAD NATURAL?

El gobierno de Trump quizá descarrile la democracia, pero es difícil que consolide un régimen autoritario. La resiliencia en Estados Unidos proviene de varias fuentes posibles. Sus instituciones son más fuertes que las de Hungría, Turquía y otros países con regímenes autoritarios competitivos, y el poder judicial independiente, el federalismo,

el bicameralismo y las elecciones intermedias —inexistentes en Hungría, por ejemplo—, probablemente limitarán el alcance de su autoritarismo.

En lo político, Trump también es más débil que muchos autócratas electos. Los líderes autoritarios causan más daño cuando gozan de un amplio apoyo ciudadano: Bukele, Chávez, Fujimori y Vladimir Putin contaban con índices de aprobación superiores a 80% cuando se lanzaron a la conquista del poder. Un apoyo ciudadano tan abrumador ayuda a los dirigentes a asegurarse las supermayorías legislativas o las aplastantes victorias plebiscitarias necesarias para imponer reformas que afiancen el régimen autocrático. Además, sirve para disuadir a los rivales intrapartidistas, a los jueces e incluso a gran parte de la oposición.

Los dirigentes menos populares, por el contrario, se enfrentan a una mayor resistencia de las legislaturas, los tribunales, la sociedad civil e incluso sus propios aliados; así es más probable que fracasen en sus intentos de obtener el poder. El índice de aprobación del presidente peruano Pedro Castillo y del sudcoreano Yoon Suk-yeol no superaba 30% cuando intentaron hacerse con el poder extraconstitucional, y ambos fracasaron. El índice de aprobación de Jair Bolsonaro distaba de 50% cuando intentó orquestar un golpe para anular las elecciones presidenciales de 2022 en Brasil. También él fue derrotado y obligado a abandonar el cargo.

El índice de aprobación de Trump nunca superó 50% durante su primer mandato y es probable que la incompetencia, los atropellos, las políticas impopulares y la polarización partidista limiten su apoyo durante su segundo mandato. Un autócrata elegido con 45% de aprobación es peligroso, pero menos que uno con 80% de apoyo.

La sociedad civil es otra fuente posible de resiliencia democrática. Una de las principales razones por las que las democracias ricas son más estables es que el desarrollo capitalista desconcentra los recursos humanos, financieros y organizativos del Estado, lo que genera un poder compensatorio en la sociedad. La riqueza no puede proteger de forma total al sector privado de las presiones que impone un Estado armado, pero cuanto más grande y más rico sea, más difícil será capturarlo o someterlo mediante intimidaciones. A la vez, los ciudadanos más ricos tienen más tiempo, habilidades y recursos para unirse o crear organizaciones cívicas o de oposición, y, como dependen menos del Estado para su subsistencia que los ciudadanos pobres, están en mejor posición para protestar o votar contra el gobierno. En comparación con las de otros regímenes autoritarios competitivos, las fuerzas de la oposición en Estados Unidos están bien organizadas, bien financiadas y son electoralmente viables, lo que las hace más difíciles de neutralizar por asimilación, reprimir o derrotar en las urnas. Así, la oposición estadounidense resultará más difícil de marginar que en países como El Salvador, Hungría y Turquía.

GRIETAS EN LA ARMADURA

Pero incluso una modesta inclinación del campo de juego podría paralizar la democracia estadounidense. Las democracias requieren una oposición sólida, y las oposiciones sólidas deben poder recurrir a una reserva amplia y renovable de políticos, activistas, abogados, expertos, donadores y periodistas.

Un Estado armado pone en peligro esa oposición. Aunque los críticos de Trump no serán encarcelados, exiliados ni expulsados de la política, el mayor costo a pagar por formar parte de la oposición pública llevará a muchos de ellos a replegarse a los márgenes políticos. Ante las investigaciones del FBI, las auditorías fiscales, las comparecencias ante el Congreso, los litigios, el acoso en internet o la perspectiva de perder oportunidades de negocio, muchas personas que normalmente se opondrían al gobierno pueden concluir que no merece la pena arriesgarse o esforzarse.

Este proceso de autoeliminación quizá no atraiga mucha atención pública, pero sí puede tener graves consecuencias. Por las investigaciones que se avecinan, políticos prometedores —tanto republicanos como demócratas— están abandonando la vida pública. Los directores ejecutivos que buscan contratos públicos, exenciones arancelarias o dictámenes antimonopolio favorables dejan de contribuir para los candidatos demócratas, de financiar iniciativas en pro de los derechos civiles y la demo-

cracia, y de invertir en medios de comunicación independientes.

Los medios de comunicación, cuyos propietarios temen ser demandados o acosados por el gobierno, frenan a sus equipos de investigación y a sus periodistas más aguerridos. Los editores practican la autocensura, edulcoran titulares y

La Constitución por sí sola no puede salvar la democracia estadounidense.

optan por no publicar artículos críticos del gobierno. Y los líderes universitarios, temerosos de las investigaciones del gobierno, los recortes de financiamiento o los impuestos punitivos a las donaciones, reprimen las protestas en los campus, destituyen o degradan a los profesores más francos y guardan silencio ante el creciente autoritarismo.

Los Estados armados le crean un difícil problema de acción colectiva a las élites del poder establecido que, en teoría, preferirían la democracia al autoritarismo competitivo. Los políticos, los directores ejecutivos, los propietarios de medios de comunicación y los rectores de universidades que modifican su comportamiento ante las amenazas autoritarias actúan de forma racional, haciendo lo que consideran mejor para sus organizaciones, protegiendo a los accionistas o evitando debilitarse con demandas, aranceles o impuestos. Pero estos actos de autopreservación tienen un costo colectivo. Cuando los actores individuales se marginan o autocensuran, la oposición social se debilita, el entorno mediático se vuelve menos crítico y la presión sobre el gobierno autoritario disminuye.

El agotamiento de la oposición social puede ser peor de lo que parece. Cuando los actores clave se marginan, se nota: los políticos se jubilan, los rectores universitarios dimiten, y los medios de comunicación cambian su programación y a su personal, pero resulta menos obvio qué oposición podría haber surgido si el entorno fuera menos amenazador: los jóvenes abogados que deciden no postularse, los escritores en ciernes que deciden no convertirse en periodistas, los posibles denunciantes que deciden callar, así como los innumerables ciudadanos que deciden no unirse a una protesta o ser voluntarios en una campaña.

¡RESISTAN!

Estados Unidos está en la cúspide del autoritarismo competitivo. El gobierno de Trump ya ha comenzado a armificar las instituciones del Estado y desplegarlas contra sus contrarios. La Constitución por sí sola no puede salvar la democracia estadounidense. Incluso, las constituciones mejor diseñadas tienen ambigüedades y lagunas que pueden explotarse con fines antidemocráticos. Después de todo, el mismo orden constitucional que sustenta la democracia liberal contemporánea de Estados Unidos permitió casi un siglo de autoritarismo en el sur racista y segregacionista, el internamiento masivo de estadounidenses de origen japonés y el macartismo. En 2025, como nunca antes en los últimos 2 siglos, a Estados Unidos lo gobierna un partido deseoso y capaz de explotar las ambigüedades constitucionales y legales con fines autoritarios.

Trump será vulnerable. El limitado apoyo ciudadano a su gobierno y sus inevitables errores crearán oportunidades para las fuerzas democráticas en el Congreso, en los tribunales y en las urnas, pero la oposición solo puede ganar si se mantiene en el juego. Ser oposición bajo un autoritarismo competitivo puede resultar agotador. Desgastados por el acoso y las amenazas, muchos de los críticos de Trump se verán tentados a retirarse a los márgenes. Tal retirada sería peligrosa. Cuando el miedo, el agotamiento o la resignación desplazan al compromiso ciudadano con la democracia, el autoritarismo emergente empieza a arraigarse. 🌐

RELACIONES INTERNACIONALES

AÑO 33 - N° 67 - Junio / Diciembre 2024

DIALOGOS
Maria de los Angeles LASA

ESTUDIOS
El fracaso de la política exterior populista: la política exterior brasileña en el gobierno de Jair Bolsonaro de 2019 a 2022
Beatriz Bandeira de Mello y Miriam Gomes Saraiva
Albania y los desafíos a la hegemonía estadounidense a finales del siglo XX y principios del XXI
Sidnel J. Munhoz
La insubordinación ideológica de la periferia. El caso de China
Juan Cruz Ramón Marguliche e Hilario Patronelli
Más calidad y menos cantidad en la Cooperación Internacional para el Desarrollo en el Sur Global: la experiencia de Brasil
Marina Boffarine Calixto y José Alejandro Sebastián Barrios Díaz
China como contrincante semi-periférico: recuperando el Estado en el análisis de sistemas-mundo
Luciano Moretti, Joel Sidler y Victor Ramiro Fernández

DOSSIER
Chile y Portugal en clave transnacional. 50 años del golpe de Estado y la Revolución de los claveles
Ecos del Cono Sur sobre la Revolución de los Claveles (1974-1976): La experiencia chilena y el velasato peruano
Ricardo Andrés Pérez Haristoy y Gilberto Aranda Bustamante
La trascendencia de la guerra colonial y el golpe de Estado del 25 de abril de 1974 en las relaciones entre Cuba y Portugal (1959-1975)
Fernando Camacho Padilla
De septiembre a abril. El golpe militar de Chile y la Revolución de los claveles portuguesa bajo la mirada de La Voz de Galicia
Francisco Javier Morales Aguilera
La izquierda española frente al golpe de Estado en Chile y la Revolución de los Claveles: el caso de los marcos interpretativos de LC y ORT
Miguel Alejandro Pérez Cabrera

REFLEXIONES
Futuro incierto: regresar al medioevo o crear algo nuevo
Javier L. Surasky

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
48 n° 582 5° piso (1900)
La Plata REPUBLICA ARGENTINA
Tel 54 221 6442096

Instituto de Relaciones Internacionales

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

ITAM Instituto Tecnológico Autónomo de México

Licenciatura en RELACIONES INTERNACIONALES

Conoce nuestro nuevo programa de estudios

Lidera los cambios que el mundo necesita

Estudia materias como

- Cambio climático
- Migración internacional
- Agenda global de desarrollo
- Seguridad global y geopolítica
- Gobernanza global y multilateralismo

El mundo que Trump quiere

El poder de Estados Unidos en la nueva era del nacionalismo

 *Michael Kimmage*

En las 2 décadas que siguieron al fin de la Guerra Fría, el globalismo ganó terreno sobre el nacionalismo. De manera simultánea, el incremento de sistemas y redes cada vez más complejos —institucionales, financieros y tecnológicos— opacó el papel del individuo en la política. Sin embargo, en los inicios de la década de 2010, comenzó a darse un cambio profundo. Una cuadrilla de personajes carismáticos aprendió a controlar las herramientas del siglo **xxi** y, con ellas, revivió los arquetipos del siglo **xx**: el líder fuerte, la gran nación y la civilización orgullosa.

El cambio probablemente comenzó en Rusia. En 2012, Vladimir Putin terminó un breve experimento en el que dejó la presidencia para fungir 4 años como Primer Ministro, mientras un aliado obediente era Jefe de Estado. Más adelante, regresó al cargo supremo, consolidó su autoridad aplastando a toda la oposición y se dedicó a reconstruir “el mundo ruso”, a restaurar su posición de potencia —que se había evaporado con la caída de la Unión Soviética—, y a resistir la hegemonía de Estados Unidos y sus aliados. Dos años después, Xi Jinping llegó al poder en China. Sus intenciones eran las mismas que las de Putin, pero en una escala mucho mayor, y China tenía capacidades mucho mayores también. En 2014, Narendra Modi, un hombre con grandes aspiraciones para la India, culminó su largo ascenso político en la oficina de Primer Ministro y estableció el nacionalismo hindú como la ideología dominante del país. Ese mismo año, Recep Tayyip Erdogan, quien durante más de una década había sido un Primer Ministro de mano dura en Turquía, se volvió Presidente. En poco tiempo, transformó un ensamble democrático dividido en diversas facciones en un espectáculo autocrático unipersonal.

Tal vez, el momento más trascendente de esta evolución ocurrió en 2016, cuando Donald Trump ganó la presidencia de Estados Unidos. Entonces prometió “hacer grande a Estados Unidos otra vez” y poner a “Estados Unidos primero”, frases que capturaron el espíritu populista, nacionalista y antiglobalista que se venía propagando

MICHAEL KIMMAGE es Director del Kennan Institute del Wilson Center y autor de *The Abandonment of the West: The History of an Idea in American Foreign Policy* (Basic Books, 2020). Sígalo en  en @mkimmage.

dentro y fuera de Occidente, incluso mientras el orden liberal internacional liderado por este país se consolidaba y crecía. Trump no solo estaba subiéndose a una ola mundial; su visión del papel de Estados Unidos en el mundo venía de fuentes estadounidenses, aunque no tanto del movimiento original “Estados Unidos primero”, que alcanzó su auge en la década de 1930, sino del anticomunismo de derecha de la década de 1950.

Por un corto tiempo, la derrota de Trump frente a Joseph R. Biden en la carrera presidencial de 2020 pareció indicar una restauración: Estados Unidos redescubría su posición posterior a la Guerra Fría, destinada a apuntalar el orden liberal y frenar la corriente populista. Sin embargo, luego del extraordinario regreso de Trump, más bien parece que Biden —y no Trump— representó la desviación. Ahora, el actual Presidente y otros exaltadores similares de la grandeza nacional están marcando la agenda mundial. Se definen a sí mismos como hombres fuertes que no prestan atención al sistema basado en reglas, las alianzas o los foros multinacionales, sino que apelan a las glorias pasadas y por venir de los países que gobiernan, y afirman su gobierno en un mandato casi místico. Aunque sus programas involucren un cambio radical, sus estrategias políticas provienen del conservadurismo, y apuntan más allá de las élites cosmopolitas urbanas liberales para atraer a los sectores motivados por el anhelo de las tradiciones y el deseo de pertenencia.

En cierto modo, estos líderes y sus visiones evocan el “choque de civilizaciones” que, según predijo el politólogo Samuel Huntington en la década de 1990, llevaría a un conflicto mundial luego de la Guerra Fría. No obstante, sus modos suelen ser más performativos y flexibles

que categóricos y exaltados. Es un choque de civilizaciones descafeinado: una serie de gestos y un estilo de liderazgo que podría transformar la competencia (y la cooperación) por intereses económicos y geopolíticos en una guerra de cruzadas entre Estados-civilizaciones.

Esta contienda a veces es retórica, lo que da margen para que los líderes utilicen lenguajes y narrativas de civilización que no se ciñen al guión de Huntington ni a las divisiones algo simplistas que predijo (una Rusia ortodoxa está en guerra con una Ucrania ortodoxa, no con los musulmanes de Turquía). Trump fue presentado en la convención republicana de 2020 como el “guardián de la civilización occidental”. Los líderes del Kremlin han llegado a la conclusión de que Rusia es un “Estado-civilización” y usan el término para justificar sus esfuerzos por dominar Bielorrusia y subyugar a Ucrania. En la Cumbre por la Democracia de 2024, Modi describió la democracia como “el elemento vital de la civilización india”. En un discurso de 2020, Erdogan declaró que “nuestra civilización es conquistadora”. En 2023, cuando hablaba ante el Comité Central del Partido Comunista de China, su líder Xi exaltó las virtudes del proyecto de investigación nacional sobre el origen de la civilización china, a la que llamó “la única gran civilización ininterrumpida que continúa hasta hoy en forma de Estado”.

En los próximos años, el tipo de orden que generen estos líderes dependerá, en gran medida, del segundo mandato de Trump. Después de todo, fue el orden

*Los conflictos actuales
equivalen a un choque de
civilizaciones descafeinado.*

liderado por Estados Unidos el que alentó el desarrollo de estructuras supranacionales después de la Guerra Fría. Ahora que se ha sumado a la danza de los países del siglo XXI, con frecuencia será quien lleve el ritmo. Con Trump en el poder, Ankara, Beijing, Moscú, Nueva Delhi y Washington —entre muchas otras capitales— entenderán que no hay un solo sistema ni un conjunto de reglas acordado. En este ambiente geopolítico, la idea ya deslavada de “Occidente” retrocederá aún más y, con ella, todo el estatus de Europa, que en la época posterior a la Guerra Fría había sido el socio de Washington para representar “el mundo occidental”. Los países europeos se habían acostumbrado a esperar el liderazgo de Estados Unidos en Europa, al igual que un orden basado en reglas —no necesariamente de corte estadounidense— fuera de Europa. Apuntalando este orden, que viene desmoronándose desde hace años, quedará Europa como una confederación flexible de Estados sin fuerza militar y con escaso poder duro propio organizado, cuyos países están atravesando un periodo de aguda falta de liderazgo.

El gobierno de Trump tiene el potencial de triunfar en un orden internacional que lleva años formándose. Sin embargo, Estados Unidos solo prosperará si reconoce el peligro de la gran cantidad de fracturas nacionales que se entrecruzan, y neutraliza estos riesgos mediante una diplomacia abierta y paciente. Trump y su equipo deberían considerar la gestión de conflictos como un requisito de la grandeza de Estados Unidos, no como un impedimento.

LAS VERDADERAS RAÍCES DEL TRUMPISMO

Los analistas suelen rastrear los orígenes de la política exterior de Trump hasta los años de entreguerra. Cuando el movimiento original de “Estados Unidos primero” proliferó en la década de 1930, este país no tenía el estatus de potencia y su fuerza militar era modesta. Los paladines del movimiento querían, sobre todo, mantener las cosas así: evitar el conflicto. Trump, por el contrario, adora el estatus de potencia de Estados Unidos, como enfatizó de forma repetida en su segundo discurso de toma de protesta. Está seguro de incrementar su gasto militar y, al amenazar con tomar o adquirir Groenlandia y el canal de Panamá, ya demostró que no le rehúye al conflicto. Trump quiere reducir los compromisos de Washington en las instituciones internacionales y disminuir el alcance de las alianzas de Estados Unidos, pero difícilmente está interesado en conducir una retirada del escenario mundial.

Las verdaderas raíces de la política exterior de Trump se encuentran en la década de 1950. Surgen del anticomunismo rampante de entonces, aunque no de la variante liberal que canalizó la promoción de la democracia, las habilidades tecnocráticas, así como un internacionalismo dinámico —y que fue impulsada por los presidentes Harry Truman, Dwight D. Eisenhower y John F. Kennedy en respuesta a la amenaza soviética—, sino de los movimientos anticomunistas de derecha, que confrontaban a Occidente con enemigos por motivos religiosos y alimentaban la sospecha de que el liberalismo estadounidense era demasiado blando, posnacional y secular para proteger al país.

Este legado político es una obra de tres tomos. Primero, llegó *El testigo*, del periodista estadounidense Whittaker Chambers, un excomunista y espía soviético que rompió con el partido y se volvió conservador. *El testigo* fue su manifiesto de 1952 sobre los simpatizantes estadounidenses liberales y su deslealtad, que envalentonaba a la Unión Soviética. Una visión similar motivó a James Burnham, el destacado analista conservador de la política exterior de la posguerra. En su libro de 1964, *Suicide of the West*, acusaba al sistema de política exterior estadounidense de ser un desleal esnob y de sostener “principios internacionalistas y universalistas en vez de locales y nacionales”. Burnham defendía una política exterior basada en “la familia, la comunidad, la Iglesia, el país y, muy al final, la civilización: no la civilización en general, sino esta civilización histórica específica de la cual yo soy miembro”.

Uno de los herederos intelectuales de Burnham fue un joven periodista llamado Pat Buchanan, quien apoyó a Barry Goldwater en la elección presidencial de 1964. Fue colaborador del presidente Richard Nixon y, en 1992, representó un reto formidable en la elección primaria para el presidente republicano en funciones, George H.W. Bush. Son las ideas de Buchanan las que presagian con mayor precisión la era de Trump. En 2002 publicó *La muerte de Occidente*, donde señala que “los blancos pobres se están moviendo hacia la derecha” y argumenta que “el capitalista global y el verdadero conservador son Caín y Abel”. Pese al título del libro, Buchanan tenía alguna esperanza para Occidente (en el sentido “ellos y nosotros” del término) y creía que el colapso del globalismo era inminente. “Puesto que este es un proyecto de las élites y porque sus arquitectos no son conocidos ni queridos —escribió—, el globalismo chocará contra la gran barrera de coral del patriotismo”. Trump no asimiló esta tradición conservadora de décadas mediante el estudio de tales figuras, sino por medio del instinto y la improvisación durante su campaña electoral. Al igual que Chambers, Burnham y Buchanan —ajenos a la política y enamorados del poder—, Trump disfruta de la heterodoxia y la discordia, busca trastocar las condiciones actuales, y aborrece a las élites liberales y a los expertos en política exterior. Puede parecer un heredero poco probable de estos hombres y los movimientos que formaron, impregnados de moralismo cristiano y, a veces, de elitismo. Sin embargo, se ha lanzado de forma astuta, y con éxito, no como un ejemplar refinado de la cultura occidental y de las virtudes civilizatorias, sino como el más rudo defensor de sus enemigos externos e internos.

LOS REVISIONISTAS

La aversión de Trump por el internacionalismo universalista lo alinea con Putin, Xi, Modi y Erdogan. Estos cinco líderes tienen una misma idea de cuáles son los límites de la política exterior y una incapacidad neurálgica para quedarse quietos. Todos presionan por el cambio mientras operan dentro de ciertos parámetros autoimpuestos: Putin no está tratando de rusificar al Medio Oriente; Xi no intenta reconfigurar África, Latinoamérica ni el Medio Oriente a la imagen de China; Modi no busca construir otras Indias en el extranjero; Erdogan no está presionando a Irán ni al mundo árabe para que sean más turcos, y estadounidenseizar el mundo no es parte de la

agenda de política exterior de Trump. Su sentido de excepcionalismo separa al país de un mundo exterior intrínsecamente no estadounidense.

El revisionismo puede coexistir con esta evasión colectiva en la construcción del sistema mundial y con el adelgazamiento del orden internacional. Para Xi, la historia y el poder chinos —no la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ni las preferencias de Washington— son los verdaderos árbitros del estatus de Taiwán, pues China es lo que él dice que sea. Aunque la India no está al lado de un foco de ignición como Taiwán, continúa litigando sus fronteras con China y Pakistán, que no se han resuelto desde que la India se independizó en 1947; sin embargo, la India termina donde Modi indica.

El revisionismo de Erdogan es más literal. Para favorecer a sus aliados en Azerbaiyán, Turquía facilitó la expulsión de los armenios del territorio disputado de Nagorno Karabaj, en Azerbaiyán, no mediante una negociación, sino con el uso de la fuerza militar. La participación de Turquía en la alianza de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que implica un compromiso formal con la democracia y con la integridad de las fronteras, no detuvo al Presidente. Turquía también se estableció

como presencia militar en Siria. Esto no es precisamente una reconstitución del Imperio otomano, pues Erdogan no aspira a mantener el territorio sirio a perpetuidad; sin embargo, los proyectos político-militares de Turquía en el Cáucaso Sur y el Medio Oriente tienen una resonancia histórica para el

Biden, no Trump, representa la excepción.

Presidente, ya que funcionan como prueba de la grandeza turca y muestran que Turquía estará donde él diga que debe estar.

En medio de esta corriente revisionista al alza, la guerra de Rusia contra Ucrania es la historia central. Actuando en nombre de la “grandeza” rusa y presidiendo un país que, a sus ojos, no tiene fin, Putin inunda sus discursos de alusiones históricas. Serguéi Lavrov, el Ministro de Relaciones Exteriores ruso, una vez señaló con sarcasmo que los asesores más cercanos de Putin eran “Iván el Terrible, Pedro el Grande y Catalina la Grande”. Sin embargo, es el futuro, no el pasado, lo que en realidad le importa. La invasión de 2022 fue un punto de inflexión geopolítico semejante a los que atestiguó el mundo en 1914, 1939 y 1989. Putin desató la guerra para dividir o colonizar Ucrania. Esperaba que la invasión sentara un precedente para justificar guerras similares en otros escenarios y quizá incitaría a otros jugadores (como China) a emprender aventuras militares disruptivas. El Presidente ruso rescribió las reglas y no ha dejado de hacerlo: aunque la invasión no haya resultado bien para Rusia, tampoco terminó en su aislamiento mundial. Putin volvió a normalizar la idea de que una guerra a gran escala es un medio para conquistar un territorio. Lo hizo en Europa, que alguna vez fue epítome del orden internacional basado en reglas.

A pesar de lo anterior, la guerra en Ucrania difícilmente augura la muerte de la diplomacia internacional; en cierto modo, la reactivó. El grupo de los BRICS, por ejemplo, que vincula de manera formal a China, la India y Rusia —junto con Brasil, Sudáfrica y otros países no occidentales—, ha crecido y parece más cohesionado. Por

otro lado, la coalición que apoya a Ucrania ha superado por mucho el alcance transatlántico: incluye a Australia, Corea del Sur, Japón, Nueva Zelanda y Singapur. El multilateralismo está vivo y está bien, solo que no es abarcador en su totalidad.

En este panorama geopolítico diverso, las relaciones son cambiantes y complejas. Putin y Xi construyeron una sociedad, pero no una alianza como tal. Xi no tiene ningún motivo para imitar el impulsivo rompimiento de Putin con Europa y Estados Unidos. Pese a ser rivales, Rusia y Turquía al menos pueden coordinar sus acciones en el Medio Oriente y el Cáucaso Sur para evitar conflictos. La India ve con aprehensión a China. Por otra parte, aunque algunos analistas ven a China, Corea del Norte, Irán y Rusia como un “eje”, son cuatro países muy diferentes cuyos intereses y visiones del mundo suelen divergir.

Sus políticas exteriores enfatizan su historia y su carácter único, así como la noción de que los intereses rusos, chinos, indios o turcos necesitan un líder carismático que los defienda con heroicidad. Esto actúa contra su convergencia y les dificulta la formación de ejes estables. Un eje requiere coordinación, mientras que la interacción entre estos países es más bien cambiante, transaccional y personalista. Nada aquí es blanco o negro, nada está grabado en piedra, nada es innegociable.

Este entorno le queda de manera perfecta a Trump, quien no está abiertamente constreñido por líneas religiosas o culturales definidas. Con frecuencia elogia a los individuos por encima de los gobiernos, y las relaciones personales por encima de las alianzas. Aunque Alemania es un aliado de Estados Unidos en la OTAN y Rusia un eterno adversario, en su primer mandato Trump se enfrentó con la canciller alemana Angela Merkel y trató a Putin con respeto. Los países con los que forcejea se encuentran, en su mayoría, en Occidente. Si Huntington viviera para ver esto, lo habría encontrado desconcertante.

UNA VISIÓN DE GUERRA

En el primer mandato de Trump, el panorama internacional estaba bastante calmado. No hubo grandes guerras. Rusia parecía haber sido contenida en Ucrania. El Medio Oriente estaba entrando en un periodo de relativa estabilidad, en parte facilitada por los Acuerdos de Abraham —una serie de tratos destinados a fortalecer el orden regional tomados en el gobierno de Trump—. China, al parecer, podía ser disuadida en Taiwán: nunca se acercó a la posibilidad de invadir. Además, en los hechos —aunque no siempre en las palabras—, Trump se comportaba como un Presidente republicano típico: incrementó los compromisos de defensa en Europa al aceptar a dos nuevos países en la OTAN, no cerró ningún trato con Rusia, se expresó con dureza sobre China y buscó posicionarse mejor en el Medio Oriente.

Con todo, hoy una guerra mayor asola Europa, el Medio Oriente es un caos y el viejo sistema internacional se tambalea. Una confluencia de factores podría llevar al desastre: una erosión mayor de reglas y fronteras, la colisión de empresas de gran escala nacional dispares supercargadas por líderes erráticos y ráfagas de comunicaciones en redes sociales, así como la desesperación acumulada de los Estados medianos y

pequeños que resienten las prerrogativas desenfrenadas de las grandes potencias y se sienten amenazados por las consecuencias de la anarquía internacional. Es más probable que estalle una catástrofe en Ucrania que en Taiwán o el Medio Oriente, debido a que el potencial para una guerra mundial o nuclear es mayor allí.

Incluso en un orden basado en reglas, la integridad de las fronteras nunca ha sido absoluta, sobre todo la de las fronteras de los países vecinos de Rusia. Sin embargo, desde que terminó la Guerra Fría, Europa y Estados Unidos han mantenido su compromiso con el principio de la soberanía territorial. Su enorme inversión en Ucrania honra su visión distintiva de la seguridad europea: si las fronteras pueden alterarse por la fuerza, Europa —donde las fronteras han generado resentimientos con tanta frecuencia— caería en una guerra total. La paz en Europa solo es posible si las fronteras no pueden ajustarse de manera fácil. En su primer mandato, Trump subrayó la importancia de la soberanía territorial y prometió construir un “muro grande y hermoso” a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México, pero entonces no tenía que enfrentar una guerra mayor en Europa. Ahora queda claro que su creencia en la sacralidad de las fronteras aplica, sobre todo, para las de Estados Unidos.

Mientras tanto, China y la India tienen sus reservas sobre la guerra, pero, junto con Brasil, Filipinas y muchas otras potencias regionales, han tomado la decisión de largo alcance de conservar sus vínculos con Rusia incluso mientras Putin se afana en destruir Ucrania. La soberanía ucraniana es inconsecuente para estos países “neutrales”, pues carece de importancia en comparación con lo que vale una Rusia estable bajo el mando de Putin y con la continuidad de los acuerdos sobre armas y energía.

Estos países podrían subestimar los riesgos de aceptar el revisionismo ruso, que podría llevar no a la estabilidad, sino a una guerra mayor. El espectáculo de una Ucrania descuartizada o derrotada aterrorizaría a sus vecinos. Estonia, Letonia, Lituania y Polonia son miembros de la OTAN que se cobijan tras los compromisos del artículo 5 de la Alianza Atlántica de defensa mutua; sin embargo, dicho artículo está respaldado por Estados Unidos, y Estados Unidos está muy lejos. Si Polonia y las repúblicas del Báltico concluyen que Ucrania está al borde de una derrota que podría poner en riesgo su propia seguridad, es posible que opten por unirse a la lucha de forma directa. Rusia podría responder llevando la guerra hasta ellos. Un resultado similar podría resultar de una gran negociación entre Washington, los países europeos del Oeste y Moscú: que la guerra concluya en los términos rusos, pero que tenga un efecto radicalizante en los vecinos de Ucrania. Temiendo una agresión rusa, por un lado, y el abandono de sus aliados, por el otro, estos países podrían tomar la ofensiva. Incluso aunque Estados Unidos permaneciera al margen de una guerra de alcance europeo, quizá Alemania, Francia y el Reino Unido no se quedarían neutrales.

Si la guerra en Ucrania se desarrollara de esa forma, su resultado afectaría de manera enorme las reputaciones de Trump y de Putin. La vanidad pasaría al frente, como ocurre con frecuencia en los asuntos internacionales. Así como Putin no puede permitirse perder una guerra frente a Ucrania, Trump no puede permitirse “perder” a Europa. Dilapidar la prosperidad y la proyección de poder que obtiene Estados Unidos con su presencia militar en Europa sería humillante para cualquier presidente

estadounidense. Los incentivos psicológicos para una escalada serían fuertes. Y en un sistema internacional altamente personalista, sobre todo en uno agitado por una diplomacia digital desenfundada, tal dinámica podría arraigarse en otras partes; podría disparar las hostilidades entre China y la India, tal vez, o entre Rusia y Turquía.

UNA VISIÓN DE PAZ

A pesar de los peores escenarios —como este—, considérese también cómo el segundo mandato de Trump podría mejorar una situación internacional en deterioro. Una combinación de relaciones estadounidenses competentes con Beijing y Moscú, una diplomacia ágil por parte de Washington y un poco de suerte estratégica quizá no lleven a cambios radicales, pero podrían generar mejores condiciones; no provocarían el fin de la guerra en Ucrania, pero sí una reducción de su intensidad; no una resolución al dilema de Taiwán, sino salvaguardas para prevenir una guerra mayor en el Indo-Pacífico; no una solución al conflicto palestino-israelí, sino alguna forma de détente estadounidense frente a un Irán debilitado y el surgimiento de un gobierno viable en Siria. Trump no se convertirá en un pacificador absoluto, pero podría ayudar a iniciar un mundo menos asolado por la guerra.

Con Biden y sus predecesores —Barack Obama y George W. Bush—, China y Rusia tuvieron que enfrentar la presión sistemática de Washington. Beijing y Moscú permanecían fuera del orden libe-

*Con Trump, una
diplomacia flexible podría
rendir grandes dividendos.*

ral internacional, en parte por decisión propia y en parte porque no eran democracias. Los líderes chinos y rusos exageraron esta presión, como si el cambio de régimen fuera una política de hecho de Estados Unidos, pero no se equivocaban al percibir que Washington prefería el pluralismo político, las libertades civiles y la separación de poderes.

Con Trump de regreso en la presidencia, esa presión se disipó. Las formas de gobierno en China y Rusia no le preocupan, pues rechaza de tajo las nociones de construcción de nación y cambio de régimen. Aun cuando se mantuvieran las fuentes de tensión, la atmósfera general sería mucho menos cargada y podrían darse intercambios diplomáticos. Quizá habría más toma y daca entre el triángulo de Beijing-Moscú-Washington, más concesiones en asuntos pequeños, y más apertura para negociar y tomar medidas conducentes a aumentar la confianza en zonas de guerra y de conflicto. Si Trump y su equipo pueden practicarla, la diplomacia flexible —el manejo hábil de tensiones constantes y conflictos revolventes—, podría rendir muchos dividendos. Trump es el presidente menos wilsoniano desde el propio Woodrow Wilson. No le sirven para nada las estructuras abarcadoras de cooperación internacional como la ONU o la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Más bien, él y sus asesores, en especial los que vienen del mundo de la tecnología, podrían abordar el escenario mundial con la mentalidad de una empresa emergente, una compañía que acaba de formarse y tal vez pronta a disolverse, pero capaz de reaccionar de forma rápida y creativa a las condiciones del momento.

Ucrania será una prueba inicial. En vez de buscar una paz precipitada, el gobierno de Trump debería seguir tratando de proteger la soberanía ucraniana, que Putin nunca va a aceptar. Permitir que Rusia cercene la soberanía de Ucrania puede dar una aparente estabilidad, pero podría traer más guerra. En vez de una paz ilusoria, Washington debería ayudar a que Kiev defina las reglas de la relación con Moscú y, mediante estas, podría minimizarse la guerra de manera gradual. Estados Unidos entonces podría compartimentar sus relaciones con Rusia, como lo hizo con la Unión Soviética durante toda la Guerra Fría, suscribiendo que no acuerdan sobre Ucrania, mientras buscan puntos de coincidencia en la no proliferación nuclear, el control de armas, el cambio climático, las pandemias, el combate al terrorismo, el Ártico y la exploración espacial. La compartimentación del conflicto con Rusia serviría a un interés central de Estados Unidos que también es muy valorado por Trump: evitar un intercambio nuclear entre Moscú y Washington.

Un estilo espontáneo de diplomacia puede facilitar la reacción ante un golpe de suerte estratégico. Las revoluciones de Europa en 1989 son un buen ejemplo. La disolución del comunismo y el colapso de la Unión Soviética han sido interpretados a veces como un golpe maestro de planeación estadounidense, pero la caída del muro de Berlín ese año poco tuvo que ver con la estrategia estadounidense y la desintegración soviética tomó por sorpresa al gobierno de Estados Unidos: fue todo accidente y suerte. El equipo de seguridad nacional del presidente George H.W. Bush no era experto en predecir o controlar eventos, sino en responder a ellos sin hacer demasiado —antagonizar con la Unión Soviética— y sin hacer poco —dejar que una Alemania unida se saliera de la OTAN—. En este espíritu, el gobierno de Trump debería estar preparado para aprovechar la ocasión. Asimismo, para sacar el mayor provecho de cualquier oportunidad que se le cruce en el camino, no debe dejarse ahogar por el sistema ni por la estructura.

Sin embargo, aprovechar los golpes de suerte requiere preparación, además de agilidad. En este sentido, Estados Unidos tiene dos activos importantes. El primero es su red de alianzas, que magnifica enormemente la influencia de Washington y su espacio de maniobra. El segundo es el uso de su poder económico, que le permite ampliar su acceso a mercados y recursos críticos, atraer inversión extranjera y mantener al sistema financiero del país como el nodo central de la economía mundial. El proteccionismo y las políticas económicas coercitivas son importantes, pero deberían subordinarse a una visión más amplia y optimista de la prosperidad de Estados Unidos que privilegie las alianzas y los socios de mucho tiempo.

Ninguna de las categorías usuales de orden internacional aplica ya: el sistema no es unipolar, bipolar ni multipolar; sin embargo, incluso en un mundo sin una estructura estable, el gobierno de Trump todavía puede usar el poder, las alianzas y la política económica para apaciguar la tensión, minimizar el conflicto y proporcionar una base de cooperación entre los países grandes y pequeños. Eso podría contribuir a su deseo de dejar a Estados Unidos mejor al final de su segundo mandato de lo que estaba al inicio. 🌐

La supremacía del dólar

¿Por qué es más difícil que nunca derrocar el dominio de la moneda estadounidense?

 *Eswar Prasad*

El dólar estadounidense es la moneda más fácil de reconocer en el mundo, la más aceptada y la más deseada. También es inmensamente denostada por el poder que le da a Estados Unidos sobre los asuntos internacionales. Washington utiliza el dólar como arma contra sus rivales cuando impone sanciones y congela activos; incluso sus aliados resienten su dependencia a esta moneda, que expone a sus economías y a sus sistemas financieros a los vaivenes de las políticas estadounidenses. Por ello, tanto rivales como aliados del país quieren terminar con la supremacía del dólar. Están ansiosos por promover alternativas, incluidas sus monedas, y Estados Unidos está haciendo todo lo posible para ayudarlos.

La economía estadounidense ya no es el coloso que alguna vez fue. Su deuda pública es gigantesca y sigue en aumento, y la definición de las políticas en Washington es errática e impredecible. Las amenazas persistentes de incumplimiento en el pago de la deuda debilitan la percepción de que los bonos del gobierno de Estados Unidos son seguros. Peor aún, las bases fundamentales de la fortaleza del dólar —el Estado de derecho, una Reserva Federal independiente, y un sistema de pesos y contrapesos— han sido socavadas en los últimos años por políticos populistas que han erosionado las instituciones democráticas del país.

Por todo esto, no debería sorprender a nadie la posibilidad de que el dólar pudiera perder rápidamente su poder. Sin embargo, está sucediendo lo contrario: las tendencias que podrían debilitarlo, muchas de ellas impulsadas por las políticas públicas estadounidenses, solo fortalecen su dominio mundial. El dólar sigue a la cabeza, en parte por el tamaño y el dinamismo de su economía en relación con otras. Pero, más que esto, lo que sucede es que, aunque las instituciones estadounidenses se están desgastando, las del resto del mundo no están en mejores condiciones, con populismos y autoritarismos en ascenso. Además, la turbulencia geopolítica y económica solo sirve para

ESWAR PRASAD es profesor titular de Política Comercial en la Dyson School de la Cornell University. Es investigador principal en la Brookings Institution y autor de *The Future of Money: How the Digital Revolution Is Transforming Currencies and Finance* (Harvard University Press, 2021). Sígalos en X en @EswarSPrasad.

intensificar la búsqueda de inversiones seguras, lo que usualmente lleva a los inversionistas de vuelta al dólar, que aún es la moneda más confiable. Los mercados financieros de Estados Unidos son mucho más grandes que los de otros países, lo que vuelve a los activos en dólares mucho más fáciles y baratos de comprar y de vender.

El dólar no es totalmente inmune a los cambios en los poderes económicos y geopolíticos mundiales. No obstante, aunque ha perdido terreno, la brecha entre el dólar y cualquier otra moneda rival sigue en aumento y no muestra signos de detenerse. China y la India se han convertido en potencias económicas importantes, pero sus monedas no han cobrado fuerza fuera de sus países. Aunque la jerarquía mundial de monedas está cambiando, muchos de estos cambios mejoran la posición relativa del dólar y perjudican aún más a sus oponentes. Las conmociones en la economía mundial o en los asuntos internacionales —aun cuando hayan sido provocadas o exacerbadas por las propias torpezas de las políticas estadounidenses— solo aumentan la fortaleza del dólar frente a las monedas alternativas. Prácticamente nada podría cambiar esta situación en el corto plazo.

EL RIESGO LO VALE

Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el dólar ha sido la moneda internacional líder en todos los aspectos: como unidad de medida, medio de intercambio y reserva de valor. Incluso, de acuerdo con estimaciones conservadoras, al menos la mitad de todo el comercio internacional se denomina en dólares, mucho más que en cualquier otra moneda y mucho más que la proporción del comercio estadounidense en el mundo, que es de aproximadamente 11%. Es la principal moneda de facturación y de pago; aproximadamente, la mitad de todos los pagos internacionales se liquidan en dólares. Cuando una empresa china importa mineral de hierro de Brasil o una empresa brasileña compra semiconductores chinos, estas transacciones se facturan y se pagan casi siempre en dólares y no en reales brasileños o en yuanes chinos.

El dólar también es la principal moneda de reserva mundial; 59% de las reservas de divisas de los bancos centrales del mundo se mantienen en activos denominados en dólares, o en activos cuyo valor nominal y precio se establecen en dólares. Hay una razón para que esta proporción sea tan grande. Las reservas internacionales actúan como fondos de emergencia de los bancos centrales. Pueden usarse para pagar importaciones o respaldar la moneda nacional cuando su valor cae. Los bancos centrales de los países de mercados emergentes han aprendido que grandes cantidades de reservas internacionales ayudan a proteger sus economías de los flujos volátiles de capital, y tratan de mantener las reservas en activos que sean seguros y líquidos. Como resultado, compran activos en dólares, que están disponibles en grandes cantidades y siempre son demandados, por lo que pueden comprarse y venderse con costos mínimos de transacción.

Además, el dólar se mantiene como una moneda de financiamiento clave en los mercados de deuda mundiales. Cuando las empresas o los gobiernos de los países en desarrollo tratan de reunir dinero en estos mercados, están forzados a pedir préstamos en moneda extranjera. Por lo general, esto se debe a que los inversionistas

extranjeros no confían en el valor de las monedas nacionales de esos países. Incluso, algunas empresas y bancos europeos prefieren juntar capital en dólares porque su abundancia hace que sea más barato y fácil. Dos tercios de los títulos emitidos por corporaciones fuera de sus países de origen se denominan en esta moneda.

Estas preferencias se refuerzan entre sí. La demanda de títulos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de los bancos centrales extranjeros ayuda a financiar los préstamos del gobierno estadounidense, lo que mantiene las tasas de interés del país relativamente bajas. Esto, a su vez, incentiva a los gobiernos, corporaciones e instituciones financieras extranjeras a pedir préstamos en dólares. Su uso generalizado en el comercio internacional alienta a los países desarrollados y en desarrollo a tener reservas en esta moneda. Durante la crisis financiera mundial de 2008, incluso el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo solicitaron préstamos en dólares a la Reserva Federal de Estados Unidos.

Sin embargo, desde esa crisis, los dólares se han vuelto un activo cada vez más riesgoso. La economía de Estados Unidos sigue siendo resiliente y dinámica, pero es probable que la deuda pública federal bruta exceda los 35 billones de dólares —aproximadamente 125% del PIB anual— para finales de 2024, y el Congreso no manifiesta ninguna intención de reducir el gasto o de elevar los impuestos. Nadie espera que el gobierno estadounidense eluda sus obligaciones de deuda. No obstante, la amenaza de impagos, incluso de corto plazo, sumada a la magnitud absoluta de una deuda creciente, ha provocado que agencias calificadoras como S&P y Fitch bajen la calificación de los bonos del gobierno de Estados Unidos.

El dólar es rehén de la política en varios sentidos. Durante el mandato del expresidente Donald Trump, el Estado de derecho y la independencia de la Reserva Federal —bastiones de la confianza de los inversionistas extranjeros en el valor estable del dólar en el largo plazo— recibieron un duro golpe. El sistema de pesos y contrapesos estadounidense demostró ser muy frágil y dependiente de normas no escritas como para mantener la confianza de estos inversionistas, lo que los llevó a reconsiderar su fe en la moneda y buscar alternativas.

Por otro lado, Washington puso aún más en riesgo el estatus del dólar al excluir a Corea del Norte, Irán y Rusia del comercio en dólares para bloquearles el acceso al sistema financiero internacional. Incluso, luego de la invasión rusa a Ucrania en 2022, Estados Unidos congeló las reservas internacionales en dólares de Moscú. Más allá de que esa acción haya estado justificada o no por la grave violación rusa al Derecho Internacional, indudablemente dejó a los otros bancos centrales preguntándose si sus propios fondos de emergencia denominados en dólares serían bloqueados si sus gobiernos se posicionaban en contra de Washington.

FALSOS PROFETAS

Las predicciones sobre la desaparición del dólar han exagerado la debilidad de la moneda, algo que dejó en claro su notable resistencia. Los analistas han advertido durante años que perdería terreno frente a otras monedas, pero ninguna lo ha

desplazado. Por ejemplo, el euro, cuya inauguración en 1999 parecía anunciar el fin del poder inigualable del dólar. La eurozona fue, después de todo, un área económica que estuvo al mismo nivel de Estados Unidos en términos de tamaño del mercado económico y financiero. Tenía un banco central independiente y sus miembros, por lo general, se atenían al Estado de derecho.

Al principio, el euro sí logró quitarle al dólar parte de su mercado como moneda de reserva y pagos. Para 2009, el porcentaje de reservas internacionales en euros había aumentado a 28%, cuando en 2000 partió de 18%, y el porcentaje en dólares cayó en

*Al menos la mitad de todo
el comercio internacional
está denominado en dólares.*

esa misma proporción. Sin embargo, para finales de ese año, el progreso del euro se estancó. Los gobiernos europeos no tuvieron la voluntad política para transformar su unión monetaria en una unión económica y financiera mayor, que les habría requerido ceder más poder a las instituciones de la eurozona y aplicar una mayor

disciplina a sus políticas. La crisis de deuda de la eurozona en 2009 dejó ver las debilidades políticas y económicas de su unión monetaria. La proporción de reservas internacionales en euros se erosionó y cayó por debajo de 20%.

El yuan chino siguió un curso similar. En 2010, Beijing comenzó a promover activamente la “internacionalización” de su moneda. Con la creciente influencia de China en la economía mundial, esta campaña despegó rápidamente. Para 2015, cerca de 3% de las transacciones de pagos mundiales se realizaban en yuanes, habiendo partido exactamente de cero apenas 5 años antes. Las empresas chinas emitieron deuda en denominación yuan en Hong Kong y en otros mercados financieros, posicionándola como una moneda importante en camino a desafiar, algún día, el poder del dólar.

Luego, el yuan también se estancó. La economía y el mercado de divisas chinas tuvieron un momento difícil en 2014 y 2015. La fuga de capitales aumentó y la moneda perdió su valor. Beijing respondió haciendo más difícil la salida de capitales del país, lo que espantó a los inversionistas extranjeros. Desde entonces, el uso del yuan en las transacciones comerciales mundiales se incrementó ligeramente, pero solo para el comercio que involucra directamente a China. La proporción mundial de reservas internacionales en yuanes se paralizó por debajo de 3%. Asimismo, mientras la economía china siga tropezando con su líder Xi Jinping, quien incrementa su control y evita hacer reformas significativas, es poco probable que los bancos centrales y los inversionistas extranjeros confíen en las acciones denominadas en yuanes.

Otros países ni siquiera han intentado desafiar el estatus del dólar. Fuerzas económicas y geopolíticas en los últimos años han impulsado algunas monedas en reservas menores, como el dólar australiano, la corona sueca y la rupia india, como señala el economista Barry Eichengreen. Sin embargo, estas monedas todavía son poco relevantes en las finanzas mundiales, y sus ganancias han llegado fundamentalmente a expensas de las monedas tradicionales de reserva como el euro, la libra esterlina

inglesa y el yen japonés. El dólar permanece firme en su pedestal, muy por encima de estas luchas.

DINERO NUEVO

Algunos políticos y analistas han sugerido que los países deberían ver más allá de las monedas convencionales y optar por el oro e incluso por las criptomonedas —como el bitcóin— que, según ellos, son una alternativa de “divisas seguras”. Tanto el oro como las criptomonedas son bienes escasos y, por lo tanto, deberían conservar su valor mejor que las monedas tradicionales, que pueden producirse en cantidades infinitas. Sin embargo, la escasez, por sí sola, no asegura un valor perdurable. Aunque algunos bancos centrales han estado acumulando oro, la volatilidad de su valor y la dificultad de convertir cantidades grandes en moneda utilizable lo ha vuelto, en gran medida, inviable como activo seguro. Por otra parte, ningún banco central quiere asumir riesgos con las criptomonedas, que siguen siendo completamente especulativas.

Tal vez, la tecnología logre lo que los gobiernos no pudieron: debilitar el valor del dólar. El bitcóin y otras criptomonedas surgieron como una alternativa libertaria a las monedas oficiales emitidas y manejadas por bancos centrales. Algunos gobiernos están adoptando monedas digitales también. China, la India y Japón ya están probando versiones digitales de sus monedas oficiales y ya está en camino un euro digital.

Sin embargo, su valor altamente volátil, los altos costos de las transacciones y su limitada capacidad de manejar grandes volúmenes de transacciones han hecho del bitcóin una terrible forma de pago. Las nuevas criptomonedas como las “criptomonedas estables”, cuyo valor es respaldado por reservas en monedas convencionales, se están volviendo más populares tanto en los pagos nacionales como transfronterizos. Sin embargo, las criptomonedas estables respaldadas por dólares son las únicas que tienen impulso real. Irónicamente, solo están volviendo más prominente al dólar como moneda de pago.

Los temores de que la introducción del yuan digital pueda propulsar el crecimiento de la moneda china son infundados. La mayoría de los pagos internacionales ya son digitales, y el gobierno chino no ha mostrado señales de que su moneda, en ninguna de sus formas, esté disponible para usarse libremente fuera de sus fronteras nacionales, puesto que le sería más difícil controlar el valor del yuan en los mercados de divisas. Si Beijing relaja estos controles, tendría que implementar reformas políticas mayores, a saber, instituir el Estado de derecho y un sistema de pesos y contrapesos entre los diferentes niveles de gobierno, antes de que los inversionistas extranjeros comiencen a usar ampliamente su moneda e inviertan en ella. No obstante, dichos cambios son poco probables.

RESISTENCIA

Los catastrofistas del dólar todavía creen que la moneda está al borde de la decadencia. Repiten la historia de lo rápido que el dólar reemplazó a la libra esterlina como moneda dominante de reserva internacional luego de la Segunda Guerra Mundial.

No obstante, esa situación no es comparable con la actual. Estados Unidos no tiene un rival serio que pueda igualar la combinación entre el tamaño de su economía y su mercado financiero. Sus instituciones se han deteriorado, pero las de las otras economías grandes están en una situación aún peor.

Hay otras peculiaridades que hacen poco probable un cambio drástico. La conmoción desatada por la crisis financiera mundial llevó a los bancos centrales y a los inversionistas de todo el mundo a buscar seguridad en el dólar, lo que fortaleció aún más su posición. Los inversionistas extranjeros poseen más activos financieros en Estados Unidos que los inversionistas estadounidenses en el extranjero, lo que significa que Washington es un deudor neto respecto al resto del mundo. Sus pasivos con el resto del mundo están denominados en dólares, y muchos inversionistas extranjeros están dispuestos a aceptar bajos rendimientos a cambio de la seguridad del dólar. Los inversionistas estadounidenses, por el contrario, han estado dispuestos a apostar en divisas que están mayormente denominadas en monedas extranjeras, porque estas divisas tienen mejores retornos pese a ser más riesgosas. Si el mundo se aleja del dólar y traslada su caída relativa de valor a otras monedas, las acciones estadounidenses en el extranjero valdrían más en dólares, dado que cada unidad de moneda extranjera también valdría más dólares. Por el contrario, los extranjeros sufrirían una pérdida en el valor de sus acciones denominadas en dólares cuando las conviertan nuevamente a sus monedas nacionales. En otras palabras, una caída en el valor del dólar daría como resultado un enorme regalo financiero para Estados Unidos de parte del resto del mundo.

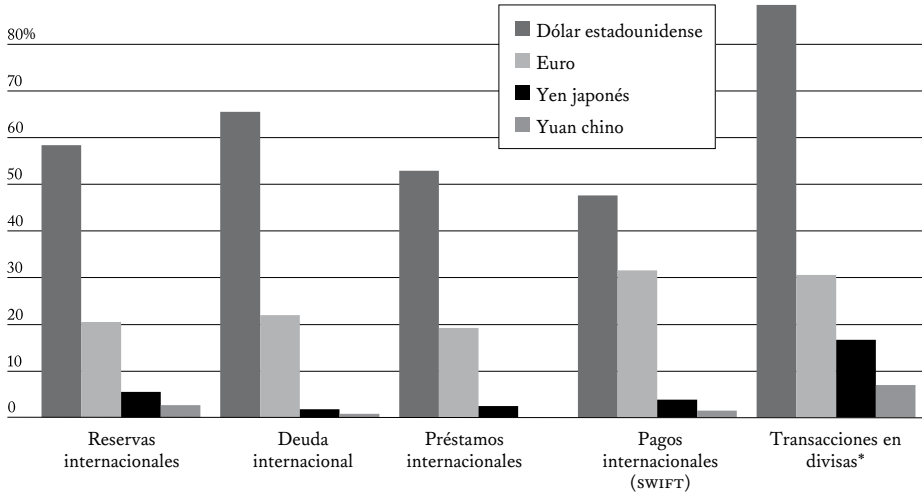
En vista de este aterrador escenario, los países de todo el mundo indudablemente deberían reducir su exposición a la “trampa del dólar”, pero han hecho exactamente lo contrario. Desde 2014 hasta inicios de 2024, los pasivos estadounidenses crecieron de 30 billones de dólares a más de 51 billones, mientras que los activos crecieron de 24 billones de dólares a solo 33 billones. En otras palabras, Estados Unidos tenía una deuda neta con el resto del mundo de 6 billones de dólares en 2014, y esa cantidad se triplicó en la última década. Ahora Estados Unidos tiene al resto del mundo bajo un control aún más estricto.

Otro ejemplo de que el dólar se está consolidando, sin menguarse, es la determinación del valor de los derechos especiales de giro (SDR), una moneda artificial creada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 1969, que sirve como reserva suplementaria para los países miembros. Desde 1999 hasta 2015, el valor de los SDR estuvo vinculado al de las cuatro monedas más importantes: el dólar, el euro, la libra esterlina británica y el yen japonés, en donde cada moneda tenía un peso específico en la determinación de valor. Los pesos de las monedas en la “canasta” de los SDR se basan en una fórmula que toma en cuenta el PIB de un país, su participación en el comercio mundial y la proporción de reservas de divisas internacionales en esa moneda. Los pesos suman cien.

Como una deferencia al creciente poder económico de China, el FMI agregó los yuanes a la canasta de los SDR en 2016. Basándose en esta fórmula, al yuan se le asignó un peso de 10.9% en la canasta, una proporción que debió haber venido de las participaciones de las otras monedas. No obstante, prácticamente todas llegaron del euro,

Gráfica 1: Todavía el número uno

Proporción de monedas en la economía mundial



FUENTE: Banco de Pagos Internacionales, Fondo Monetario Internacional, Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales (SWIFT) y Banco Central Europeo.

NOTA: Los datos de las reservas internacionales, la deuda internacional y los préstamos internacionales son del cuarto trimestre de 2022. Los datos de la SWIFT son de diciembre de 2022. Los datos de las transacciones de divisas son de abril de 2022.

*Cada transacción de divisas implica dos monedas, de modo que las proporciones de monedas individuales suman 200%.

la libra y el yen; la proporción del dólar apenas se vio afectada. El euro fue el mayor perdedor: su participación en la canasta bajó de 37% a 31%.

El FMI ajusta las ponderaciones cada 5 años para reflejar los cambios en las variables que intervienen en la fórmula. La última revisión, que entró en vigor en 2022, aumentó el peso del yuan a 12.3%, cuando la economía china continuaba su progreso pese al golpe de la pandemia de covid-19. Sin embargo, una vez más, el dólar no sufrió; de hecho, su peso aumentó en casi dos puntos porcentuales, hasta 43%. Nuevamente, las otras tres monedas perdieron terreno y la participación del euro se redujo a 29%.

SEGURIDAD EN MEDIO DEL CAOS

Los factores económicos y geopolíticos siguen aumentando los deseos de los bancos centrales de diversificar sus reservas internacionales, pero la realidad es que el dólar aún es demasiado poderoso y está muy arraigado en la economía mundial como para que los Estados consideren cambiar a otras monedas al ver erosionado su estatus como moneda de pago y reserva. Asimismo, Estados Unidos ostenta una economía que sigue siendo más grande y dinámica que la de casi cualquier otro país. Incluso si

China llegara a rivalizar algún día con su poder económico, no tiene el sólido marco institucional que se necesita para competir con Washington.

Estados Unidos podría exagerar su jugada y perjudicar la posición del dólar. Podría llegarse a un punto de inflexión en el que los mercados decidan que el tamaño y la trayectoria de su deuda pública son insostenibles. Por temor a un aumento de la inflación, que ayudaría al gobierno a reducir el valor de sus obligaciones de deuda, los inversionistas nacionales y extranjeros podrían deshacerse de los títulos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Trump, al ser relecto, habría potencialmente un mayor daño a las instituciones democráticas estadounidenses y a la independencia de la Reserva Federal, y se reduciría la confianza de los mercados financieros en Estados Unidos y el dólar.

Sin embargo, paradójicamente, el caos ha resultado favorable para el dólar. Cualquier turbulencia económica y geopolítica, incluso si es desatada por Estados Unidos, tiende a llevar a los inversionistas de todo el mundo a buscar seguridad. Y sus mercados financieros son los únicos lo suficientemente grandes como para satisfacer sus demandas. Más que pensar en las vulnerabilidades institucionales y económicas de otros países, los políticos estadounidenses podrían reforzar el dominio del dólar simplemente jugando bien sus cartas. Las políticas económicas que promueven el crecimiento y la estabilidad financiera, incluso por medio de una política fiscal disciplinada que controle la deuda de gobierno, serían de gran ayuda. Asegurar la independencia de la Reserva Federal y hacer un uso más prudente de las sanciones financieras, preservaría la confianza en esta moneda.

En última instancia, la historia del dólar tiene menos que ver con la fuerza de Estados Unidos que con las debilidades del resto del mundo. Hasta que esa disparidad cambie, y aparentemente sin importar lo mal que juegue Estados Unidos sus cartas, no se espere que el dólar decaiga. 🌐

Reseñas



EFE/SIPA USA

El 6 de mayo de 2025, una semana después de haber obtenido el triunfo en las elecciones federales, el Primer Ministro canadiense, Mark Carney, se reunió con el Presidente estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca. Durante el encuentro, Carney le hizo saber que “Canadá no está en venta”, en respuesta a las múltiples declaraciones de Trump sobre querer convertir a dicho país en el estado 51 de Estados Unidos.

Reseñas

N Manuel Férrez

Las puertas de Gaza. Una historia de traición, supervivencia y esperanza en las zonas fronterizas de Israel, AMIR TIBON, Boston, Little, Brown and Company, 2024, 352 pp., us\$18.99.

*Quien ha visto la esperanza no la olvida,
la busca bajo todos los cielos
y entre todos los hombres.*

Octavio Paz

Mientras escribía esta reseña sobre el libro *Las puertas de Gaza. Una historia de traición, supervivencia y esperanza en las zonas fronterizas de Israel*, me enteré de que Oded Lifshitz, israelí de 83 años que fue secuestrado junto con más de 250 personas durante el ataque terrorista de Hamás y de civiles palestinos del 7 de octubre de 2023, había sido entregado por esta organización como un cadáver.

Columnista del periódico *Haaretz*, Oded fue uno de los fundadores de la organización no gubernamental Shalom Ajshav (Paz Ahora) en la zona del Néguev, y también uno de los pioneros en la creación del kibutz Nir Oz, ubicado a kilómetro y medio de Gaza. Oded, como parte de la organización Road to Recovery, dedicó muchos días de su vida a transportar en su vehículo a palestinos enfermos a hospitales en Israel, donde recibían tratamientos médicos.

Su secuestro y asesinato por algunas de aquellas personas con quienes buscó vivir en paz es una de las tantas paradojas trágicas del largo y cruel conflicto que consume a israelíes y palestinos. Es pensando en Oded que reflexiono sobre el libro de Amir Tibon.

Residente del kibutz Nahal Oz, Tibon es sobreviviente y testigo presencial del ataque terrorista de Hamás, y utiliza su libro para reflexionar no solo en torno a la historia de Israel y su conflicto con los palestinos, sino al desarrollo del movimiento kibutziano que instaló ese sistema comunitario durante la creación del Estado y que llevó a muchos jóvenes socialistas a trabajar arduamente para levantar comunidades agrícolas en todo el país.

Amir Tibon, su esposa, Miri, y sus dos hijas pequeñas, Galia y Carmel, pasaron más de 10 horas escondidos en el cuarto seguro de su casa mientras los *mehablim* (terroristas en hebreo) de Hamás y sus cómplices civiles asesinaban, secuestraban y saqueaban a placer. La familia fue salvada por un equipo de rescate improvisado liderado por su padre, un general en retiro que condujo su automóvil desde Tel Aviv para liberar a los suyos de la muerte.

El subtítulo elegido para su libro, *Una historia de traición, supervivencia y esperanza en las zonas fronterizas de Israel*, nos da una pista de los derroteros que tendrán los capítulos, ya que esa misión de rescate es uno de los asideros que nos guían por muchas de sus páginas. Con habilidad, intercala capítulos que abordan la historia de Nahal Oz, su historia familiar que lo vincula a él, el ataque terrorista de Hamás y la ausencia de respuesta gubernamental a dicho asalto, con aquellos que profundizan en la historia de la creación de Israel, especialmente los kibutz del sur del país, y su compleja relación con las comunidades palestinas ubicadas a cinco kilómetros de su comunidad y parte de una franja de Gaza que, a diferencia del boyante sur, no ha dejado de empobrecerse, de lo que son responsables tanto sus líderes, que apuestan todo a la lucha armada, como la inestable relación económica, política y laboral con Israel.

En los capítulos dedicados a la historia de Nahal Oz y el ataque terrorista de Hamás, Tibon dibuja, con un lenguaje tranquilo, detallista y

muy humano, cómo un kibutz fundado por un puñado de jóvenes idealistas prosperó hasta ser una comunidad vibrante y comprometida con la paz; en contraste, en los dedicados a la historia de Israel y su conflicto con los palestinos, lanza duras —pero fundadas— críticas a liderazgos fallidos israelíes, a oportunidades perdidas por líderes palestinos y su apuesta por la violencia y el terrorismo, así como al uso político del conflicto. Especial atención le merece el gradual alejamiento de la élite política israelí de opciones de compromiso con los palestinos, todo en favor del militarismo y la expansión de la colonización en territorios palestinos ocupados.

Tibon, destacado columnista en el siempre crítico *Haaretz* (mismo periódico en el que Oded escribió por muchos años), no se queda corto en críticas al desarrollo y el empoderamiento de Hamás como una opción islamista, terrorista e incapaz de ofrecer a los gazatíes alternativas de una vida digna junto a Israel. Al mismo tiempo, no olvida la complicidad de Benjamín Netanyahu y sus cercanos con el empoderamiento y el financiamiento de Hamás, a expensas de otras opciones políticas palestinas renovadas ante el fracaso, tanto de dicha organización como de la Autoridad Nacional Palestina, en crear gobernabilidad y viabilidad institucional para los palestinos de carne y hueso.

En el relato de Tibon, se reconocen y recapitulan los valiosos esfuerzos de los sectores sionistas liberales y de la izquierda israelí (fundadora del Estado judío) no solo por encontrar alternativas de solución a su conflicto con los palestinos, sino también como voces críticas de un gobierno israelí entrampado en su relación con las corrientes sionistas religiosas más tóxicas, encarnadas en los ministros Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, y en su ataque al poder judicial del país encabezado por un primer ministro acusado de corrupción, malas prácticas y otros crímenes.

El lector encuentra en las páginas de *Las puertas de Gaza* un relato humano que pone nombres y apellidos a víctimas y héroes israelíes del 7 de octubre, pero que no olvida la crítica a aquellos líderes que les han fallado mucho y por mucho tiempo. Tiene también una mirada humana a los palestinos en general y a los gazatíes en particular, pues, reconociendo su terrible situación, no los exime de responsabilidad por las acciones de Hamás y la islamización de su sociedad.

Por todo lo descrito, uno de los grandes méritos del libro es centrarse en las agencias israelí y palestina, ubicándolas en las dinámicas dialécticas entre el acontecer social, las tendencias históricas y las decisiones políticas nacionales, regionales e internacionales. Esto se agradece ante una academia latinoamericana que tiende a construir a israelíes y palestinos como abstracciones (con todos los riesgos que la abstracción implica) y que enfoca sus reflexiones en la llamada geopolítica, lo que deja de lado la observación y el análisis de las complejas dinámicas sociales y humanas entre las partes.

El autor concluye su libro con una serie de notas que incluyen sugerencias de libros, artículos, documentales y series especializadas en el tema. El lector puede ahondar por sí mismo en los que sean de su interés. En efecto, los lectores lejanos de este terrible conflicto estamos obligados a profundizar nuestro conocimiento sin abstraer y esencializar a aquellos que lo sufren.

Al humanizar este conflicto, Tibon invita también a tener esperanza en la agencia de israelíes y palestinos. La reconstrucción del tejido social israelí posterior al 7 de octubre, así como del gazatí después de la larga guerra y la terrible destrucción de Gaza, no solo dependerán de los líderes políticos y civiles de ambos lados que puedan, con todo el tiempo que se requiera para lamer sus heridas, confiar en el otro al otro lado de la frontera, sino también de voces solidarias,

pero serias y críticas, entre aquellos que observamos esta tragedia desde la distancia.

📖 *Zirahuén Villamar*

Foreign Policy Analysis, KLAUS BRUMMER y KAI OPPERMAN, Nueva York, Oxford University Press, 2024, 348 pp., EUR€45.00.

Los acontecimientos de política mundial que llegan a diarios, revistas y noticieros reflejan resultados de decisiones que, casi siempre, se mantienen ocultas detrás de las puertas de las oficinas de gobiernos. El Análisis de Política Exterior (APE) explora las razones y los procesos de la toma de decisiones en este ámbito, y devela el contenido de esa llamada “caja negra”. Por ello, su aportación para entender los tiempos que vivimos es invaluable.

El libro de los especialistas alemanes Klaus Brummer y Kai Oppermann, profesores de Relaciones Internacionales en las universidades de Eichstätt-Ingolstadt y Chemnitz, es la versión actualizada y en inglés de la segunda edición de su *Außenpolitikanalyse*, de 2019. Es una obra muy oportuna para estudiantes y profesionales en Relaciones Internacionales que deseen acercarse por primera vez o actualizar sus conocimientos sobre el APE, y hacerlo con referencias muy completas, no solo vinculadas a casos de países desarrollados o grandes potencias, sino con una importante exploración de la política exterior de países del Sur global.

Los autores ubican el APE como un subcampo de las Relaciones Internacionales y lo presentan en las tradiciones del pensamiento internacionalista: realismo, liberalismo, constructivismo y teoría crítica. Este repaso permite al lector comprender la diversidad de explicaciones que el APE puede brindar. Más adelante, desarrollan sistemáticamente los pormenores de

dos grandes vertientes de teorías o de aproximaciones específicas del APE: la de política interna y la psicológica-cognitiva. En el marco de la primera, exponen el juego de doble nivel, al igual que los modelos organizacional y burocrático. De la segunda explican la teoría prospectiva, el análisis de códigos operacionales, los rasgos del liderazgo, la poliheurística, las analogías y las metáforas, así como el pensamiento grupal. Además, con exhaustivas y actualizadas fuentes, conjugan con éxito elementos del estilo del libro de texto, como diagramas, cajas y preguntas guía.

En su conjunto, la obra de Brummer y Oppermann es una herramienta que facilita exploraciones ulteriores. Por su claridad, puede convertirse en un clásico moderno para estudiantes de Relaciones Internacionales. Es también un material fundamental para las diplomacias, sea en formación o actualización, porque redimensiona su labor. Para analistas e investigadores, es un complemento del amplio espectro del APE que se lleva a cabo en el mundo. Y para las personas tomadoras de decisiones de política exterior que tengan tiempo de leerlo, es un recordatorio de la responsabilidad que les comprometen sus dichos, acciones y omisiones.

Descubrir la “caja negra” de la política exterior es una tarea ambiciosa, pero libros como *Foreign Policy Analysis* alientan a la comunidad internacionalista a seguir adelante con el APE. *Weitermachen!*

📖 *Armando Chaguaceda*

Patriota. Memorias, ALEXÉI NAVALNI, Nueva York, Alfred A. Knopf, 2024, 320 pp., MX\$867.64.

Quiso el azar que leyera la autobiografía del opositor ruso Alexéi Navalni en una breve estancia en Europa, mientras compartía foros con varios opositores rusos, bielorrusos y azerbaiyanos,

de tal suerte que lo conversado en el café de la mañana cobraba un sentido reforzado con la lectura vespertina del libro. A las pocas semanas, descubrí con agrado que la obra había llegado a públicos americanos, alcanzando mayor difusión con su traducción al español por la editorial Ariel.

Escrita por su autor en medio de los procesos de convalecencia —fruto del envenenamiento con fines de asesinato político— y encarcelamiento en las prisiones rusas, la obra condensa la anécdota personal con el análisis del contexto. A lo largo de sus páginas, se puede ver la evolución personal de un hijo rebelde del decadente “socialismo real” soviético, convertido luego en abogado, empresario y activista prodemocrático. La historia de la Rusia de los últimos 50 años desfila ante los ojos del lector desde la mirada del autor.

Así, habla de su infancia transcurrida en una familia residente de una de las ciudades militares de la entonces Unión Soviética; la memoria de los abuelos y de la vida rural distante de las dinámicas enajenantes de la sociedad comunista; los acomodos y las críticas cuidadosas de padres, vecinos y desconocidos, inmersos en la psicología del *homo sovieticus*; el despertar, personal y colectivo, con la *perestroika* y la *glasnost*; el ascenso y la caída de Mijail Gorbachov y, con este, de la Unión Soviética, así como la llegada del capitalismo y la democracia —con ropaje oligárquico, mafioso y autoritario— de la mano de Boris Yeltsin.

En medio de todo eso, se lee sobre los eventos personales —amistades universitarias, amores, viajes y la formación de una familia propia— que marcaron la vida de un joven deseoso —como toda su generación, inmersa en vertiginosos procesos— de alcanzar el éxito económico y profesional en la Rusia neoliberal del cambio de siglo. Muestra al Navalny universitario, emprendedor

económico y activista que despierta frente a los vicios ligados al arribo del putinismo. Todo aparece como en un caleidoscopio, con un ritmo que atrapa la atención del lector.

Los capítulos dedicados a la paulatina autocratización del régimen de Vladimir Putin merecen mención especial. Navalni consigue explicar cómo las viejas inercias de la mentalidad soviética e, incluso, imperial se recuperan por la nueva nomenclatura rusa y sus bases. La restauración de formas de represión política, censura de prensa, politización de la justicia y propaganda estatal, que parecían superadas, se analizan con interesantes referencias a los comportamientos de la gente en su vida cotidiana. Son admirables la creatividad y la flexibilidad táctica, la resiliencia personal y el valor cívico convergentes en las organizaciones y en los movimientos impulsados por Navalni para enfrentar la corrupción, el fraude y la violencia estatales. Los últimos momentos en prisión —y con vida— reciben una cobertura donde no falta, como en toda la obra, una dosis de fino humor.

Patriota es un libro de consulta obligada para cualquier apasionado de las derivas geopolíticas y espirituales del mundo eslavo y, en sentido amplio, del espacio euroasiático, no solo porque condensa la historia reciente de la Rusia postsoviética desde la prosa autobiográfica, sino porque anticipa —desde un optimismo admirable ante la adversidad sobrevenida— mejores escenarios posibles para un país reconciliado con su vocación europea, occidental y democrática. Todo eso sucede mientras se recorren los eventos, amables o terribles, que terminaron moldeando y acabando con la vida de un joven analista y activista, desenlace que deja un regusto triste a quienes conocen, de antemano, el fin de la historia.

Abstracts

VOLUME 25, NUMBER 3

N LATIN AMERICA IN THE GEOECONOMIC ERA, *Julietta Zelicovich*

Latin America is immersed in a geoeconomic era. The region has not only been subjected to these dynamics by external powers; it has also developed its own strategies. As Donald Trump's new term in office has intensified the instrumentalization of economic flows, the Latin American responses to these challenges have been limited until now.

Keywords: Donald Trump, economic sanctions, geopolitical tensions, global influence.
Palabras clave: Donald Trump, influencia mundial, sanciones económicas, tensiones geopolíticas.

N CHINA AND THE END OF U.S. DOMINANCE IN LATIN AMERICA, *Francisco Urdínez*

The tectonic shift in economic relations between China, the United States and Latin America in the 21st century constitutes perhaps the most important geopolitical transformation in the Western Hemisphere since the Cold War. After years of collecting information on investments, trade, aid and loans of both powers in the region, the pattern is unequivocal: China has economically displaced the United States in countries that represent 60% of Latin America's population. This new reality demands a rethinking of established paradigms in relation to hemispheric geopolitics.

Keywords: American leadership, China, economic displacement, investment.
Palabras clave: China, desplazamiento económico, inversión, liderazgo estadounidense.

N CHANCAY MEGAPORT, *Pamela Aróstica Fernández*

Inaugurated in November 2024, the Chancay Megaport has consolidated China's presence in Latin America and positioned Peru as a strategic player in the South Pacific. Therefore, it is important to examine the significance of opening a direct maritime route between China and the Latin American region, as well as its geopolitical, economic and environmental impacts in the context of the Belt and Road Initiative.

Keywords: Geopolitical impact, logistic hub, Peru, trade.
Palabras clave: Comercio, impacto geopolítico, nodo logístico, Perú.

N INDIA'S SOFT POWER IN LATIN AMERICA, *Girisanker S.B.*

India's political stability, its rapid economic growth and its increasing global influence have made it an attractive partner for Latin America. The relationship between the two regions, in constant evolution, is promising not only in economic terms, but also in strategic ones. Together they can improve their collective bargaining power in international institutions.

Keywords: Academy, commerce, culture, Global South.

Palabras clave: Academia, comercio, cultura, Sur global.

N ASYMMETRIES AND INTERDEPENDENCE, *Alan Bersin and Diego Marroquín Bitar*

From being adversaries in the 19th century to distant neighbors for much of the 20th century, the relationship between Mexico and the United States has evolved over the past 3 decades into a strategic partnership. Throughout its history, this relationship has been marked by a deep interdependence, but also by strong asymmetries. Today, 2 centuries later, these same factors may drive a structural change in the bilateral relationship.

Keywords: Donald Trump, migration, security, tariffs.

Palabras clave: Aranceles, Donald Trump, migración, seguridad.

N CARNEY AND CANADA'S NEW CHALLENGES, *Athanasios Hristoulas*

Donald Trump's provocations—making Canada the 51st state, calling Justin Trudeau “governor,” and damaging ties that have existed for more than 200 years—were a painful blow to Canadians. This disloyalty unleashed an unprecedented sense of nationalism. Taking advantage of this political climate, Mark Carney won the election and now, given his profile as an economist, he is expected to guide the economy and negotiations with the United States in the coming years, and open the country to other markets, Europe in particular.

Keywords: Elections, Mark Carney, tariffs, USMCA.

Palabras clave: Aranceles, elecciones, Mark Carney, T-MEC.

N THE AGREEMENT BETWEEN MERCOSUR AND THE EUROPEAN UNION: A LONG PILGRIMAGE, *Nicolás Pose-Ferraro and José Victor Ferro*

After the announcement of the successful renegotiation of the Strategic Partnership Agreement between the Southern Common Market (Mercosur) and the European Union at the technical level, the issue has returned to the public arena. What factors are pushing the search to achieve it? What are the obstacles? What are the possible scenarios? Driven by geopolitics, the negotiating teams of both blocks have reached a new understanding, but its approval is not guaranteed.

Keywords: Agricultural producers, environmental requirements, France, renegotiation.

Palabras clave: Exigencias ambientales, Francia, productores agrícolas, renegociación.

N MEXICO AND THE EUROPEAN UNION, *Luis Huacuja and Simone Lucatello*

In the context of world uncertainty, the relationship between Mexico and the European Union is at a key moment. Twenty-five years since its implementation, the Global Agreement has provided important mutual benefits, and it has been consolidated by incorporating a broad range of issues. Its modern-

ization has posed both great challenges and opportunities. It is a strategic relationship that deserves a boost commensurate with its importance.

Keywords: Energy, Global Agreement, political dialogue, energy, ratification.

Palabras clave: Acuerdo global, diálogo político, energía, ratificación.

 LATIN AMERICA FACES NEW CHALLENGES TO ACHIEVING PEACE, *Sabina Puig Cartes*

Peacebuilding is a long-term effort that requires sustained commitment, and in Latin America this effort has a long history. At a time of great global challenges and uncertainty, traditional methods of building peace are failing to bear fruit. The world needs to generate other perspectives, strategies, methods, and dialogues. In this sense, Latin America and its resilience are inspiring.

Keywords: Human rights, justice, multilateralism, organized crime.

Palabras clave: Crimen organizado, derechos humanos, justicia, multilateralismo.

 PEACEBUILDING IN MEXICO, *Dolores González Saravia*

Mexico is undergoing a process of political and social reconfiguration since the implementation in 2018 of a project with broad popular support called the “Fourth Transformation.” With its changes and impacts, this program poses new possibilities and challenges for the establishment of democratic conditions, the full exercise of human rights and building of peace.

Keywords: Criminal structures, democracy, Fourth Transformation, human rights.

Palabras clave: Cuarta transformación, democracia, derechos humanos, estructuras criminales.

 RIGHT-WING SHIFT IN LATIN AMERICA, *Ernesto Samper Pizano*

Facing a new international scenario, Latin America should present itself as a united whole, abandoning the concepts of racism, sexism and xenophobia, as well as the prohibition of free thinking, the obstruction of scientific research and eugenics theories that underlie the right-wing process the region is experiencing today. Migrant concentration camps are not needed to understand that this path heads directly to fascist abyss, and that the only antidote to avoid falling into it is, and always will be, progressivism.

Keywords: Inequality, lawfare, progressivism, radical right.

Palabras clave: Derecha radical, desigualdad, judicialización de la política, progresismo.

 TRADE WARS ARE EASY TO LOSE, *Adam S. Posen*

Donald Trump’s administration believes it has what game theorists call escalation dominance over China and any other economy with which it has a bilateral trade deficit. If its logic is correct, then China, and any other country that retaliates against U.S. tariffs is indeed playing a losing hand. But this logic is wrong: it is China that has escalation dominance in this trade war.

Keywords: China, game theory, tariffs, trade deficit.

Palabras clave: Aranceles, China, déficit comercial, teoría de juegos.



THE BROKEN ECONOMIC ORDER, *Mariana Mazzucato*

There is no guarantee that the coming rebalancing of the global order will lead to a more equitable and sustainable future. To move toward an economic system with affordable access to finance, fair governance of global trade, and support for all countries to invest in and benefit from the growth of green industries, governments must be willing to take bold steps. Transformative change requires an alternative vision, one that prioritizes the well-being of people and the health of the planet.

Keywords: BRICS, Donald Trump, labor rights, sustainable growth.

Palabras clave: BRICS, crecimiento sostenible, derechos laborales, Donald Trump.



THE REAL CHINA TRUMP CARD, *Stephen G. Brooks and Ben A. Vagle*

The analysts who oppose a decoupling from China typically stress that doing so will impose massive, long-term economic disruptions on the United States. They are wrong. But it does not follow that decoupling now would be right. A peacetime decoupling would cost Washington one of the strongest tools it has to deter Chinese aggression.

Keywords: Decoupling, economic war, production, trade disruptions.

Palabras clave: Desvinculación, interrupciones comerciales, guerra económica, producción.



HAS THE NEW NUCLEAR REVOLUTION ARRIVED TO LATIN AMERICA?, *Arturo C. Sotomayor*

The energy sector has reassessed the opportunities that nuclear energy offers. Although its exploitation in Latin America has historically been limited, recent technological innovations promise to make this energy source more acceptable to developing countries. With approximately 5% of the world's uranium resources, along with low labor costs, the region is becoming attractive to the nuclear sector. This presents questions about how the new nuclear revolution may affect Latin America, what opportunities and challenges it represents, and what are its greatest risks.

Keywords: National security, nuclear energy, reactors, uranium.

Palabras clave: Energía nuclear, reactores, seguridad nacional, uranio.



THE PATH TO AMERICAN AUTHORITARIANISM, *Steven Levitsky and Lucan A. Way*

Competitive authoritarianism will transform political life in the United States. As Donald Trump's early flurry of dubiously constitutional executive orders made clear, the cost of public opposition will rise considerably. Americans will still be able to oppose the government, but opposition will be harder and riskier, leading many elites and citizens to decide that the fight is not worth

it. A failure to resist, however, could pave the way for authoritarian entrenchment—with grave and enduring consequences for global democracy.

Keywords: Competitive authoritarianism, Donald Trump, opposition, weaponized states.

Palabras clave: Autoritarismo competitivo, Donald Trump, Estados armados, oposición.



THE WORLD TRUMP WANTS, *Michael Kimmage*

Donald Trump's administration has the potential to succeed in a revised international order that has been years in the making. But the United States will thrive only if Washington recognizes the danger of so many intersecting national fault lines and neutralizes these risks through patient and open-ended diplomacy. Trump and his team should regard conflict management as a prerequisite for American greatness, not as an impediment to it.

Keywords: Erratic leaders, European security, foreign policy, Russia.

Palabras clave: Líderes erráticos, política exterior, Rusia, seguridad europea.



TOP DOLLAR, *Eswar Prasad*

The dollar is not fully immune to shifts in global economic and geopolitical power. But even as the dollar has lost some ground, the gap between it and any putative rival has only grown and shows no signs of stopping. Although the global hierarchy of international currencies is shifting, many of these changes are improving the dollar's relative standing by hurting its rivals even more. Turbulence in the world economy or global affairs only enhances the dollar's strength vis-à-vis alternative currencies. Almost nothing could change this any time soon.

Keywords: Central banks, digital currencies, exchange transactions, yuan.

Palabras clave: Bancos centrales, monedas digitales, transacciones de divisas, yuan.

FOREIGN AFFAIRS

LATINOAMÉRICA

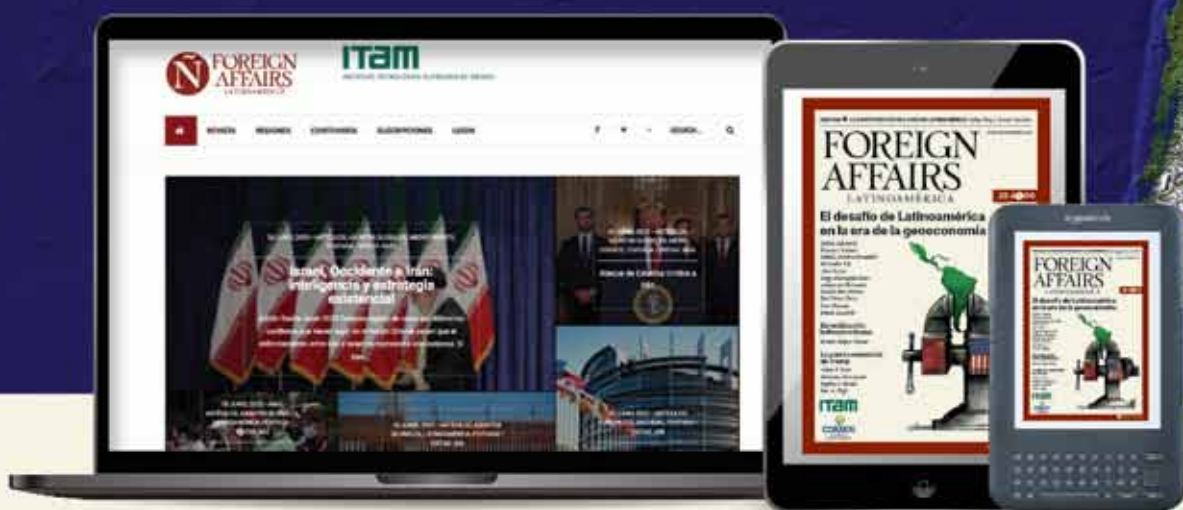
Porque somos Latinoamérica

En Foreign Affairs Latinoamérica nos renovamos para ofrecerle toda la información sobre América Latina y el mundo en un espacio más dinámico, de fácil acceso y con contenidos exclusivos. Visite fal.itam.mx y comparta con nosotros una nueva forma de vivir las Relaciones Internacionales.



Versión impresa y digital de la revista disponibles en

www.fal.itam.mx



CONTENIDO GRATUITO Y NOTICIAS EN

 Foreign Affairs Latinoamérica  @ForeignAffairsL

EXPLORA NUEVAS ALTURAS EN TU CARRERA PROFESIONAL

Cada uno de nuestros programas es un escalón
para que llegues más allá de lo que conoces.

DE LO QUE YA ERES, A LO QUE QUIERES SER.

Yorka Veruska Arteaga Nagashiro
Data Scientist, especialista de procesos y de Robotic Process Automation (RPA).



ITAM

Extensión Universitaria
y Desarrollo Ejecutivo

Diplomados Institucionales • Cursos, Talleres y Seminarios
Programas Ejecutivos • El ITAM para tu Empresa

www.desarrolloejecutivo.itam.mx

INFORMES:

55 5628 41 85

desarrolloejecutivo@itam.mx

Diplomados ITAM DiplomadosITAM

Diplomados ITAM Diplomados_ITAM